

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

REVISTA No. 46

Quinta Época
Año IV Octubre 2004

Derechos Reservados ©
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
SEVILLA 40, COL. JUÁREZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.

Certificado No. 04-2001-012517410700-102

FIDEICOMISO PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DEL DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO

2004

- Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta publicación, por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo fotocopia, grabación magnetofónica y cualquier sistema de almacenamiento de información, sin la autorización expresa.

- El contenido de los artículos publicados son de la exclusiva responsabilidad de los autores.

- ISSN 1665-0085 50046

- Página Internet del T.F.J.F.A: www.tfjfa.gob.mx

REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
OCTUBRE DE 2004. No. 46

CONTENIDO:

- **Primera Parte:**
  Jurisprudencias de Sala Superior 5

- **Segunda Parte:**
  Precedentes de Sala Superior 143

- **Tercera Parte:**
  Criterios Aislados de Sala Superior y de Salas Regionales 313

- **Cuarta Parte:**
  Acuerdos Generales 405

- **Quinta Parte:**
  Jurisprudencias y Tesis del Poder Judicial Federal 449

- **Sexta Parte:**
  Índices Generales 469

PRIMERA PARTE

JURISPRUDENCIAS DE SALA SUPERIOR

PLENO

JURISPRUDENCIA V-J-SS-35

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

VISITAS DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE GAS L.P.- ES COMPETENTE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR TRATÁNDOSE DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS.- De una interpretación armónica de los artículos 91 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 2°, 12 Bis y 2° Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía adicionado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 1995, y 3°, 20 y 24, fracción XIV de la Ley Federal de Protección al Consumidor se debe colegir que la Procuraduría Federal del Consumidor se encuentra facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de normas oficiales mexicanas y distribución de gas licuado de petróleo en actividades comerciales y de servicio, quedando reservadas las cuestiones técnicas y de seguridad a la Secretaría de Energía por conducto de la Dirección General de Gas, pues dicha reforma expresamente señala que corresponde a tal Secretaría la atribución de supervisar la correcta aplicación de las normas oficiales mexicanas en cuanto al almacenamiento, transporte y distribución de gas licuado de petróleo, incluso las que se conferían a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el Reglamento de Distribución de Gas Licuado de Petróleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1993. (1)

Contradicción de sentencias No. 15157/01-17-04-1/y otros/663/02-PL-11-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 enero de 2004, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Pérez Ocampo.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/9/2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEXTO.- (...)

A juicio del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, debe prevalecer el criterio sustentado por la Tercera y Cuarta Salas Regionales Metropolitanas, ya que de conformidad con los artículos 3° y 24, fracciones XIV y XIX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor resulta competente para vigilar y verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, pesas y medidas para la actividad comercial, instructivos, garantías y especificaciones industriales, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, al decir:

"**ARTÍCULO 3.-** A falta de competencia específica de determinada dependencia de la administración pública federal, corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial expedir las normas oficiales mexicanas previstas por la ley y a la Procuraduría vigilar se cumpla con lo dispuesto en la propia ley y sancionar su incumplimiento."

"**ARTÍCULO 24.-** La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:
"(...)
"**XIV.-** Vigilar y verificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, pesas y medidas para la actividad comercial, instructivos, garantías y especificaciones industriales, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
"(...)
"**XIX.-** Aplicar las sanciones establecidas en esta Ley;
"(...)"

Asimismo, el artículo 91 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización reformada por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo

de 1997 establece que las Dependencias competentes puedan realizar visitas de verificación con el objeto de vigilar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones aplicables, independientemente de los procedimientos para la evaluación que se hubieren establecido, al señalar:

> "**ARTÍCULO 91.-** Las dependencias competentes podrán realizar visitas de verificación con el objeto de vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, independientemente de los procedimientos para la evaluación de la conformidad que hubieren establecido. Al efecto, el personal autorizado por las dependencias podrá recabar los documentos o la evidencia necesaria para ello, así como las muestras conforme a lo dispuesto en el artículo 101.
> "Cuando para comprobar el cumplimiento con una norma oficial mexicana se requieran mediciones o pruebas de laboratorio, la verificación correspondiente se efectuará únicamente en laboratorios acreditados y aprobados, salvo que éstos no existan para la medición o prueba específica, en cuyo caso, la prueba se podrá realizar en otros laboratorios, preferentemente acreditados."

Por su parte, el artículo 48 del Reglamento de Distribución de Gas Licuado de Petróleo del 25 de noviembre de 1993, establecía:

> "**ARTÍCULO 48.-** La Secretaría y la Procuraduría realizarán visitas de verificación e inspección en los términos de los ordenamientos legales aplicables. A cargo de la Secretaría estarán los aspectos técnicos y de seguridad, en materia de gas; y la Procuraduría conocerá de los aspectos comercial y de servicio. Estas visitas se realizarán de conformidad a lo dispuesto por el Título Quinto de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización."

Lo anterior pone en evidencia que el Reglamento de Distribución de Gas Licuado de Petróleo del 25 de noviembre de 1993, consagraba la facultad de verificar en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización las cuestiones técnicas y de seguridad en materia de gas a la Secretaría de Energía y, por otra parte, la

verificación de las cuestiones comerciales y de servicio en materia de gas se reservaron a la Procuraduría Federal del Consumidor. Situación que se conservó pese a que el 9 de octubre de 1995 se publicó en el Diario Oficial un Decreto por el que se adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, especificando en el artículo único lo siguiente:

> DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA
>
> "**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adicionan los artículos 2o. y 12-bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, para quedar como sigue:
>
> "**Artículo 2o.-** Para el despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría de Energía contará con las siguientes unidades administrativas:
> "Dirección General de Asuntos Internacionales.
> "Dirección General de Gas.
> "Dirección General de Política Energética.
>
> "**Artículo 12-bis.-** La Dirección General de Gas tendrá las siguientes atribuciones:
> "**I.** Promover y participar en el establecimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, así como regular y supervisar su correcta aplicación, en materia de almacenamiento, transporte y distribución de gas licuado de petróleo. Cuando el transporte y distribución se realicen por medio de ductos, las atribuciones a que se refiere este artículo corresponderán al ámbito de competencia de la Comisión Reguladora de Energía;
> "**II.** Realizar estudios y evaluar el cumplimiento de políticas y programas formulados en materias de su competencia;
> "**III.** Otorgar las licencias, permisos y autorizaciones en materia de gas licuado de petróleo, salvo que se trate del transporte y distribución por medio de ductos;

"**IV.** Fomentar y vigilar la observancia de las condiciones de seguridad y demás normas relacionadas con el control, y adecuado manejo de las instalaciones de gas licuado de petróleo, excepto cuando se trate del transporte y distribución por medio de ductos;
"**V.** Realizar visitas de inspección y verificación de las instalaciones a que se refiere la fracción anterior, a fin de comprobar el cumplimiento de las normas, así como desarrollar y dar seguimiento a los correspondientes programas de verificación;
"**VI.** Sancionar las faltas a la normatividad en la materia de su competencia;
"**VII.** Promover, aprobar, supervisar, y en su caso suspender, a las unidades de verificación de la Secretaría, en los términos legales aplicables;
"**VIII.** Llevar el registro y control de quienes realicen las actividades relacionadas con el manejo de gas licuado de petróleo, excepto el transporte y distribución cuando se realicen por medio de ductos;
"**IX.** Promover, coordinar y concertar con las instancias y órdenes de gobierno que correspondan, las acciones en materia de orientación a usuarios, seguridad y abasto de gas, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; y
"**X.** Las demás que le confieren las disposiciones jurídicas aplicables y el Secretario, dentro de la esfera de sus facultades.

"**TRANSITORIOS**

"**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

"**SEGUNDO.-** Corresponden a la Secretaría de Energía las atribuciones que el Reglamento de Distribución de Gas Licuado de Petróleo, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 25 de noviembre de 1993, confiere a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

"**TERCERO.-** Las resoluciones administrativas que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de este Decreto, continuarán sustanciándose y se resolverán por la Dirección General de Gas de la Secretaría de Energía.

"**CUARTO.-** Corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial continuar los asuntos que se encuentren en litigio y ante las autoridades jurisdiccionales hasta su conclusión, cuando los mismos hayan sido debidamente notificados. La Secretaría de Energía le prestará, en su caso, los apoyos que resulten procedentes.

"**QUINTO.-** Las delegaciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en las entidades federativas, proporcionarán apoyo a la Secretaría de Energía, en el ejercicio de las facultades que hasta ahora venía ejerciendo, durante el periodo de transición que se convenga entre ambas.

"**SEXTO.-** Se transfieren a la Secretaría de Energía, los recursos financieros, humanos y materiales que actualmente tiene la unidad administrativa en materia de distribución de gas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

"**SÉPTIMO.-** Los trabajadores de base de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a que se refiere este decreto, serán readscritos a la unidad administrativa que se crea, debiéndose respetar, en todos los casos, los derechos laborales conforme a lo dispuesto en la Ley de la Materia.

"Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco.- **Ernesto Zedillo Ponce de León**.- Rúbrica.- El Secretario de Energía, **Ignacio Pichardo Pagaza**.- Rúbrica."

Lo anterior es así, porque la Procuraduría Federal del Consumidor no forma parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ni de la Secretaría de Energía, sino que es un órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, como se define por el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que a la letra dice:

"**ARTÍCULO 20.-** La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto."

Por otro lado, la derogación comentada, contenida en el Decreto de 9 de octubre de 1995, se concreta al Reglamento de Distribución de Gas sin extenderse al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, como se advierte del citado Decreto ya transcrito.

En tales condiciones, si las Salas Cuarta, Tercera y Sexta Regionales Metropolitanas, dilucidaron la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor para verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de gas licuado de petróleo, pues se sancionó a los actores por infringir el contenido del artículo 52 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 52 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, al no observar la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-1993, relativa a PRODUCTOS PREENVASADOS, CONTENIDO NETO TOLERANCIAS Y MÉTODOS DE VERIFICACIÓN, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1993, que se refiere a cuestiones comerciales, las cuales se conservaron por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en atención a que dicha Norma Oficial a la letra especifica:

"10-13-93 NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-1993, productos preenvasados-contenido neto tolerancias y métodos de verificación (esta norma cancela la NOM-Z-96-1989).

"Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

"NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SCFI-1993, 'PRODUCTOS PREENVASADOS-CONTENIDO NETO TOLERANCIAS Y MÉTODOS DE VERIFICACIÓN' (Esta Norma cancela la NOM-Z-96-1989).

"La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 39 fracción V, 40 fracción IV, 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 17, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y 4o., fracción X, inciso a) del Acuerdo que adscribe Unidades Administrativas y Delega Facultades en los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores Generales y otros Subalternos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 1985 y

"CONSIDERANDO

"Que en el Plan Nacional de Desarrollo se indica que es necesario adecuar el marco regulador de la Actividad Económica Nacional.

"Que siendo responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los instrumentos de medición que se comercialicen en el territorio nacional sean seguros y exactos a fin de que no representen peligro para los usuarios y consumidores y que presten un servicio adecuado respecto a sus cualidades metrológicas, para uso en transacciones comerciales y para realizar determinaciones para protección de la salud, el medio ambiente y demás actividades donde se requiera de la medición.

"Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las Normas Oficiales Mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la prosecución de estos objetivos, he tenido a bien expedir la siguiente:

"NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SCFI-1993 'PRODUCTOS PREENVASADOS-CONTENIDO NETO TOLERANCIAS Y MÉTODOS DE VERIFICACIÓN' (Esta Norma cancela la NOM-Z-96-1989)

"La entrada en vigor de esta norma, se realizará como se indica a continuación:

"a) Al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de 6.2 y 7.8

"b) A partir del 1o. de enero de 1994, en forma completa.

"Para aquellos productos que hayan obtenido un Certificado de Conformidad o Aprobación de Modelo o Prototipo con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma, dicho Certificado o Aprobación será válido en los términos en que se otorgó, sin perjuicio de que los productos que se comercialicen en el país cumplan con la Norma Oficial Mexicana vigente, en los términos establecidos para su entrada en vigor.

"Aquellas personas que tengan un certificado de conformidad o aprobación vigente, deberán obtener dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta norma su número de registro ante la Dirección General de Normas, mismos que deberán ostentar junto con la contraseña NOM.

"Sufragio Efectivo. No Reelección.

"México, D.F., a 8 de octubre de 1993.- El Director General de Normas, Luis Guillermo Ibarra.- Rúbrica.

"NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-002-SCFI PRODUCTOS PREENVASADOS-CONTENIDO NETO TOLERANCIAS Y MÉTODOS DE VERIFICACIÓN
(Esta norma cancela a la NOM-Z-96-1989)

"1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
"Esta Norma establece las tolerancias y los métodos para la verificación de los contenidos netos de productos preenvasados y los planes de muestreo usados en la verificación de productos que declaran su contenido neto en unidades de masa o volumen.
"Se aplica tanto a productos de fabricación nacional como de importación que se comercialicen en Territorio Nacional.

"2 REFERENCIAS
"Para la correcta aplicación de esta Norma, se deben consultar las siguientes Normas vigentes:
"NMX-Z-12 Muestreo para la inspección por atributos.
"NOM-008-SCFI Sistema General de Unidades de Medida.

"3 DEFINICIONES
"Para los efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones:

"3.1 Producto preenvasado
"Producto que cuando es colocado en un envase de cualquier naturaleza, no se encuentra presente el comprador y la cantidad de producto contenido en él no puede ser alterado a menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente.

"3.2 Unidad de producto
"Unidad que se inspecciona para determinar el contenido neto del producto que contiene.

"3.3 Lote o partida
Conjunto de unidades de producto del cual se toma la muestra para inspección y determinación de la conformidad del criterio de aceptación.

"En lo posible cada lote o partida debe estar constituido por unidades de producto de un solo tipo, clase, tamaño y composición, fabricados esencialmente bajo las mismas condiciones y en el mismo tiempo.

"3.4 Muestra
"Se constituye con una o más unidades del producto tomadas de un lote o partida.

"3.5 Unidad fuera de tolerancia
"Es aquella unidad de producto cuyo contenido neto real es menor al del contenido neto declarado menos la tolerancia respectiva.

"3.6 Producto a granel
"Producto colocado en un envase de cualquier naturaleza y cuyo contenido puede ser variable, debiéndose pesar o medir en presencia del consumidor al momento de su venta.

"4 TERMINOLOGÍA
"T tolerancia que se aplica a los artículos individuales en %, de unidades de masa o volumen;
"CNd contenido neto declarado en la etiqueta;
"CN contenido neto promedio obtenido en una muestra;
"n número de unidades que componen la muestra;
"s desviación estándar de los valores del contenido neto de los artículos que componen la muestra, ésta se calcula de la siguiente forma;
"t es el valor de la estadística t (t de Student) a un nivel de confianza de 99,5% con n-1 grados de libertad obtenido de tablas;
"tc es el valor de la estadística t (t de Student), obtenido de los valores de la muestra;

"5 TOLERANCIAS

"5.1 Para fines de la comprobación del contenido neto de los productos preenvasados, se fijan las tolerancias que se indican a en las Tablas 1 y 2.

"T a b l a 1

"Contenido neto "declarado en g ó ml			Tolerancia T
"Hasta		50	11,0%
"50	hasta	100	5,5 g ó ml
"100	hasta	200	5,5 %
"200	hasta	300	11 g ó ml
"300	hasta	500	3,7 %
"500	hasta	1 000	18,5 g ó ml
"1000	hasta	10 000	1,85 %
"10 000	hasta	15 000	185 g ó ml
"de más de 15 000			1,2%

"T a b l a 2

"Contenido neto "declarado en g ó ml			Tolerancia T
"Hasta		50	9,0 %
"50	hasta	100	4,5 g ó ml
"100	hasta	200	4,5 %
"200	hasta	300	9 g ó ml
"300	hasta	500	3,0 %
"500	hasta	1 000	15 g ó ml
"1000	hasta	10 000	1,5 %
"10000	hasta	15 000	150 g ó ml
"más de 15 000			1,0 %

"5.2 Las tolerancias de la Tabla 1 se aplican:

"5.2.1 A aquellos productos preenvasados que tengan densidades y/o fases diferentes en su presentación, (por ejemplo: productos en almíbar, verduras enlatadas, y otros similares).

"5.2.2 A productos que requieran de operaciones sucesivas durante el proceso de envasado que incluyan dos o más componentes, (por ejemplo: aerosoles, atún, líquidos carbonatados, líquidos espumantes, y otros).

"5.2.3. A productos constituidos por masas unitarias de tamaño significativo, tales como piezas o semillas cuya masa unitaria máxima tenga un valor igual o mayor a la tolerancia que corresponde al contenido neto indicado en el envase, (por ejemplo: papas fritas, chicharrones, y otros).

"5.2.4 A productos deshidratados cuya consistencia facilita su rompimiento, que provoca un polvo heterogéneo de diferente densidad, que se incrementa por manejo, (por ejemplo: hojuelas de maíz, cereales y otros).

"5.2.5 A productos moldeados, (por ejemplo: jabones, galletas, chocolates y otros similares).

"5.2.6 A polvos con densidades variables (por ejemplo: detergentes granulares, talcos, chocolate en polvo, café soluble aglomerado y otros similares).

"5.2.7 A productos que durante su proceso requieran incorporación de aire en su llenado (por ejemplo helados, nieves y otros similares).

"5.2.8 A productos que pierden humedad o solventes por evaporación (por ejemplo cojincitos de champú, sobres con producto (sachets) y desodorantes en barra).
"Cuando la verificación del contenido neto de los productos considerados en 5.2.8 se realice en planta, deben cumplir con la Tabla 2 y demás criterios de esta norma.

"5.3 Las tolerancias de la Tabla 2 se aplicarán a todos aquellos productos que no se encuentren comprendidos en alguna de las clasificaciones estipuladas en el artículo precedente, (por ejemplo: líquidos, líquidos no carbonatados y otros similares).

"5.4 Las tolerancias indicadas en los incisos precedentes, sólo se aplicarán a las unidades que en su verificación resulten con contenidos netos menores al contenido neto declarado en la etiqueta, envase o envoltura.

"6 MUESTREO

"6.1 La verificación del contenido neto de productos preenvasados se debe efectuar mediante muestreo aleatorio, tomando muestras por duplicado. Cada muestra estará compuesta por el número de unidades que se establece en la Tabla 3.

"Tabla 3

"Lote de productos	Muestra de prueba (Unidades)
"De 150 a 500	13
"De 501 a 1 200	20
"De 1 201 a 10 000	32
"De 10 001 a 35 000	50
"De 35 001 a 500 000	80

"En el caso de que el lote de productos que se verifique sea mayor de 500 000 unidades, las cantidades excedentes se considerarán como integrantes de otro lote, al cual se le aplicarán las mismas reglas de la Tabla 3.

"6.2 La verificación del contenido neto de productos preenvasados de elevado costo, se debe efectuar mediante muestreo aleatorio en la planta, tomando

muestras por duplicado. Cada muestra estará compuesta por el número de unidades que se establece en la Tabla 4.

“Tabla 4

“Lote de productos	Muestra de pruebas (Unidades)
“Hasta 50	2
“De 51 a 150	3

“7 PROCEDIMIENTO

“7.1 Antes de iniciar la verificación del contenido neto deben cuidarse los siguientes aspectos:

“7.1.1 Que el contenido neto del producto preenvasado esté debidamente expresado en unidades que correspondan a las establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI vigente.

“7.1.2 Que los instrumentos de medición que se utilicen para verificar el contenido neto por cualquiera de los métodos, tengan certificado de calibración vigente.

“7.1.3 Que la incertidumbre de los instrumentos de medición no sea mayor a la décima parte de la tolerancia correspondiente (0,1 T).

“**7**.2 Se determina el número de unidades que componen el lote. Para este propósito, se recomienda lo indicado en la NMX-Z-12/2 capítulo 7 inciso 7.2

“7.3 De acuerdo con la Tabla 3, se obtiene el tamaño de la muestra correspondiente.

"7.4 Se extraen las unidades hasta completar el tamaño previsto. La extracción debe ser al azar. Para esto se recomienda lo indicado en el capítulo 15 de la NMX-Z-12/1.

"7.5 Determinar el contenido neto de cada unidad con una exactitud mínima equivalente al 10% del valor de la tolerancia que corresponda, siguiendo alguno de los siguientes métodos, elegido por el interesado:

"7.5.1 Masa

"7.5.1.1 Destructivo

"a) Vaciar completamente el contenido del envase en un recipiente tarado, y determinar el contenido neto, restando el valor de la tara.

"b) Pesar el envase con producto, vaciar su contenido totalmente, limpiando el envase si fuera necesario; pesar el envase vacío y por diferencia, calcular el contenido neto.

"7.5.1.2 No destructivo

"Pesar el envase con producto y determinar el peso neto, restándole la masa promedio del envase vacío, obtenida de una muestra representativa de 20 envases vacíos.

"7.5.2 Volumen

"7.5.2.1 Destructivo

"a) Determinar el volumen neto, vaciando el contenido del envase en un recipiente calibrado y con divisiones mínimas de 1,0 ml para productos de hasta 1,0 L y con divisiones mínimas de 5,0 ml para el resto de presentaciones.

"b) Proceder de acuerdo a lo establecido en alguno de los incisos señalados en 7.5.1.1; relacionar la masa del contenido neto con la densidad del producto para obtener el volumen.

"7.5.2.2 No destructivo
"Proceder como se indica en 7.5.1.2; relacionar la masa del contenido neto con la densidad del producto para obtener el volumen.

"7.6 Se obtiene el promedio (CN) de los valores de los contenidos netos que integran la muestra.

"7.7 Se analizan los datos para determinar el cumplimiento con los requisitos correspondientes.

"7.8 Determinación del contenido neto en aceites comestibles.
"El método para esta determinación se debe efectuar conforme a lo establecido en el apéndice H

"8 CRITERIO DE ACEPTACIÓN
"Se considera que el lote verificado por muestreo cumple con el contenido neto declarado sólo si satisface los tres criterios establecidos en 8.1 ú 8.4, 8.2 y 8.3.

"8.1 Promedio algebraico
"El contenido neto promedio de la muestra (CN) debe ser:
CN ³ CNd

"8.2 No debe encontrarse un número de unidades fuera de tolerancia mayor a las establecidas en la Tabla 5.

"Tabla 5 Número máximo de unidades permitidas fuera de tolerancia

“Tamaño de la muestra (Unidades)	Unidades fuera de la tolerancia
“13	1
“20	2
“32	3
“50	5
“80	7

“8.3 Ninguna unidad debe resultar con un contenido menor que (CNd-2T).

“8.4 Cuando el promedio de la suma algebraica de los contenidos netos no cumpla con el criterio establecido en 8.1, se procede a realizar la siguiente prueba, aceptando el lote por dicho criterio, si se satisface la siguiente condición:

“tc £ t

“Donde:
“Y el valor de t se obtiene de la tabla 6
“Tabla 6 Valores de ‘t’

“n	t
	0,995; n-1
“13	3,06
“20	2,86
“32	2,75
“50	2,70
“80	2,65

“8.4.1 Si el valor de tc > t, el lote no cumple con el criterio 8.1.

“8.4.2 Si el valor de tc £ t el lote cumple con el criterio 8.1 y debe además cumplir los requisitos establecidos en los incisos 8.2 y 8.3.

“8.5 Del análisis de los resultados, se puede deducir si un lote cumple con los tres criterios, con algunos de ellos o con ninguno.

“9 SANCIONES

“9.1 Las infracciones a las disposiciones contenidas en esta Norma serán sancionadas de acuerdo a los ordenamientos legales aplicables vigentes.

“9.2 En caso de presentarse desviaciones susceptibles de infracción, servirán como atenuantes los documentos de control que el fabricante haya realizado durante el proceso de envasado del lote en cuestión. Para este efecto sólo serán válidos los procedimientos de control de calidad estadístico reconocidos debidamente realizados, (por ejemplo, gráficas de control, evaluaciones por equipos automatizados, y otros similares).

“10 BIBLIOGRAFÍA
“International Recommendation OIML R-87-1989 Net content in packages.

“11 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES
“Esta norma concuerda parcialmente con la Recomendación de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) mencionada en la Bibliografía.

“TODOS LOS APÉNDICES FORMAN PARTE DE LA NORMA

“Apéndice A
“En los casos en que se presenten productos nuevos o actuales cuyas características propias dificulten la aplicación de las tolerancias que les correspondan, de acuerdo a la clasificación del inciso 5, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, previo el estudio respectivo, determinará a petición expre-

sa de la Cámara a la que correspondan dichos productos, las tolerancias definitivas que se les asignen.

"Apéndice B
"La verificación del contenido neto se realizará solamente a productos terminados listos para su comercialización y se efectuará por la Procuraduría Federal del Consumidor o las unidades de verificación conforme a lo establecido en los artículos 84 del título cuarto y 100 a 109 del título quinto de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

"Apéndice C
"Si las autoridades mencionadas en el apéndice B deciden realizar la verificación del contenido neto en establecimientos en los que no cuenten con la cantidad mínima de producto señalada en la Tabla 3, de encontrarse anomalía, los resultados obtenidos serán considerados como preliminares, debiéndose confirme mediante verificación directa con el fabricante o importador, sobre la cantidad de producto establecida en la tabla antes mencionada.

"Apéndice D
"Cuando en la verificación de la primera muestra del producto se apruebe el lote correspondiente, la otra muestra del mismo lote quedará sin efecto y se pondrá a la disposición de la persona de quien se haya obtenido, en caso de no aprobarse, a solicitud del interesado se realizará una nueva verificación sobre la segunda muestra mencionada en el inciso 6.1. Este resultado se tomará como definitivo.

"Apéndice E
"Los productos objeto de la presente norma correspondientes a lotes de producción anteriores a la fecha en que ésta norma entre en vigor, no quedan sujetos a lo dispuesto en la misma sino hasta seis meses después de su entrada en vigor por lo que los interesados deberán de remarcarlos o reprocesarlos según convenga.

“Apéndice F
“Las disposiciones de la presente norma no se aplican a los productos a granel que son pesados o medidos en presencia del consumidor.

“Apéndice G
“Debido a la naturaleza intrínseca de los jabones de tocador, dermolimpiadores y jabones de la lavandería, que pierden peso con el transcurso del tiempo, la verificación de su contenido neto deberá realizarse bajo el siguiente criterio:

“Si el muestreo se realiza en el mercado, se evaluará bajo el criterio 8.2, considerando la siguiente perdida de peso:

“a) Para jabones de tocador y/o dermolimpiadores:

“Contenido de “humedad en “formulación en %	Pérdida de peso en 90 días en %
“7	5
“10	8
“16	14

“b) Para jabones de lavandería:

“Contenido de “humedad en “formulación en %	Pérdida de peso en 90 días en %
“25	20
“30	25
“35	27

“Apéndice H
“En tanto se establece la Norma Mexicana correspondiente para determinar el volumen de aceite vegetal envasado, se debe aplicar en forma supletoria el siguiente documento:

"American Oil Chemist's Society-Official and Tentative Methods Section I Physical and Chemical Characteristics of Oils, Fats and Waxes, Edición 1990-1991.

"México, D.F., a 8 de octubre de 1993.- El Director General de Normas, Luis Guillermo Ibarra.- Rúbrica."

En consecuencia, cabe colegir que la autoridad competente para vigilar y verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y en su caso sancionar por su incumplimiento, cuando se trate de cuestiones relativas a comercio o de servicio de gas corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor. Mientras que cuando se trate de supervisar la correcta aplicación de normas oficiales mexicanas en la materia de almacenamiento, transporte y distribución de gas pero referido a puntos técnicos o de seguridad, se reservan a la Secretaría de Energía, por conducto de la Dirección General de Gas, en términos del artículo 12 Bis de su Reglamento Interior.

Resulta acorde con el anterior razonamiento la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en Materia Administrativa, que a la letra dice:

"**PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LAS FACULTADES QUE EL REGLAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO LE OTORGA, EN MATERIA DE VISITAS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN POR CUANTO A LOS ASPECTOS COMERCIAL Y DE SERVICIO, NO LE FUERON TRANSMITIDAS A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA MEDIANTE LAS REFORMAS Y ADICIONES A SU REGLAMENTO INTERIOR (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE NUEVE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO).-** Mediante las reformas y adiciones que se hicieron al Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco, diversas atribuciones, que hasta antes de su entrada en

vigor correspondían a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se transfirieron a la Secretaría de Energía. Ahora bien, en el Reglamento de Distribución de Gas Licuado de Petróleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de mil novecientos noventa y tres, se regulan facultades tanto para aquella secretaría citada en primer término, como para la Procuraduría Federal del Consumidor; en particular en sus artículos 3o., 48 y 51, existe una distribución de competencias en las que a esa secretaría le corresponde realizar visitas de verificación e inspección, así como la aplicación de sanciones, en lo relativo a '... los aspectos técnicos y de seguridad, en materia de gas ...'. Y a la Procuraduría Federal del Consumidor (en esos artículos se lee '... la procuraduría ...', haciendo referencia a esta institución), le corresponde realizar visitas de verificación e inspección, así como la aplicación de sanciones, en lo relativo a '... los aspectos comercial y de servicio ...'. Pero de la lectura integral de aquellas reformas y adiciones en relación con el mencionado artículo 48 del indicado Reglamento de Distribución de Gas Licuado de Petróleo, es claro que continúan intactas las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor para realizar visitas de verificación en los términos de los ordenamientos legales aplicables en los aspectos comercial y de servicio, conforme a lo dispuesto por el título quinto de la Ley Federal de Metrología y Normalización, así como para aplicar las sanciones correspondientes. Lo anterior: 1) Porque esa procuraduría no forma parte de la Secretaría de Comercio en comento, ya que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo funcionamiento se rige por su propia ley, los reglamentos de ésta y su estatuto, y 2) Porque en ninguno de los artículos transitorios del referido decreto, con el que se reformó y adicionó el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, aparece expresamente que se hayan abrogado aquellas facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor, o que las mismas se hayan transmitido a la citada Secretaría de Energía. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

"Revisión fiscal 53/99. Director General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor. 3 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando González Licona. Secretaria: Lucía Reyes Castañeda. Revisión fiscal 113/99. Director General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor. 13 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Erik Zabalgoitia Novales. Revisión fiscal 35/99. Director General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor. 17 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando González Licona. Secretario: Luis Bolaños Martín. Revisión fiscal 46/99. Director General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Felipe Mata Hernández.

"Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, junio de 2000. Tesis: II.2o.A.14 A. Página: 594. Materia: Administrativa Tesis aislada."

En ese orden de ideas, este Pleno fija la siguiente jurisprudencia:

"**VISITAS DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE GAS L.P.- ES COMPETENTE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR TRATÁNDOSE DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS.-** De una interpretación armónica de los artículos 91 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 2°, 12 Bis y 2° Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía adicionado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 1995, y 3°, 20 y 24, fracción XIV de la Ley Federal de Protección al Consumidor se debe colegir que la Procuraduría Federal del Consumidor se encuentra facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de normas oficiales mexicanas y distribución de gas licuado de petróleo en actividades comerciales y de servicio, quedando reservadas las cuestiones técnicas y de seguridad a la Secreta-

ría de Energía por conducto de la Dirección General de Gas, pues dicha reforma expresamente señala que corresponde a tal Secretaría la atribución de supervisar la correcta aplicación de las normas oficiales mexicanas en cuanto al almacenamiento, transporte y distribución de gas licuado de petróleo, incluso las que se conferían a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el Reglamento de Distribución de Gas Licuado de Petróleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1993.

"Contradicción de sentencias No. 15157/01-17-04-1/y otros/663/02-PL-11-01.- Resuelto en sesión: 30 de enero de 2004, por unanimidad de 11 votos.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Pérez Ocampo.
"(Tesis de jurisprudencia aprobada en sesión de 18 de junio de 2004)"

Por todo lo anterior y con fundamento en los artículos 261 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- Ha resultado procedente y fundada la contradicción de sentencias denunciada entre la Cuarta y Tercera Salas Regionales Metropolitanas, con el criterio sustentado por la Sexta Sala Regional Metropolitana.

II.- Debe prevalecer el criterio sustentado por las Tercera y Cuarta Salas Regionales Metropolitanas, al resolver los juicios de nulidad 15157/01-17-04-1 y 13812/01-17-03-7.

III.- Se fija la jurisprudencia cuyo texto consta inserto en este fallo.

IV.- Se ordena la publicación en la Revista de este Tribunal de la jurisprudencia fijada.

V.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la H. Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 30 de enero de 2004, por unanimidad de 11 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Luis Malpica de Lamadrid, Alma Peralta Di Gregorio, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, María Guadalupe Aguirre Soria, Silvia Eugenia Díaz Vega, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Luis Carballo Balvanera, Guillermo Domínguez Belloc y Magistrada Presidenta, María del Consuelo Villalobos Ortíz.

Fue Ponente en el presente asunto el C. Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se formula el presente engrose el día 18 de junio de 2004, fecha en que se aprobó la jurisprudencia que se contiene en esta sentencia con fundamento en lo previsto por los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la C. Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-36

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

REQUERIMIENTO DE PAGO Y ACTAS DE EMBARGO.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR.- En atención a lo dispuesto por los artículos 16 Constitucional y 38 del Código Fiscal de la Federación, los actos de autoridad deben ser emitidos por autoridad competente y estar debidamente fundados y motivados; por tanto los requerimientos de pago y actas de embargo deben observar tales características, por ser actos de autoridad y de molestia para el particular. Ahora bien, si en algunas de sus partes los documentos a diferencia del total del texto se llenaron con letra manuscrita, indicando a quién se dirige, la designación del ejecutor y el lugar en que ha de practicarse la diligencia, ese hecho constituye un indicio de que dichos actos no se elaboraron por la autoridad que los suscribe, por lo que tal indicio debe ser desvirtuado por la demandada ofreciendo las pruebas idóneas para ello. (2)

Contradicción de sentencias No. 12381/01-17-04-4/y otros/662/02-PL-11-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de enero de 2004, por mayoría de 6 votos a favor y 5 votos en contra.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Pérez Ocampo.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/10/2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

QUINTO.- (...)

A juicio del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, debe prevalecer el criterio sustentado por la Cuarta Sala Regional Metropolitana, siguiendo en esencia el

sentido de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 44/2001 aplicable por analogía, que a la letra dice:

"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, Octubre de 2001
"Tesis: 2a./J. 44/2001
"Página: 369

"**ORDEN DE VISITA EN MATERIA FISCAL. LA NOTORIA DIFERENCIA ENTRE EL TIPO DE LETRA USADO EN SUS ASPECTOS GENÉRICOS Y EL UTILIZADO EN LOS DATOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL VISITADO, PRUEBA LA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-** La orden de visita que se dirija al gobernado a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debe reunir los requisitos que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación, esto es, debe constar por escrito, ser firmada y emitida por autoridad competente, precisar el lugar o lugares que han de inspeccionarse, su objeto, los destinatarios de la orden o, en su caso, proporcionar datos suficientes que permitan su identificación, así como las personas que se encuentren facultadas para llevar a cabo la diligencia de que se trate; por tanto, resulta inconcuso que el hecho de que en una orden de visita se hayan utilizado tipos de letra notoriamente distintos, uno que corresponde a sus elementos genéricos y otro a los datos específicos relacionados con el contribuyente, revela que no cumple los requisitos mencionados y sí, por el contrario, debe tenerse por probado que se transgredieron las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el mencionado artículo 16, en cuanto a los requisitos que debe contener aquélla. Lo anterior deriva, por una parte, de que resulta lógico que si la autori-

dad competente dicta una orden de visita, tanto sus elementos genéricos como los específicos deben estar señalados con el mismo tipo de letra (manuscrita, de máquina de escribir o de computadora) y, por otra, de que tratándose de una garantía individual para el gobernado y siendo perfectamente factible que se cumpla con esto último, debe exigirse su pleno acatamiento y la demostración idónea de ello, y no propiciar que se emitan órdenes de visita que por sus características pudieran proceder, en cuanto a los datos vinculados con el contribuyente y con la visita concreta que deba realizarse, no de la autoridad competente, sino del funcionario ejecutor de la orden pero incompetente para emitirla.

"Contradicción de tesis 45/2001-SS. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados del Quinto Circuito. 12 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Tesis de jurisprudencia 44/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de septiembre de dos mil uno."

En efecto, como se aprecia de la jurisprudencia que antecede todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado en acatamiento estricto de los artículos 16 Constitucional y 38, fracción III del Código Fiscal de la Federación, sin que sea óbice a lo anterior, que tal jurisprudencia se refiera a los requisitos de la orden de visita y no a los de los requerimientos de pago y embargo, dado que en ambos casos, se reitera, se trata de actos de molestia al particular que deben cumplir con la garantía de legalidad, incluyendo el requisito consistente en estar emitidos por autoridad competente.

En consecuencia, si los ejecutores sólo pueden acatar el mandamiento de ejecución en forma estricta, sin variar su fundamentación y motivación, no es válido que se autodesignen en el propio requerimiento de pago y embargo, ni que modifiquen su

contenido, ya que de hacerlo estarían invadiendo las atribuciones de la autoridad competente que firmó el mandamiento de ejecución y que los debió nombrar en forma específica para llevar a cabo la diligencia, independientemente de que la parte afectada con el requerimiento de pago y acta de embargo, haya ofrecido entre sus pruebas la pericial grafoscópica, para demostrar que en tales documentos fue el ejecutor el que se autodesignó para efectuar esas diligencias, sin que haya precepto legal alguno que lo faculte para ello; se deben analizar y valorar todos los medios probatorios ofrecidos por las partes, incluso el propio texto del requerimiento de pago y del acta de embargo, para así tener plena convicción de la certeza de los hechos afirmados por la parte afectada, pues incluso la prueba pericial queda a la prudente apreciación del juzgador al momento de su valoración en la sentencia, como lo indica el artículo 234, fracción II del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior es así, porque los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados, lo que implica que debe haber coherencia entre la tipografía de los mandamientos y requerimiento de pago, respecto de la designación del ejecutor en razón de que no es lógico que si la autoridad competente emite tales documentos los elementos genéricos vayan en una forma impresa y los específicos en otra, es decir, deben estar señalados con el mismo tipo de letra, pues se vinculan entre sí para demostrar que efectivamente se firmaron por la misma persona o por la autoridad competente, ya que esto trae la certeza jurídica al gobernado de que ese ejecutor es la persona que fue designada para llevar a cabo la diligencia.

En tal virtud, pese a que en el caso que se resolvió por la Sala Regional del Golfo, no se exhibieron el requerimiento de pago y las diligencias de embargo, como se hizo constar en la página 12 de la sentencia, resulta indebido afirmar como lo hizo dicha Sala, que la parte actora debió probar con la pericial grafoscópica que la letra del ejecutor que consta en tales diligencias de embargo llevan a concluir que éste se autonombró, es decir, que no fue designado por la autoridad competente, que en tal hipótesis lo era el Administrador Local de Recaudación, pues se reitera, de conformidad con los artículos 234, fracción II y 237 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias deben contener el estudio de todos los conceptos de anulación plantea-

dos por el actor, y valorar todas las pruebas ofrecidas por las partes concatenando cada una de ellas hasta conocer la certeza de los hechos afirmados en juicio y no sólo la prueba pericial como pretende aquella Sala.

En tales condiciones, este Pleno fija la siguiente jurisprudencia:

"**REQUERIMIENTO DE PAGO Y ACTAS DE EMBARGO.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR.-** En atención a lo dispuesto por los artículos 16 Constitucional y 38 del Código Fiscal de la Federación, los actos de autoridad deben ser emitidos por autoridad competente y estar debidamente fundados y motivados; por tanto los requerimientos de pago y actas de embargo deben observar tales características, por ser actos de autoridad y de molestia para el particular. Ahora bien, si en algunas de sus partes los documentos a diferencia del total del texto se llenaron con letra manuscrita, indicando a quién se dirige, la designación del ejecutor y el lugar en que ha de practicarse la diligencia, ese hecho constituye un indicio de que dichos actos no se elaboraron por la autoridad que los suscribe, por lo que tal indicio debe ser desvirtuado por la demandada ofreciendo las pruebas idóneas para ello.

"Contradicción de sentencias No. 12381/01-17-04-4/y otros/662/02-PL-11-01.- Resuelto en sesión de 30 de enero de 2004, por mayoría de 6 votos a favor y 5 en contra.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Pérez Ocampo.
(Tesis de jurisprudencia aprobada en sesión de 30 de junio de 2004)"

En consecuencia, y con fundamento en los artículos 261 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- Ha resultado procedente y fundada la contradicción de sentencias denunciada entre la Cuarta Sala Regional Metropolitana y la Sala Regional del Golfo.

II.- Debe prevalecer el criterio sustentado por la Cuarta Sala Regional Metropolitana, al resolver el juicio de nulidad 12381/01-17-04-4.

III.- Se fija la jurisprudencia cuyo texto consta inserto en este fallo.

IV.- Se ordena la publicación en la Revista de este Tribunal de la jurisprudencia fijada.

V.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la H. Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 30 de enero de 2004, por mayoría de 6 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Luis Malpica de Lamadrid, Silvia Eugenia Díaz Vega, Luis Carballo Balvanera, Guillermo Domínguez Belloc y Magistrada Presidenta, María del Consuelo Villalobos Ortíz y 5 votos en contra de los Magistrados Alma Peralta Di Gregorio, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, María Guadalupe Aguirre Soria y Manuel Luciano Hallivis Pelayo.

Fue Ponente en el presente asunto el C. Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se formula el presente engrose el día 30 de junio de 2004, fecha en que se aprobó la jurisprudencia que se contiene en esta sentencia con fundamento en lo previsto por los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la C. Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, que da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-37

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

CANCELACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES POR INCOSTEABLES.- NO PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CUANDO LO QUE SE IMPUGNA ES LA RESOLUCIÓN QUE RECAYÓ AL RECURSO RESPECTO DE DICHOS CRÉDITOS.- Si bien es cierto que el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2002, establece como una facultad discrecional de la autoridad fiscal cancelar los créditos cuyo importe al 31 de diciembre del 2001 sea inferior al equivalente en moneda nacional a dos mil quinientas unidades de inversión por resultar incosteable su cobro; también es verdad, que cuando la resolución impugnada la constituye la resolución de un recurso de revocación interpuesto en contra de esos créditos, aquella situación no puede servir de motivación para decretar el sobreseimiento del juicio en términos del artículo 202, fracción I del Código Fiscal de la Federación, pues la materia del juicio contencioso se constituye por la resolución dictada en el recurso administrativo y no el crédito recurrido cancelado, pues aun cuando de conformidad con el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, en la demanda se puede combatir el crédito recurrido en la parte que siga afectando al actor, para que tal ilegalidad pueda ser analizada por el juzgador, se requiere en primer término que se haga el pronunciamiento respectivo sobre la resolución recaída al recurso y si hay elementos para analizar la recurrida, continuar con su estudio, en atención a lo dispuesto por el artículo 237, penúltimo párrafo del citado Código Fiscal. Por ende, el juzgador debe declarar la nulidad por falta de fundamentación y motivación del acto combatido en el recurso y de la resolución impugnada en el juicio, ya que la citada cancelación del crédito no revoca la resolución materia del juicio contencioso. (3)

Contradicción de sentencias No. 613/02-15-01-6/y otro/463/03-PL-11-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de febrero de 2004, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en

contra.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Pérez Ocampo.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/11/2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

QUINTO.- (...)

A juicio del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, debe prevalecer el criterio sustentado por la Sala Regional del Sureste en el expediente 572/02-15-01-4, ya que el artículo 202 del Código Fiscal de la Federación prevé diversas causales de improcedencia del juicio en los siguientes términos:

"**ARTÍCULO 202.-** Es improcedente el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:
"**I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante.**
"**II.** Cuya impugnación no corresponda conocer a dicho Tribunal.
"**III.** Que hayan sido materia de sentencia pronunciada Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas.
"**IV.** Respecto de las cuales hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento únicamente cuando no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivamente o juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los plazos que señala este Código.
"**V.** Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal.

"**VI.** Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquéllos cuya interposición sea optativa.
"**VII.** Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente.
"Para los efectos de esta fracción, se entiende que haya conexidad siempre que concurran las causas de acumulación previstas en el artículo 219 de este Código.
"**VIII.** Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial.
"**IX.** Contra ordenamientos que den normas o instrucciones de carácter general y abstracto, sin haber sido aplicados concretamente al promovente.
"**X.** Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación.
"**XI.** Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado.
"**XII.** Que puedan impugnarse en los términos del artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior, cuando no haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la opción o cuando la opción ya haya sido ejercida.
"**XIII.** Dictados por la autoridad administrativa para dar cumplimiento a la decisión que emane de los mecanismos alternativos de solución de controversias a que se refiere el artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior.
"**XIV.** En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de este Código o de las Leyes fiscales especiales.
"**XV.** Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, si dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que recaiga a un recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"**XVI.** Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte.
"La procedencia del juicio será examinada aun de oficio."

Del anterior precepto legal se desprende que la improcedencia del juicio se actualiza, entre otros supuestos, cuando se promueva en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos del demandante. Sin embargo, en la especie si bien es cierto que los créditos fiscales cancelados se combatieron en sendos recursos de revocación, aquéllos no constituyen la materia de los juicios de nulidad números 613/02-15-01-6 y 572/02-15-01-4. De ahí que este Tribunal se debe hacer cargo del estudio de las resoluciones impugnadas que fueron las recaídas a los recursos de revocación para determinar si estaban o no debidamente fundadas y motivadas; en virtud de que los créditos recurridos habían sido cancelados, y en su caso, declarar la nulidad de las mismas por carecer de fundamentación y motivación con fundamento en el artículo 238, fracción II del Código Fiscal de la Federación.

En ese orden de ideas, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 202, fracción I del Código Fiscal Federal, pues el actor en ambos juicios sí tiene interés jurídico para demandar la nulidad de las resoluciones recaídas al recurso de revocación, dado que estima que le causa afectación a su esfera jurídica al confirmar los créditos: 222638 y 282962.

En tales condiciones, este Pleno fija la siguiente tesis:

"**CANCELACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES POR INCOSTEABLES.- NO PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CUANDO LO QUE SE IMPUGNA ES LA RESOLUCIÓN QUE RECAYÓ AL RECURSO RESPECTO DE DICHOS CRÉDITOS.-** Si bien es cierto que el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2002, establece como una facultad discrecional de la autoridad fiscal cancelar los créditos cuyo importe al 31 de diciembre del 2001 sea inferior al equivalente en moneda nacional a dos mil quinientas unidades de inversión por resultar incosteable su cobro; también es verdad, que cuando la resolución impugnada la constituye la resolución de un recurso de revocación interpuesto en contra de esos créditos, aquella situación no puede servir de motivación para decretar el sobreseimiento del juicio en términos del artículo 202, fracción I del Código

Fiscal de la Federación, pues la materia del juicio contencioso se constituye por la resolución dictada en el recurso administrativo y no el crédito recurrido cancelado, pues aun cuando de conformidad con el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, en la demanda se puede combatir el crédito recurrido en la parte que siga afectando al actor, para que tal ilegalidad pueda ser analizada por el juzgador, se requiere en primer término que se haga el pronunciamiento respectivo sobre la resolución recaída al recurso y si hay elementos para analizar la recurrida, continuar con su estudio, en atención a lo dispuesto por el artículo 237, penúltimo párrafo del citado Código Fiscal. Por ende, el juzgador debe declarar la nulidad por falta de fundamentación y motivación del acto combatido en el recurso y de la resolución impugnada en el juicio, ya que la citada cancelación del crédito no revoca la resolución materia del juicio contencioso.

"Contradicción de sentencias No. 613/02-15-01-6/y otro/463/03-PL-11-01.- Resuelto en sesión: 2 de febrero de 2004, por mayoría de 9 votos a favor y 2 en contra.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Pérez Ocampo.
"(Tesis de jurisprudencia aprobada en sesión de 30 de junio de 2004)"

En consecuencia, y con fundamento en los artículos 261 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- Ha resultado procedente y fundada la contradicción de sentencias denunciada entre los juicios 613/02-15-01-6 y 572/02-15-01-4, que se tramitaron ante la Sala Regional del Sureste de este Tribunal.

II.- Debe prevalecer el criterio sustentado en la sentencia del 10 de junio del año 2002, emitida en el expediente 572/02-15-01-4.

III.- Se fija la jurisprudencia cuyo texto consta inserto en el presente fallo.

IV.- Se ordena turnar dicha jurisprudencia a la Revista de este Tribunal para que proceda a su publicación.

V.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la H. Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 2 de febrero de 2004, por mayoría de 9 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Luis Malpica de Lamadrid, Alma Peralta Di Gregorio, Alejandro Sánchez Hernández, María Guadalupe Aguirre Soria, Silvia Eugenia Díaz Vega, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Guillermo Domínguez Belloc y Magistrada Presidenta, María del Consuelo Villalobos Ortíz y 2 votos en contra de los Magistrados Jorge Alberto García Cáceres y Luis Carballo Balvanera, reservándose estos dos últimos su derecho para formular voto particular.

Fue Ponente en el presente asunto el C. Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se formula el presente engrose el día 30 de junio de 2004, fecha en que se aprobó la tesis de jurisprudencia que se contiene en este proyecto con fundamento en lo previsto por los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la C. Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, que da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-38

LEY DEL INFONAVIT

JEFE DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN Y SERVICIOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PUEDE SUPLIR LAS AUSENCIAS DE LOS DELEGADOS REGIONALES O DE LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PROPIO INSTITUTO.- El artículo 9° del Reglamento Interior del INFONAVIT como organismo fiscal autónomo, faculta a los Delegados Regionales y a los representantes de la Dirección General del INFONAVIT a ejercer dentro de su ámbito territorial las facultades de dicho Instituto para determinar aportaciones omitidas, requerir su pago y ejercer facultades de revisión, entre otras; mientras que el artículo 12 de ese mismo Ordenamiento Legal permite a esas Delegaciones y representantes ser suplidos en sus ausencias por los Jefes de las Áreas de Fiscalización y de Servicios Jurídicos de cada Entidad Federativa. Por ende, de una interpretación armónica de los artículos 23, fracción I, y 30 de la Ley del INFONAVIT, con los preceptos legales citados de su Reglamento, se llega a la conclusión de que los Jefes del Área de Fiscalización y Servicios Jurídicos son existentes y competentes por lo que pueden actuar válidamente supliendo las ausencias tanto de los Delegados como de los representantes de la Dirección General del INFONAVIT. (4)

Contradicción de sentencias No. 2311/01-05-02-1/y otro/152/02-PL-11-01, Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de febrero de 2004, por mayoría de 8 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Pérez Ocampo.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/12/2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

QUINTO.- (...)

A juicio del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, debe prevalecer el criterio sustentado por la Segunda Sala Regional Norte Centro II, en virtud de que la existencia y competencia del Jefe del Área de Fiscalización de las Delegaciones del INFONAVIT se desprende del análisis del artículo 23, fracción I de la Ley del INFONAVIT que a la letra dice:

"**ARTÍCULO 23.-** El Director General tendrá las siguientes atribuciones y funciones:
"**I.-** Representar legalmente al Instituto con todas las facultades que correspondan a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal. Estas facultades las ejercerá en la forma en que acuerde el Consejo de Administración.
"El Director General podrá delegar la representación, incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje así como otorgar y revocar poderes generales o especiales, pero cuando sean a favor de personas ajenas al Instituto deberá recabar previamente el acuerdo del Consejo de Administración.
"**Las facultades que correspondan al Instituto en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad con el artículo 30 de esta Ley, se ejercerán por el Director General, el Subdirector General Jurídico y de Fiscalización, los Delegados Regionales y el demás personal que expresamente se indique en el Reglamento Interior del Instituto del Fondo**

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de facultades como organismo fiscal autónomo.
"(...)"

De donde se desprende que la misma Ley del INFONAVIT remite a su Reglamento como organismo fiscal autónomo para regular cuál es el personal de dicho Instituto, además del que ahí se señala, como es el Director General, el Subdirector General Jurídico y de Fiscalización y los Delegados Regionales, quienes pueden ejercer las facultades del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores.

Acorde a lo anterior, los artículos 3º, 9º y 12 del Reglamento del INFONAVIT como organismo fiscal autónomo complementan la anterior regulación, al señalar:

"**ARTÍCULO 3º.-** El Instituto, es un organismo fiscal autónomo que cuenta con todas las facultades previstas en la Ley y el Código, para:
"**I.-** Requerir a las personas la exhibición de libros y registros electrónicos o de cualquier otra naturaleza, así como los medios utilizados para procesar la información que integre su contabilidad, incluyendo nóminas de salarios y plantillas de personal, avisos, declaraciones, documentos y demás información necesaria para determinar la existencia o no de la relación laboral y la que permita establecer de manera presuntiva el monto de las aportaciones, así como el pago de salarios a las personas a su servicio, vinculados con las obligaciones que a cargo de dichos patrones establecen la Ley Federal del Trabajo, la ley, el Código y sus disposiciones reglamentarias aplicables;
"**II.-** Ordenar y practicar, por conducto de las personas que al efecto autorice y acredite el Instituto, visitas domiciliarias, auditorías e inspecciones a los patrones a fin de comprobar el cumplimiento de la determinación y pago de aportaciones, así como la retención y entero de los descuentos o de cualquier otra obligación de carácter fiscal establecida en la Ley o en los reglamentos correspondientes;

"**III.**- Determinar, en caso de incumplimiento y en los términos del Código, el importe de las aportaciones omitidas y de los descuentos no retenidos o no enterados, calcular la actualización y los recargos que correspondan, señalar las bases para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida, requerir su pago y emitir las resoluciones del crédito fiscal respectivo con apoyo en la información proporcionada por el contribuyente, por otras autoridades fiscales y la que tenga en su poder el propio Instituto o que obtenga en ejercicio de sus facultades de revisión;

"**IV.**- Determinar y precisar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones patronales incumplidas, en función de los datos del último mes cubierto, o de los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación o de los proporcionados por otras autoridades fiscales;

"**V.**- Determinar presuntivamente las aportaciones y descuentos derivados de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior, en los términos de lo dispuesto por el Código, así como emitir la resolución respectiva;

"**VI.**- Suscribir convenios de colaboración y coordinación con la Secretaría, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las Entidades Federativas, con el objeto de que estas autoridades, conjunta o separadamente, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, puedan ordenar y practicar visitas, auditorías o inspecciones a los patrones que no hayan cumplido con sus obligaciones derivadas de la ley, quedando facultadas, en este caso, para determinar el importe de las aportaciones patronales omitidas y de los descuentos no retenidos o no enterados o de cualquier otra obligación de carácter fiscal establecida en la ley, o en los ordenamientos correspondientes, que les compete aplicar; así mismo podrá celebrar convenios de coordinación con la Secretaría, el Instituto Mexicano del seguro Social y demás autoridades fiscales federales y locales, en materia estadística, censal y fiscal para el mejor desarrollo de sus funciones;

"**VII.**- Dar trámite y notificar las liquidaciones para el cobro de las aportaciones y descuentos, conjuntamente con las liquidaciones de las cotizaciones previstas en la Ley del Seguro Social, previo convenio de coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social;

"**VIII.-** Rectificar los errores aritméticos que aparezcan en las declaraciones de los patrones para el pago de las aportaciones y entero de descuentos y, en su caso, determinar con base en las diferencias que resulten como omisiones en dichos pagos, el importe de las aportaciones o de los descuentos, su actualización y los recargos que correspondan;

"**IX.-** Recibir de los contribuyentes las aclaraciones y la documentación que presenten al Instituto, así como conciliar la información respectiva que acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales requeridas;

"**X.-** Cancelar las resoluciones a través de las cuales hubiese determinado créditos fiscales y que hayan sido debidamente cubiertos o aclarados, o que hubiesen sido dejados sin efecto por resolución firme dictada en recurso o juicio;

"**XI.-** Revisar los dictámenes formulados por los contadores públicos, sobre el cumplimiento en el pago y entero al Instituto de las aportaciones y descuentos, en los términos de las disposiciones aplicables;

"**XII.-** Ordenar y practicar la notificación de las resoluciones, respecto a las solicitudes de autorización para el pago a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones omitidas;

"**XIII.-** Dejar sin efecto las autorizaciones a que se refiere la fracción anterior, cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el Código que den lugar al cese de la autorización para pagar a plazo en forma diferida o en parcialidades;

"**XIV.-** Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de las cantidades pagadas indebidamente o en exceso que sean a favor de los patrones, siempre que se trate de aportaciones, descuentos y, en su caso, actualización y recargos por pago en exceso de estos conceptos, a que se refiere la Ley y el presente Reglamento;

"**XV.-** Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de constitución de la garantía del interés fiscal; registrarlas, autorizar su sustitución, cancelarlas y hacerlas efectivas cuando así proceda, en términos del Código y su Reglamento;

"**XVI.-** Notificar las resoluciones por las que se determinen los créditos fiscales y, en su caso, hacer efectivo el cobro de las aportaciones y descuentos

omitidos y de sus accesorios, a través del procedimiento administrativo de ejecución, sujetándose a las normas previstas sobre el particular por el Código y sus disposiciones reglamentarias;
"**XVII.-** Suspender o autorizar la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, en los términos del Código y su Reglamento;
"**XVIII.-** Imponer a los patrones que hayan cometido infracción a las disposiciones contenidas en la ley y sus disposiciones reglamentarias, las multas correspondientes de conformidad con lo previsto en el Reglamento respectivo;
"**XIX.-** Presentar denuncia o querella, o promover su presentación, ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito a que se refieren los artículos 57 y 58 de la ley y de aquellos otros delitos que por su propia naturaleza causen perjuicio al Instituto;
"**XX.**.- Solicitar a las entidades participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro, en los términos de las disposiciones legales aplicables y de la ley y sus disposiciones reglamentarias, la información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de vivienda, así como de las cantidades que integran las subcuentas de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores;
"**XXI.-** Resolver los recursos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, así como las solicitudes de prescripción y caducidad planteadas por los patrones en los términos del Código;
"**XXII.-** Certificar documentos en los que consten los actos y operaciones para su remisión a las autoridades;
"**XXIII.-** Solicitar a las autoridades fiscales federales, estatales y municipales la información necesaria para llevar a cabo acciones de revisión del cumplimiento de obligaciones fiscales, así como atender las solicitudes que por su parte formulen aquéllas con iguales propósitos; y
"**XXIV.-** Las demás facultades y atribuciones que les señalen la Ley y sus disposiciones reglamentarias, así como el Código y su Reglamento."

"ARTÍCULO 9º.- Los Delegados Regionales o los Representantes de la Dirección General, según sea el nombramiento que se les haya otorgado, y el

Coordinador del Distrito Federal, ejercerán en el ámbito de su circunscripción territorial las facultades a que se refiere el artículo 3º de este Reglamento, exceptuando las comprendidas en las fracciones VI y XX."

"**ARTÍCULO 12.-** En las ausencias de los Gerentes de Fiscalización y de Servicios Legales, las facultades que les correspondan, serán ejercidas por los Subgerentes de estas áreas.
"En las ausencias de los Delegados Regionales o de los Representantes de la Dirección General y del Coordinador del Distrito Federal, las facultades que les correspondan se ejercerán por los Jefes de las Áreas de Fiscalización y de Servicios Jurídicos de la entidad federativa de que se trate."

Por lo que la existencia y competencia de los Jefes de las Áreas de Fiscalización y Servicios Jurídicos de cada Entidad Federativa se desprenden del artículo 12 ya transcrito al señalar que pueden suplir las ausencias de los Delegados Regionales o de los Representantes de la Dirección General y del Coordinador del Distrito Federal, por lo que basta con la cita de tal precepto legal para concluir que el acto ha sido emitido por autoridad competente, observando los requisitos de fundamentación y motivación del acto.

En efecto, cuando una autoridad u órgano actúa en suplencia por ausencia, no ejerce sus propias facultades, sino como se ha indicado, actúa por otra autoridad, que sí debe fundar debidamente su competencia, pues es quien se considera autor responsable del acto, mientras que la actuación del suplente se reduce a un apoyo instrumental que perfecciona y complementa el desarrollo de un acto del suplido. De ahí, que el suplente cumple con los requisitos de fundamentación y motivación en términos de los artículos 16 Constitucional y 38, fracciones III y IV del Código Fiscal de la Federación, con expresar tres elementos esenciales a saber: el señalar que está actuando por suplencia; citar el precepto legal que le permite actuar de esa forma y señalar el fundamento legal de la competencia del órgano suplido.

En virtud de lo anterior, se fija la siguiente jurisprudencia:

"**JEFE DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN Y SERVICIOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PUEDE SUPLIR LAS AUSENCIAS DE LOS DELEGADOS REGIONALES O DE LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PROPIO INSTITUTO.-** El artículo 9º del Reglamento Interior del INFONAVIT como organismo fiscal autónomo, faculta a los delegados regionales y a los representantes de la Dirección General del INFONAVIT a ejercer dentro de su ámbito territorial las facultades de dicho Instituto para determinar aportaciones omitidas, requerir su pago y ejercer facultades de revisión, entre otras; mientras que el artículo 12 de ese mismo Ordenamiento Legal permite a esas Delegaciones y representantes ser suplidos en sus ausencias por los Jefes de las Áreas de Fiscalización y de Servicios Jurídicos de cada Entidad Federativa. Por ende, de una interpretación armónica de los artículos 23, fracción I y 30 de la Ley del INFONAVIT, con los preceptos legales citados de su Reglamento, se llega a la conclusión de que los Jefes del Área de Fiscalización y Servicios Jurídicos son existentes y competentes por lo que pueden actuar válidamente supliendo las ausencias tanto de los Delegados como de los representantes de la Dirección General del INFONAVIT."

En consecuencia, y con fundamento en los artículos 261 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- Ha resultado procedente y fundada la contradicción de sentencia denunciada entre la Segunda Sala Regional del Norte Centro II y la Sala Regional del Noroeste III.

II.- Debe prevalecer el criterio sustentado por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II, al resolver el juicio de nulidad 2311/01-05-02-1.

III.- Se fija la jurisprudencia cuyo texto se contiene en el presente fallo.

IV.- Remítase copia de la presente sentencia a la Revista de este Tribunal, para que proceda a la publicación de la jurisprudencia que se fija.

V.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la H. Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de febrero de 2004, por mayoría de 8 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Malpica de Lamadrid, Alma Peralta Di Gregorio, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Silvia Eugenia Díaz Vega, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Luis Carballo Balvanera y Guillermo Domínguez Belloc y 3 en contra de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, María Guadalupe Aguirre Soria y Magistrada Presidenta María del Consuelo Villalobos Ortíz.

Fue Ponente en el presente asunto el C. Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se formula el presente engrose el día 4 de marzo de 2004, y con fundamento en lo previsto por los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la C. Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, que da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-39

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PLAZO PARA INTERPONERLO, TRATÁNDOSE DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.- El término de cuarenta y cinco días previsto por el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación para interponer el recurso de revocación establecido en el artículo 116 del propio Ordenamiento, no rige en los casos en que dicho medio de impugnación se haga valer en contra de actos del procedimiento administrativo de ejecución (mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, acta de embargo, etc.) por no haberse ajustado a la ley y se trata de violaciones cometidas antes del remate; ya que en esa hipótesis debe aplicarse la diversa modalidad contenida en el numeral 127 del mismo cuerpo legal, consistente en que el afectado puede interponer el medio de defensa en cualquier tiempo, antes de la publicación de la convocatoria en primera almoneda, con la salvedad que el mismo dispositivo determina. (5)

Contradicción de sentencias No. 402/03-10-01-5/y otros 2/1130/03-PL-04-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de febrero de 2004, por mayoría de 8 votos a favor, 2 votos con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/13/2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

En primer término, resulta oportuno efectuar la transcripción de los artículos 116, 121, primer párrafo y 127 del Código Fiscal de la Federación, los cuales a la letra señalan:

> "Art. 116.- Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación."
>
> "Art. 121.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación excepto lo dispuesto en los artículos 127 y 175 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en los mismos se señala.
> "(...)"
>
> "Art.- 127.- Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate podrán hacerse valer en cualquier tiempo, antes de la publicación de la convocatoria en primera almoneda salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables, de actos de imposible reparación material o de lo previsto por el artículo 129, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día siguiente al de la diligencia de embargo.
> "(...)"

De los preceptos transcritos se desprende con toda claridad que el término de cuarenta y cinco días previsto por el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación, para interponer el recurso de revocación establecido en el numeral 116 del mismo Ordenamiento, no rige en los casos en que dicho medio de impugnación se hace valer en contra de los actos practicados dentro del procedimiento administrativo de ejecución por no haberse ajustado a la ley, siempre que se trate de violaciones come-

tidas antes del remate, ya que en esas hipótesis debe aplicarse la modalidad contenida en el artículo 127 del mismo cuerpo legal, consistente en que el afectado puede interponer el referido medio de defensa en cualquier tiempo, pero antes de la publicación de la convocatoria en primera almoneda, con la salvedad que el mismo dispositivo determina, que lo es cuando se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables, de actos de imposible reparación material o de lo previsto por el artículo 129 del Código en comento, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día siguiente al de la diligencia de embargo.

De lo anterior resulta que tratándose de actos del procedimiento administrativo de ejecución como lo son los mandamientos de ejecución y actas de requerimiento de pago y embargo (pues no debe perderse de vista que, conforme a lo dispuesto en los artículos 145 y 151 del Código Fiscal de la Federación, el procedimiento administrativo de ejecución se inicia con el requerimiento de pago al deudor), su impugnación puede efectuarse en cualquier tiempo antes de la publicación de la convocatoria en primera almoneda, con las salvedades que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede; de interpretarse lo contrario, ningún sentido tendría que el propio artículo 127 del Código Fiscal de la Federación estableciera como excepción que tratándose de los casos de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables, de los actos de imposible reparación material o de lo previsto por el artículo 129, el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento o al de la diligencia de embargo.

Sirve de apoyo a la determinación de que el procedimiento administrativo de ejecución se inicia con el requerimiento de pago al deudor, la siguiente tesis:

> “Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, octubre de 2002. Tesis: I.9o.A.65 A. Página: 1429 Materia: Administrativa. Tesis aislada.

"**PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. SU INICIO ESTÁ DETERMINADO POR LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO.-** El procedimiento administrativo de ejecución se inicia con la emisión de la orden o resolución de requerimiento de pago del crédito o créditos que se hayan hecho exigibles, lo cual se desprende de lo dispuesto por los artículos 145, párrafo primero, 151, párrafo primero y 152, párrafo primero, todos ellos del Código Fiscal de la Federación, por razón de que al hacerse exigible todo crédito fiscal, se hace necesario que exista una resolución, debidamente fundada y motivada, en la que se ordene requerirle el pago del importe de tales créditos fincados al contribuyente deudor. Aunado a que dicho acto de emisión de la orden de requerimiento es totalmente independiente a la diligencia de requerimiento que es la consecuencia de aquélla. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"Revisión fiscal 140/2002. Administradora Local Jurídica del Sur del Distrito Federal, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 3 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Jorge C. Arredondo Gallegos."

Resultan aplicables por lo que toca al plazo para interponer el recurso de revocación, tratándose de actos del procedimiento administrativo de ejecución, las siguientes tesis:

"Quinta Época.
"Instancia: Segunda Sección
"R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año I. No. 5. Mayo 2001.
"Tesis: V-TA-2aS-8
"Página: 120

"**RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN.- PLAZO PARA INTERPONERLO, TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES QUE SE**

DICTEN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.- El artículo 121, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, establece como regla general para la interposición del recurso de revocación, el plazo de 45 días. En el mismo párrafo, se contienen dos excepciones, las referidas a los artículos 127 y 175 de dicho Código, en los que el recurso deberá presentarse dentro de los plazos que se señalan en los citados artículos. Ahora bien, el 127 contiene dos supuestos: 1.- Cuando el procedimiento administrativo de ejecución no se ajuste a la ley, las violaciones cometidas antes del remate podrán hacerse valer en cualquier tiempo, antes de la publicación de la convocatoria en primera almoneda. 2.- Si se trata de actos de imposible reparación material o de ejecución sobre bienes legalmente inembargables, así como si se impugna la notificación conforme a lo previsto por el artículo 129, el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o de la diligencia de embargo, según corresponda. En esa virtud, si el acto recurrido forma parte del procedimiento administrativo de ejecución, como es el caso del requerimiento de pago, el plazo para recurrir, debe ser el señalado en el artículo 127 del ordenamiento en cita y no el previsto en el diverso 121 como regla general. (5)

"Juicio No. 1117/99-04-01-9/455/00-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 6 de noviembre de 2000, por mayoría de 3 votos a favor y 2 en contra.- Magistrado Ponente: Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Agustina Herrera Espinoza"

"Tercera Época.
"Instancia: Séptima Sala Regional Metropolitana.
"R.T.F.F.: Año X. No. 118. Octubre 1997.
"Tesis: III-TASR-XVIII-584
"Página: 120

"**RECURSO DE REVOCACIÓN.- INTERPUESTO CUANDO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN NO SE AJUSTÓ AL ARTÍCULO 127**

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Cuando con motivo de la práctica del procedimiento administrativo de ejecución, se interponga el recurso de revocación por considerar que el mismo no se ha ajustado a derecho, el contribuyente contará con el plazo señalado en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, pues es el que de manera específica estableció el legislador para tal efecto, y no el diverso 121 del propio Código donde se establece el plazo para la interposición del citado recurso tratándose de las resoluciones administrativas descritas en la fracción I de su similar 117 del propio cuerpo legal. (3)

"Juicio No. 10297/96.- Sentencia de 4 de abril de 1997, aprobada por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Mary Helen Garrido."

Por lo anterior esta Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con fundamento en el artículo 261, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, establece la siguiente jurisprudencia:

"**RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PLAZO PARA INTERPONERLO, TRATÁNDOSE DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.-** El término de cuarenta y cinco días previsto por el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación para interponer el recurso de revocación establecido en el artículo 116 del propio Ordenamiento, no rige en los casos en que dicho medio de impugnación se haga valer en contra de actos del procedimiento administrativo de ejecución (mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, acta de embargo, etc.) por no haberse ajustado a la ley y se trata de violaciones cometidas antes del remate; ya que en esa hipótesis debe aplicarse la diversa modalidad contenida en el numeral 127 del mismo cuerpo legal, consistente en que el afectado puede interponer el medio de defensa en cualquier tiempo, antes de la

publicación de la convocatoria en primera almoneda, con la salvedad que el mismo dispositivo determina."

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 259 y 261 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- Ha resultado improcedente la denuncia de contradicción de sentencias respecto de la sentencia dictada por la Sala Regional del Centro III, con fecha 23 de mayo de 2003, en el juicio 422/03-10-01-1, promovido por Javier Chacón Zavala.

II.- Es procedente la denuncia de contradicción de sentencias, respecto de las dictadas por la Sala Regional del Centro III, en los juicios de nulidad 402/03-10-01-5 y 403/03-10-01-9, promovidos por Víctor Hugo Chacón Zavala y Enedina Chacón Zavala.

III.- Debe prevalecer el criterio sustentado por la Sala Regional del Centro III, en el juicio de nulidad 403/03-10-01-9, promovido por Enedina Chacón Zavala.

IV.- Se fija la jurisprudencia incluida en el último considerando de esta sentencia, misma que deberá ser publicada en la Revista de este Tribunal.

V.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución, devuélvanse los expedientes 402/03-10-01-5 y 403/03-10-01-9 a su Sala de origen; y en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de febrero de 2004, por mayoría de 8 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Luis Malpica de Lamadrid, Alma Peralta Di Gregorio, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Luis Carballo Balvanera y María del Consuelo Villalobos Ortíz; más 2 votos con los puntos resolutivos de los Magistra-

dos Silvia Eugenia Díaz Vega y Guillermo Domínguez Belloc; y 1 en contra de la Magistrada María Guadalupe Aguirre Soria.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el 25 de febrero de 2004. Con fundamento en los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-40

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES.- CUANDO LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SEA UNA NEGATIVA FICTA, DEBE ESTARSE A LA SEDE DE LA AUTORIDAD QUE ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA INSTANCIA.- De una interpretación sistemática de los artículos 207 del Código Fiscal de la Federación y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se desprende que la competencia por razón del territorio para conocer de una demanda, se determina atendiendo al lugar en que tenga su sede la autoridad que emitió la resolución combatida. Ahora bien, frente a la ausencia de resolución expresa por impugnarse una negativa ficta, será competente para conocer del juicio, la Sala dentro de cuya circunscripción territorial radique la autoridad facultada para resolver la instancia correspondiente. (6)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/14/2044)

PRECEDENTES:

V-P-SS-286
Juicio No. 490/01-16-01-7/5898/01-17-05-7/526/01-PL-02-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de abril de 2002, por mayoría de 8 votos a favor y 2 en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretaria: Lic. Juana Griselda Dávila Ojeda.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de noviembre de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 30. Junio 2003. p.116

V-P-SS-303
Juicio No. 187/01-10-01-2/2864/01-17-05-1/464/01-PL-04-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión

de 5 de abril de 2002, por mayoría de 8 votos a favor y 2 en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Virginia Pétriz Herrera.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de noviembre de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 31. Julio 2003. p. 90

V-P-SS-338
Juicio No. 18045/02-17-10-4/2964/02-16-01-5/367/03-PL-07-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de abril de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 1 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de abril de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. Tomo I. No. 36. Diciembre 2003. p. 22

V-P-SS-339
Juicio No. 14323/02-17-01-5/3579/02-07-01-6/189/02-PL-06-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de abril de 2003, por mayoría de 8 votos a favor y 2 en contra.- Magistrada Ponente: María Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Miguel Valencia Chávez.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de abril de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. Tomo I. No. 36. Diciembre 2003. p. 22

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día dieciséis de febrero de dos mil cuatro.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-41

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL.- DEBE RESOLVERSE CON BASE EN LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- La competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de un juicio, debe ser analizada a la luz de las disposiciones legales vigentes en la fecha en que se presentó la demanda, toda vez que es en este momento cuando las Salas pueden declararse legalmente incompetentes para conocer del asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 218 del Código Fiscal de la Federación; motivo por el cual no es pertinente estimar fundado un incidente de incompetencia territorial, apoyado en que con posterioridad, es decir, durante la substanciación del juicio, cambie o se modifique la competencia territorial de una Sala Regional, en razón a que, se reitera, debe atenderse a la competencia que se tenga al momento de la presentación de la demanda, pues de aceptarse el criterio contrario, durante la tramitación del juicio se podrían presentar incidentes de incompetencia, tantas veces como se cambiara la circunscripción territorial de una Sala. (7)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/15/2004)

PRECEDENTES:

V-P-SS-171
Juicio No. 29/99-07-01-1/94/01-PL-04-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de abril de 2002, por mayoría de 10 votos a favor y 1 en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de abril de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2002. p. 222

V-P-SS-308

Juicio No. 1381/96-12-01-1/1072/02-PL-06-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de febrero de 2003, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: María Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Salvador Jesús Mena Castañeda.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de febrero de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 31. Julio 2003. p. 117

V-P-SS-340

Juicio No. 18045/02-17-10-4/2964/02-16-01-5/367/03-PL-07-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de abril de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de abril de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. Tomo I. No. 36. Diciembre 2003. p. 23

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día dieciséis de febrero de dos mil cuatro.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-42

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

CONTRALORÍA INTERNA EN LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO QUE FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARAESTATAL.- SON COMPETENTES PARA CONOCER, TRAMITAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- De una debida correlación entre lo dispuesto por los artículos 108, 109, fracción III, y 113 Constitucionales; artículos 1º y 37, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículos 14 y 62 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; artículos 1º, 2º, 3º, fracciones II y III, 48, 49, 53, 54, 56, fracción VI, 57, 58, 59, 60, 64, 65, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reformados por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, en vigor a partir del 1º de enero de 1997, se advierte que los Contralores Internos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, son órganos de autoridad que gozan de competencia para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, determinar si existe o no responsabilidad de los servidores públicos por el incumplimiento de sus obligaciones e imponer las sanciones previstas en la Ley de la materia, en el ámbito de las citadas dependencias o entidades. Lo anterior encuentra su razón de ser en atención a que el legislador a través de las reformas citadas, creó un mecanismo novedoso de organización administrativa en virtud del cual se efectúa el control interno de la aplicación de la ley en las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, en forma desconcentrada, pero manteniendo subordinados jerárquica y funcionalmente a los titulares de las referidas contralorías al órgano central, esto es, a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. En mérito de lo anterior, es de concluirse que por lo que se refiere específicamente a las Contralorías Internas en sociedades nacionales de crédito que forman parte de la Administración Pública Federal

Paraestatal, cuentan con plena competencia para los efectos precisados, con particular apoyo en lo dispuesto por los artículos 37, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 62 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 57 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, antes citados. Sin que obste a lo anterior que de conformidad con el artículo 4°, fracción XXVII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es facultad de esta Comisión, aplicar a los servidores públicos de las instituciones de banca de desarrollo, las disposiciones y las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que correspondan a las Contralorías Internas, pues en primer lugar la aplicación de la citada Ley específica sólo queda sujeta en cuanto a la constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación de dichas entidades paraestatales, no así a las relaciones con el Ejecutivo Federal y sus dependencias, pues en este aspecto rigen las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, dentro de las cuales se encuentra el artículo 62, que en relación con las diversas disposiciones de la propia Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece la competencia de los órganos de control en cada entidad paraestatal; además, que el propio artículo 4º mencionado, expresamente señala que la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por parte de la Comisión y de las sanciones que impongan las contralorías internas, es sin perjuicio de las que en términos de la propia Ley Federal de Responsabilidades competa aplicar a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública). (8)

Contradicción de sentencias No. 1581/98-07-03-7/y otro/636/03-PL-05-01, Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de febrero de 2004, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Vázquez Galicia.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/16/2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

QUINTO.- En tal virtud, existiendo contradicción entre las sentencias de mérito, al haber oposición de criterios respecto de una misma situación jurídica como lo es la competencia de las Contralorías Internas en la aludida sociedad nacional de crédito que forman parte del sistema financiero y de la Administración Pública Federal Paraestatal, esta Sala Superior actuando en Pleno, preservando la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico, estima que debe prevalecer sustancialmente el criterio sostenido por el Pleno de la Sala Superior, en el sentido de que las Contralorías Internas, como órganos de control en las entidades paraestatales, incluyendo aquellas instaladas en las sociedades nacionales de crédito o entidades que formen parte del sistema financiero, son competentes para conocer, tramitar y resolver el procedimiento administrativo disciplinario establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como para imponer sanciones previstas por la propia Ley, atento a las siguientes consideraciones:

En principio, cabe precisar que las Contralorías Internas en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, dependen de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública) **y de ninguna manera de las dependencias y entidades en las que operen**, dado que a través del Decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, con vigencia a partir del 1o. de enero de 1997, el legislador creó un mecanismo de organización administrativa novedoso, por virtud del cual una dependencia centralizada de la Administración Pública Federal, como lo era la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública), a través de las contralorías internas en las dependencias y entidades paraestatales, desconcentra sus funciones para el control interno de la aplicación de la Ley, pero los titulares de los referidos órganos de control en las dependencias y

entidades paraestatales están subordinados al órgano central, aun cuando aquellos órganos sean parte integrante de la estructura de dichas dependencias o entidades; es decir, esta organización se creó para proveer de facultades a autoridades en dependencias, organismos descentralizados y entidades paraestatales dependientes de la Administración Pública Federal.

Por otra parte, es de puntualizar que la fundamentación de la competencia precisamente se justifica con la aplicación de las disposiciones del derecho positivo vigente en el momento en que se dicta el acto de autoridad, puesto que son estas normas las que pueden plena y legalmente legitimar el actuar de quien lo emite. Por tanto, si el acto recurrido y la resolución impugnada emitidos por la Contraloría en el Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, S.N.C., en los juicios 1581/98-07-03-7 y 40/98-05-01-1, respectivamente, que se consideraron el primero ilegal al provenir de autoridad incompetente y el segundo legal porque la misma autoridad era competente, fueron emitidos el 11 de marzo de 1998 y 4 de noviembre de 1997, respectivamente, el presente asunto debe ventilarse a la luz de las disposiciones aplicables en esos momentos.

En ese sentido, se puntualiza que los artículos 108, 109, fracción III, y 113 Constitucionales, se refieren a las personas que se reputarán como servidores públicos, a las prevenciones aplicables a los servidores públicos, entre ellas, las sanciones administrativas y al establecimiento de leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos que determinen sus obligaciones y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aplicable, en sus artículos 1º y 37, fracción XII, dispone:

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

"**ARTÍCULO 1°.-** La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

"La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada. **Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.**"

"**ARTÍCULO 37.- A la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo corresponde** el despacho de los siguientes asuntos:
"(...)
"**XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control** de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, **tendrán el carácter de autoridad** y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales representando al titular de dicha secretaría.
"(...)"

Por su parte la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en sus artículos 1º, 2º, 4º y 62 establece:

LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

"**ARTÍCULO 1o.-** La presente Ley, reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal.**
"**Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, en cuanto unidades auxiliares de la Adminis-**

tración Pública Federal, se sujetarán, en primer término, a lo establecido en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, a otras disposiciones según la materia que corresponda."

"**ARTÍCULO 2o.- Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.**"

"**ARTÍCULO 4o.-** El Banco de México, **las sociedades nacionales de crédito,** las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas, los fondos y fideicomisos públicos de fomento así como las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero, **quedan sujetas por cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación a su legislación específica. Les será aplicable esta Ley en las materias y asuntos que sus leyes específicas no regulen.**"

"**ARTÍCULO 62.- Los órganos internos de control serán parte integrante de la estructura de las entidades paraestatales.** Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la entidad; **desarrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de la cual dependerán los titulares de dichos órganos** y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, de acuerdo a las bases siguientes:
"**I. Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto del titular del órgano de control interno o del área de responsabilidades, determinarán la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la entidad e impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la materia,** así como dictarán las resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos de la entidad respecto de la imposición de sanciones administrativas.

"Dichos órganos realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los diversos Tribunales Federales, representando al titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
"(...)"

Por otra parte, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se establece:

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

"**ARTÍCULO 1°.-** Esta ley tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto Constitucional en Materia de:
"**I.-** Los sujetos de responsabilidad en el servicio público;
"**II.-** Las obligaciones en el servicio público;
"**III.-** Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, así como las que se deban resolver mediante juicio político;
"**IV.- Las autoridades competentes** y los procedimientos para aplicar dichas sanciones;
"**V.-** Las autoridades competentes y los procedimiento para declarar la procedencia del procesamiento penal de los servidores públicos que gozan de fuero, y
"**VI.-** El registro patrimonial de los servidores públicos."

"**ARTÍCULO 2o.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el párrafo primero y tercero del articulo 108 Constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos federales.**"

"**ARTÍCULO 3o.-** Las autoridades competentes, para aplicar la presente Ley serán:
"(...)

"**II.- La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;**
"**III.- Las dependencias del Ejecutivo Federal;**
"(...)"

"**ARTÍCULO 48.-** Para los efectos de esta ley se entenderá por Secretaría a la Secretaría de Contraloría y Desarrolló Administrativo."

"**ARTÍCULO 49.- En las dependencias y entidades de la administración pública se establecerán unidades específicas**, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente.
"La Secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las instancias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia."

"**ARTÍCULO 53.-** Las sanciones por falta administrativa consistirán en:
"I. - Apercibimiento privado o público;
"II. - Amonestación privada o pública;
"III.- Suspensión;
"IV.- Destitución del puesto;
"V.- Sanción económica; e
"VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público."

"**ARTÍCULO 54.-** Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:
"(...)"

"**ARTÍCULO 56.-** Para la aplicación de las sanciones a que hace referencia el artículo 53 se observarán las siguientes reglas:
"I.- El apercibimiento, la amonestación y la suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor de tres meses, serán aplicables por el superior jerárquico;

"II.- La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos, se demandará por el superior jerárquico de acuerdo con los procedimientos consecuentes con la naturaleza de la relación y en los términos de las leyes respectivas;
"III.- La suspensión del empleo, cargo o comisión durante el período al que se refiere la fracción I, y la destitución de los servidores públicos de confianza, se aplicarán por el superior jerárquico;
"IV. - La Secretaría promoverá los procedimientos a que hacen referencia las fracciones II y III, demandando la destitución del servidor público responsable o procediendo a la suspensión de éste cuando el superior jerárquico no lo haga. En este caso, la Secretaría desahogará el procedimiento y exhibirá las constancias respectivas al superior jerárquico;
"V.- La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, será aplicable por resolución que dicte la autoridad competente; y
"VI.- Las sanciones económicas serán aplicadas por la contraloría interna de la dependencia o entidad."

"**ARTÍCULO 57.-** Todo servidor público deberá denunciar por escrito **a la contraloría interna de su dependencia o entidad los hechos** que, a su juicio, sean causa de responsabilidad administrativa imputables a servidores públicos sujetos a su dirección.
"**La contraloría interna de la dependencia o entidad determinará si existe o no responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, y aplicará las sanciones disciplinarias correspondientes.**
"El superior jerárquico de la dependencia o entidad respectiva enviará a la Secretaría copia de las denuncias cuando se trate de infracciones graves o cuando, en su concepto, y habida cuenta de la naturaleza de los hechos denunciados, la Secretaría deba, directamente, conocer el caso o participar en las investigaciones."

"**ARTÍCULO 58.-** La Secretaría aplicará las sanciones correspondientes a **los contralores internos** de las dependencias cuando éstos incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa."

"**ARTÍCULO 59.-** Incurrirán en responsabilidad administrativa los servidores públicos **de las contralorías internas** que se abstengan injustificadamente de sancionar a los infractores o que, al hacerlo, no se ajusten a lo previsto por esta Ley. La Secretaría informará de ello al Titular de la dependencia y aplicará las sanciones correspondientes."

"**ARTÍCULO 60.- La contraloría interna de cada dependencia o entidad será competente para imponer sanciones disciplinarias.**"

"**ARTÍCULO 64.-** La Secretaría impondrá las sanciones administrativa a que se refiere este Capitulo mediante el siguiente procedimiento:
"(...)"

"**ARTÍCULO 65.- En los procedimientos que se sigan para investigación y aplicación de sanciones ante las contralorías internas de las dependencias,** se observarán en todo cuanto sea aplicable a las reglas contenidas en el artículo anterior."

"**TRANSITORIOS**

"**TERCERO.-** En tanto el Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo designa a los Titulares de los Órganos Internos de Control, así como a los de sus áreas de auditoria, quejas y responsabilidades, los actuales titulares continuarán en su cargo y ejercerán en los términos de este decreto."

"**CUARTO.- Los órganos de control interno de las entidades paraestatales resolverán los procedimientos de responsabilidades administrativas** y los recursos de revocación que, a la entrada en vigor del

presente decreto, **se encuentren en trámite en las Dependencias Coordinadoras de Sector, relativos a asuntos de las citadas entidades**, así como los que se inicien por hechos consumados con anterioridad a la entrada en vigor antes mencionada. Dichos procedimientos y recursos continuarán resolviéndose conforme a las disposiciones legales que los rigen.
"(...)"

En efecto, de las disposiciones anteriormente transcritas se desprende lo siguiente:

- Que la Administración Pública Centralizada y la Administración Pública Paraestatal, integran la Administración Pública Federal.

- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal designa a las Contralorías Internas con la expresión genérica de órganos de control interno.

- Que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal.

- Que las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, en cuanto unidades auxiliares de la Administración Pública Federal, se sujetarán, en primer término, a lo establecido en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, a otras disposiciones según la materia que corresponda.

- Que las sociedades nacionales de crédito, así como las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero, **quedan sujetas por cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación a su legislación específica y les será aplicable esta Ley en las materias y asuntos que sus leyes específicas no regulen.**

- Que los titulares de los órganos de control en las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal (Centralizada) o Paraestatal, no dependen del titular de la dependencia o entidad paraestatal, sino del Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública), quien los designará y removerá, que dependerán jerárquica y funcionalmente de dicha Secretaría y tendrán el carácter de autoridad.

- Que los órganos internos de control (Contralorías Internas) serán parte integrante de la estructura de las entidades paraestatales, pero desarrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de la cual dependerán los titulares de dichos órganos.

- Que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reglamenta en materia de: los sujetos de responsabilidad en el servicio público; las obligaciones en el servicio público; las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, **las autoridades competentes** y los procedimientos para aplicar dichas sanciones.

- Que son autoridades competentes, para aplicar la presente Ley, entre otras, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (de la cual dependen las Contralorías Internas) y las dependencias del Ejecutivo Federal.

- Que en las dependencias y entidades de la administración pública se establecerán unidades específicas (como son las Contralorías Internas), con las que se iniciará el procedimiento disciplinario correspondiente.

- Que la Contraloría Interna de cada dependencia o entidad determinará si existe o no responsabilidad de las obligaciones de los servidores públicos por el incumplimiento de las obligaciones y será competente para imponer sanciones disciplinarias, en términos de la Ley de la materia (artículos 57 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos).

- Las sanciones por faltas administrativas.

- Los elementos que deben tomarse en cuenta para su aplicación.

- Las reglas que se deben aplicar para imponer las sanciones previstas en el artículo 53 de la Ley de la materia.

- El procedimiento disciplinario a seguir para la imposición de las sanciones administrativas.

Por las razones apuntadas, resulta incuestionable que las Contralorías Internas (órganos de control) establecidas de manera legislativa en los ordenamientos que rigen la materia, como órganos administrativos de autoridad, dependientes de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública), cuentan con plena competencia para conocer, investigar y aplicar las sanciones correspondientes en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

En ese orden de ideas, la Sala Superior actuando en Pleno, adquiere convicción que los Contralores Internos en su carácter de titulares de los órganos de control internos en las sociedades nacionales de crédito, como lo es el Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, S.N.C., que integran la Administración Pública Paraestatal, en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entidades paraestatales, que si bien **quedan sujetas por cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación a su legislación específica y sólo les será aplicable la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en las materias y asuntos que sus leyes específicas no regulen; también lo es que como** unidades auxiliares de la Administración Pública Federal, y en cuanto a sus relaciones con el Ejecutivo Federal o sus dependencias, como lo fue la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública), **se sujetan en primer término, a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales** y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, a otras disposiciones según la materia que corresponda, en térmi-

nos de lo dispuesto por los artículos 1º y 4º de la citada Ley. Por tanto, en su debido enlace con los diversos numerales 2º, 4º y 12 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con fundamento en las disposiciones antes transcritas y particularmente en los artículos 37, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 62 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 57 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pueden ejercer las facultades de iniciar el procedimiento disciplinario e imponer las sanciones que competan a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública), de acuerdo a lo dispuesto en la Ley última invocada, con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, que resulta ser el ordenamiento reglamentario de la materia de responsabilidades de los servidores públicos conforme lo disponen los artículos 108 y 109 Constitucional.

Lo anterior porque ha quedado demostrado, que las facultades otorgadas a las Contralorías Internas, como órganos de control, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de manera particular en la Administración Pública Paraestatal, que incluye a las sociedades nacionales de crédito, para llevar a cabo el procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos e imponer sanciones, son atribuidas directa y expresamente en leyes promulgadas por el Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 89, fracción I de la Constitución Federal y expedidas por el Congreso de la Unión.

No es óbice a la anterior conclusión alcanzada, el criterio sostenido por la Tercera Sala Regional del Golfo-Centro (hoy Sala Regional del Golfo) al dictar la sentencia de 22 de febrero de 2002, en el juicio 1581/9807-03-7, cuya tesis es reproducida por las autoridades denunciantes de la contradicción con el rubro "SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO. LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, A TRAVÉS DE SU ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA APLICAR LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SER-

VIDORES PÚBLICOS CON RELACIÓN A LOS.- (SE TRANSCRIBE)"; atento a que si bien los siguiente argumentos resultan apegados a derecho en cuanto a:

- Que de conformidad con los artículos 1º, punto 12, último párrafo y 2º, 5º y 26 de la **Ley Orgánica del Sistema Banrural,** el Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, es una Sociedad Nacional de Crédito filial del Banco Nacional de Crédito Rural integrante del Sistema Banrural y con carácter de institución de banca de desarrollo que presta el servicio de banca y crédito.

- Que en términos de los artículos 1°, 2°, 3° y 30 de la **Ley de Instituciones de Crédito,** misma que abrogó a la entonces Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, es una institución de crédito, que como institución de banca de desarrollo es una entidad de la Administración Pública Federal con el carácter de Sociedad Nacional de Crédito, según lo dispone la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, que como institución de banca de desarrollo y como entidad de la Administración Pública Federal, forma parte del sector paraestatal de la misma, sector que es regulado por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

- Que de conformidad con lo anterior, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales representa en primer término el marco jurídico bajo el cual se debe regir y regular las relaciones de tales entidades paraestatales con el Ejecutivo Federal y sus dependencias.

- Que por tanto, siendo el Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, S.N.C., una entidad paraestatal, las normas para regular su control y sus relaciones con las dependencias del Ejecutivo Federal, como en el caso lo es la Contraloría Interna en el propio Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, misma que depende de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública), son precisadas en la propia Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

- Que en términos del artículo 4° de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, S.N.C., queda sujeto en cuanto a su

constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación a la legislación específica de la materia, siendo ésta la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1995, pues del texto de sus artículos 1°, 2° y 3°, se podrá desprender que el objeto de dicha Ley es supervisar y regular a las entidades financieras o del sector financiero como lo son las instituciones de crédito, a través del órgano desconcentrado Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

- Y que es el caso, que en el artículo 4°, fracción XXVII de la Ley en cita, prevé como facultad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo siguiente:

> "**Artículo 4.- <u>Corresponde a la Comisión</u>:**
> "(...)
> "**XXVIl.- <u>Aplicar a los servidores públicos</u>** de las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal tenga el control por su participación accionaria **<u>y de las instituciones de banca de desarrollo las disposiciones, así como las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que correspondan a las contralorías internas, sin perjuicio de las que en términos de la propia Ley, compete aplicar a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo</u>**;
> "(...)"

Sin embargo, no resulta apegado a derecho que se diga que de conformidad con el artículo 4°, fracción XXVII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, **es facultad exclusiva de esta Comisión,** aplicar a los servidores públicos de las instituciones de banca de desarrollo, como lo es precisamente el Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, S.N.C., las disposiciones y las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que correspondan a las Contralorías Internas, pues en primer lugar la aplicación de la citada Ley específica sólo queda sujeta en cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación, no así a las relaciones con el Ejecutivo Federal y sus dependencia, pues en este aspecto rigen las disposiciones de la Ley Federal de las

Entidades Paraestatales, dentro de las cuales se encuentra el artículo 62, que en relación con diversas disposiciones de la propia Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece la competencia de los órganos de control en cada entidad paraestatal, además de que se pierde de vista que el artículo 4º, fracción XXVII, de la citada Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le otorga la facultad a dicha Comisión, no a la Contraloría Interna instalada en la Comisión, que en su caso, dependería de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública) y no de la propia Comisión.

Además, que el propio artículo 4º mencionado, expresamente señala que la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por parte de la Comisión y de las sanciones que impongan las contralorías internas, es sin perjuicio de las que en términos de la propia Ley Federal de Responsabilidades competa aplicar a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública), lo que hace que no se pueda interpretar que tratándose de servidores públicos de las instituciones de banca de desarrollo sólo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la única autoridad facultada para iniciar el procedimiento sancionador y aplicar las sanciones previstas en la Ley en cita, aduciendo que la competencia de la Contraloría Interna en el Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, S.N.C., no se establece de forma expresa en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que la de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deriva del artículo 4° de la Ley de las Entidades Paraestatales, con relación al 4°, fracción XXVII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; pues como ha quedado corroborado con anterioridad tanto la Ley Federal de las Entidades Paraestatales como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establecen expresamente la competencia de todas y cada una de las Contralorías Internas en las entidades paraestatales, incluyendo a las sociedades nacionales de crédito, máxime cuando el propio artículo 4º, en su fracción XXVII, no excluye su aplicación a cargo de tales Contralorías, al establecer que será sin perjuicio de las sanciones que en términos de la Ley corresponda aplicar a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública).

Por tanto, resulta incorrecto el criterio de la Sala Regional en el sentido de que es una facultad exclusiva de la Comisión porque está expresamente prevista en la Ley específica y que en todo caso tal facultad expresamente otorgada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se extiende al órgano de control que le corresponde, que pertenece a otra dependencia, cuando la atribución de aplicación de las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la aplicación de las sanciones procedentes está destinada a la Comisión para casos específicos y no a un órgano de control que se encuentra en la Comisión pero que no depende de ésta. Además de que no hay que perder de visita que conforme a los artículos 37, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 62 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 57 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las Contralorías Internas pueden ejercer las facultades de iniciar el procedimiento disciplinario e imponer las sanciones que competan a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública), de acuerdo a lo dispuesto en la Ley última invocada, con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, que se trata de la Ley que regula la materia de responsabilidades y que dota de atribuciones expresas a los órganos de control interno para tales efectos.

En ese contexto, al prevalecer sustancialmente el criterio sostenido por el Pleno de la Sala Superior en la sentencia de fecha 4 de agosto de 2000, dictada en el juicio 40/98-05-01-1/90/99-PL-02-04, esta Juzgadora somete a la consideración del Pleno de este Órgano Jurisdiccional, el texto de la tesis de jurisprudencia a que da lugar la presente contradicción, como lo establece el artículo 261, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, para los efectos de su aprobación y publicación en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"**CONTRALORÍA INTERNA EN LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO QUE FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARAESTATAL.- SON COMPETENTES PARA CONOCER, TRAMITAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PREVISTO EN LA LEY FEDE-**

RAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- De una debida correlación entre lo dispuesto por los artículos 108, 109, fracción III, y 113 Constitucionales; artículos 1° y 37, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículos 14 y 62 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; artículos 1º, 2º, 3º, fracciones II y III, 48, 49, 53, 54, 56, fracción VI, 57, 58, 59, 60, 64, 65, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reformadas por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, en vigor a partir del 1º de enero de 1997, se advierte que los Contralores Internos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, son órganos de autoridad que gozan de competencia para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, determinar si existe o no responsabilidad de los servidores públicos por el incumplimiento de sus obligaciones e imponer las sanciones previstas en la Ley de la materia, en el ámbito de las citadas dependencias o entidades. Lo anterior encuentra su razón de ser en atención a que el legislador a través de las reformas citadas, creó un mecanismo novedoso de organización administrativa en virtud del cual se efectúa el control interno de la aplicación de la ley en las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, en forma desconcentrada, pero manteniendo subordinados jerárquica y funcionalmente a los titulares de las referidas contralorías al órgano central, esto es, a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. En mérito de lo anterior, es de concluirse que por lo que se refiere específicamente a las Contralorías Internas en sociedades nacionales de crédito que forman parte de la Administración Pública Federal Paraestatal, cuentan con plena competencia para los efectos precisados, con particular apoyo en lo dispuesto por los artículos 37, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 62 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 57 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, antes citados. Sin que obste a lo anterior que de conformidad con el artículo 4°, fracción XXVII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es facultad de esta Comisión, aplicar a los servidores públicos de las instituciones de banca de desarrollo, las disposiciones y las

sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que correspondan a las Contralorías Internas, pues en primer lugar la aplicación de la citada Ley específica sólo queda sujeta en cuanto a la constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación de dichas entidades paraestatales, no así a las relaciones con el Ejecutivo Federal y sus dependencias, pues en este aspecto rigen las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, dentro de las cuales se encuentra el artículo 62, que en relación con las diversas disposiciones de la propia Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece la competencia de los órganos de control en cada entidad paraestatal; además, que el propio artículo 4º. mencionado, expresamente señala que la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por parte de la Comisión y de las sanciones que impongan las contralorías internas, es sin perjuicio de las que en términos de la propia Ley Federal de Responsabilidades competa aplicar a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública).”

En mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 16, fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 261 del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- Ha resultado procedente la contradicción de sentencias denunciada por el C. Titular del Órgano Interno de Control en el Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, S.N.C., y la C. Titular del Área de Responsabilidades de dicha Contraloría, dependiente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública).

II.- Prevalece el criterio sostenido por la Sala Superior de este Tribunal en la sentencia de fecha 4 de agosto de 2000, dictada en el juicio 40/98-05-01-1/90/99-PL-02-04.

III.- Lo resuelto en el presente fallo no afecta las resoluciones dictadas en los juicios materia de la contradicción, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 del

Código Fiscal de la Federación en vigor, y sólo surte efectos para fijar jurisprudencia en los términos del criterio antes precisado.

IV.- Se fija la tesis de jurisprudencia a que ha dado lugar la presente contradicción, misma que se publicará en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

V.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución devuélvanse los autos a la Sala Regional que corresponda, una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto y en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de febrero de 2004, por mayoría de nueve votos a favor de la ponencia de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Luis Malpica de Lamadrid, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Silvia Eugenia Díaz Vega, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Luis Carballo Balvanera, Guillermo Domínguez Belloc y María del Consuelo Villalobos Ortíz, y dos en contra de las CC. Magistradas Alma Peralta Di Gregorio y María Guadalupe Aguirre Soria, quienes se reservan su derecho para formular voto particular.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz.

Se formuló el presente engrose el 18 de marzo de 2004 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción VI, y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la C. Magistrada **MARÍA DEL CONSUELO VILLALOBOS ORTÍZ**, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. LIC. ROSANA EDITH DE LA PEÑA ADAME, Secretaria General de Acuerdos, que da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-43

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS POR UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE ELLOS.- De conformidad con el artículo 11, fracciones VII, XIII y XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a partir del 1° de enero de 2001, este Tribunal sólo es competente para resolver sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y no de las Entidades Federativas, ya que no se establece la competencia expresa a que se refiere la fracción XV del artículo 11 de la Ley Orgánica de este Tribunal y, por ello debe entenderse que este Tribunal no es competente para resolver sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública celebrados por un organismo descentralizado estatal, ya que los mismos al no formar parte de la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal, no son sujetos de la competencia material de este Tribunal. (9)

Contradicción de sentencias No. 3077/01-07-02-6/y otros/660/02-PL-08-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 25 de febrero de 2004, por mayoría de 7 votos a favor y 4 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosas Navarro Godínez.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/17/2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

QUINTO.- (...)

En ese contexto y teniendo en cuenta que en los asuntos de los que deriva la presente contradicción se aplicaron la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concretamente sus fracciones VII y XV, así como el artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, vigentes durante el año de 2002, se considera pertinente transcribir dichas disposiciones legales, que a la letra dicen:

"**Artículo 11.-** El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:
"I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.
"II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.
"III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.
"IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.
"V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al Erario Federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

"Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Fiscal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración.

"VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al Erario Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"**VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada.**

"VIII. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades.

"IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como sus organismos descentralizados.

"X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente.

"XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

"XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"**XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.**
"XIV. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.
"**XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.**
"Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.
"El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.
"También conocerá de los juicios que se promuevan contra una resolución negativa ficta configurada, en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen las disposiciones aplicables o, en su defecto, por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, conocerá de los juicios que se promuevan en contra de la negativa de la autoridad a expedir la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.
"No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa."
(Énfasis de esta Juzgadora)

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas

"**Artículo 15.-** Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribunales federales.
"Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que determine la Contraloría mediante reglas de carácter general, previa

opinión de la Secretaría y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ya sea en cláusula compromisoria incluida en el contrato o en convenio independiente.
"Lo previsto en los dos párrafos anteriores es sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte, o de que en el ámbito administrativo la Contraloría conozca de las inconformidades que presenten los particulares en relación con los procedimientos de contratación, o bien, de las quejas que en audiencia de conciliación conozca sobre el incumplimiento de lo pactado en los contratos.
"Lo dispuesto por este artículo se aplicará a los organismos descentralizados sólo cuando sus leyes no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver controversias.
"Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente."

Asimismo, es también necesario tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que dispone lo siguiente:

"**ARTÍCULO 1.-** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen:
"I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;
"II. Las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;
"III. La Procuraduría General de la República;
"IV. Los organismos descentralizados;
"V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente, sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y

"VI. Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, con la participación que, en su caso, corresponda a los municipios interesados. No quedan comprendidos los fondos previstos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

"Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus propios órganos de control.

"Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento.

"No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando éstos las lleven a cabo.

"Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se realizarán conforme a lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública y 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y estarán regidos por esta Ley únicamente en lo que se refiere a los procedimientos de contratación y ejecución de obra pública.

"Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo.

> "Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento."

Del precepto antes transcrito se desprende medularmente lo siguiente:

Que es una Ley de orden público que tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen las unidades administrativas de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal.

Asimismo, incluye también a las Entidades Federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, con la participación que, en su caso, corresponda a los Municipios interesados.

Sentado lo anterior, procede determinar si este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es el "Tribunal Federal" competente para conocer de las controversias que consigna el artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin olvidar que en las sentencias que dieron lugar a la presente contradicción, se controvirtieron contratos de obra pública que fueron celebrados por un organismo descentralizado estatal, y que dichos contratos se celebraron durante la vigencia de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, la cual fue derogada por la actual Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En principio, se tiene que la siguiente tesis de jurisprudencia sostiene lo siguiente:

“Octava Época
“Instancia: Pleno
“Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
“Parte: 78, Junio de 1994
“Tesis: P./J. 20/94
“Página: 18

“**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL CONFLICTO SUSCITADO POR SU RESCISIÓN, PROVENIENTE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIDAD, CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.-** Tomando en consideración que la resolución mediante la cual una autoridad rescinde unilateralmente y en forma imperativa un contrato de obra pública, por causas que se dicen imputables al contratista, con apoyo en los artículos 43 de la Ley de Obras Públicas y 58 de su Reglamento, así como en una de las cláusulas del propio contrato, constituye un acto de autoridad de naturaleza administrativa, relacionado con un contrato también administrativo y con disposiciones de esa materia, como lo son la citada Ley de Obras Públicas y su Reglamento, resulta competente para conocer del juicio administrativo federal iniciado por el particular en contra de la autoridad emisora del acto, el juez de Distrito en Materia Administrativa respectivo, pues concurren los requisitos que el artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación exige para que se actualice dicha hipótesis competencial, consistente en la existencia de una controversia suscitada con motivo de la aplicación de una ley federal, en la que deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad de naturaleza administrativa.

“Competencia 144/90. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Cuarto en Materia Civil y Segundo en Materia Administrativa ambos en el Distrito Federal. 18 de agosto de 1993. Mayoría de catorce votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Daniel Patiño Pereznegrón.

"Competencia 14/93. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Primero en Materia Administrativa y Tercero en Materia Civil ambos en el Distrito Federal. 11 de abril de 1994. Mayoría de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sergio González Bernabé.

"Competencia 51/93. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Segundo en Materia Civil y Cuarto en Materia Administrativa ambos en el Distrito Federal. 11 de abril de 1994. Mayoría de diecisiete votos. Ponente: Noé Castañón León. Secretario: Luis Ignacio Rosas González.

"Competencia 53/93. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Primero en Materia Administrativa y Segundo en Materia Civil ambos en el Distrito Federal. 11 de abril de 1994. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Rosario Parada Ruiz.

"Competencia 104/93. Suscitada entre los Juzgados de Distrito Quinto en Materia Civil y Sexto en Materia Administrativa ambos en el Distrito Federal. 11 de abril de 1994. Mayoría de quince votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Daniel Patiño Pereznegrón.

"El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el miércoles primero de junio en curso, por unanimidad de diecinueve votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, Diego Valadés Ríos, Carlos Sempé Minvielle, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Luis Gutiérrez Vidal, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón y Juan Díaz Romero: aprobó, con el número 20/1994, la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. El señor Ministro Luis Gutiérrez Vidal integró el Pleno en términos de lo dispuesto en el artículo doce, fracción décima, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en virtud del Acuerdo Plenario de diez de mayo del año en curso. Ausentes: Victoria Adato Green y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal, a seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro."

En el presente caso, aun cuando dicha jurisprudencia se refiere a la Ley de Obra Pública abrogada por la diversa Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1993, misma que tampoco se encuentra a la fecha en vigor, dado que para efectos de la competencia del Juez de Distrito, se invoca el artículo 52, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a la fecha, se considera que de acuerdo con lo dispuesto en ese numeral, dicha jurisprudencia debe ser tomada en cuenta para resolver la presente contradicción, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, vigente a partir del año 2000, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000.

Ahora bien, para efectos de determinar la competencia de este Tribunal, es evidente que debemos atender en principio a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en vigor, por ser la Ley que establece la competencia específica de este Órgano Jurisdiccional, la cual fue reformada a partir del 1° de enero de 2001, y que resulta ser la aplicable ya que las sentencias que dieron origen a la presente controversia se dictaron en ese año 2001, por lo que a continuación se analizan las fracciones **VII, XIII y XV** de dicho numeral, que por las hipótesis legales que prevén serían las únicas aplicables para definir si este Tribunal tiene competencia para resolver sobre contratos de obra pública celebrados por un organismo descentralizado de una entidad federativa, ya que las restantes fracciones de dicho artículo prevén hipótesis de otra índole.

De la fracción VII de dicho artículo 11 de la Ley Orgánica de este Tribunal, se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública

que hayan sido celebrados por las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada.

Por tanto, se considera conveniente señalar los órganos que forman parte de la Administración Pública Federal Centralizada, para lo cual se transcribe a continuación el artículo 1° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra dice:

> "**ARTÍCULO 1.-** La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.
> "La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada.
> "Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal."

En esa tesitura, es claro que en principio este Tribunal es competente para conocer sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública que hayan sido celebrados por las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada, que a saber son la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Por su parte, la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece que este Órgano Jurisdiccional tiene competencia para conocer de los juicios contenciosos administrativos que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas dictadas por autoridad administrativa, en las que se ponga fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelva un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual en su artículo 1°, dispone lo siguiente:

"**ARTÍCULO 1.-** Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.
"El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo.
"Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A.
"Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas."

Como se desprende del numeral transcrito, las disposiciones de esa Ley se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones tanto de la Administración Pública Federal Centralizada, como a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal.

Asimismo, el artículo 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece expresamente las materias respecto de las cuales no será aplicable, como son las de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, y el ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales, y en materia de competencia económica y prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el Título Tercero A de dicha Ley.

A mayor abundamiento, en relación con el ámbito de competencia de dicha Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es necesario precisar que si bien es cierto que en el texto original del artículo 1° de la misma, se determinaba que se exceptuaba a los organismos descentralizados; también lo es que dicho numeral fue

modificado y adicionado mediante el decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2000, con vigencia a partir del mes siguiente, para incluir en su ámbito de aplicación a dichos organismos, al tenor de lo siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 19 DE ABRIL DE 2000

"**Artículo Único.-** Se reforman los artículos 1, segundo párrafo, (...); se adicionan un segundo párrafo al artículo 1, recorriéndose en su orden actual los párrafos segundo y tercero, (...) para quedar como sigue:

"**Artículo 1.-** (...)
"El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo.
"Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A.
"(...)"

En la inteligencia de que, el listado de las materias respecto de las cuales se establece el campo de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, contenido en su artículo 1°, sí es limitativo, tan es así, que precisamente a través del Decreto de Reformas a la misma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2000, se reformó ese numeral para incluir dentro de ese campo, a los organismos descentralizados de la Administración Pública Paraestatal.

Tomando en cuenta lo anterior, se desprende del texto vigente del artículo 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que esta norma resulta aplicable a partir del 19 de mayo de 2000, **a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Centralizada y a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal**, los primeros ya han quedado definidos en este fallo, con la transcripción que se hizo del artículo 1° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que a continuación sólo se transcribe el artículo 3° de dicha Ley, que dispone lo siguiente:

> "**ARTÍCULO 3.-** El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:
> "I.- Organismos descentralizados;
> "II.- Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y
> "III.- Fideicomisos."

En tal virtud, se observa entonces que conforme a ese artículo 3°, dentro de los órganos que componen la Administración Pública Paraestatal, se encuentran los organismos descentralizados, que en el artículo 45 de la propia Ley son definidos de la siguiente manera:

> "**ARTÍCULO 45.-** Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten."

Por tanto, aun cuando la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, prevé la competencia del mismo para conocer de resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente,

en los términos de dicha Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es claro que esas resoluciones deben provenir únicamente de la Administración Pública Federal Centralizada, u organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal, para que este Tribunal pueda conocer de las mismas.

Por lo que se refiere a la fracción XV de dicho artículo 11, la misma es clara al señalar que este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer de resoluciones en las que expresamente las leyes le otorguen competencia al mismo, es decir, debe entenderse que el propio ordenamiento legal establezca la competencia de este Tribunal.

El artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, antes transcrito, sólo dispone que las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esa Ley o de los contratos celebrados con base en la misma, serán resueltas por los Tribunales Federales, y no hay otro artículo en dicha Ley que expresamente le confiera competencia a este Tribunal, por lo que esa fracción tampoco puede servir de sustento para concluir que corresponde a este Tribunal conocer de dichas controversias.

Lo anterior, en virtud de que la competencia debe estar establecida en el derecho positivo, lo cual implica que ningún órgano pueda establecerla por sí mismo, sino que debe resultar siempre de la Ley.

Adicionalmente, el citado artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, vigente a partir del año 2000, es una norma expedida con anterioridad a la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con vigencia a partir del 1° de enero de 2001, por lo que en caso de que se entendiera que se trata de una **antinomia**, debe prevalecer esta propia Ley Orgánica, toda vez que se trata de la ley especial, puesto que es la que determina la competencia del Tribunal, además modificada con posterioridad a la expedición de la Ley de Obras Públicas referida (la norma nueva deroga a la anterior).

En estas condiciones, si el legislador hubiera pretendido adicionar a este Tribunal competencia respecto de contratos de obra pública celebrados por organismos descentralizados de las Entidades Federativas, lo hubiera hecho en las reformas del año 2000, a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se tiene que este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es sólo competente para conocer de resoluciones que se dicten sobre la interpretación y el cumplimiento de contratos de obra pública celebrados por las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada, como de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal, y aun cuando el artículo 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establezca que tiene por objeto regular las acciones relativas a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que realicen las dependencias y entidades enunciadas en el mismo, dentro de las que se encuentran incluidas a las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, ello no constituye el sustento legal para determinar la competencia material de este Tribunal, sino que tal como se desprende de lo previsto en la Ley Orgánica de este Tribunal y demás disposiciones legales antes citadas, lo es la naturaleza de las resoluciones definitivas que provienen de la Administración Centralizada y Paraestatal de carácter Federal.

A mayor abundamiento, en uno de los casos respecto de los cuales se denunció la contradicción (juicio 3076/01-07-01-9), se invocaron agravios respecto de la aplicación de legislación local, (específicamente del Estado de Jalisco) respecto de la cual evidentemente este Tribunal se haya impedido a pronunciarse.

Por tanto, es claro que si las controversias que se suscitan con motivo de la interpretación o aplicación de esa Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no provienen de actos realizados por dependencias y entidades federales, este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no será competente para resolver esas controversias.

En tal virtud, aun cuando con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se emita una resolución que ponga fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelva un procedimiento, si ese acto proviene de un organismo descentralizado de una Entidad Federativa, es por demás evidente que este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no sería competente para resolver esa resolución, aun cuando el contrato de obra pública celebrado por ese organismo se fundamente en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por lo mismo, si en el presente caso las sentencias que dieron origen a la presente contradicción, resolvieron respecto de la demanda promovida por una sociedad mercantil en contra de diversas resoluciones emitidas por el Director General de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público, del Estado de Jalisco, en su carácter de organismo público descentralizado de dicha Entidad, mediante la cual se rescindió un contrato de obra pública, es evidente que este Tribunal no era competente para resolver esa controversia, porque los actos de la Dependencia que suscribió y rescindió ese contrato no es de la competencia del mismo.

En efecto, si los contratos de obra pública fueron celebrados por un organismo descentralizado de una entidad Federativa, el cual no forma parte de la Administración Pública Federal Centralizada ni de la Paraestatal Federal, es evidente que en ese caso no se surte la competencia de este Tribunal para conocer de dichas controversias.

Por consiguiente, se formula la siguiente tesis jurisprudencial a fin de que sea observada por los órganos competentes de este Tribunal:

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS POR UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE ELLOS.- De conformidad con el artículo 11, fracciones VII, XIII y XV de la Ley Orgá-

nica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a partir del 1° de enero de 2001, este Tribunal sólo es competente para resolver sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y no de las Entidades Federativas, ya que no se establece la competencia expresa a que se refiere la fracción XV del artículo 11 de la Ley Orgánica de este Tribunal y, por ello debe entenderse que este Tribunal no es competente para resolver sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública celebrados por un organismo descentralizado estatal, ya que los mismos al no formar parte de la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal, no son sujetos de la competencia material de este Tribunal.

En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con los artículos 261 y 263 del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- Es procedente y fundada la contradicción de sentencias.

II.- Se fija la jurisprudencia en los términos que se señalan en la parte considerativa de este fallo, misma que deberá publicarse en la Revista de este Tribunal.

III.- Notifíquese. Con copia autorizada del presente fallo devuélvanse los autos correspondientes al Archivo de Sala Superior y a las Salas respectivas, a fin de que en su oportunidad se archive este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día **veinticinco de febrero de dos mil cuatro**, por mayoría de siete votos a favor, de los CC. Magistrados Luis Malpica de Lamadrid, Alma Peralta Di Gregorio, Jorge Alberto García Cáceres, María Guadalupe Aguirre Soria, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Guillermo Domínguez Belloc y María del Consuelo Villalobos Ortíz, y cuatro votos en contra de los CC. Magistrados Luis

Humberto Delgadillo Gutiérrez, Alejandro Sánchez Hernández, Silvia Eugenia Díaz Vega y Luis Carballo Balvanera; se reservan el derecho a formular voto particular los CC. Magistrados Silvia Eugenia Díaz Vega, Alejandro Sánchez Hernández y Luis Carballo Balvanera.

Fue Ponente en el presente asunto, el Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el día **nueve de marzo de dos mil cuatro**, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firman la C. Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos que da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-45

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- ES APLICABLE A LAS LEYES ADMINISTRATIVAS QUE NO ESTÁN EXCLUIDAS EN ELLA.- El artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece en la parte conducente que las disposiciones de esa Ley se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada, así como a los organismos descentralizados de dicha administración respecto de los actos ahí citados. Señala dicho dispositivo que este Ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. Por su parte, el artículo 2º de dicha Ley previene que esa Ley, salvo por lo que toca al Título Tercero A, se aplicará supletoriamente a las demás leyes administrativas. De lo anterior se desprende que todas las materias que no sean relativas a las de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, le es aplicable lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que en los procedimientos administrativos realizados en la Ley General de Salud, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y otras leyes administrativas, se configura el supuesto de aplicación señalado en el artículo 2º aludido, de tal manera que aunque en las mencionadas leyes no se contemple el supuesto de caducidad de los procedimientos administrativos, es aplicable el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por disposición expresa de esta última Ley. (10)

Contradicción de sentencias No. 4725/01-17-03-1/666/01-PL-02-04/y otro/987/03-PL-07-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de marzo de 2004, por mayoría de 7 votos a

favor y 3 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/21/2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- Una vez delimitada la procedencia de la contradicción, esta Juzgadora resuelve sobre el criterio que debe prevalecer.

Esta Juzgadora considera que el criterio que debe prevalecer respecto de la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a las leyes administrativas, reguladas por la misma, a excepción de las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, es el que se estableció en la sentencia dictada por este Pleno en sesión de 8 de febrero de 2002, al resolver el juicio 4725/01-17-03-1-666/01-PL-02-04, en su considerando cuarto.

Cabe señalar que en la sentencia se dilucidó lo relativo a la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley General de Salud, en virtud de que se planteaba si el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que contiene la figura de la caducidad, era aplicable o no a los procedimientos ventilados en materia de Salud.

Ahora bien, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo concretamente su artículo 60, es supletoria de la Ley General de Salud y también resulta supletoria a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por ser ésta una ley administrativa que no está prevista como exceptuada de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en términos de sus artículos 1º y 2º.

Los artículos 1º y 2º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establecen en la parte conducente:

"**ARTÍCULO 1º**.- Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.
"El presente ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, electoral, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica y prácticas desleales de comercio internacional, únicamente les será aplicable el artículo 4-A de esta ley.
"Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas."

"**ARTÍCULO 2º**.- Esta Ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas reguladas por la misma. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará a su vez, supletoriamente a esta Ley en lo conducente."

Por su parte, el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

"**ARTÍCULO 90**.- La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
"Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos."

El artículo 1º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone:

"**ARTÍCULO 1º.-** La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal.
"La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada.
"Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal."

De dichos preceptos se advierte que todas las materias que no sean relativas a las de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, le será aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En ese sentido, si lo que se controvierte es una resolución emitida por la Procuraduría General de Protección al Ambiente, a través del cual se impone una multa por infracción a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es evidente que se configura el supuesto de aplicación que señala el artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ello en virtud de que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo debe ser aplicada supletoriamente a las leyes administrativas, con excepción de las materias de carácter fiscal, responsabilidad de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, que no es el caso, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Salud.

No es obstáculo para lo anterior el que la doctrina considere diversos requisitos para que exista la supletoriedad, como es que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio; que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate y que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean suficientes para su

aplicación a la situación concreta presentada por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria y que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.

En el caso, por disposición de Ley y atendiendo a la Exposición de Motivos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994 y vigente a partir del 10 de junio de 1995, señaló en la parte conducente:

> "Las múltiples leyes administrativas que regulan la actividad de las autoridades; el aparato burocrático para hacer cumplir tales leyes; la lentitud de muchos de los trámites que hay que agotar ante la administración; ineficacias; en muchos casos duplicidad de juicios; inseguridad e indefinición jurídica que aún subsisten en algunas instancias de la administración pública, colocan a las autoridades en una situación tan difícil que hoy en día resulta impostergable la ordenación de principios que gradualmente institucionalicen para contrarrestar los elementos nocivos de la función administrativa."

De tal manera que, en el caso la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no exige que una figura se encuentre prevista en el cuerpo normativo al que se pretende suplir, como es el de la caducidad, ya que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es aplicable a las diversas leyes administrativas reguladas por la misma a excepción, como ya se señaló, de las materias de carácter fiscal, responsabilidad de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, que no es el caso, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Ello es así porque el propio artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece el plazo dentro del cual la autoridad debe dictar la resolución que en derecho corresponda, y si no contempla dicho ordenamiento la figura de la caducidad, para el caso de incumplimiento, es evidente

que le es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que sí contempla esta figura en su artículo 60.

El artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece:

> "**ARTÍCULO 68**.- Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la Sala procederá dentro de los veinte días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo"

A pesar de que la institución jurídica de la caducidad no se encuentra prevista en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, debe aplicarse supletoriamente dicha figura jurídica prevista en la misma Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque no está en contradicción con el conjunto de normas que integran el primer ordenamiento, sino que es congruente con ellos; además su aplicación resulta indispensable para dar seguridad jurídica a los particulares frente a los actos de autoridades, pues, de lo contrario, las autoridades estarían en aptitud de actuar en cualquier momento, sin contar con límite temporal para ello.

En ese sentido, si en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no establece la consecuencia para la autoridad del incumplimiento de esos términos, es evidente que la ley supletoria, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sí lo establece en su artículo 60, y por ello, no es exacto lo que indicó la Tercera Sala Regional Hidalgo México, en la sentencia de 30 de junio de 2003, de que si en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no se estableció ninguna consecuencia legal no es dable presumir o establecer consecuencias previstas donde el legislador no los distinguió.

Por lo que, contrario a lo señalado por dicha Sala, al ser supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, concretamente su artículo 60, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se establece una con-

secuencia para la autoridad para el caso de incumplimiento del plazo establecido por la ley, que es precisamente la caducidad alegada. En ese sentido, debe prevalecer el criterio sustentado por este Pleno en sesión de 8 de febrero de 2002, en el juicio 4725/01-17-03-1/666/01-PL-02-04, promovido por CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. de C.V.

La tesis que se propone es la siguiente:

"**CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- ES APLICABLE A LAS LEYES ADMINISTRATIVAS QUE NO ESTÁN EXCLUIDAS EN ELLA**.- El artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece en la parte conducente que las disposiciones de esa ley se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada, así como a los organismos descentralizados de dicha administración respecto de los actos ahí citados. Señala dicho dispositivo que este Ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. Por su parte, el artículo 2º de dicha Ley previene que esa Ley, salvo por lo que toca al Título Tercero A, se aplicará supletoriamente a las demás leyes administrativas. De lo anterior se desprende que todas las materias que no sean relativas a las de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, le es aplicable lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que en los procedimientos administrativos realizados con base en la Ley General de Salud, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente u otras leyes administrativas, se configura el supuesto de aplicación señalado en el artículo 2º aludido, de tal manera que aunque en las mencionadas leyes no se contemple el supuesto de caducidad de los procedimientos administrativos, es aplicable el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por disposición expresa de esta última Ley."

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 261 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- Es procedente la contradicción de sentencias denunciada.

II.- Debe prevalecer el criterio sustentado por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, el 8 de febrero de 2003, en su sentencia definitiva del juicio 4725/01-17-03-1/666/01-PL-02-04.

III.- Se fija como jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la tesis que ha quedado citada en la parte final del presente fallo, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Colegiado.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de marzo de 2004, por mayoría de siete votos a favor de los CC. Magistrados Licenciados Luis Malpica de Lamadrid, Jorge Alberto García Cáceres, Silvia Eugenia Díaz Vega, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Luis Carballo Balvanera, Guillermo Domínguez Belloc y María del Consuelo Villalobos Ortíz; tres votos en contra de los CC. Magistrados Licenciados Alma Peralta Di Gregorio, Alejandro Sánchez Hernández y María Guadalupe Aguirre Soria, quienes se reservaron su derecho para formular voto particular. Estando ausente el C. Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 29 de marzo de 2004, y con fundamento en lo previsto por los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, ante la Secretaria General de Acuerdos: Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-46

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS QUE PROVIENEN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- DEBE PAGARSE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, DIRECTAMENTE ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS, Y NO ENTREGARSE A LA CONTROLADORA.- De la interpretación armónica de los artículos 10; 10-A, párrafos tercero y penúltimo párrafo; 57-A, penúltimo párrafo; 57-N, fracción I, y 57-O, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2000; se desprende con toda claridad que el impuesto sobre la renta diferido que debe pagar una sociedad controlada, como consecuencia de la distribución de dividendos realizada en la participación consolidable, debe pagarse ante las oficinas autorizadas y no entregarse a la sociedad controladora. Lo anterior es así por que el artículo 57-O, segundo párrafo, establece que cuando se distribuyan dividendos o utilidades en efectivo o en bienes entre las sociedades que consolidan, el impuesto que se derive de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 10-A (impuesto sobre los dividendos o utilidades que provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida), se pagará en la fecha en que se distribuyan dichos dividendos; y al no establecer ante quién se pagará el mismo, debemos remitirnos a las reglas generales, por disposición expresa del artículo 57-A, el cual establece en su penúltimo párrafo que las sociedades controladoras y controladas que consoliden estarán a lo dispuesto en las demás disposiciones de la Ley, salvo que expresamente se señale un tratamiento distinto en el capítulo del régimen de consolidación fiscal; por lo que ante la falta de disposición expresa dentro del régimen de consolidación fiscal de donde debe pagarse el impuesto que deriva de la distribución de dividendos que provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, deben aplicarse las reglas generales, esto es el artículo 10-A, el cual en su penúltimo párrafo señala que el impuesto sobre los dividendos o utilidades que provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida tendrá el carácter de pago definitivo y se enterará ante las oficinas autorizadas. Resultando por ende inapli-

cable el artículo 57-N, fracción I, que establece la obligación de enterar el impuesto del ejercicio a la controladora, por tratarse de supuestos diferentes. (11)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/23/2004)

PRECEDENTES:

V-P-SS-370
Juicio No. 11487/01-17-09-6/264/02-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de febrero de 2003, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres. Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de junio de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004. p. 31

V-P-SS-371
Juicio No. 12913/01-17-01-8/305/02-PL-03-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de junio de 2003, por unanimidad de 11 votos.- Magistrada Ponente: Alma Peralta Di Gregorio.- Secretaria: Lic. Esmeralda Reyes Durán.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de junio de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004. p. 31

V-P-SS-372
Juicio No. 12914/01-17-09-7/414/02-PL-05-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de junio de 2003, por unanimidad de 11 votos.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Vázquez Galicia.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de junio de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004. p. 31

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 14 de abril de 2004, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-47

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

OBJECIÓN DEL ALCANCE PROBATORIO DE LAS DOCUMENTALES OFRECIDAS EN EL JUICIO DE NULIDAD.- RESULTA IMPROCEDENTE.- La objeción es un procedimiento a través del cual la contraparte de la oferente ataca la documental exhibida en el proceso alegando y, en su caso, probando que no es auténtica por ser inexacta o falsa, con el fin de lograr que no sea considerada por el Tribunal al momento de valorar las pruebas y dictar la sentencia respectiva; por lo que si la materia de objeción es el alcance probatorio, lo que implica la valoración de las pruebas, no se está ante una objeción propiamente dicha, motivo por el cual, la misma debe estimarse improcedente; máxime que las reglas para la valoración de las pruebas dentro del juicio contencioso administrativo están dadas por el artículo 234 del Código Fiscal de la Federación, dejándolas a la prudente apreciación del juzgador; además de que la objeción no es una figura contemplada en el Código Fiscal de la Federación. (12)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/24/2004)

PRECEDENTES:

V-P-SS-375
Juicio No. 15833/01-17-10-5/744/02-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de mayo de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004, p. 63

V-P-SS-376
Juicio No. 688/01-09-01-2/795/02-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de agosto de 2003, por unanimidad de 10 votos.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de agosto de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004, p. 64

V-P-SS-377
Juicio No. 2308/99-07-02-6/637/01-PL-06-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de agosto de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: María Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Miguel Valencia Chávez.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de agosto de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004, p. 64

V-P-SS-408
Juicio No. 1125/02-17-05-4/472/03-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de septiembre de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 38. Febrero 2004. p. 47

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 14 de abril de 2004, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-48

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.- SE ACTUALIZA CUANDO LA AUTORIDAD DEJA SIN EFECTOS EL ACTO IMPUGNADO.- El artículo 202, fracción I del Código Fiscal de la Federación, establece que es improcedente el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los casos, por las causales y contra los actos que ahí se indican, entre otros, que no se afecten los intereses jurídicos del demandante. Por su parte, el artículo 203, fracción IV del Código Fiscal de la Federación consigna que procede el sobreseimiento del juicio, si la autoridad demandada deja sin efectos el acto impugnado. Por tanto, si se demanda la nulidad de una multa que fue impuesta por incumplir un requerimiento hecho con base en la Ley Federal de Competencia Económica y la autoridad deja sin efectos dicha multa, lo procedente en el juicio es decretar su sobreseimiento, ya que la multa dejó de afectar los intereses jurídicos del demandante y se actualiza la hipótesis de la fracción IV del artículo 203 del Código aludido. (13)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/25/2004)

PRECEDENTES:

V-P-SS-389
Juicio No. 992/02-17-03-7/294/03-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de junio de 2003, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 30 de junio de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004. p. 155

V-P-SS-390

Juicio No. 1001/02-17-06-9/345/03-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de junio de 2003, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.

(Tesis aprobada en sesión de 30 de junio de 2003)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004. p. 155

V-P-SS-391

Juicio No. 994/02-17-05-3/478/03-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de junio de 2003, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.

(Tesis aprobada en sesión de 30 de junio de 2003)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004. p. 155

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 14 de abril de 2004, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-49

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.- SU TITULAR ES PARTE EN EL JUICIO AL SER ÉSTA SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.- Conforme al artículo 198, fracción III del Código Fiscal de la Federación, son partes en el juicio contencioso administrativo el Titular de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal, Procuraduría General de la República o Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la que dependa la autoridad que dictó la resolución impugnada; en esos términos, resulta evidente que es parte en el juicio el Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando en el juicio de nulidad la emisora del acto impugnado lo sea la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, órgano desconcentrado que depende jerárquicamente de dicha Secretaría. (14)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/26/2004)

PRECEDENTES:

V-P-SS-272
Juicio No. 6114/00-11-11-5/231/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de noviembre de 2002, por mayoría de 7 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión privada de 8 de noviembre de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 29. Mayo 2003. p. 257

V-P-SS-298

Juicio No. 8326/99-11-03-4/276/02-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de noviembre de 2002, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto más con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.

(Tesis aprobada en sesión de 8 de noviembre de 2002)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 31. Julio 2003. p. 62

V-P-SS-395

Juicio No. 1825/01-11-02-2/174/02-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de julio de 2003, por mayoría de 6 votos a favor y 1 voto más con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretario: Lic. Raúl García Apodaca.

(Tesis aprobada en sesión de 9 de julio de 2003)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004. p. 204

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 14 de abril de 2004, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-50

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SEDE DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.- SE PRESUME QUE EN ELLA EMITE SUS RESOLUCIONES.- De conformidad con el artículo 3°, fracción XIII de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que establece dentro de los elementos y requisitos del acto administrativo, el señalamiento del lugar y fecha de su emisión, resulta ajustado a Derecho presumir que la sede de una autoridad se localiza en el lugar en donde fue emitida la resolución que se combate en juicio ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que por regla general, las autoridades emiten sus resoluciones en su sede, motivo por el que si en el texto del acto controvertido aparece la mención del domicilio en donde fue emitida, puede presumirse que en dicho lugar se ubica la sede de la autoridad que la dictó, y con apoyo en tal conclusión determinarse la Sala Regional de este Órgano de impartición de justicia que sea competente por razón de territorio para conocer del juicio respectivo, al tenor del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (15)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/27/2004)

PRECEDENTES:

V-P-SS-137
Juicio No. 906/01-11-03-1/4983/01-17-05-7/478/01-PL-01-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de septiembre de 2001, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de septiembre de 2001)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año II. No. 14. Febrero 2002. p. 52

V-P-SS-305
Juicio No. 2416/01-12-01-5/671/02-PL-02-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de enero de 2003, por unanimidad de 10 votos.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretario: Lic. Antonio Miranda Morales.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de enero de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 31. Julio 2003. p. 93

V-P-SS-411
Juicio No. 74/01-08-01-1/1134/01-11-03-6/328/01-PL-01-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de junio de 2001, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión privada de 25 de agosto de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 39. Marzo 2004. p. 7

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 14 de abril de 2004, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-51

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS EMITIDOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- SURTE SUS EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE REALIZA.- El artículo 13 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en su penúltimo párrafo, dispone que las notificaciones personales y las que se realicen por correo certificado con acuse de recibo surtirán efectos a partir del día en que sean entregados a los interesados; consecuentemente, el plazo legal de 45 días a que se refiere el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación para la presentación de la demanda, corre a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la resolución impugnada. (16)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/28/2004)

PRECEDENTES:

V-P-SS-405
Juicio No. 10801/01-17-02-1/1080/02-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de agosto de 2003, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de agosto de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 38. Febrero 2004. p. 36

V-P-SS-438
Juicio No. 19999/01-17-02-6/1101/02-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de septiembre de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 2 en votos contra.- Magistrado

Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 40. Abril 2004. p. 17

V-P-SS-439
Juicio No. 8565/02-17-08-1/269/03-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de octubre de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada en sesión 20 de octubre de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 40. Abril 2004. p. 17

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 23 de abril de 2004, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-52

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

HECHO NOTORIO.- LO CONSTITUYE PARA LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA UNA SENTENCIA EMITIDA POR ELLA.- La emisión de una sentencia por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, constituye un hecho notorio para los Magistrados que la integraron e intervinieron en la discusión y votación de la misma en la sesión relativa, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. (17)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/29/2004)

PRECEDENTES:

V-P-SS-420
Juicio No. 490/01-16-01-7/5898/01-17-05-7/526/01-PL-02-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de abril de 2002, por mayoría de 8 votos a favor y 2 en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretaria: Lic. Juana Griselda Dávila Ojeda.
(Tesis aprobada en sesión privada de 25 de agosto de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 39. Marzo 2004. p. 59

V-P-SS-421
Juicio No. 2062/97-02-01-2/99-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 31 de octubre de 2001, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en

contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretaria: Lic. Juana Griselda Dávila Ojeda.
(Tesis aprobada en sesión privada de 25 de agosto de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 39. Marzo 2004. p. 59

V-P-SS-422
Juicio No. 187/01-10-01-2/2864/01-17-05-1/464/01-PL-04-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de abril de 2002, por mayoría de 8 votos a favor y 2 en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Virginia Pétriz Herrera.
(Tesis aprobada en sesión privada de 25 de agosto de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 39. Marzo 2004. p. 59

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 18 de junio de 2004, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-53

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ARGUMENTOS EXPUESTOS EN UN RECURSO DE RECLAMACIÓN Y EN UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- CASO EN EL CUAL NO SE ESTÁ OBLIGADO AL ESTUDIO DE LA CAUSAL.- Si la autoridad demandada en su contestación de demanda pretende la improcedencia del juicio, atendiendo a argumentos que constituyen una reiteración de los que la propia autoridad planteó en un recurso de reclamación, es obvio que ya no puede existir un pronunciamiento adicional sobre este mismo tema, pues de haberlo, implicaría la posibilidad de que este Tribunal revocara por sí y ante sí sus propias resoluciones, lo cual no es jurídicamente posible, por lo tanto, tales argumentos resultan inatendibles. (18)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/30/2004)

PRECEDENTES:

V-P-SS-431
Juicio No. 7791/01-17-01-2/773/02-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de fecha 18 de agosto de 2003, por mayoría de 7 votos a favor, 1 voto más con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de agosto de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No.39. Marzo 2004. p.109

V-P-SS-496
Juicio No. 10714/01-17-10-2/355/02-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de

enero de 2004, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de enero de 2004)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 42. Junio 2004. p. 329

V-P-SS-497
Juicio No. 2533/02-17-06-2/1079/02-PL-05-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de enero de 2004, por mayoría de 7 votos a favor y 4 votos en contra.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. Lourdes Vázquez Galicia.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de enero de 2004)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 42. Junio 2004. p. 329

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 7 de julio de 2004, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-54

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SE DETERMINA POR LA SEDE DE LA AUTORIDAD SUPLIDA POR AUSENCIA.- De la lectura del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se desprende como norma general a efecto de determinar la competencia territorial de las Salas Regionales de dicho Órgano Jurisdiccional, la de atender al lugar donde se encuentre la sede de la autoridad demandada, disponiéndose al efecto que para el caso de que fueran varias las autoridades demandadas, se atenderá al lugar donde se encuentre la sede del Órgano de Autoridad que dictó la resolución impugnada. En las circunstancias relacionadas, tratándose de la suplencia del Titular de un Órgano de Autoridad en la emisión de la resolución controvertida, como consecuencia de su ausencia, toda vez que la autoridad suplente no actúa a nombre propio, sino en el de la autoridad suplida por ausencia, como lo prevé la Ley para evitar la paralización de la marcha normal de las funciones de la dependencia de que se trate; es lógico y jurídico concluir que quien debe conocer del asunto, es la Sala Regional que tenga competencia territorial en el lugar donde se encuentre la sede de la autoridad suplida, dado que fue ésta quien emitió la resolución controvertida y no así aquella que tenga competencia territorial en el lugar donde se encuentre la sede de la autoridad suplente, quien no actúa por atribuciones propias. (19)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/31/2004)

PRECEDENTES:

V-P-SS-232

Juicio No. 289/01-03-01-8/453/01-PL-06-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril

de 2002, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrada Ponente: María Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Jaime Romo García.
(Tesis aprobada en sesión privada de 8 de noviembre de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 28. Abril 2003. p. 218

V-P-SS-493
Juicio No. 854/03-09-01-3/1471/03-10-01-8/1000/03-PL-06-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de enero de 2004, por mayoría de 10 votos a favor, 1 voto en contra y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: María Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Miguel Valencia Chávez.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de enero de 2004)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 42. Junio 2004. p. 317

V-P-SS-494
Juicio No. 14959/02-17-11-7/1073/03-PL-06-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de febrero de 2004, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: María Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Salvador Jesús Mena Castañeda.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de febrero de 2004)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 42. Junio 2004. p. 317

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 7 de julio de 2004, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-55

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

EXTRAÑAMIENTO EMITIDO CON BASE A LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.- LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL RECURSO DE REVISIÓN INTENTADO EN SU CONTRA ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- El artículo 11, fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece que este Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, entre ellas, las dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por lo que si un particular, que es concesionario de radio y televisión demanda ante este Tribunal, la resolución dictada en un recurso de revisión que fue sobreseído porque el acto impugnado en esa instancia constituye un extrañamiento a dicho concesionario, por haber incumplido obligaciones derivadas de la Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento, este Tribunal es competente para conocer de esa resolución que sobresee el recurso de revisión, pues fue dictada por una autoridad administrativa que puso fin a esa instancia. (20)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/32/2004)

PRECEDENTES:

V-P-SS-397

Juicio No. 407/02-17-02-8/1148/02-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de agosto de 2003, por mayoría de 6 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y

3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de agosto de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004. p. 218

V-P-SS-446
Juicio No. 406/02-17-05-5/1223/02-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de octubre de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 4 votos en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Ricardo Arteaga Magallón.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de octubre de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 41. Mayo 2004. p.130

V-P-SS-483
Juicio No. 405/02-17-08-8/280/03-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de diciembre de 2003, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana.
(Tesis aprobada en sesión de 1 de diciembre de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 42. Junio 2004. p. 258

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 7 de julio de 2004, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-56

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

SUBDIRECTORA DIVISIONAL DE PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CARECE DE COMPETENCIA PARA DESECHAR EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- El artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial, establece las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y en su fracción VIII, se contempla aquélla de sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esa Ley que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su Reglamento y demás disposiciones en la materia. Por su parte, el artículo 7° del Acuerdo que delega facultades en los Directores Adjuntos, Coordinadores, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, establece que son facultades de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial, en el inciso r) llevar a cabo el trámite de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa en materia de propiedad industrial e infracción en materia de comercio, entre otros, asimismo señala que las facultades referidas del inciso a) al inciso s) se delegan en los Subdirectores Divisionales de Procesos de Propiedad Industrial. En ese sentido, si bien la Ley de la Propiedad Industrial no establece el recurso de revisión, debe estarse a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la que en su artículo 86 dispone en su primer párrafo que el recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del Titular de la dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. Ahora bien, si la resolución impugnada en un juicio la constituye un oficio que desecha el recurso de revisión por improcedente y fue emitido por la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, misma autoridad que resolvió el acto primigenio al que recayó la

solicitud administrativa de nulidad de un registro marcario, dicha autoridad ya no resultaba competente para dilucidar dicho acto, sino su superior jerárquico en términos del artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que se actualiza la fracción I, del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, ya que la resolución impugnada fue emitida por autoridad incompetente. (21)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/33/2004)

PRECEDENTES:

V-P-SS-315
Juicio No. 6878/01-17-03-8/429/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de diciembre de 2002, por mayoría de 6 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de diciembre de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 32. Agosto 2003. p. 30

V-P-SS-316
Juicio No. 3868/02-17-10-5/1176/02-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de enero de 2003, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de enero de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 32. Agosto 2003. p. 30

V-P-SS-468
Juicio No. 564/02-17-08-4/20/02-PL-03-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de octu-

bre de 2003, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Alma Peralta Di Gregorio.- Secretaria: Lic. Esmeralda Reyes Durán.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de octubre de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 42. Junio 2004. p. 107

V-P-SS-469
Juicio No. 4085/02-17-05-7/26/02-PL-05-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de octubre de 2003, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretario: Lic. Horacio Cervantes Vargas.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de octubre de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 42. Junio 2004. p. 107

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 7 de julio de 2004, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

PRIMERA SECCIÓN

JURISPRUDENCIA V-J-1aS-7

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPORTE BRUTO DE LOS DIVIDENDOS PARA EFECTOS DEL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CELEBRADO POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. NO LO ES LA CANTIDAD QUE SIRVE COMO BASE DEL IMPUESTO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001.- Si por cantidad bruta se entiende, gramatical y contablemente, aquélla que no ha sido afectada, modificada, corregida u objeto de deducción alguna, no puede considerarse jurídicamente que el término "importe bruto de los dividendos" para efecto de la aplicación del Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en materia del Impuesto sobre la Renta celebrado por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 3 de febrero de 1994, lo es la base del impuesto por los dividendos pagados por personas morales mexicanas que prevé el artículo 152, fracciones I y IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues tal base es el resultado de la aplicación de un factor de 1.5385 al monto del dividendo que la sociedad mercantil ordenó distribuir entre sus accionistas, lo que supone una alteración al aumentar en más de un 50%, la cantidad que se ordenó distribuir, y obviamente esta modificación es la que le quita precisamente el carácter de importe bruto de los dividendos. En este contexto, por tal término debe entenderse el monto que la asamblea de accionistas de la empresa de que se trata, ordenó repartir a sus accionistas. (22)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-3/2004)

PRECEDENTES:

V-P-1aS-166
Juicio No. 8632/02-17-01-8/398/03-S1-01-02.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de septiembre de 2003, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Martha Elizabeth Ibarra Navarrete.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de septiembre de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004. p. 261

V-P-1aS-167
Juicio No. 20722/02-17-01-7/726/03-S1-04-02.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de septiembre de 2003, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Virginia Petriz Herrera.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de septiembre de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004. p. 261

V-P-1aS-168
Juicio No. 18246/02-17-10-4/667/03-S1-03-02.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de agosto de 2003, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Alma Peralta Di Gregorio.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia.
(Tesis aprobada en sesión de 30 de septiembre de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 37. Enero 2004. p. 261

V-P-1aS-210
Juicio No. 15127/02-17-01-5/1190/03-S1-01-02.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de marzo de 2004, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de marzo de 2004)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 42. Junio 2004. p. 404

V-P-1aS-212

Juicio No. 14172/02-17-03-3/2/04-S1-05-02.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de marzo de 2004, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretario: Lic. Andrés Enrique Sánchez Drasdo y Albuerne.
(Tesis aprobada en sesión de 30 de marzo de 2004)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 43. Julio 2004. p. 147

Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2004.- Firman el Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada María del Carmen Cano Palomera, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.

SEGUNDA PARTE

PRECEDENTES DE SALA SUPERIOR

PLENO

LEY DE AGUAS NACIONALES

V-P-SS-568

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTO EN EL VOLUMEN CONCESIONADO DE AGUA. NO ES APLICABLE EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 11 DE OCTUBRE DE 1995 Y SU REFORMA PUBLICADA EN EL MISMO ÓRGANO OFICIAL EL 11 DE OCTUBRE DE 1996.- El Decreto mediante el cual se otorgan diversas facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que se dediquen a actividades industriales, comerciales y de servicios, así como su reforma publicada en el mismo Órgano oficial el 11 de octubre de 1996, es aplicable a todos aquellos usuarios que se dediquen a las actividades antes referidas, catalogados como micro, pequeña, mediana o gran empresa, incluyendo a aquellas que las realicen en zonas de veda o reglamentadas, que pretendieran regularizar su situación administrativa mediante el trámite y obtención de los títulos de concesión o asignación por uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes inherentes, permiso de descargas de aguas residuales, e inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, así como los que teniendo título o permiso, cubrieran el pago de los derechos trimestrales por uso o aprovechamiento de aguas nacionales, generados a partir de 1995, o bien, se acogieran al artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, los cuales gozarían de los beneficios siguientes: condonación de adeudos fiscales por la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, o bienes del dominio público de la Nación, incluyendo los cuerpos receptores de descargas de aguas residuales, generados hasta el 31 de diciembre de 1994; condonación de adeudos por recargos y multas derivadas del incumplimiento del pago de dichos derechos; no serían sancionados conforme a la Ley de Aguas

Nacionales, o algún ordenamiento de carácter fiscal; no se causarían los derechos por los servicios de trámite, expedición y registro de los títulos de concesión; asimismo, establece que los usuarios que previamente a la entrada en vigor de dichos Decretos, hubiesen contado con los títulos de concesión, y que se encontraran al corriente en el pago de los derechos por los conceptos referidos, serían considerados en forma preferencial tanto en los programas de apoyo y beneficio de la Comisión Nacional del Agua, como en los Programas de Administración del Agua en Cuencas Hidrográficas y Acuíferos Subterráneos. Por tanto, la actora no puede con fundamento en dichos Decretos, solicitar se le incremente el volumen de aguas que se le concedió mediante el título de concesión respectivo, del cual gozaba antes de la fecha de entrada en vigor de los mismos, con el argumento de que ese volumen le es insuficiente, ya que dichos Decretos se emitieron para apoyar a usuarios cuyo aprovechamiento fuese irregular, tanto administrativa como fiscalmente, e inclusive en el artículo Segundo del Decreto de 11 de octubre de 1996, se establece que los títulos de concesión se otorgarán tomando en cuenta la disponibilidad del agua determinada conforme a las Normas Oficiales Mexicanas. (1)

Juicio No. 5841/02-17-08-9/318/03-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de febrero de 2004, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de abril de 2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

En esos términos, es evidente que la litis a dilucidar en el presente asunto se constriñe a determinar si la empresa actora es sujeto del citado Decreto de 11 de

octubre de 1995 y su similar de reformas de 1996, y si los beneficios que se otorgan en el mismo son aplicables a todos los usuarios, y sobre todo, si a través del mismo la actora podía solicitar un incremento en el volumen de las aguas nacionales, ya que precisamente la resolución que recurrió dicha actora negó ese incremento, por lo que a fin de resolver tales cuestionamientos se hace necesario transcribir ambos Decretos, los cuales son del tenor siguiente:

> "DECRETO mediante el cual se otorgan diversas facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que se dediquen a actividades industriales, comerciales y de servicios.
> "Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
> "ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones IX, XI y XXV y 32 Bis fracciones XXIV y XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o., 6o. fracción V, 9o. fracción X, 20, 29 fracción II, 30, 82, 88 y 90 de la Ley de Aguas Nacionales, en relación con el 9o. fracción IX de su Reglamento, y 39 fracción I del Código Fiscal de la Federación y
> "CONSIDERANDO
> "Que la regularización fiscal y administrativa de los usuarios de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes contribuirá al logro de cuatro de los grandes propósitos del Plan Nacional de Desarrollo: fortalecer el Estado de Derecho, proporcionando seguridad jurídica a los usuarios; promover el desarrollo social, otorgando mayores facilidades a los grupos más desprotegidos; impulsar el crecimiento económico, haciendo accesible el agua a las actividades productivas y los servicios; y equilibrar el crecimiento económico con el cuidado del ambiente, sentando las bases para el aprovechamiento sustentable del agua;
> "Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y sus bienes pú-

blicos inherentes por parte de personas físicas o morales, requiere de concesión o asignación que les otorgue la Comisión Nacional del Agua, de permiso para descargar aguas residuales, así como de la inscripción de los títulos correspondientes en el Registro Público de Derechos de Agua;

"Que con el propósito de contribuir al desarrollo integral sustentable, es necesario regularizar y registrar la explotación, uso o aprovechamiento de los bienes propiedad de la Nación, la ocupación de zonas federales y el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, en particular de las aguas nacionales en zona de veda y reglamentadas;

"Que para lograr lo anterior, y al mismo tiempo impulsar y fortalecer las actividades industriales, comerciales y de servicios, es conveniente otorgar facilidades a los contribuyentes para que corrijan voluntariamente su situación administrativa y fiscal en materia de derechos por los conceptos a que se refiere el considerando anterior, previstos en la Ley Federal de Derechos, y

"Que a pesar del esfuerzo de algunas empresas por construir sus plantas de tratamiento de aguas residuales, no las han concluido por problemas financieros, por lo que se hace necesario apoyarlas para reducir los problemas de contaminación, he tenido a bien expedir el siguiente

"DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN DIVERSAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SE CONDONAN CONTRIBUCIONES A LOS USUARIOS DE AGUAS NACIONALES Y SUS BIENES PÚBLICOS INHERENTES, QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS

"ARTÍCULO PRIMERO.- Se podrán acoger a las facilidades que otorga el presente Decreto, los usuarios que se dediquen a las actividades industriales, comerciales y de servicios, catalogados como micro, pequeña, mediana o gran empresa incluyendo a aquellas que las realicen en zonas de veda o reglamentadas y que acrediten fehacientemente que han estado explotando, usando o

aprovechando aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes antes de la entrada en vigor del presente instrumento.
"Para los efectos del presente Decreto, las empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios, se clasificarán en:
"Microempresa, a la que ocupe hasta 15 personas.
"Empresa pequeña, a la que ocupe de 16 hasta 100 personas.
"Empresa mediana, a la que ocupe de 101 hasta 250 personas.
"Gran empresa aquella que ocupe más de 250 personas.
"Los usuarios con actividades empresariales que deseen acogerse a los beneficios del presente Decreto, deberán demostrar a la Comisión Nacional del Agua, que pertenecen a alguno de los grupos de la clasificación anterior.
"ARTÍCULO SEGUNDO.- Los usuarios que durante la vigencia del presente Decreto, regularicen su situación administrativa, mediante el trámite y obtención de los títulos de concesión o asignación por uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes inherentes, permisos de descarga de aguas residuales e inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, gozarán de los siguientes beneficios:
"a) No se aplicarán las sanciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales, o las que se derivan de algún ordenamiento de carácter fiscal, por no contar con los documentos señalados.
"b) No causarán los derechos por los servicios de trámite, expedición y registro de los documentos señalados, los usuarios catalogados como microempresas.
"Para el otorgamiento de los títulos que autoricen la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que soliciten los usuarios que se acojan a los beneficios de este Ordenamiento, el volumen a concederse será determinado por la Comisión Nacional del Agua, con base en la disponibilidad del recurso, sin perjuicio de los derechos preexistentes y en función de los volúmenes por los que dichos usuarios hubieran efectuado pagos.
"ARTÍCULO TERCERO.- Los usuarios que cuenten con sus títulos o permisos respectivos y aquéllos que los obtengan en términos del artículo anterior, que cubran el pago de los derechos trimestrales por uso o aprovechamiento de

aguas nacionales generados a partir del 1o. de enero de 1995 o bien se acojan al artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, gozarán, adicionalmente, de los beneficios que se establecen en los artículos siguientes, de conformidad con las reglas específicas que en los mismos se prevén.

"ARTÍCULO CUARTO.- Los usuarios catalogados como microempresas, que dentro del término de 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, regularicen su situación administrativa y fiscal conforme a lo dispuesto en los artículos segundo y tercero del presente Ordenamiento, gozarán de los beneficios siguientes:

"a) Se les condonarán los adeudos fiscales por la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales generados hasta el 31 de diciembre de 1994.

"b) Se les condonarán los adeudos fiscales por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación, como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, generados hasta el 31 de diciembre de 1994.

"En el caso de que los aludidos usuarios presenten su solicitud de regularización después de los mencionados ciento veinte días naturales y hasta que concluya la vigencia del presente Decreto, sólo se les condonarán los adeudos por recargos y multas derivados del incumplimiento del pago del derecho por los citados conceptos, así como una cantidad equivalente a la diferencia entre el derecho omitido y el monto del derecho actualizado, conforme al cálculo que se realice en los términos de las disposiciones fiscales aplicables.

"Los ingenios azucareros, independientemente del número de empleados que tengan, podrán acogerse a los beneficios de este artículo.

"ARTÍCULO QUINTO.- Los usuarios catalogados como pequeña y mediana empresa, que dentro del término de 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, regularicen su situación administrativa y fiscal conforme a lo dispuesto en los artículos segundo y tercero del presente Ordenamiento, gozarán de los beneficios siguientes:

"a) Se les condonarán los adeudos por recargos y multas derivados del incumplimiento del pago del derecho por el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, generados hasta el 31 de diciembre de 1994, así como una cantidad equivalente a la diferencia entre el derecho omitido y el monto del derecho

actualizado, conforme al cálculo que se realice en los términos de las disposiciones fiscales aplicables.

"b) Se les condonarán los adeudos por recargos y multas derivados del incumplimiento del pago del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación, utilizados como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, generados hasta el 31 de diciembre de 1994, así como una cantidad equivalente a la diferencia entre el derecho omitido y el monto del derecho actualizado, conforme al cálculo que se realice en los términos de las disposiciones fiscales aplicables.

"En el caso de que los aludidos usuarios presenten su solicitud de regularización después de los mencionados ciento veinte días naturales y hasta que concluya la vigencia del presente Decreto, sólo se les condonarán los adeudos por recargos y multas derivados del incumplimiento del pago por los citados conceptos.

"ARTÍCULO SEXTO.- Se condonará el pago de los derechos, por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de descargas de aguas residuales, causados desde el 1o. de enero de 1995, hasta la entrada en vigor del presente Decreto, a los usuarios catalogados como micro, pequeña y mediana empresa a quienes la Comisión Nacional del Agua les autorice el programa constructivo para el control de la calidad de sus descargas; siempre y cuando lo presenten para su autorización durante la vigencia de este instrumento. Asimismo, dichos usuarios dejarán de causar los derechos señalados durante el tiempo en que se encuentre en vigor el presente Decreto y aquellos catalogados como microempresa tampoco causarán el derecho por el análisis, autorización, supervisión y seguimiento del citado programa.

"Lo anterior, sin perjuicio de los beneficios que otorga el artículo 282-A de la Ley Federal de Derechos.

"ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los usuarios catalogados como gran empresa que dentro del término de 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, regularicen su situación administrativa y fiscal conforme

a lo dispuesto en los artículos segundo y tercero del presente Ordenamiento, gozarán de los beneficios siguientes:

"a) Se les condonarán los adeudos por recargos y multas derivados del incumplimiento del pago del derecho por el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, generados hasta el 31 de diciembre de 1994, así como una cantidad equivalente a la diferencia entre el derecho omitido y el monto del derecho actualizado, conforme al cálculo que se realice en los términos de las disposiciones fiscales aplicables.

"b) Se les condonarán los adeudos por recargos y multas derivados del incumplimiento del pago de derecho por el uso y el aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación, utilizados como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, generados hasta el 31 de diciembre de 1994, así como una cantidad equivalente a la diferencia entre el derecho omitido y el monto del derecho actualizado, conforme al cálculo que se realice en los términos de las disposiciones fiscales aplicables.

"En el caso de que los aludidos usuarios presenten su solicitud de regularización después de los mencionados sesenta días naturales y hasta que concluya la vigencia del presente Decreto, sólo se les condonarán los adeudos por multas derivados del incumplimiento del pago, por los citados conceptos.

"ARTÍCULO OCTAVO.- A los usuarios, a quienes se les haya vencido el término de no causación previsto en el artículo 282-A de la Ley Federal de Derechos vigente, se les condonarán los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación, como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, hasta el inicio de la vigencia del presente Decreto y no causarán derechos durante la vigencia del mismo, siempre y cuando demuestren a la Comisión Nacional del Agua, que tienen un avance de por lo menos el 80% en la construcción de obras para controlar la calidad de sus descargas, y que además concluyan su construcción y las pongan en operación durante la vigencia del presente instrumento.

"ARTÍCULO NOVENO.- Los usuarios que, previamente a la entrada en vigor del presente Decreto, cuenten con los títulos que les permiten explotar, usar o aprovechar aguas nacionales o zonas federales y descargar aguas residuales, y

que se encuentren al corriente en el pago de los derechos por dichos conceptos, serán considerados en forma preferencial tanto en los programas de apoyo y beneficio de la Comisión Nacional del Agua, como en los programas de administración del agua en cuencas hidrográficas y acuíferos subterráneos.
"ARTÍCULO DÉCIMO.- También podrán acogerse a las facilidades que concede este Decreto, los usuarios que hayan interpuesto algún recurso o juicio, previo desistimiento de la acción intentada.
"TRANSITORIOS
"PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y tendrá una vigencia de un año, contado a partir de dicha publicación.
"SEGUNDO.- Los usuarios que deseen acogerse al presente decreto, deberán presentarse en la ventanilla única de atención a usuarios de las gerencias estatales de la Comisión Nacional del Agua, así como en aquellas oficinas que determine la propia Comisión.
"Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz.- Rúbrica.- La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias Lillo.- Rúbrica."

"**10-11-96 DECRETO que reforma el Diverso publicado el 11 de octubre de 1995, mediante el cual se otorgan facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que se dediquen a actividades industriales, comerciales y de servicios.**
"Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
"ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, párrafo quinto, de la propia

Constitución; 31, fracciones IX, XI y XXV, y 32 Bis, fracciones XXIV y XXXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o., 6o., fracción V, 9o., fracción X, 20, 29, fracción II, 30, 82, 88 y 90 de la Ley de Aguas Nacionales, y 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, y

"CONSIDERANDO

"Que la regularización fiscal y administrativa de los usuarios de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes contribuirá al logro de cuatro grandes propósitos: fortalecer el Estado de Derecho, proporcionando seguridad jurídica a los usuarios; promover el desarrollo social, otorgando mayores facilidades a los grupos más desprotegidos; impulsar el crecimiento económico, haciendo accesible el agua a las actividades productivas y los servicios, y equilibrar el crecimiento económico con el cuidado del ambiente, sentando las bases para el aprovechamiento sustentable del agua;

"Que en virtud de lo anterior, con fecha 11 de octubre de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se otorgan facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que se dediquen a actividades industriales, comerciales y de servicios;

"Que a efecto de que un mayor número de usuarios esté en posibilidad de regularizar su situación fiscal y administrativa, resulta pertinente establecer las condiciones para que dichos usuarios puedan acogerse a los beneficios del citado Decreto, e inclusive gozar de algunos otros;

"Que asimismo, a fin de que la autoridad pueda continuar con la tarea de identificar el universo de quienes usan o aprovechan aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, así como los volúmenes que aprovechan, y con ello aplicar una política en materia hidráulica más democrática y equitativa, se ha estimado oportuno ampliar la vigencia y los plazos otorgados en el referido Decreto, y

"Que para lograr lo anterior y al mismo tiempo continuar impulsando y fortaleciendo las actividades industriales, comerciales y de servicios, he tenido a bien expedir el siguiente:

"DECRETO QUE REFORMA EL DIVERSO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE OCTUBRE DE 1995, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SE CONDONAN CONTRIBUCIONES A LOS USUARIOS DE AGUAS NACIONALES Y SUS BIENES PÚBLICOS INHERENTES, QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS.

"ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifican los artículos PRIMERO, en su primer párrafo; SEGUNDO; TERCERO; CUARTO, en su último párrafo; SEXTO y OCTAVO del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1995, mediante el cual se otorgan facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que se dediquen a actividades industriales, comerciales y de servicios, para quedar como sigue:

"ARTÍCULO PRIMERO.- Se podrán acoger a las facilidades que otorga el presente Decreto, los usuarios que se dediquen a las actividades industriales, comerciales y de servicios, catalogados como micro, pequeña, mediana o gran empresa, incluyendo a aquellas que las realicen en zonas de veda o reglamentadas, que hayan estado explotando, usando o aprovechando aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, antes del 12 de octubre de 1995 y que, en su caso, acrediten fehacientemente que han estado explotando, usando o aprovechando las zonas federales y los bienes públicos inherentes de las aguas nacionales.

"(...)

"ARTÍCULO SEGUNDO.- Los usuarios que durante la vigencia del presente Decreto, regularicen su situación administrativa, mediante la realización de los trámites que conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento correspondan, ante la Comisión Nacional del Agua, para obtener los títulos de concesión o asignación por uso o aprovechamiento de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, permisos de descarga de aguas residuales e inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, gozarán de los beneficios siguientes:

"a) No se aplicarán las sanciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales o las que se derivan de algún ordenamiento de carácter fiscal, por no contar con los documentos señalados.

"b) No causarán los derechos por los servicios de trámites, expedición y registro de los documentos señalados, los usuarios catalogados como microempresas.

"Los títulos que autoricen la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que soliciten los usuarios que se acojan a los beneficios de este Ordenamiento, se otorgarán tomando en cuenta la disponibilidad del agua determinada conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

"ARTÍCULO TERCERO.- Los usuarios que cuenten con sus títulos o permisos respectivos y aquellos que se regularicen administrativamente en términos del primer párrafo del artículo anterior, y que cubran a más tardar el 31 de enero de 1997, a excepción de los catalogados como microempresa que podrán hacerlo hasta el 30 de junio de ese mismo año, los derechos por uso o aprovechamiento de aguas nacionales generados a partir del 1o. de enero de 1995 y hasta el 31 de diciembre de 1996, o bien se acojan al artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, se les condonarán los adeudos por recargos y multas derivados del incumplimiento del pago de este derecho por dichos ejercicios fiscales, así como una cantidad equivalente a la diferencia entre el derecho omitido y el monto del derecho actualizado. Adicionalmente, gozarán de los beneficios que se establecen en los artículos siguientes, de conformidad con las reglas específicas que en los mismos se prevén.

"ARTÍCULO CUARTO.- (...)

"a) y b) (...)

"(...)

"Los ingenios azucareros, independientemente del número de empleados que tengan, podrán gozar de todos los beneficios considerados para la microempresa en el presente Decreto, siempre y cuando regularicen su situación fiscal en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, a más tardar el 31 de enero de 1997.

"ARTÍCULO SEXTO.- Se condonará el pago de los derechos, por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación, como cuerpos receptores de descargas de aguas residuales, causados desde el 1o. de enero de 1995 hasta el 12 de octubre de 1996, a los usuarios catalogados como micro, pequeña y mediana empresa, que presenten a más tardar el 31 de diciembre de 1996, ante la Comisión Nacional del Agua, sus programas de acciones para mejorar la calidad de sus aguas residuales, ya sea mediante cambios en sus procesos productivos o acciones para el tratamiento de sus descargas. Asimismo, dichos usuarios dejarán de causar los derechos señalados desde el 13 de octubre de 1996 hasta el 31 de diciembre del mismo año, y aquellos catalogados como microempresa, tampoco causarán el derecho por el análisis, supervisión y seguimiento del citado programa.

"Lo anterior, sin perjuicio de los beneficios que otorga el artículo 282-A de la Ley Federal de Derechos.

"ARTÍCULO OCTAVO.- A los usuarios, a quienes se les haya vencido el plazo de no causación previsto en el artículo 282-A de la Ley Federal de Derechos vigente, se les condonarán los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación, como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, hasta el 12 de octubre de 1996, y no causarán derechos desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 1996, siempre y cuando demuestren a la Comisión Nacional del Agua, que tienen un avance de por lo menos el 80% en la construcción de obras para controlar la calidad de sus descargas, y que además concluyan su construcción y las pongan en operación antes del 31 de diciembre de 1996.

"TRANSITORIOS

"PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de junio de 1997.

"SEGUNDO.- Los artículos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1995, mediante el cual se otorgan facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que se dediquen a actividades industriales, comerciales y de servicios que no fueron modificados por virtud del pre-

sente ordenamiento, continuarán vigentes en sus términos hasta el 30 de junio de 1997.

"TERCERO.- En tanto se emiten las Normas Oficiales Mexicanas para determinar la disponibilidad del agua, a que se refiere el artículo segundo reformado, las concesiones se otorgarán por un plazo de diez años por los volúmenes que soliciten los usuarios y que, bajo protesta de decir verdad, manifiesten que han estado aprovechando antes del 12 de octubre de 1995 o que los requieren para satisfacer las necesidades de su capacidad instalada al 12 de octubre de 1996. Para los efectos anteriores, los usuarios podrán utilizar los formatos que la Comisión Nacional del Agua publicará en el Diario Oficial de la Federación.

"La Comisión Nacional del Agua podrá verificar que los volúmenes solicitados por los usuarios y que ésta haya titulado, correspondan con aquellos que han venido aprovechando o con el volumen requerido para satisfacer las necesidades de la capacidad instalada manifestada. En caso de que se declare falsamente el volumen correspondiente, la Comisión Nacional del Agua procederá conforme a la ley.

"Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes de octubre de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz.- Rúbrica.- La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias Lillo.- Rúbrica."

Del análisis y aplicación estricta que esta Juzgadora realiza a dichos Decretos, se destaca en principio, que su emisión tuvo por objeto regularizar y registrar la explotación, uso o aprovechamiento de los bienes propiedad de la Nación, la ocupación de zonas federales y el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, en particular de las aguas nacionales en zona de veda y reglamentadas, y que para lograr lo anterior y al mismo tiempo impulsar y fortalecer las actividades industriales, comerciales y de servicios, era conveniente otorgar facilidades a los contribuyentes para que corrigieran voluntariamente su situación administrativa y fiscal en materia de los derechos previstos en la Ley Federal de Derechos, en los siguientes términos:

Conforme al artículo Primero del Decreto publicado el 11 de octubre de 1995, se podían acoger a las facilidades que otorga el mismo los usuarios que se dedicarán a las actividades industriales, comerciales y de servicios, catalogados como micro, pequeña, mediana o gran empresa incluyendo a aquellas que las realicen en zonas de veda o reglamentadas y que acrediten fehacientemente que han estado explotando, usando o aprovechando aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes antes de la entrada en vigor de dicho Decreto, artículo que en el mismo Decreto publicado el 11 de octubre de 1996, fue modificado únicamente para precisar que los usuarios señalados hubieran estado explotando, usando o aprovechando las aguas nacionales y sus bienes antes del 12 de octubre de 1995.

Conforme al artículo Segundo del Decreto publicado en 1995, los usuarios que durante la vigencia del mismo regularizarán su situación administrativa, mediante el trámite y obtención de los títulos de concesión o asignación por uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes inherentes, permisos de descarga de aguas residuales e inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, gozarían de los siguientes beneficios:

a) No se les aplicarían las sanciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales, o las que se derivan de algún ordenamiento de carácter fiscal, por no contar con los documentos señalados.

b) No se causarían los derechos por los servicios de trámite, expedición y registro de los documentos señalados, los usuarios catalogados como microempresas.

Por otra parte, ese mismo artículo Segundo del Decreto de 1995, señalaba en su último párrafo que: “Para el otorgamiento de los títulos que autoricen la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que soliciten los usuarios que se acojan a los beneficios de este Ordenamiento, **el volumen a concederse será determinado por la Comisión Nacional del Agua, con base en la disponibilidad del recurso, sin perjuicio de los derechos preexistentes y en función de los**

volúmenes por los que dichos usuarios hubieran efectuado pagos. (énfasis de esta Juzgadora)

Dicho artículo Segundo modificado mediante el Decreto de 11 de octubre de 1996, señalaba que los usuarios que regularizarán su situación mediante la realización de los trámites que conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento correspondan, ante la Comisión Nacional del Agua, para obtener los títulos de concesión o asignación por uso o aprovechamiento de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, permisos de descarga de aguas residuales e inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, gozarían de los mismos beneficios señalados en el Decreto de 1995, y el último párrafo de este mismo artículo dispone expresamente que: "Los títulos que autoricen la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que soliciten los usuarios que se acojan a los beneficios de este Ordenamiento, **se otorgarán tomando en cuenta la disponibilidad del agua determinada conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables." (énfasis de esta Juzgadora)**

Por su parte, el artículo Tercero del Decreto de 1995, dispone que los usuarios que cuenten con sus títulos o permisos respectivos y aquéllos que los obtengan en términos del artículo segundo, que cubrieran el pago de los derechos trimestrales por uso o aprovechamiento de aguas nacionales generados a partir del 1°. de enero de 1995, o bien, se acogieran al artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, gozarían, adicionalmente, de los beneficios que se establecen en los artículos siguientes de ese Decreto, de conformidad con las reglas específicas que en los mismos se prevén.

El artículo Tercero del Decreto de 11 de octubre de 1996, contenía el mismo beneficio en similares términos, y sólo precisaba que los beneficios serían para los usuarios que cuenten con título y los que se regularizarán administrativamente, que cubrieran a más tardar el 31 de enero de 1997, a excepción de los catalogados como microempresas que podían hacerlo hasta el 30 de junio de ese mismo año, los derechos por uso o aprovechamiento de las aguas nacionales.

El artículo Cuarto del Decreto de 1995, que no fue modificado en el de 1996, establecía los siguientes beneficios para los usuarios catalogados como microempresas: se les condonarían los adeudos fiscales por la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales generados hasta el 31 de diciembre de 1994; y se les condonarían los adeudos fiscales por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación, como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, generados hasta el 31 de diciembre de 1994.

Por su parte el artículo Quinto del Decreto de 1995, que tampoco fue modificado en el de 1996, establecía los siguientes beneficios para los usuarios catalogados como pequeña y mediana empresa: se les condonarían los adeudos por recargos y multas derivados del incumplimiento del pago del derecho por el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, generados hasta el 31 de diciembre de 1994, así como una cantidad equivalente a la diferencia entre el derecho omitido y el monto del derecho actualizado, conforme al cálculo que se realice en los términos de las disposiciones fiscales aplicables; y se les condonarían los adeudos por recargos y multas derivados del incumplimiento del pago del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación, utilizados como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, generados hasta el 31 de diciembre de 1994, así como una cantidad equivalente a la diferencia entre el derecho omitido y el monto del derecho actualizado, conforme al cálculo que se realice en los términos de las disposiciones fiscales aplicables.

El artículo Sexto del Decreto publicado en 1995, establecía como beneficios que se condonaba el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público como cuerpos receptores de descargas de aguas residuales causados desde el 1° de enero de 1995 hasta la entrada en vigor de ese Decreto a los usuarios catalogados como micro, pequeña y mediana empresa, artículo que fue modificado en el Decreto publicado en 1996, para precisar que esos beneficios serían para los citados derechos causados desde el 1° de enero de 1995 hasta el 12 de octubre de 1996:

Por su parte, el artículo Séptimo del Decreto de 1995, el cual no fue modificado en el de 1996, disponía que los usuarios catalogados como gran empresa gozarían de los siguientes beneficios: se les condonarían los adeudos por recargos y multas derivados del incumplimiento del pago del derecho por el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, generados hasta el 31 de diciembre de 1994, así como una cantidad equivalente a la diferencia entre el derecho omitido y el monto del derecho actualizado, conforme al cálculo que se realice en los términos de las disposiciones fiscales aplicables; y se les condonarían los adeudos por recargos y multas derivados del incumplimiento del pago de derecho por el uso y el aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación, utilizados como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, generados hasta el 31 de diciembre de 1994, así como una cantidad equivalente a la diferencia entre el derecho omitido y el monto del derecho actualizado, conforme al cálculo que se realice en los términos de las disposiciones fiscales aplicables.

Por su parte, el artículo Octavo del Decreto de 1995, otorgaba como beneficio a los usuarios a quienes se les hubiere vencido el término de no causación previsto en el artículo 282-A de la Ley Federal de Derechos, condonarles los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación, utilizados como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, hasta el inicio de la vigencia de ese Decreto, y ese artículo modificado en el Decreto de 1996, otorgaba el mismo beneficio pero su vigencia la extendía al 31 de diciembre de 1996.

El artículo Noveno del Decreto de 1995, que no fue modificado en el de 1996, establecía que los usuarios que, previamente a la entrada en vigor del dicho Ordenamiento, contarán con los títulos que les permitieran explotar, usar o aprovechar aguas nacionales o zonas federales y descargar aguas residuales, y que se encontraran al corriente en el pago de los derechos por dichos conceptos, serían considerados en forma preferencial tanto en los programas de apoyo y beneficio de la Comisión Nacional del Agua, como en los programas de administración del agua en cuencas hidrográficas y acuíferos subterráneos.

Por último, el artículo Décimo del Decreto de 1995 que no fue modificado en el de 1996, establecía que también podían acogerse a las facilidades del mismo los usuarios que hubieren interpuesto algún medio de defensa, previo desistimiento de la acción intentada.

Una vez precisados los términos de ambos Decretos y para efectos del presente asunto, esta Juzgadora llega a las conclusiones siguientes:

- Los sujetos susceptibles de acogerse a las facilidades que otorgan ambos son: **todos aquellos usuarios que se dedicarán a las actividades industriales, comerciales y de servicios, catalogados como micro, pequeña, mediana o gran empresa, incluyendo a aquellas que las realicen en zonas de veda o reglamentadas y que acrediten fehacientemente que han estado explotando, usando o aprovechando aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes antes del 12 de octubre de 1995.**

- **Los usuarios que durante la vigencia de esos Decretos (30 de junio de 1997) regularizarán su situación administrativa, mediante el trámite y obtención de los títulos de concesión o asignación por uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes inherentes, permisos de descarga de aguas residuales e inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, gozarían de los siguientes beneficios:** no se les aplicarían las sanciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales, o las que se derivan de algún ordenamiento de carácter fiscal, por no contar con los documentos señalados; y no se causarían los derechos por los servicios de trámite, expedición y registro de los documentos señalados, para los usuarios catalogados como microempresas.

- Los títulos que autoricen la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que soliciten los usuarios que se acojan a los beneficios de dichos Decretos, **se otorgarían tomando en cuenta la disponibilidad**

del agua determinada conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. (énfasis de esta Juzgadora)

- Tanto los usuarios que cuenten con sus títulos o permisos respectivos y aquellos que se regularicen administrativamente y que cubrieran el pago de derechos generados a partir del 1° de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1996, o bien se acogieran al artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, **adicionalmente gozarían de los beneficios señalados en los artículos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de dichos Decretos.**

- Los usuarios que, previamente a la entrada en vigor de dichos Decretos, hubieren contado con los títulos que les permitieran explotar, usar o aprovechar aguas nacionales o zonas federales y descargar aguas residuales, y que se encontraran al corriente en el pago de los derechos por dichos conceptos, **serían considerados en forma preferencial tanto en los programas de apoyo y beneficio de la Comisión Nacional del Agua, como en los programas de administración del agua en cuencas hidrográficas y acuíferos subterráneos.**
  (énfasis de esta Juzgadora)

De acuerdo a lo anterior, esta Juzgadora llega al pleno convencimiento de que los Decretos que se han analizado no son aplicables concretamente para que la empresa actora pueda regularizar su situación en cuanto a su solicitud de incrementar el volumen de aguas que se le concedió mediante el Título de Concesión A2NVL-101890/24FMGR94, porque según ella el volumen que se le autorizó en ese título le es insuficiente para su operación, y por ello ha estado utilizando un mayor volumen de agua al concesionado, respecto del cual inclusive ha venido efectuando sus pagos de derechos correspondientes.

En efecto, las disposiciones contenidas en dichos Decretos no son las procedentes para que la empresa actora pretenda regularizar su situación en cuanto al incremento en el volumen de agua que solicitó a través de su escrito de 21 de sep-

tiembre de 1999, al que le recayó el oficio N° BOO.00.R07.04.01.-0701 de 26 de junio de 2000, y en contra del cual interpuso el recurso de revisión que fue resuelto a través de la resolución impugnada en este juicio, ya que esos Decretos si bien es cierto otorgan beneficios tanto a los usuarios que cuenten con título de concesión como a los que regularicen su situación y obtengan dicho título, también lo es que los beneficios que aparecen en los mismos son para efectos de facilitar esa regularización sin sancionar a los usuarios y para efectos de la condonación de adeudos fiscales y sus accesorios, y de derechos por uso o aprovechamiento de bienes de dominio público.

El citado oficio No. BOO.00.R07.04.01.-0701, de 26 de junio de 2000, el cual se encuentra a fojas 71 de autos, señala expresamente lo siguiente:

> "GERENCIA REGIONAL RÍO BRAVO
> "SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA OFICIO No. BOO.00.R07.04.01.-0701
> "ASUNTO.- Se contesta solicitud de incremento de volumen
>
> "MONTERREY, N.L., A 26 JUN. 2000
>
> "**LALA ARRENDADORA MONTERREY, S.A. DE C.V.**
> "**ING. RAFAEL DE JESÚS GARZA JÁUREGUI.**
> "**APODERADO GENERAL**
> "**AV. ABRAHAM LINCOLN # 4917 Pte.**
> "**C.P. 64170, MONTERREY, N.L.**
>
> "Me refiero a su escrito de fecha 21 de Septiembre de 1999, por el que ratificó su solicitud de aumento en el volumen concesionado mediante el Título de Concesión A2NVL-101890/24FMGR94, y en el que manifiesta haberse adherido a los beneficios del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de octubre de 1995.

"Al respecto y dado que el predio donde se ubica el aprovechamiento, (Villa Mitras), municipio de Monterrey, Nuevo León, se encuentra en zona de veda, de acuerdo al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de julio de 1951, esta Gerencia Regional de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en los artículos 8°,14, 16 y 27 párrafos quinto y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 Bis, fracciones II, III, V, XXIV, XXVI, XXXIX y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1°, 2°,4°,9° fracciones I, V, VII, XIII y XVI; 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 43, 49 y 50 de la Ley de Aguas Nacionales 30, 38, 42,52 y 79 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 1°, 2°, 3°, 33, 34, 37, 38, 40 fracciones I y II, y 53 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 1° y 2° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; primero y segundo fracción VI del acuerdo por el que se determina el número, lugar y circunscripción territorial de las Gerencias Regionales de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 1998; y demás relativos y aplicables de los ordenamientos legales en cita; le ratifica la resolución de negativa al incremento de volumen solicitado, misma que le fuera comunicada con nuestro oficio BOO-E.24.1.0.2.- 359 (98) de fecha 22 de junio de 1998 (se anexa copia).

"Así mismo, se le comunica que los beneficios contemplados en el Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de octubre de 1995, se emitieron para apoyar a usuarios cuyo uso o aprovechamiento fuera irregular; tanto administrativa como fiscalmente; esto es, según el artículo segundo del citado decreto, establece a favor de los usuarios que carecieran de los documentos que ampararan la legal explotación, uso o aprovechamiento, en beneficios; en la no aplicación de sanciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales o las que se derivan de algún ordenamiento de carácter fiscal, por no contar con los documentos señalados, no ubicándose su representada en dichos supuestos, toda vez que su Título de Concesión fue expedido con fecha anterior al referido decreto; por lo que en su caso, no existía situación que regularizar. Lo anterior, aunado a que el multicitado decre-

to no hace mención de beneficio alguno respecto a solicitudes de incremento de volúmenes concesionados.

"Independientemente de lo anterior, se hace de su conocimiento que su solicitud de incremento de volumen sólo podrá ser otorgado vía adquisición de derechos, siempre y cuando se cumpla con los términos de transmisión que al respecto establecen los artículos del 33 al 37 de la Ley de Aguas Nacionales y del 64 al 72 de su Reglamento."

Como se desprende de dicho oficio, la autoridad de manera fundada y motivada está resolviendo ratificar su diversa resolución de 22 de junio de 1998, en cuanto a su negativa al incremento de volumen solicitado por la empresa actora, ya que el predio donde se ubica el aprovechamiento se encuentra en zona de veda, y además le hace de su conocimiento que en todo caso ese incremento sólo podrá ser otorgado vía adquisición de derechos, siempre y cuando se cumpla con los términos de transmisión que al respecto establecen los artículos del 33 al 37 de la Ley de Aguas Nacionales y del 64 al 72 de su Reglamento.

Pero, además, dicha autoridad aplicando de manera correcta las disposiciones del Decreto mediante el cual se otorgan facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que se dediquen a actividades industriales, comerciales y de servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1995, le precisa a dicha actora que el mismo se emitió para apoyar a usuarios cuyo uso o aprovechamiento fuera irregular, tanto administrativa como fiscalmente, ya que el artículo Segundo de dicho Decreto, establece diversos beneficios pero a favor de los usuarios que carecieran de los documentos que ampararan la legal explotación, uso o aprovechamiento, sin que esa empresa demandante se ubicara en dicho supuesto, ya que su Título de Concesión le fue expedido con fecha anterior al referido Decreto, por lo que, en su caso, no existía situación que regularizar, amén de que el multicitado Decreto no hacía mención de beneficio alguno respecto a solicitudes de incremento de volúmenes concesionados.

En efecto, lo expresado por dicha autoridad en el oficio recurrido por la actora, se encuentra apegado a derecho, ya que como se mencionó anteriormente en este fallo, el citado Decreto mediante el cual se otorgan facilidades administrativas y se condonan contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, que se dediquen a actividades industriales, comerciales y de servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1995, y su reforma de 11 de octubre de 1996, no es la disposición legal para que la empresa actora pueda regularizar una situación totalmente diversa a la que se refiere dichos Decretos.

Esto es, se reitera, dichos Decretos tuvieron primordialmente dos fines específicos: el primero, que todos aquellos usuarios que se dedicarán a las actividades industriales, comerciales y de servicios incluyendo a aquellos que las realicen en zonas de veda o reglamentadas, que no tuvieren títulos o permisos respectivos, regularizarán su situación administrativa mediante la realización de los trámites correspondientes para obtener dichos títulos de concesión o asignación por uso o aprovechamiento de aguas nacionales, obteniendo como beneficio que no se les aplicarán las sanciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales o las derivadas de algún ordenamiento de carácter fiscal, y que además no causarían los derechos por servicio de trámite, expedición y registro de los documentos correspondientes.

El segundo fin u objetivo de ese Decreto, fue el que los mismos usuarios señalados en el párrafo de antelación, que tuvieren título o permisos respectivos, antes de la entrada en vigor de dichos Decretos, y los que lo hubieran obtenido por haberse regularizado, tendrían como beneficio adicional que se les condonarán adeudos fiscales por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, así como adeudos por recargos y multas, y la no causación de los derechos previstos en el artículo 282-A de la Ley Federal de Derechos.

Por tanto, de los objetivos o fines de dichos Decretos, contrario a lo que sostiene la actora, de ninguna manera se desprende que la regularización sea para efectos del incremento en el volumen de agua que la actora pretende, en tal virtud

carece de sustento jurídico que esa demandante sostenga en su demanda que le es aplicable el artículo Segundo del Decreto de 1995, porque en su último párrafo establece que para el otorgamiento de los títulos **el volumen a concederse será determinado en base a la disponibilidad del recurso, derechos preexistentes y en función de los volúmenes por los que dichos usuarios hubieran efectuado los pagos, situación esta última en la que dice se coloca, ya que ha efectuado sus pagos de derechos correspondientes por los volúmenes de agua que ha utilizado en exceso.**

En efecto, la interpretación que realiza la actora del último párrafo del artículo Segundo del Decreto de 1995, carece de sustento jurídico, ya que en primer lugar debe tenerse presente que ese artículo fue modificado por el Decreto publicado el 11 de octubre de 1996, que sería el procedente, y en segundo lugar la actora pasa por alto que dicho artículo está previendo los beneficios que se otorgarán para los usuarios que regularicen su situación administrativa para obtener su título de concesión, y que en su último párrafo dispone precisamente que dichos títulos que soliciten los usuarios se otorgarán tomando en cuenta la disponibilidad del agua determinada conforme a las Normas Oficiales Mexicanas, y para que no quede lugar a duda a continuación se transcribe dicho artículo Segundo del Decreto de 1996.

> "ARTÍCULO SEGUNDO.- Los usuarios que durante la vigencia del presente Decreto, regularicen su situación administrativa, mediante la realización de los trámites que conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento correspondan, ante la Comisión Nacional del Agua, para obtener los títulos de concesión o asignación por uso o aprovechamiento de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, permisos de descarga de aguas residuales e inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, gozarán de los beneficios siguientes:
> "a) No se aplicarán las sanciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales o las que se derivan de algún ordenamiento de carácter fiscal, por no contar con los documentos señalados.

"b) No causarán los derechos por los servicios de trámites, expedición y registro de los documentos señalados, los usuarios catalogados como microempresas.
"**Los títulos que autoricen la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que soliciten los usuarios que se acojan a los beneficios de este Ordenamiento, se otorgarán tomando en cuenta la disponibilidad del agua determinada conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.**" (énfasis de esta Juzgadora)

En tal virtud, como se desprende con claridad meridiana, dicho artículo Segundo se refiere a los usuarios que regularicen su situación administrativa mediante la obtención del título de concesión o asignación por uso o aprovechamiento de aguas nacionales, en cuanto a los beneficios que obtendrán, **y que dichos títulos se otorgarán tomando en cuenta la disponibilidad del agua determinada conforme a las Normas Oficiales Mexicanas**; en el caso de la actora ese artículo no le es aplicable porque a ella no se le puede otorgar ningún título ya que cuenta con el Título de Concesión A2NVL-101890/24FMGR94, que le fue otorgado desde el año de 1994.

(...)

En mérito de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 16, fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con los diversos 236, 237, 239, fracción I y 239-A fracción I, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- La actora no probó los extremos de su acción; en consecuencia,

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, precisada en el resultando 1° del presente fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada del presente fallo, devuélvanse los autos a la Octava Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, una vez que haya quedado firme o, en su caso, se resuelva en definitiva el presente asunto, y en su oportunidad, archívese, este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día diez de febrero de dos mil cuatro, por unanimidad de once votos a favor, de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Luis Malpica de Lamadrid, Alma Peralta Di Gregorio, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, María Guadalupe Aguirre Soria, Silvia Eugenia Díaz Vega, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Luis Carballo Balvanera, Guillermo Domínguez Belloc y María del Consuelo Villalobos Ortíz.

Fue Ponente en el presente asunto, el Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el día veinticuatro de febrero de dos mil cuatro, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firman la C. Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos que da fe.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

V-P-SS-569

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA.- RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER DEL ASUNTO LA SALA REGIONAL EN CUYA JURISDICCIÓN SE ENCUENTRE LA SEDE DE LA AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE LOS CRÉDITOS FISCALES, SI DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS NO SE DESPRENDE QUE SE ESTÉ CONTROVIRTIENDO LA NOTIFICACIÓN REALIZADA POR DIFERENTE AUTORIDAD, NI EXISTEN ACTOS DE EJECUCIÓN.- De conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es competente para conocer de una demanda la Sala Regional en cuya jurisdicción se encuentra la sede de la autoridad demandada; entendiéndose por ésta, entre otras, la que emite la resolución definitiva que determina el (los) crédito (s) fiscal (es). Ahora bien, aun cuando la actora señale como actos impugnados los créditos fiscales que derivan de aquélla, y que han sido notificados para su ejecución por autoridad diversa a la que emitió la resolución determinante, si de las constancias de autos no existe evidencia alguna que permita presumir la existencia de algún acto del procedimiento administrativo de ejecución llevado a cabo por autoridad alguna a fin de hacer efectivos los créditos fiscales, ni la actora hace valer agravio en contra de la notificación o en contra de la ejecución de los créditos; en consecuencia, el acto ha de servir para determinar la competencia de la Sala que debe conocer del asunto determinante de los créditos fiscales. (2)

Juicio No. 1177/03-08-01-2/1647/03-18-01-1/60/04-PL-04-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de marzo de 2004, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de abril de 2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- (...)

Previamente a la determinación de la Sala que es competente para conocer el presente asunto es conveniente hacer algunas precisiones y/o aclaraciones:

1.- Conviene señalar que el presente incidente de incompetencia se estudiará y resolverá conforme a las disposiciones vigentes en la fecha de presentación del medio de defensa (**25 de septiembre de 2003**).

Refuerza lo anterior la siguiente tesis.

"**PLENO**

"**PROCESAL**
"(INCIDENTES)

"**INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL.- DEBE RESOLVERSE CON BASE EN LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.-** La competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de un juicio, debe ser analizada a la luz de las disposiciones legales vigentes en la fecha en que se presentó la demanda, toda vez que es en este momento cuando las Salas pueden declararse legalmente incompetentes para conocer del asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 218 del Código Fiscal de la Federación; motivo por el cual no es procedente estimar fundado un incidente de incompetencia territorial, apoyado en que con posterioridad, es decir, durante la substanciación del juicio, cambie o se modifique la competencia territorial de una Sala Regional, en razón a que,

se reitera, debe atenderse a la competencia que se tenga al momento de la presentación de la demanda, pues de aceptarse el criterio contrario, durante la tramitación del juicio se podrían presentar incidentes de incompetencia tantas veces como se cambiara la circunscripción territorial de una Sala.

"Incidente de Incompetencia No. 29/99-07-01-1/94/01-PL-04-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de abril de 2002, por mayoría de 10 votos a favor y 1 en contra. Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres. Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
"(Tesis aprobada en sesión de 26 de abril de 2002)."

2.- Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es competente para conocer de una demanda la Sala Regional en cuya jurisdicción se encuentra la sede de la autoridad demandada.

En efecto, el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente en la fecha de interposición del medio de impugnación, establece lo siguiente:

"Artículo 31.- **Las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón del territorio respecto del lugar donde se encuentra la sede de la autoridad demandada**; si fueran varias las autoridades demandadas, donde se encuentre la que dictó la resolución impugnada. Cuando el demandado sea un particular, se atenderá a su domicilio."

De la transcripción anterior se sigue que se establece como norma el que se surte la competencia de las Salas Regionales, por razón de territorio, respecto del lugar donde se encuentre la sede de la autoridad demandada.

3.- Que mediante acuerdo G/43/2001, "Creación de Salas Regionales", de fecha 5 de septiembre de 2002, se creó la **Sala del Golfo Norte** con jurisdicción en

el **Estado de Tamaulipas, con excepción de los municipios de Nuevo Laredo**, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Ciudad Camargo, Díaz Ordaz y Reynosa, del propio Estado.

4.- Que la actora señala expresamente como resolución impugnada y autoridades demandas lo siguiente:

> "**RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y FECHA DE NOTIFICACIÓN.-** Como resolución determinante, la constituye la resolución de fecha **veinticuatro (24) de julio de dos mil tres (2003)**, emitida por el C. Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera marcado con el número AUA240020824, mediante la cual determina la situación fiscal en materia de Comercio Exterior del suscrito. Asimismo, derivadas de la anterior (sic), los créditos fiscales que notifica y pretende ejecutar el C. Administrador Local de Recaudación de Zacatecas con los números y cantidades históricas que a continuación describo: H-00162525 ($1,460.00); H-0016526 ($1,314.00); H-00162527 ($2,771.00); H-00162528 ($920.00); y H-00162529 ($626.00).
>
> "**AUTORIDAD DEMANDADA.-** El C. Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, como autoridad emisora de la resolución determinante. Y, el C. Administrador Local de Recaudación de Zacatecas, como ejecutor de los créditos fiscales derivados de aquélla, con domicilio este último en el número 201 de la Avenida González Ortega esquina con Callejón del Trabajo, Zacatecas, Zacatecas."

5.- Que la actora sólo ofreció y exhibió como pruebas, entre otras, las siguientes:

a) Oficio No. 326-SAT-A24-3.-13718 de fecha 24 de julio de 2003, emitido por la Aduana de Nuevo Laredo.

b) 5 actas de notificación de fecha 10 de septiembre de 2003, relativas al oficio determinante señalado en el inciso anterior y que hacen referencia a los créditos fiscales H-00162525 a H-00162529. Notificación que corrió a cargo de la Administración Local de Recaudación de Zacatecas.

6.- La actora en su demanda de nulidad plantea exclusivamente 2 conceptos de anulación.

a) Que contrariamente a lo sostenido por la autoridad demandada en la resolución impugnada, ella sí presentó escrito de pruebas y alegatos dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera, con la finalidad de acreditar la legal estancia y tenencia del vehículo de procedencia extranjera.

b) Que la resolución impugnada le fue notificada fuera del plazo de 4 meses que establece el artículo 153 de la Ley Aduanera.

Ahora bien, el Pleno de esta Sala Superior determina que es procedente y fundado el incidente de incompetencia hecho valer por la Sala Regional del Golfo Norte, pues a la fecha de interposición de la demanda, esto es el 25 de septiembre de 2003, la citada Sala carecía de competencia para conocer de resoluciones emitidas por autoridades con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas; correspondiendo el conocimiento del asunto a la Sala Regional del Noreste en turno de conformidad con lo dispuesto por el acuerdo G/43/2001, "Creación de Salas Regionales", el cual señala que la Región Noroeste comprende el Estado de Nuevo León y **los municipios de Nuevo Laredo**, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Ciudad Camargo, Díaz Ordaz y Reynosa del **Estado de Tamaulipas**.

No es óbice para lo anterior que la actora señale como actos impugnados los créditos fiscales que notifica y pretende ejecutar la Administración Local de Recaudación de Zacatecas, ya que de las constancias de autos se desprende lo siguiente:

a) No existe evidencia alguna en el expediente que permita a este Pleno presumir la existencia de algún acto del procedimiento administrativo de ejecución llevado a cabo por la Administración Local de Recaudación de Zacatecas a fin de hacer efectivos los créditos fiscales.

b) La actora no hace valer agravio alguno en contra de la notificación efectuada por la Administración Local de Recaudación de Zacatecas; ni en contra de los créditos.

c) De acuerdo a las actas de notificación ofrecidas por la actora los créditos fiscales H-00162525 a H-00162529, derivan de la resolución emitida por la Aduana de Nuevo Laredo.

En consecuencia, debe considerarse que el acto que debe servir para determinar la competencia de la Sala que debe conocer del asunto, es la resolución emitida por la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, resultando en consecuencia competente para conocer del asunto como se ha dicho la Sala Regional del Noreste en turno conforme a lo dispuesto por los artículos 28 y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y artículo primero, fracción VI del Acuerdo G/10/2001 por el que se determinan los límites y denominación de las regiones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, número y sede de sus salas regionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2001, modificado por diverso Acuerdo G/43/2002 de fecha 5 de septiembre de 2001.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 218, 228-Bis del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es de resolverse y se resuelve:

I.- Es procedente y fundado el incidente de incompetencia por razón del territorio, hecho valer por la Sala Regional del Golfo Norte, en consecuencia;

II.- Remítanse los autos del presente asunto a la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales del Noreste, para que la Sala en turno conozca del asunto.

III.- Remítase a las Salas Regionales del Golfo Norte y Centro I, copia del presente fallo para su conocimiento, así como a las partes.

IV.- NOTIFÍQUESE.- Y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de marzo de 2004, por unanimidad de 9 votos a favor de los Magistrados Luis Malpica de Lamadrid, Alma Peralta Di Gregorio, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Silvia Eugenia Díaz Vega, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Luis Carballo Balvanera, Guillermo Domínguez Belloc y Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez. Estuvieron ausentes las Magistradas María Guadalupe Aguirre Soria y María del Consuelo Villalobos Ortíz.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el 24 de marzo de 2004. Con fundamento en los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

V-P-SS-570

MARCAS. ES IMPROCEDENTE DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE SU NULIDAD EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CUANDO LOS PRODUCTOS QUE AMPARAN SE ENCUENTRAN EN CLASES DISTINTAS.- Atento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, el registro de una marca será nulo cuando dicha marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios. En este contexto, para el caso de que existan dos marcas semejantes en grado de confusión, desde el punto de vista fonético e ideológico, pero que amparen productos clasificados en distintas clases, resulta que no se surte el supuesto de nulidad previsto en el numeral antes señalado, en virtud de que al proteger diversos productos o servicios, no existe motivo de confusión para el consumidor, ni tampoco competencia desleal entre cada uno de los productores o prestatarios, según sea el caso. (3)

Juicio No. 1677/02-17-09-3/212/03-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de marzo de 2004, por mayoría de 7 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Juan Francisco Villarreal Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de marzo de 2004)

EN EL MISMO SENTIDO:

V-P-SS-571

Juicio No. 8943/02-17-08-2/176/02-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de

mayo de 2004, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de mayo de 2004)

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

V-P-SS-572

MARCAS. ES PROCEDENTE SU REGISTRO CUANDO LA MISMA ES IDÉNTICA O SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSIÓN A OTRA EN TRÁMITE DE REGISTRO PRESENTADA CON ANTERIORIDAD, O A UNA REGISTRADA Y VIGENTE, CUANDO NO SE APLIQUE A LOS MISMOS O SIMILARES PRODUCTOS O SERVICIOS.- El artículo 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial establece que "no será registrable una marca, que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, que se aplique a los mismos o similares productos o servicios". Consecuentemente, si en la especie, los dos registros marcarios son semejantes en grado de confusión, desde el punto de vista fonético e ideológico, pero amparan productos clasificados en distintas clases, resulta evidente que no se surte el impedimento previsto en la norma señalada, en virtud de que al proteger diversos productos o servicios, no existe motivo de confusión para el consumidor, ni tampoco competencia desleal entre cada uno de los productores o prestatarios, según sea el caso. (4)

Juicio No. 1677/02-17-09-3/212/03-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de marzo de 2004, por mayoría de 7 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Juan Francisco Villarreal Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de marzo de 2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

G).- ESTUDIO Y RESOLUCIÓN.- A juicio de los integrantes del Pleno de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa los conceptos de impugnación expresados por la actora resultan por una parte infundados y por la otra fundados pero insuficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, por las siguientes razones:

Para mayor claridad esta Juzgadora considera oportuno precisar los antecedentes del caso:

1.- El 9 de diciembre de 1991, la empresa denominada Corporación OFIMAX, S.A. de C.V., solicitó a la autoridad el registro de la marca "OFIMAX Y DISEÑO", para amparar productos de la clase 20 internacional, mismo que fue otorgado el 24 de noviembre de 1992, bajo el número de registro 426121.

2.- Corporación OFIMAX, S.A. de C.V., y la hoy actora celebraron contrato de cesión de derechos del registro marcario anteriormente señalado presentándose ante la autoridad para su inscripción, el 25 de marzo de 1998.

3.- El 1° de abril de 1998, la hoy demandante solicitó el registro de la marca OFIMAX Y DISEÑO, para amparar servicios de la clase 42 internacional.

4.- La demandante en este juicio, celebró contrato de licencia de uso de marca con la empresa Corporación OFIMAX, S.A. de C.V., a quien le otorgó el derecho a usar y/o a explotar la marca en cita. El contrato de licencia se presentó ante la autoridad para su inscripción.

5.- Durante el trámite de la solicitud de registro de la marca que nos ocupa (OFIMAX Y DISEÑO), en la clase 42 internacional, la autoridad objetó el registro correspondiente, por existir el expediente de la marca OFFICEMAX, con el registro marcario 512226 OFFICEMAX, propiedad de la empresa OMX, INC.

6.- Toda vez que la actora consideró que la autoridad otorgó el registro de la marca 512226 OFFICEMAX, para amparar, entre otros, servicios de compra y venta de muebles, misma que, a su parecer, resulta semejante en grado de confusión a su marca "OFIMAX Y DISEÑO", que ampara principalmente muebles, la hoy actora inició el procedimiento de declaración administrativa de nulidad del registro marcario 512226.

7.- Como consecuencia de la demanda de nulidad del registro marcario interpuesta por la hoy demandante, la empresa que comparece en este juicio con el carácter de tercero, OMX, INC, dio contestación a la solicitud de declaración administrativa de nulidad del registro marcario 512226 OFFICEMAX y, en vía de reconvención solicitó la declaración administrativa de caducidad del registro marcario 426121 OFIMAX Y DISEÑO, propiedad de la demandante en este juicio (MARÍA BÁRBARA ORTEGA CASAÑAS).

8.- Una vez sustanciados el procedimiento de declaración administrativa de nulidad, en contra del registro marcario 512226 OFFICEMAX, así como el de declaración administrativa de caducidad del registro marcario 426121 OFIMAX Y DISEÑO, la autoridad emitió la resolución que por esta vía se impugna, a través de la cual resolvió negar, por una parte, la declaración administrativa de nulidad del registro marcario, así como la declaración administrativa de caducidad.

9.- En vista de lo anterior, la hoy actora combate, a través de este juicio la resolución antes señalada respecto a la negativa de declarar administrativamente la nulidad del registro marcario 512226 OFFICEMAX.

En principio, se estima necesario precisar que la actora, tanto en su solicitud de nulidad de registro marcario (fojas 208 a 212 de autos), como en la presente instancia sostiene que el registro marcario 512226 "OFICCEMAX", otorgada a la empresa denominada OMX, INC, debe ser anulado ya que se actualizan las hipótesis previstas por las fracciones I, II y IV del artículo 151, en relación con el 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, numerales que a la letra señalan:

"**ARTÍCULO 151**.- El registro de una marca será nulo cuando:
"I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.
"No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca.
"II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca interrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;
"(...)
"IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y
"(...)"

"**ARTÍCULO 90**. No serán registrables como marca:
"(...)
"XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá

registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y "(...)"

Se evidencia pues que la litis en el presente juicio se constriñe a determinar si el registro de la marca 512226 "OFFICEMAX", otorgada a la empresa denominada OMX, INC, es igual o semejante en grado de confusión al registro marcario del que la empresa actora es propietaria; esto es, el identificado como 426121 "OFIMAX Y DISEÑO " de fecha legal 30 de marzo de 1987, considerando que ambos registros marcarios no amparan los mismos servicios y productos, ya que en el primer caso se protegieron servicios de la clase 42, mientras que en el segundo, se protegieron productos de la clase 20 de la clasificación internacional contenida en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, la autoridad al emitir su resolución respecto de la primera causal prevista en el artículo 151, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial que hizo valer la demandante, realizó un análisis de sus argumentos y valoración de las pruebas, conforme a los artículos 79, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial, expresando que para que se actualice la causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 151 de la Ley antes invocada, es necesario que concurran los siguientes supuestos que se encuentran previstos en la fracción XVI del artículo 90:

"a) El actor se encuentre en tiempo para intentar la acción solicitada.
"b) Que existan dos marcas registradas o en trámite, semejantes en grado de confusión.
"c) Que dichas marcas se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.
"d) Que la marca sujeta a nulidad se haya concedido con posterioridad a la marca de la actora.
"(...)"

Como se advierte del contenido de la resolución impugnada (fojas 146 de autos), la autoridad resolvió que el primero de los supuestos antes precisados se encontraba satisfecho, pues la actora había intentado en tiempo su solicitud de declaración administrativa de nulidad del registro marcario 512226 OFFICEMAX.

De igual manera, la autoridad hoy demandada resolvió que se encontraba satisfecho el segundo de los supuestos antes precisados en virtud de que existen dos marcas registradas semejantes en grado de confusión, desde el punto de vista fonético e ideológico.

No obstante lo anterior, la autoridad resolvió que no se surtía el tercero de los supuestos reseñados, relativo a que las marcas amparen los mismos o similares productos; lo anterior porque en la especie el registro marcario de la empresa tercera ampara servicios comprendidos en la clase 42 y el de la demandante en la clase 20, del artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, motivo por el cual resolvió negar la solicitud administrativa de nulidad de la marca de la empresa hoy tercera interesada.

Las clases antes señaladas son del tenor siguiente:

"**Artículo 59**.- (...)
Clase 20 Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas materias o materias plásticas.
"(...)
"Clase 42 Servicios de compra y venta de todo tipo de artículos de papelería, escolares y de oficina, con exclusión de servicios de consulta y consejo en la selección y uso de muebles para oficina, suministros de oficina, máquinas de oficina, electrónicos, computadoras y equipos para casa y oficina y consulta y manejo en relación con la venta al menudeo de los mismos artículos."

Ahora bien, a fin de determinar si la resolución de la autoridad se ajustó a derecho, atento a la actividad que realiza la demandante y la tercero en el presente juicio, se hace imperativo atender a los conceptos de cada una de las clases arriba señaladas.

La clase 20 protege diferentes productos, tales como muebles, espejos y marcos de diversos materiales, entendiendo como producto, atento a la definición que proporciona el Diccionario Larousse de la lengua española, la "Cosa producida por la actividad humana. Resultado de alguna cosa".

La clase 42 protege servicios de compra y venta de todo tipo de artículos de papelería, escolares y de oficina, con exclusión de servicios de consulta y consejo en la selección y uso de muebles para oficina, suministros de oficina; máquinas de oficina; electrónicos, computadoras y equipos para casa y oficina y consulta y consejo en relación con la venta de menudeo en los mismos.

Ahora bien, el término servicio proviene del verbo servir, el cual, atento a la definición que contiene el Diccionario antes mencionado, consiste en: "Prestar ayuda o hacer un favor. Ser útil para un fin. Atender a los clientes en un comercio".

Acorde con las definiciones anteriormente señaladas, correspondientes al tipo de actividad que protege cada una de las clases aludidas (20 y 42), es dable para esta Juzgadora concluir que la resolución impugnada, en el apartado que se analiza, se encuentra ajustada a derecho; lo anterior en virtud de que la autoridad resolvió acertadamente que la marca de la hoy tercera interesada, protege servicios de la clase 42, que refiere exclusivamente, servicios de compra y venta de todo tipo de artículos de papelería, escolares y de oficina, con exclusión de servicios de consulta y consejo en la elección y uso de muebles para oficina; suministros de oficina, máquinas de oficina, electrónicos, computadoras y equipos para casas y oficinas y consulta y consejo en relación con la venta de menudeo en los mismos; de donde se advierte que en momento alguno dicha clase ampara muebles en general, como en el caso acontece con la clase 20, la cual es genérica en el tipo de productos que ampara, específicamente,

cuando se refiere a “muebles”, de forma tal que como lo resolvió la autoridad no se materializa el supuesto legal contenido en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, y por ende tampoco se surte la hipótesis normativa para declarar la nulidad de la marca de la empresa hoy tercera interesada. Toda vez que se trata de actividades sustancialmente diferentes.

Al efecto, resulta ilustrativa la Jurisprudencia 693 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que enseguida se transcribe y que establece que entratándose de productos o servicios que no tienen relación entre sí, la semejanza entre las marcas no causa perjuicio a sus titulares, Jurisprudencia que se encuentra publicada en el Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo III, Parte TCC, p. 509, y a la letra señala:

> “**MARCAS, CONFUSIÓN. PRODUCTOS DIFERENTES.-** Para que una marca no deba registrarse, aplicando para ello el artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, se requiere que los artículos amparados por ambas marcas tengan características semejantes. De manera que **si se trata de artículos que no tienen mayor relación entre sí, por su naturaleza y uso, o por las tiendas en que se venden, no hay inconveniente en usar marcas que podrían confundirse**, cuando no hay la menor posibilidad de confusión en los productos, o de competencia comercial desleal entre los productores. La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior, ni pueda causar a éste algún desprestigio en relación con la calidad de su producto. Pero cuando los productos a que se aplican las dos marcas son de naturaleza substancialmente diferente, o se aplican a usos substancialmente diferentes, y se expenden en comercios substancialmente diferentes (cuando se trata de establecimientos especializados), no se ve que haya razón para negar el registro de una marca por su posible semejanza o confusión con la otra. Pues en estos casos no podrá haber confusión para adquirir el producto del dueño de la marca anterior, con

motivo del registro del otro, ni el productor dueño de la anterioridad podrá sufrir daño en su prestigio ni en su economía con el uso de la otra marca. Ni podrá el dueño de la segunda usar el prestigio de la primera, para vender su producto, ya que ambos productos se encontrarán en esferas diferentes de uso, aplicaciones y expendios comerciales (o departamentos especiales, en comercios generales). Por lo demás, aunque los productos amparados por una marca pertenezcan a una categoría, y la marca se haya expedido en principio para amparar todos los productos de esa categoría, si la realidad es que la marca está destinada a amparar productos de cierta naturaleza y destinados a ciertos usos afines, el registro de esa marca no impide el registro de una segunda marca semejante que se destine a amparar exclusivamente ciertos productos que, aunque pertenezcan a la misma categoría en la clasificación del artículo 71 del reglamento de la ley, sean artículos de naturaleza esencialmente distinta, y de uso y aplicaciones esencialmente distintos, y que esencialmente se venden en comercios de naturaleza también diferente, como en el caso, por ejemplo, de cepillos para muebles, pisos y tapicería y de cepillos dentales.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"Séptima Época:

"Amparo en revisión 21/76. Johnson & Johnson. 16 de marzo de 1976. Unanimidad de votos.

"Amparo en revisión 707/76. Dresser Industries, Inc. 1o. de marzo de 1977. Unanimidad de votos.

"Amparo en revisión 131/77. American Cyanamid Company. 12 de abril de 1977. Unanimidad de votos.

"Amparo en revisión 291/77. Laboratorios Infan, S. A. 21 de junio de 1977. Unanimidad de votos.

"Amparo en revisión 347/77. Central Exportadora Nacional, S. A. 9 de agosto de 1977. Unanimidad de votos."
(El realce es de esta Juzgadora)

En este contexto, se tiene que si el actor, en un primer momento, se dedica a la producción de muebles, en este caso de oficina, tal y como lo evidencia con la publicidad que al efecto exhibe, es claro que dicha actividad no se relaciona con los "servicios" que presta la empresa que comparece como tercera interesada, máxime que tal y como se advierte de la clase 42, tales servicios excluyen los de "consulta y consejo en la selección y uso de muebles para oficina", de donde se desprende que la actividad de la última de las empresas en cita, se constriñe a artículos de papelería, pero en momento alguno refiere a muebles para oficina, de modo tal que si bien las marcas son parecidas, lo cierto es que por tratarse de actividades sustancialmente distintas, amparadas en clases diferentes, es que no se surte el supuesto para declarar nula la marca de la empresa OMX, INC.

Así las cosas, es clara la diferencia entre una persona que presta servicios de compra y venta de todo tipo de artículos de papelería, escolares y de oficina, a otra persona que elabora productos, tales como muebles, en este caso, para oficina.

Finalmente, respecto del supuesto que se requiere para declarar la nulidad de la marca consistente en que el registro de la empresa tercera se haya concedido con posterioridad a la marca de la actora; la autoridad concluyó, luego de valorar las probanzas ofrecidas por las partes en conflicto en el procedimiento administrativo, que la marca de la hoy actora se concedió con anterioridad a la de la empresa OMX, INC, hoy tercera interesada, resolución que a juicio de este Órgano Jurisdiccional se ajusta a derecho.

No obstante que en la especie se materializaron tres de los cuatro elementos que requiere la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial para declarar la nulidad de una marca, lo cierto es que se requiere de la materialización de todas las hipótesis para que dicha nulidad prospere, lo que en la especie no aconteció

y por ello, tal y como resolvió la autoridad, era improcedente la declaratoria administrativa de nulidad de la marca de la empresa tercera interesada, motivo por el cual el argumento de la actora en este apartado es infundado y por ende insuficiente para declarar la nulidad del acto que se impugna.

Ahora bien, es fundado pero insuficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, el argumento que hace valer el demandante en el sentido de que la autoridad consideró que el uso de la marca no lo acreditó la hoy actora, ya que como consecuencia de la cesión de derechos, el beneficio del uso ininterrumpido de la marca únicamente le favorecía a la actora desde el momento en que le fueron cedidos los derechos y no antes.

Lo anterior es así, en virtud de que la fracción II del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, numeral en el que se funda la autoridad para desestimar el argumento de nulidad de la marca planteado por la enjuiciante dispone:

> "**Artículo 151**.- El registro de una marca será nulo cuando:
> "(...)
> "II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca interrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;
> "(...)"

Lo fundado del argumento que se analiza radica en que, contrario a lo expresado por la autoridad, la hoy actora: María Bárbara Ortega Casañas (titular de la marca por cesión de derechos), sí acreditó haber usado la marca OFIMAX, de manera ininterrumpida en el país antes de la fecha de presentación de la marca 512226 OFFICEMAX propiedad de OMX, INC, empresa tercera en este juicio.

Lo anterior, porque de las pruebas que fueron valoradas en el procedimiento administrativo y las ofrecidas en el presente juicio (facturas de la actora desde el año de 1987 a 1999, - fojas 244 a 543-; así como publicidad contenida en la sección amarilla -fojas 544 a 563-) se desprende que el uso de la marca OFIMAX y DISEÑO deviene desde el año de 1987, de forma tal que la cesión de los derechos que de dicha marca se realizó en favor de la hoy actora y cuyo contrato se registró ante la autoridad el 4 de mayo de 1998, no puede considerarse como una limitante a los derechos producidos por dicha marca desde la fecha de su primer uso, así como de las correspondientes obligaciones que el mismo generó.

La conclusión anteriormente alcanzada tiene su fundamento, entre otros, en el artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con los numerales 2248, 2013, 2014 y 2032 del Código Civil en materia Federal, mismos que señala la enjuiciante como violados en su perjuicio y que son del tenor siguiente:

> "**ARTÍCULO 143.-** Los derechos que deriven de una solicitud de registro marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.
> "Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitantes en trámite o de dos o más marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados."

Del artículo anterior se desprende que el titular o dueño de los derechos de una marca puede cederlos e, inclusive gravarlos a favor de un tercero, siempre y cuando se cumplan las formalidades de la legislación común, que en este caso es el Código Civil en materia Federal, Ordenamiento en el cual se regula la cesión de derechos respecto de una compraventa, en especial en su artículo 2248.

"**Artículo 2248.** Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero."

De dicho numeral se desprende que el contrato de cesión de derechos de una marca puede considerarse como un contrato de compra venta, si hay un precio cierto y en dinero a cambio de un derecho cedido; de igual forma al revestir el carácter de un contrato de compraventa, tiene el efecto traslativo sobre la titularidad de todos los derechos derivados precisamente de dicha marca.

Los artículos 2013 y 2014, señalan textualmente lo siguiente:

"**Artículo 2013.** La obligación de dar cosa cierta comprende también la de entregar sus accesorios; salvo que lo contrario resulte del título de la obligación o de las circunstancias del caso."

"**Artículo 2014.** En las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, la traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes, por mero efecto del contrato, sin dependencia de tradición ya sea natural, ya sea simbólica; debiendo tenerse en cuenta las disposiciones relativas del Registro Público."

De los anteriores preceptos, se desprende claramente que en la enajenación de cosas ciertas y determinadas, la traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes por mero efecto del contrato, independientemente de la tradición, es decir, aunque la cosa no se haya entregado; por lo que la transmisión de dominio de cosa cierta comprende también la entrega de sus accesorios.

Por su parte el artículo 2032 del Código Civil citado señala lo siguiente:

"**Artículo 2032.** La cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio, salvo aquellos que son inseparables de la persona del cedente.
"Los intereses vencidos se presume que fueron cedidos con el crédito principal."

De la interpretación armónica a los numerales anteriormente transcritos del Código Civil en cita, por remisión expresa de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el diverso 143 de la Ley en cita, se tiene que la cesión comprende todos los derechos y accesorios que derivan precisamente del derecho cedido, por lo que en la especie, en el caso de cesión de derechos de una marca el cesionario adquiere, sin limitación alguna, todos los derechos, accesorios y obligaciones derivados precisamente de la marca en cuestión, sin alteración o modificación alguna, ya que el cesionario adquiere tales derechos de la misma manera que los tenía o poseía el cedente.

Por lo anterior se llega a la conclusión de que es ilegal lo resuelto por la autoridad, al no reconocer el derecho de uso y explotación de la marca OFIMAX Y DISEÑO llevado a cabo por su anterior dueño o titular CORPORACIÓN OFIMAX, S.A. DE C.V., en favor de la demandante María Bárbara Ortega Casañas, en su calidad de cesionaria, ya que resulta legalmente posible transmitir los derechos y obligaciones que tal marca generó en el pasado, dada la naturaleza de la figura de la cesión de derechos, a favor de quien se ostenta en el presente como su titular.

Así las cosas, cuando se transmiten los derechos sobre una marca por medio de un título legítimo, ello implica la transmisión de todos los derechos inherentes que hayan sido adquiridos por parte del anterior titular a favor del cesionario, quien a su vez tendrá el derecho de hacerlos valer frente a terceros, de manera, inclusive, retroactiva al momento en que el anterior titular adquirió tales derechos, por lo que en la especie el argumento que hace valer el demandante es fundado en este apartado, pero insuficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, ya que tal y como lo resolvió la autoridad al analizar el contenido de la segunda fracción del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, el supuesto relativo a la identidad de los productos o servicios no se materializó en la especie, de forma tal que al no concurrir todas las hipótesis que la citada fracción establece para la declaratoria de nulidad de una marca, dado que una atiende a productos de oficina, en específico muebles, y la otra a servicios de compra y venta de artículos de papelería, escolares y de oficina, sin incluir muebles para ésta, resulta evidente la improcedencia de la nulidad solicitada.

En el último agravio la actora manifiesta que la autoridad aplicó indebidamente el contenido de la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que de los supuestos que contiene consideró, que no se materializó el relativo a la similitud de los productos o servicios y que por ello se ve materializado el supuesto de nulidad de la marca consistente en que el registro se hubiere otorgado, por error, inadvertencia o diferencia de apreciación.

El presente argumento es infundado para declarar la nulidad de la resolución impugnada, toda vez que como quedó precisado en párrafos precedentes del presente fallo, los productos y servicios que amparan cada una de las marcas, son sustancialmente distintos además de que se encuentran en clases diferentes, motivo por el cual, ante la falta de uno de los elementos precisados en la fracción IV del artículo 151 de la citada Ley de la Propiedad Industrial, resulta evidente que no se actualiza la causal de nulidad del registro marcario 512226 OFFICEMAX y por ello la resolución de la autoridad se encuentra ajustada a derecho.

En virtud de lo expuesto y toda vez que de los conceptos de impugnación no se advierte argumento suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, lo procedente es reconocer la validez de la misma, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 236, 237, 239, fracción I, 239-A, fracción I, inciso b) y fracción II del Código Fiscal de la Federación, 16, fracción V de la Ley Orgánica de este Tribunal y 151, fracciones I, II y IV de la Ley de la Propiedad Industrial, el Pleno de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resuelve:

I.- La actora no probó su acción, por lo que,

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada.

III.- NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada de la presente resolución, devuélvanse los autos a la Novena Sala Regional Metropolitana, una vez que haya quedado firme o en su caso, se resuelva en definitiva el presente asunto y en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 26 de marzo de 2004, por mayoría de 7 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Malpica de Lamadrid, Alma Peralta Di Gregorio, Alejandro Sánchez Hernández, Silvia Eugenia Díaz Vega, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Luis Carballo Balvanera y Guillermo Domínguez Belloc, 1 con los resolutivos de la C. Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz y 2 en contra de los CC. Magistrados María Guadalupe Aguirre Soria y Jorge Alberto García Cáceres, quien se reservó su derecho para formular voto particular, encontrándose ausente el C. Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia fue aprobada en sus términos.

Se formuló el presente engrose el día 17 de junio de dos mil cuatro, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta de este Tribunal, ante la C. Secretaria General de Acuerdos, Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-SS-573

LITIS ABIERTA, EXCEPCIÓN A SU APLICACIÓN CONFORME A LO SEÑALADO POR LOS ARTÍCULOS 197 Y 237 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Dada la interpretación de los artículos 197 y 237 del Código Fiscal de la Federación, que facultan a este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la resolución recurrida cuando no se satisface el interés jurídico del promovente, cuando se cuente con los elementos para realizar dicho análisis; pero no se advierte la posibilidad de que este Tribunal lo haga, si no hubo pronunciamiento previo sobre la procedencia o no de recurso, como sucede en el caso de que sólo determine la incompetencia de la autoridad que desechó el recurso administrativo, ya que en este caso se considera que no se cuenta con los elementos suficientes para el análisis de la legalidad o ilegalidad de la resolución recurrida. (5)

Juicio No. 642/02-17-04-7/1224/02-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de marzo de 2004, por mayoría de 7 votos a favor y 4 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de marzo de 2004)

PRECEDENTES:

V-P-SS-470
Juicio No. 14715/01-17-05-2/194/02-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 31 de octubre de 2003, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Virginia Pétriz Herrera.
(Tesis aprobada en sesión de 31 de octubre de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 42. Junio 2004. p. 118
Fe de erratas R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 45. Septiembre 2004. p. 424

V-P-SS-471
Juicio No. 5462/02-17-04-1/115/02-PL-05-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 31 de octubre de 2003, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretario: Lic. Horacio Cervantes Vargas.
(Tesis aprobada en sesión de 31 de octubre de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 42. Junio 2004. p. 118
Fe de erratas R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 45. Septiembre 2004. p. 424

V-P-SS-472
Juicio No. 15735/01-17-01-7/388/02-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de noviembre de 2003, por mayoría de 7 votos a favor, 2 con los puntos resolutivos y 2 en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Juan Francisco Villarreal Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de noviembre de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 42. Junio 2004. p. 118
Fe de erratas R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 45. Septiembre 2004. p. 424

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

V-P-SS-574

RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A TRAVÉS DEL CUAL DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN.- ES IMPUGNABLE EN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- El artículo 11, fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se

promuevan contra las resoluciones definitivas que ahí se enumeran, entre otros, los que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo. Ahora bien, existe jurisprudencia sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. Época, Tomo XV, abril del 2002, página 1155, cuyo rubro señala: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE IMPUGNE UNA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DECRETOS DE REFORMAS DEL 19 DE ABRIL Y 30 DE MAYO DE DOS MIL)". Por lo que si un particular demanda en juicio contencioso administrativo una resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el que desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra de una diversa resolución por la cual se niega la solicitud administrativa de nulidad de un registro marcario, es evidente que es procedente el juicio contencioso administrativo en contra de este acto, pues constituye una resolución definitiva que está decidiendo un recurso, que en el caso es el de revisión a que se refiere la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (6)

Juicio No. 642/02-17-04-7/1224/02-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de marzo de 2004, por mayoría de 7 votos a favor y 4 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. (Tesis aprobada en sesión de 29 de marzo de 2004)

PRECEDENTE:

V-P-SS-314

Juicio No. 6878/01-17-03-8/429/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de diciembre de 2002, por mayoría de 6 votos a favor y 1 voto con los puntos resoluti-

vos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de diciembre de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 32. Agosto 2003. p. 29

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

V-P-SS-575

SUBDIRECTORA DIVISIONAL DE PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CARECE DE COMPETENCIA PARA DESECHAR EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- El artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial, establece las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y en su fracción VIII, se contempla aquélla de sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esa Ley que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su Reglamento y demás disposiciones en la materia. Por su parte, el artículo 7° del Acuerdo que delega facultades en los Directores Adjuntos, Coordinadores, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, establece que son facultades de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial, en el inciso r) llevar a cabo el trámite de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa en materia de propiedad industrial e infracción en materia de comercio, entre otros, asimismo señala que las facultades referidas en los incisos a) al s) se delegan en los Subdirectores Divisionales de Procesos de Propiedad Industrial. En ese sentido, si bien la Ley de la Propiedad Industrial no establece el recurso de revisión, debe estarse a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la que en su artículo 86 dispone en su primer párrafo que el recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que

emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del Titular de la dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. Ahora bien, si la resolución impugnada en un juicio la constituye un oficio que desecha el recurso de revisión por improcedente y fue emitido por la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, misma autoridad que resolvió el acto primigenio al que recayó la solicitud administrativa de nulidad de un registro marcario, dicha autoridad ya no resultaba competente para dilucidar dicho acto, sino su superior jerárquico en términos del artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que se actualiza la fracción I del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, ya que la resolución impugnada fue emitida por autoridad incompetente. (7)

Juicio No. 642/02-17-04-7/1224/02-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de marzo de 2004, por mayoría de 7 votos a favor y 4 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de marzo de 2004)

PRECEDENTES:

V-P-SS-315
Juicio No. 6878/01-17-03-8/429/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de diciembre de 2002, por mayoría de 6 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de diciembre de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 32. Agosto 2003. p. 30

V-P-SS-316
Juicio No. 3868/02-17-10-5/1176/02-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de

enero de 2003, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.

(Tesis aprobada en sesión de 15 de enero de 2002)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 32. Agosto 2003. p. 30

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

V-P-SS-576

CARGA DE LA PRUEBA.- LA TIENE EL TITULAR DEL REGISTRO MARCARIO PARA ACREDITAR LA FECHA DE PRIMER USO ASENTADA EN LA SOLICITUD DE REGISTRO.- De lo dispuesto por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se desprende el principio probatorio de que "el que afirma siempre está obligado a probar", por lo tanto, las afirmaciones realizadas por el solicitante, incluida la fecha de primer uso, contenidas en la solicitud de registro de una marca, siempre deberán ser probadas por el propio solicitante. Esto se entiende, en principio por la regla general de procedimiento antes mencionada y, por otro lado, si se considera que en la materia con el registro de la marca otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se obtiene el derecho a su uso exclusivo, es decir, el Estado reconoce un derecho exclusivo a favor de quien obtiene el registro de una marca, que como tal podrá ser oponible a terceros y salvaguardado incluso de manera coercitiva por los mecanismos establecidos por el propio Estado, en consecuencia es claro que se tiene una calidad privilegiada que sólo se puede obtener cumpliendo cabalmente con todos los requisitos establecidos en la Ley, de ahí la importancia de que todos los datos o afirmaciones contenidas en una solicitud de registro deban ser veraces y comprobables por el propio solicitante. (8)

Juicio No. 18413/01-17-01-3/1235/02-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de abril de 2004, por unanimidad de 7 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de abril de 2004)

PRECEDENTE:

V-P-SS-511
Juicio No. 7793/01-17-02-2/341/02-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de febrero de 2004, por mayoría de 8 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de febrero de 2004)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 43. Julio 2004. p. 76

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

V-P-SS-577

MARCAS.- ES PRUEBA DEL INTERÉS JURÍDICO DEL PRESUNTO INFRACTOR PARA DEMANDAR LA NULIDAD DEL REGISTRO DE LA MISMA, EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA POR SU INDEBIDA UTILIZACIÓN.- El interés jurídico del presunto infractor para demandar la nulidad de un registro, si bien no puede tener su origen en la solicitud de infracción administrativa, ya que el mismo sólo puede derivar de una norma jurídica que tutele el derecho subjetivo que se invoca como violado; también es cierto que en la materia, la posibilidad del presunto infractor de usar marcas se desprende de lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, que regula el derecho subjetivo que tiene cualquier industrial, comerciante o prestador de servicios para usar marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que preste, con el fin de distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; por lo que si el registro de una marca al otorgar el derecho de su uso exclusivo, limita la esfera jurídica del presunto infractor, es claro que este último cuenta con el interés jurídico para demandar la nulidad de ese registro cuando estime que no se otorgó conforme a la ley, ya que de obtener una resolución favorable a sus intereses, dejará de existir la limitación a su derecho subjetivo y por ende la comisión de la infracción que se le atribuye. (9)

Juicio No. 18413/01-17-01-3/1235/02-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de abril de 2004, por unanimidad de 7 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de abril de 2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

Ahora bien, con relación a que la autoridad demandada no analizó correctamente la excepción de interés jurídico, al ser falso que por el simple hecho de ser solicitada una infracción en su contra nazca en ese preciso acto el interés jurídico para solicitar la nulidad; esta Juzgadora estima que si bien es cierto que de la solicitud de infracción administrativa no puede nacer el interés jurídico del presunto infractor para demandar la nulidad del registro marcario, pues el interés jurídico sólo puede derivar de una norma jurídica que tutele el derecho subjetivo que se invoca como violado; también es cierto que en la materia se cumple con ese requisito, ya que el derecho subjetivo a favor del presunto infractor se desprende de lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra indica:

> "Art. 87.- **Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten.** Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."
> (Lo resaltado es de esta Juzgadora)

Del texto del precepto se desprende el derecho subjetivo que tiene cualquier industrial, comerciante o prestador de servicios para usar marcas en la industria, en el

comercio o en los servicios que preste, con el fin de distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

En ese orden de ideas, la infracción que se puede atribuir a un particular no es el uso de marcas, sino que tratándose de marcas respecto de las cuales el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial determinó otorgar el registro, su uso es exclusivo para el titular del registro y es entonces cuando puede existir una infracción administrativa, cuando un tercero desconociendo ese derecho de exclusividad usa las marcas; sin embargo, el presunto infractor cuenta con el interés jurídico para que se determine si el registro que está limitando su esfera jurídica se otorgó conforme a derecho.

En otras palabras, como se indicó, el derecho subjetivo de cualquier industrial, comerciante o prestador de servicios para usar marcas deriva de la Ley de la materia, por lo que si el registro de una marca al otorgar el derecho de su uso exclusivo, limita la esfera jurídica del presunto infractor, es claro que este último cuenta con el interés jurídico para demandar la nulidad de ese registro cuando estime que no se otorgó conforme a la ley, ya que de obtener una resolución favorable a sus intereses, dejará de existir la limitación a su derecho subjetivo y por ende la comisión de la infracción que se le atribuye.

En ese orden de ideas, al no ser la conducta infractora el uso de marcas, sino el no respetar el derecho de uso exclusivo de una marca que surgió con motivo del registro, es claro que no se requiere para comprobar el interés jurídico el que se tenga que acreditar un uso anterior en el uso de la marca como lo pretende el actor.

En mérito de lo anterior, y toda vez que el criterio de este Pleno coincide con el de la autoridad en el sentido de que el presunto infractor cuenta con interés jurídico para demandar la nulidad del registro marcario que es origen del procedimiento de infracción administrativa, se debe reconocer la validez de la resolución impugnada en esa parte y declarar infundado el concepto de impugnación planteado por el actor.

(...)

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 236, 237, 239, fracción I y 239-A, fracción I, inciso b) del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- La parte actora no acreditó su pretensión.

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, por lo argumentado en esta sentencia.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de la presente resolución, devuélvase el expediente a la PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA, una vez que se haya resuelto en definitiva y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de abril de 2004, por unanimidad de 7 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Malpica de Lamadrid, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, María Guadalupe Aguirre Soria, Silvia Eugenia Díaz Vega, Luis Carballo Balvanera y María del Consuelo Villalobos Ortíz. Estuvieron ausentes los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Alma Peralta Di Gregorio, Manuel Luciano Hallivis Pelayo y Guillermo Domínguez Belloc.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se formuló el presente engrose el 7 de junio de 2004 y con fundamento en los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-SS-578

QUEJA IMPROCEDENTE.- CUANDO EXISTIENDO RESOLUCIÓN A UNA INSTANCIA DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, EL ACTOR PROMUEVE UNA SEGUNDA QUEJA.- El primer párrafo del artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación establece que en los casos de incumplimiento de sentencia firme o sentencia interlocutoria que hubiese otorgado la suspensión definitiva, la parte afectada podrá ocurrir en queja, por una sola vez, ante la Sala del Tribunal que dictó la sentencia, de acuerdo con las reglas que ahí se consignan. Ahora bien, si la actora promueve queja en contra de una sentencia firme y la Sala respectiva emite la sentencia que corresponde considerándola fundada y posteriormente el actor interpone una segunda queja en contra del supuesto incumplimiento de esa sentencia firme, es evidente que esta nueva queja es improcedente, pues la parte afectada sólo puede ocurrir en queja por una sola vez, con base en el citado precepto legal invocado. (10)

Juicio No. 1024/98-06-02-2/99-PL-07-04-QC.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de mayo de 2004, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista. (Tesis aprobada en sesión de 7 de mayo de 2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- (...)

Esta Juzgadora considera que la queja interpuesta por el hoy actor es improcedente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación. Dicho precepto establece:

"**ARTÍCULO 239-B.-** En los casos de incumplimiento de sentencia firme o sentencia interlocutoria que hubiese otorgado la suspensión definitiva, la parte afectada podrá ocurrir en queja, por una sola vez, ante la Sala del Tribunal que dictó la sentencia, de acuerdo con las siguientes reglas:
"**I.-** Procederá en contra de los siguientes actos:
"**a)** La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o que incurra en exceso o en defecto, cuando dicha resolución se dicte en cumplimiento de una sentencia.
"(...)"

Conforme a lo dispuesto por el primer párrafo de dicho precepto legal la queja se puede interponer por una sola vez ante la Sala del Tribunal que dictó la sentencia, en el caso, la actora ya agotó dicha instancia y no puede por segunda vez volver a interponerla.

Para mejor comprensión es pertinente relatar algunos antecedentes del caso:

A N T E C E D E N T E S

1.- En sentencia de 22 de septiembre de 1999 dictada por el Pleno de la Sala Superior del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, se resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada para los efectos asentados en la parte final del considerando quinto de ese fallo.

La parte final del considerando quinto de ese fallo, consignó:

"Efectivamente la autoridad impone la sanción de destitución al considerar que la actora no supervisó ni verificó que las estimaciones comprendieron únicamente trabajos ejecutados, la existencia de defectos en la obra y las fechas de terminación, así como la firma de las estimaciones por los residentes y no por los jefes de área, pero sin justificar jurídicamente la existencia de dichas obligaciones, por lo que resulta oportuno anular la resolución impugnada, para el

efecto de que la dependencia demandada lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado, conforme al artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos."

2.- En contra de esa sentencia la actora interpuso juicio de amparo, tocándole conocer por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien en el D.A.112/2000, en ejecutoria de 6 de abril de 2001, decidió sobreseer el juicio de garantías, conforme lo dispuesto por el artículo 74, fracción V de la Ley de Amparo.

3.- La autoridad por su parte en contra de la sentencia de 22 de septiembre de 1999, interpuso revisión fiscal, tocándole conocer por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien en ejecutoria de 6 de abril de 2001, en el R.F. 1012/2000, resolvió procedente pero infundado el recurso de revisión.

4.- La actora, en escrito de 3 de julio de 2001, presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Superior de este Tribunal, promueve queja en contra del acuerdo de 20 de junio de 2001, emitido por el Titular del Área de Responsabilidades de la Contraloría Interna en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual, en cumplimiento a la sentencia de 22 de septiembre de 1999, deja sin efectos la resolución de 29 de diciembre de 1997, dictada en el expediente administrativo Q.D. 796/97, y ordena remitir copia de este acuerdo a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, estos dos últimos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de ser procedente se restituya al C. RAÚL LUNA ARRIAGA en el goce de sus derechos en términos del artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

5.- Esta Sala Superior, en resolución de 16 de enero de 2002 resolvió la queja interpuesta. A continuación se reproduce la parte conducente de esta sentencia:

"Del acuerdo anterior se advierte que la autoridad que lo emite ordenó fundamentalmente dos aspectos, a saber: dejar sin efectos la resolución de 29 de diciembre de 1997, dictada en el procedimiento administrativo Q.D.796/97 que se le instauró al C. Raúl Luna Arriaga, en el que se le impuso la sanción consistente en destitución de su puesto y ordena remitir copia autorizada de ese acuerdo a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, estas dos últimas dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de ser procedente se restituya al C. Raúl Luna Arriaga en el goce de sus derechos en los términos del artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"La quejosa no se inconforma en contra de la primera decisión, esto es, de dejar sin efectos la resolución de 29 de diciembre de 1997, por lo que no será motivo de análisis por parte de esta Juzgadora, ya que evidentemente con ello cumple la autoridad con una parte del fallo en cuestión.

"Sin embargo, le asiste la razón a la quejosa cuando señala que la autoridad incurre en defecto en el cumplimiento de la sentencia de que se trata, pues ordena remitir copia de ese acuerdo a diversas dependencias, para que de ser procedente se restituya al actor en el goce de sus derechos, lo que no fue señalado en la sentencia que se cumplimenta, pues en ésta de manera tajante se ordenó restituir al actor en el goce de los derechos de que hubiese sido privado conforme a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"Es decir, no cabe la interpretación que realiza la autoridad en el oficio traído a queja, al ordenar que de ser procedente se le restituya al actor en el goce de sus derechos de los que fue privado, por lo que se incurre en defecto en el cumplimiento de la sentencia de 22 de septiembre de 1999 dictada por este Pleno de la Sala Superior.

"No es obstáculo para lo anterior el que la autoridad en su informe justificado señale que si bien se precisó en el acuerdo traído a queja que de ser procedente se restituya al servidor público en el goce de sus derechos, ello no le causa perjuicio, pues dice que se realizó con la finalidad de advertir o alertar a las autoridades competentes de que no existiera alguna circunstancia de carácter administrativo que impida dar el debido cumplimiento a la sentencia.

"Esa decisión autoritaria pretende interpretar y darle efectos diferentes a lo declarado en la sentencia de 22 de septiembre de 1999, pues es evidente que en dicha sentencia en ningún momento se precisó que la autoridad debiera restituir de sus derechos al servidor público en caso de ser procedente, por el contrario, ordenó dicha restitución al comprobar que no se justificó la existencia de las obligaciones que se le imputaron al actor.

"Razón por la cual es evidente que el acuerdo de que se trata incurre en defecto al cumplimentar la sentencia de 22 de septiembre de 1999.

"A mayor abundamiento, la autoridad al rendir el informe justificado señala que en el ámbito material y jurídico de su actuación, esa área de responsabilidades es únicamente como autoridad ordenadora y que la ejecución o anulación de las sanciones corresponde a otras Direcciones y que por ello ordenó a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que con base en el acuerdo de 20 de junio de 2001, en caso de ser procedente se restituya al actor en el goce de sus derechos de que hubiere sido privado.

"Lo que quiere decir que el acuerdo traído a queja es una orden para la ejecución o anulación de las sanciones respectivas, por lo que con mayor razón este acuerdo es ilegal y debe ser emitido apegándose a la sentencia que se pretende cumplimentar, para que la autoridad ejecutora realice la restitución de derechos respectivos.

"De todo lo anterior este Pleno concluye que en el caso existió defecto en el cumplimiento de la sentencia de 22 de septiembre de 1999, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 239-B, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, lo procedente es dejar sin efectos el acuerdo de 20 de junio de 2001, emitido por el Titular del Área de Responsabilidades de la Contraloría Interna en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la parte controvertida.

"En esa virtud, se concede al funcionario citado el plazo de 20 días para que dé cumplimiento debido a la sentencia de 22 de septiembre de 1999, en el entendido de que debe ordenar a las autoridades respectivas se restituya al C. Raúl Luna Arriaga en el goce de sus derechos en términos del artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 239-B, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

"**I.-** Es procedente y fundada la queja promovida por el actor, en consecuencia:

"**II.-** Se concede al funcionario responsable un plazo de 20 días para que dé cumplimiento debido a la sentencia de 22 de septiembre de 1999, dictada por esta Juzgadora, en los términos expuestos en este fallo.

"**III.-** Notifíquese.- Con copia autorizada del presente fallo, devuélvanse los autos a la Segunda Sala Regional Hidalgo-México, una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto, y en su oportunidad archívese este expediente."

De lo anterior se advierte que esta Juzgadora ya se pronunció sobre un escrito de queja promovido por el actor, por lo que éste ya no puede intentar una nueva queja, pues ésta sólo debe interponerse por una sola vez con fundamento en el primer párrafo del artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, el hoy actor, en escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el 16 de enero de 2004, interpone queja, en los términos siguientes:

> "Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 239-B, fracción I, incisos a) y b), del Código Fiscal de la Federación, promuevo queja por defecto e incumplimiento de lo ordenado en las sentencias dictadas por ese H. Órgano Colegiado en los juicios citados al rubro, mediante la cual se declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas para el efecto de que se me restituyera en el goce de los derechos de que fui privado en términos del artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
>
> "Lo anterior, en virtud de que la autoridad demandada en el juicio de nulidad citado al rubro, así como la dependencia en que prestaba mis servicios han incurrido en defecto y en incumplimiento de las sentencias dictadas por su Señoría, ya que no ha restituido al suscrito en el goce de los derechos laborales que tenía en su carácter de Director de Obras y Mantenimiento, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público **(Ahora Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial, de la Oficialía Mayor, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)** y mucho menos ha pagado los emolumentos, gratificaciones y demás prestaciones que como servidor público dejé de percibir desde el 17 de octubre de 1997.
>
> "Es procedente la queja que se intenta, en virtud de que la obligación directa y precisa de la autoridad demandada y de la dependencia en que presté mis servicios para cumplimentar las sentencias señaladas, deriva de las propias sentencias dictadas por ese H. Tribunal y del contenido del artículo 70, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en las que expresamente se les condenó a restituirme en los derechos de que fui privado, negándose lisa y llanamente que la (sic) autoridades señaladas hayan emitido acto alguno para cumplir completamente con lo ordenado en los fallos y numeral de referencia y para pronunciarse en cuanto a la restitución solicitada.

"Lo anterior, porque ha sido gracias a la insistencia del demandante, que las autoridades han dictado los oficios que se exhiben como prueba, en los que nunca se alude a cumplimentación alguna, lo que hace procedente la queja que se promueve, dado el incumplimiento parcial en que han incurrido las autoridades.

"Resultan aplicables al caso, para demostrar la procedencia de la queja que se promueve los siguientes criterios, tanto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como del Poder Judicial, que son del tenor siguiente:

" 'Instancia: Segunda Sala
" 'Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
" 'Tomo: VIII, Agosto de 1998
" 'Tesis: 2a./J. 51/98.
" 'Página: 397
" '**SERVIDORES PÚBLICOS. LA RESTITUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS DERECHOS DE QUE HUBIERAN SIDO PRIVADOS CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN SANCIONADORA DICTADA CON FUNDAMENTO EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE SEA ANULADA POR SENTENCIA FIRME DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDE ÍNTEGRAMENTE A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A LA QUE PRESTABAN SUS SERVICIOS.-** Establece el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y dos, que las sentencias firmes del Tribunal Fiscal de la Federación que anulen las resoluciones sancionadoras dictadas con fundamento en dicha ley, 'tendrán el efecto de que la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones anuladas'. Este artículo no hace distinción alguna respecto de los derechos que debe restituir al servidor público la dependencia o entidad en la que preste o haya prestado sus servicios cuando se declare la nulidad de la resolución sancionadora, por lo que aquélla

debe restituirlo en la totalidad de los derechos aludidos, incluidos los de carácter laboral, entre ellos, el de la reinstalación, el del pago de los salarios caídos cuando proceda o el de cualquier otra prestación o derecho que hubiera perdido el servidor público. Al artículo 70 citado no es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 6/92 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte con el rubro: 'DESTITUCIÓN DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS POR ORDEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN. ÉSTA DEBE PAGAR LOS SALARIOS CAÍDOS CUANDO ES ANULADA LA ORDEN', en la que se sostiene que tratándose de los trabajadores mencionados al patrón corresponde sólo reinstalarlos, mientras que a la secretaría mencionada toca cubrir los salarios caídos porque aquél no actuó por voluntad propia sino acatando la orden de la secretaría, en virtud de que la jurisprudencia de referencia se estableció al interpretar el artículo 70 antes de su reforma, mismo que no precisaba a quién correspondía restituir al servidor público en el goce de sus derechos en el supuesto aludido.

" 'Contradicción de tesis 81/97. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Sexto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

" 'Tesis de jurisprudencia 51/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del veintidós de mayo de mil novecientos noventa y ocho.'

" 'Cuarta Época
" 'Instancia: Segunda Sección
" 'R.T.F.F.: Año II. No. 11. Junio 1999.
" 'Tesis: IV-TA-2aS-37
" 'Página: 198

" '**LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DENTRO DEL PLAZO SE DEBE ORDENAR Y EJECUTAR LO RESUELTO EN ELLAS.-** Los artículos 239 y 239-B del Código Fiscal de la Federación, conceden los plazos de cuatro meses y veinte días para que se dé cabal cumplimiento a las sentencias -definitivas o de queja- respectivamente, dictadas por el Tribunal Fiscal de la Federación. Esto es, dentro de ese lapso, los funcionarios responsables están obligados a realizar tanto la orden como la ejecución de lo resuelto por este Órgano Jurisdiccional a través de su sentencia; por lo que, tratándose de restituir a un servidor público, sancionado administrativamente, en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de la sanción anulada, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; para liberar su responsabilidad, **corresponde a la autoridad ordenadora o impositora de la sanción, dar un plazo razonable a la ejecutora, dependencia en la que el funcionario prestaba sus servicios, a fin de que ésta pueda completar el trámite en tiempo. Por lo tanto, la sentencia que ordena la restitución de tales derechos, sólo puede satisfacer el interés jurídico del servidor público afectado, cuando se llevan acabo ambos trámites**, esto es, la orden de reinstalación en el cargo que desempeñaba, y su ejecución con el pago de los salarios que no le hayan sido cubiertos, dentro del plazo correspondiente. (12)

" 'Juicio No. 100(19)8/98/(A)-II-1196/96/3274/95.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 28 de enero de 1999, por mayoría de 3 votos a favor y 1 en contra.- Magistrada Ponente: María Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Salvador Jesús Mena Castañeda.
" '(Tesis aprobada en sesión de 4 de marzo de 1999)'

"A continuación se citan los antecedentes del caso, así como la actuación de la autoridad, para demostrar plenamente que ha existido defecto e incumplimiento por parte de las autoridades a las sentencias dictadas por su Señoría.

"**1.** A partir del 1 de octubre de 1996 presté mis servicios como Director de Obras y Mantenimiento, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"**2.** Las supuestas irregularidades por las que fui sancionado derivan de que tomé parte en el programa nacional de remodelación de las aduanas fronterizas de nuestro país, en el cual, una vez concluido, se me otorgó un reconocimiento oficial y por escrito por mi buen desempeño.

"**3.** Mediante acuerdo de **17 de octubre de 1997**, fui suspendido temporalmente de mi encargo, por el C. Contralor Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"**4.** Se hace notar, que las autoridades, no obstante que se trataba de un solo programa de obra, lo dividieron en siete supuestas irregularidades, dando lugar así a los consecuentes procedimientos administrativos y jurisdiccionales, culminando estos últimos el día 28 de octubre de 2002 fecha en que dictó la última de las sentencias en los juicios de nulidad que me vi obligado a promover para demostrar mi inocencia, de los cuales en orden cronológico, se aprecia lo siguiente:

"**a.** Resolución de fecha 29 de diciembre de 1998 dictada en el **expediente No. QD-786/97** que dio lugar al juicio de nulidad número: **1024/98-06-02-2/99-PL-07-04**, resuelto por el Pleno de la Sala Superior de ese Tribunal mediante sentencia definitiva de fecha 22 de septiembre de 1999, anulándose la sanción consistente en la **DESTITUCIÓN DEL PUESTO**.

"**b.** Resolución de fecha 1 de septiembre de 1998, dictada en el **expediente QD-796/97**, que dio lugar al juicio de nulidad número **3016/98-06-02-2/99-PL-04-04**, resuelto por el Pleno de la Sala Superior de ese H. Tribunal mediante sentencia de 1 de diciembre de 1999 anulándose la sanción consistente en la **INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO POR DOS AÑOS**.

"**c.** Resolución de fecha 26 de enero de 1999, dictada en el **expediente QD-6/98**, que dio lugar al juicio de nulidad número **1291/99-06-01-2/253/00-PL-05-04**, resuelto por el Pleno de la Sala Superior de ese H. Tribunal mediante sentencia de 9 de agosto de 2000, notificada al demandante el 28 de septiembre del 2000, anulándose la sanción consistente en la **INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO POR TRES AÑOS**.

"**d.** Resolución de fecha 13 de abril de 1999, dictada en el **expediente QD-24/98**, que dio lugar al juicio de nulidad número **2416/99-06-02-9**, resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo México de ese H. Tribunal mediante sentencia de 24 de septiembre de 2001, notificada al demandante el 15 de octubre de 2001, anulándose la sanción consistente en la **INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO POR DOS AÑOS**. En este caso, la autoridad dejó sin efectos la resolución impugnada (12 de junio de 2001) cuando todavía estaba pendiente de resolución el recurso de revisión y el amparo interpuestos por la (sic) partes, mismos que se resolvieron el 13 de mayo de 2002.

"**e.** Resolución de fecha 15 de octubre de 1999, dictada en el **expediente QD-28/98**, que dio lugar al juicio de nulidad número **340/00-06-01-4**, resuelto por la Primera Sala Regional Hidalgo México de ese H. Tribunal mediante sentencia de 24 de septiembre de 2001, notificada al demandante el 15 de octubre de 2001, anulándose la sanción consistente en la **INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO POR CUATRO AÑOS**.

"**f.** Resolución de fecha 14 de agosto de 2001, dictada en el **expediente QD-38/2001**, que dio lugar al juicio de nulidad número **16816/01**, resuelto por la Sexta Sala Regional Metropolitana de ese H. Tribunal mediante resolución de 28 de octubre de 2002, notificada al demandante el 21 de septiembre de 2002, sobreseyéndose el juicio, ya que se dejó sin efecto la sanción consistente en la **DESTITUCIÓN DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN E INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO POR TRES AÑOS**.

"**5.** Las sentencias antes mencionadas quedaron firmes, ya que se confirmaron por los Tribunales de Alzada que conocieron de los recursos de Revisión interpuestos por la autoridad demandada y no obstante que se resolvieron en fechas diferentes y algunos con mucha antelación, fue hasta la emisión de la última de ellas, cuando ya se estaba en posibilidades de restituirme totalmente en los derechos de que fui privado.

"Situación que se confirma, al ser reconocida expresamente por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del oficio 1832/03 de 27 de agosto de 2003 que se exhibe como prueba, en el que se me informa que ya es procedente restituirme en el goce de los derechos laborales de que fui privado.

"**6.** En el oficio 1832/03 de 27 de agosto de 2003 el Titular del Área de Responsabilidades, del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público me informó y señaló expresamente también que es procedente la restitución prevista en el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"**7.** Ante la inactividad de la dependencia en que prestaba mi (sic) servicios y de la autoridad demandada en los juicios de nulidad, mediante escrito de fecha 2 de diciembre de 2003, solicité se diera cumplimiento a lo ordenado en las sentencias dictadas por ese H. Tribunal, toda vez que no se había dado cumplimiento total y estricto a las mismas.

"**8.** En respuesta a mi solicitud, el C. Coordinador Administrativo, de la Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial, quien actualmente es el encargado de restituirme en los derechos de que fui privado, dictó el oficio número 1661 de 4 de diciembre de 2003, despachado al día siguiente y notificado al suscrito el 8 de diciembre del mismo año, mediante el cual señala que se encuentra jurídica y presupuestalmente imposibilitada para atender mi petición, ya que no dispone de la plaza laboral que me corresponde, actuación que de acuerdo a la misma autoridad se realizó en supuesto cumplimiento al artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"De los antecedentes relatados, se observa el defectuoso y parcial cumplimiento efectuado por las autoridades de lo ordenado en las sentencias dictadas por ese H. Tribunal, no obstante que reconocen expresamente que los fallos referidos han quedado firmes y que es procedente la aplicación en mi favor de lo que dispone el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reconocimiento que hace prueba plena en su contra.

"Se dice que existe un cumplimiento defectuoso, toda vez que, de acuerdo con los criterios transcritos al inicio de esta promoción, corresponde a las autoridades demandadas y a la dependencia en que presté mis servicios, no sólo dejar sin efectos las sanciones administrativas impuestas, sino realizar todos y cada uno de los trámites administrativos para restituirme en el goce de todos los derechos de que fui privado, entre los que se incluyen en forma enunciativa mas no limitativa, la reinstalación en mi puesto, el pago de sueldos y demás emolumentos no percibidos, los cuales hasta la fecha no han sido cubiertos al suscrito.

"En esas condiciones, resulta ilegal, que en el oficio 1661 de 4 de diciembre de 2003, se aluda a que no se tiene la plaza laboral respectiva para reinstalarme en ella y más aún que se diga que será hasta que se notifique la existencia de la plaza para extender la constancia de nombramiento.

"Lo anterior, porque las autoridades pasan por alto, que no se está solicitando el otorgamiento de una plaza, sino el cumplimiento de lo ordenado en las diversas sentencias dictadas por ese H. Tribunal, en las que se demostró la ilegalidad de las sanciones impuestas, haciendo procedente la aplicación del artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"De tal manera, que al tratarse de un cumplimiento de sentencias, la autoridad no puede escudar su actitud omisa en que supuestamente a la fecha no existe la plaza correspondiente, sino que debe señalar qué se hizo con la plaza de que fui despojado y a quién se entregaron los (sic) prestaciones económicas y laborales de que fui privado.

"Así también, se considera que existe incumplimiento parcial, porque no obstante que las autoridad (sic) han dejado sin efecto las resoluciones impugnadas y dictado los oficios que se han señalado, lo cierto es, que de ellos no se desprende cumplimiento íntegro alguno y, tan es así, que a la fecha me encuentro desempleado, situación que inició el día 17 de octubre de 1997, fecha en que formalmente fui separado de mi cargo.

"**Consecuentemente, será desde el día en que fui separado de mi cargo y hasta la fecha en que sea reinstalado en mi cargo, en que se deberán computar todas y cada una de las prestaciones laborales que dejé de percibir, cantidades que se solicita se ordene a las autoridades especificar una a una y claramente para estar en posibilidad de comprobar que su monto sea correcto.**

"**No obsta lo anterior, el que las autoridades señalen que han emitido oficios en los que se requería mi presencia para firmar el nombramiento correspondiente, toda vez que a la fecha de dichos documentos, todavía estaban pendientes de resolverse los juicios que he mencionado, por lo que se consideró pertinente contestar a la autoridad en ese sentido, ya que de haber firmado tales nombramientos hubiese incurrido en responsabilidad administrativa, dado que fui inhabilitado para ocupar cargos**

públicos por un término total de 14 años, tal y como consta en el oficio 1832/03 de 27 de agosto de 2003, inhabilitación que concluiría hasta el año 2011.

"Asimismo informo a esa H. Sala que interpondré 3 quejas más ante las Salas Regionales Hidalgo México y Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por ser los órganos que resolvieron los 3 juicios restantes.

"**Por último, me reservo el derecho de solicitar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del 13 de junio de 2003, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio del mismo año, el pago de los daños y perjuicios causados con la actuación de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, ya que he sufrido severo perjuicio en mi economía y en el desarrollo de mi profesión.**"

Cabe agregar además que la actora junto con su escrito de queja anexa tres oficios, a saber:

1) El oficio 303.IV.-1661 de 4 de diciembre de 2003, emitido por el Coordinador Administrativo de la Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial, a través del cual comunica al hoy actor que hasta en tanto la Dirección General de Recursos Humanos de esa Dependencia no notifique la existencia y autorización de la plaza requerida conforme a las atribuciones que le son inherentes en términos del artículo 67, fracciones II, III, V y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esa Coordinación Administrativa se ve imposibilitada materialmente para extender una constancia de nombramiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL, OBRA PÚBLICA Y ACERVO PATRIMONIAL.
COORDINACION ADMINISTRATIVA

"2003 Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria".

Oficio 303/V- - 1661

México, D.F., a 4 de diciembre de 2003.

C. RAUL LUNA ARRIAGA.
Calle Varsovia número 57, segundo piso
Colonia Juárez, Código Postal 06600,
México Distrito Federal
P r e s e n t e.

En atención a su escrito de fecha 2 de diciembre del actual y por medio del cual solicita a esta Coordinación Administrativa de la Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial, se de cumplimiento a las diversas resoluciones de restitución de derechos que han sido emitidas en los diversos expedientes disciplinarios que le fueran instruidos por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito comunicarle lo siguiente.

En los términos que dispone el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la restitución de derechos que se alude, deberá realizarse sin prejuicio de lo que establezcan otras leyes.

En ese contexto y de conformidad con los artículos 126 de la Constitución Federal; 1, 2 y 3 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 1, 39, 51 y 59 del Reglamento de la citada Ley; así como lo consignado en el respectivo Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente Ejercicio Fiscal, esta Coordinación Administrativa se ve imposibilitada jurídica y presupuestalmente para dar atención a su requerimiento, toda vez que por el momento en la estructura orgánica funcional vigente y autorizada para la Dirección General no dispone de la plaza laboral respectiva.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, OTORGAMIENTO DE PLAZAS A LOS. REQUISITOS.

Para que a un trabajador al servicio del Estado pueda otorgársele el nombramiento para un puesto determinado, es necesario que la plaza esté vacante y precisamente contenida en el presupuesto de egresos de la Federación, pues es evidente que no puede designarse a una persona para ocupar un puesto no previsto presupuestalmente, porque no existiría partida para pagarle sus emolumentos.

Amparo directo 1827/71. Soledad Carolina Fernández Manzo. 15 de octubre de 1971. 5 votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OFICIALIA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL, OBRA PÚBLICA Y ACERVO PATRIMONIAL.
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Consecuentemente y hasta en tanto la Dirección General de Recursos Humanos de esta Dependencia no notifique la existencia y autorización de la plaza respectiva conforme a las atribuciones que le son inherentes en los términos del artículo 67, fracciones II, III, V, y XII del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, esta Coordinación Administrativa se ve imposibilitada materialmente para extender una constancia de nombramiento.

Lo anterior se hace de su conocimiento en cumplimiento del artículo octavo constitucional así como de lo dispuesto por el diverso 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin otro particular, se envía un cordial saludo.

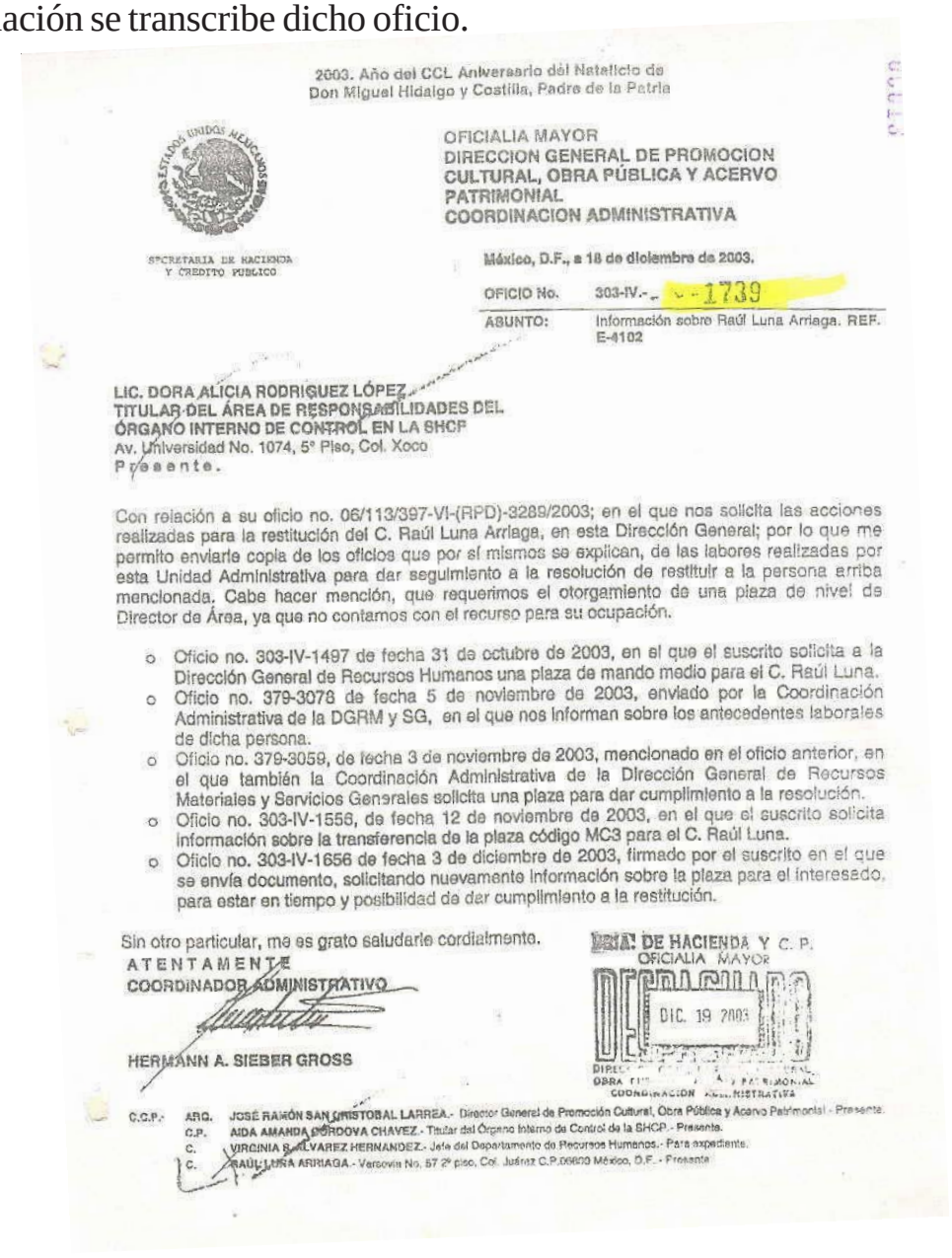
SEHA. DE HACIENDA Y C. P.
OFICIALIA MAYOR
DIC. 5 2000
CULTURAL,
PATRIMONIAL
NISTRATIVA

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO.

HERMANN A. SIEBER GROSS.

C.c.p. LIC. LUIS MANUEL GUTIERREZ LEVY.- Oficial Mayor del Ramo - Para su superior conocimiento y en atención al escrito del promovente.-Presente.
C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ.- Titular del Órgano Interno de Control en la SHCP.- Presente
ARQ. JOSE RAMON SAN CRISTOBAL LARREA.- Director General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial.- Presente.
LIC. DORA ALICIA RODRIGUEZ LOPEZ.- Titular del Área de Responsabilidades.- Presente
LIC. GUILLERMO I. GONZALEZ AVILA.-Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Presente
LIC. JORGE FELIX CORTES.- Director General de Recursos Humanos.- Presente 9/58.53 47
LIC. JOSE LUIS GARCIA RAMOS LARRAUDI.-Director General Adjunto de Relaciones Laborales.- Presente
LIC. ANTONIO DEL RIO BALLESTEROS.- Director General Adjunto de Presupuesto y Pagos.- Presente

2) El oficio 303-IV-1739 de 19 de diciembre de 2003, emitido por el Coordinador Administrativo de la Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial, dirigido al Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual envía diversos oficios que explican las acciones realizadas por esta unidad administrativa para dar seguimiento a la resolución de restituir al C. RAÚL LUNA ARRIAGA. A continuación se transcribe dicho oficio.



2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de
Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL, OBRA PÚBLICA Y ACERVO PATRIMONIAL
COORDINACION ADMINISTRATIVA

México, D.F., a 18 de diciembre de 2003.

OFICIO No. 303-IV.- 1739

ASUNTO: Información sobre Raúl Luna Arriaga. REF. E-4102

LIC. DORA ALICIA RODRIGUEZ LÓPEZ
TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SHCP
Av. Universidad No. 1074, 5° Piso, Col. Xoco
P r e s e n t e.

Con relación a su oficio no. 06/113/397-VI-(RPD)-3289/2003; en el que nos solicita las acciones realizadas para la restitución del C. Raúl Luna Arriaga, en esta Dirección General; por lo que me permito enviarle copia de los oficios que por sí mismos se explican, de las labores realizadas por esta Unidad Administrativa para dar seguimiento a la resolución de restituir a la persona arriba mencionada. Cabe hacer mención, que requerimos el otorgamiento de una plaza de nivel de Director de Área, ya que no contamos con el recurso para su ocupación.

- Oficio no. 303-IV-1497 de fecha 31 de octubre de 2003, en el que el suscrito solicita a la Dirección General de Recursos Humanos una plaza de mando medio para el C. Raúl Luna.
- Oficio no. 379-3078 de fecha 5 de noviembre de 2003, enviado por la Coordinación Administrativa de la DGRM y SG, en el que nos informan sobre los antecedentes laborales de dicha persona.
- Oficio no. 379-3059, de fecha 3 de noviembre de 2003, mencionado en el oficio anterior, en el que también la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales solicita una plaza para dar cumplimiento a la resolución.
- Oficio no. 303-IV-1556, de fecha 12 de noviembre de 2003, en el que el suscrito solicita información sobre la transferencia de la plaza código MC3 para el C. Raúl Luna.
- Oficio no. 303-IV-1656 de fecha 3 de diciembre de 2003, firmado por el suscrito en el que se envía documento, solicitando nuevamente información sobre la plaza para el interesado, para estar en tiempo y posibilidad de dar cumplimiento a la restitución.

Sin otro particular, me es grato saludarle cordialmente.
ATENTAMENTE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

HERMANN A. SIEBER GROSS

SHCP. DE HACIENDA Y C. P.
OFICIALIA MAYOR
DIC. 19 2003
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL, OBRA PÚBLICA Y ACERVO PATRIMONIAL
COORDINACION ADMINISTRATIVA

C.C.P.- ARQ. JOSÉ RAMÓN SAN CRISTOBAL LARREA.- Director General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial.- Presente.
C.P. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHAVEZ.- Titular del Órgano Interno de Control de la SHCP.- Presente.
C. VIRGINIA B. ALVAREZ HERNANDEZ.- Jefe del Departamento de Recursos Humanos.- Para expediente.
C. RAÚL LUNA ARRIAGA.- Versovia No. 57 2° piso, Col. Juárez C.P.06600 México, D.F.- Presente

3) El oficio 06/113/397-VI(MHO)-1832 de 27 de agosto de 2003, emitido por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual informa al hoy actor del estado que guardan los expedientes administrativos instaurados en su contra. A continuación se reproduce tal oficio.

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
A PARTIR DEL 11 DE ABRIL DE 2003
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

QD-786/97
QD-796/97
QD-6/98
QD-24/98
QD-28/98
QD-38/98

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO
ÁREA DE RESPONSABILIDADES
06/113/397-VI-(MHO)- 1832 /03

Asunto: Se informa sobre los expedientes administrativos instruidos en su contra

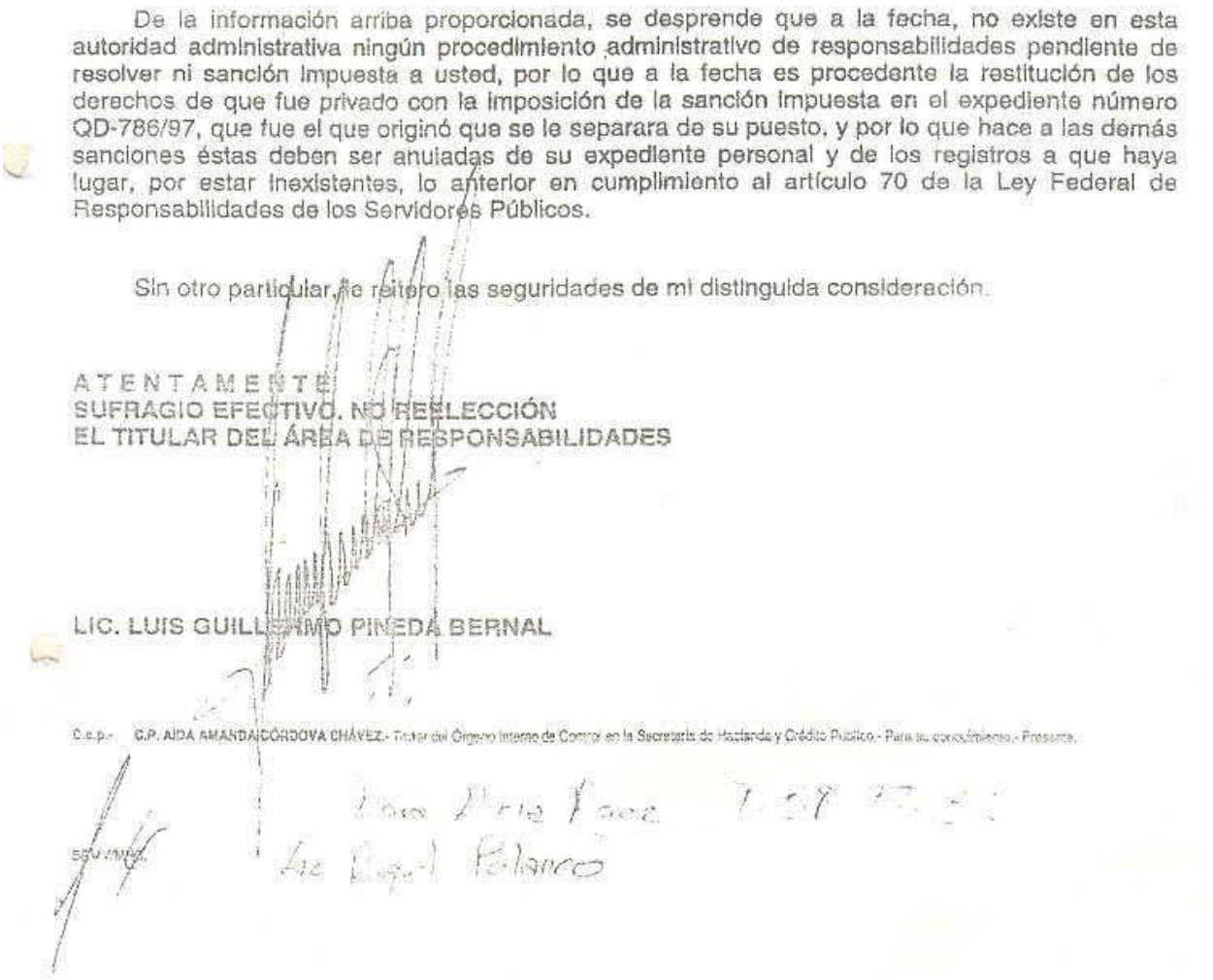
México, D.F., 27 AGO. 2003

"2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de
Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria"

C. RAÚL LUNA ARRIAGA
Calle Varsovia número 57, Segundo Piso,
Colonia Juárez, Código Postal 06600
México, Distrito Federal

Como es de su conocimiento, en este Órgano Interno de Control se instauraron diversos expedientes administrativos disciplinarios en contra su contra, imponiéndole sanciones administrativas de distinta naturaleza; razón por la cual me permito comunicar a usted, el estado procesal que guardan éstos:

No. DE EXPEDIENTE ADMTVO. Y JUICIO DE NULIDAD	SANCIÓN IMPUESTA	SENTENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO PROCESAL
QD-786/97 J.N. (21)024/98-II	DESTITUCIÓN DEL PUESTO	22-SEPTIEMBRE-1999 NULIDAD PARA EFECTOS DE QUE SE LE RESTITUYA EN EL GOCE DE LOS DERECHOS DE QUE HUBIESE SIDO PRIVADO, CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LFRSP	13-MARZO-2002 NOTIFICADO AL INTERESADO EL 20 DEL MISMO MES Y AÑO	CONCLUIDO, ESTANDO YA INEXISTENTE LA SANCIÓN IMPUESTA
QD-796/97 J.N. (2)3016/98-II	INHABILITACIÓN POR 2 AÑOS	1º-DICIEMBRE-1999 NULIDAD PARA EFECTOS DE QUE SE LE RESTITUYA EN EL GOCE DE LOS DERECHOS DE QUE HUBIESE SIDO PRIVADO, CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LFRSP	25-MARZO-2002 NOTIFICADO AL INTERESADO EL 03 DE ABRIL DEL MISMO AÑO	CONCLUIDO, ESTANDO YA INEXISTENTE LA SANCIÓN IMPUESTA
QD-6/98 J.N. 1291/99	INHABILITACIÓN POR 3 AÑOS	09-AGOSTO-2000 NULIDAD LISA Y LLANA	05-MARZO-2001 NOTIFICADO AL INTERESADO EL 15 DEL MISMO MES Y AÑO	CONCLUIDO, ESTANDO YA INEXISTENTE LA SANCIÓN IMPUESTA
QD-24/98 J.N. 2418/99-06-02-9	INHABILITACIÓN POR 2 AÑOS	24-SEPTIEMBRE-2001 NULIDAD LISA Y LLANA	12-JUNIO-2001 NOTIFICADO AL INTERESADO EL 14 DEL MISMO MES Y AÑO	CONCLUIDO, ESTANDO YA INEXISTENTE LA SANCIÓN IMPUESTA
QD-28/98 J.N. 540/00-06-01-4	INHABILITACIÓN POR 4 AÑOS	28-FEBRERO-2002 NULIDAD PARA EFECTOS DE QUE SE LE RESTITUYA EN EL GOCE DE LOS DERECHOS DE QUE HUBIESE SIDO PRIVADO, CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos	18-AGOSTO-2003 NOTIFICADO AL INTERESADO EL 21 DEL MISMO MES Y AÑO	CONCLUIDO, ESTANDO YA INEXISTENTE LA SANCIÓN IMPUESTA
QD-38/01 J.N. 16816/01	DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN POR 3 AÑOS	28-OCTUBRE-2002 SE SOBRESEYÓ EL JUICIO DE NULIDAD A PETICIÓN DE ESTA AUTORIDAD, POR HABERSE DEJANDO SIN EFECTOS MEDIANTE ACUERDO DEL 03-OCTUBRE-2002 LA SANCIÓN IMPUESTA	03-OCTUBRE-2002 ESTA AUTORIDAD DEJÓ SIN EFECTOS LAS SANCIÓN IMPUESTA NOTIFICADO AL INTERESADO EL 07 DEL MISMO MES Y AÑO	CONCLUIDO, ESTANDO YA INEXISTENTE LA SANCIÓN IMPUESTA



De la información arriba proporcionada, se desprende que a la fecha, no existe en esta autoridad administrativa ningún procedimiento administrativo de responsabilidades pendiente de resolver ni sanción impuesta a usted, por lo que a la fecha es procedente la restitución de los derechos de que fue privado con la imposición de la sanción impuesta en el expediente número QD-786/97, que fue el que originó que se le separara de su puesto, y por lo que hace a las demás sanciones éstas deben ser anuladas de su expediente personal y de los registros a que haya lugar, por estar inexistentes, lo anterior en cumplimiento al artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

LIC. LUIS GUILLERMO PINEDA BERNAL

C.c.p.- C.P. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Para su conocimiento.- Presente.

Como se advierte del escrito de queja la actora pretende acreditar el incumplimiento que se ha dado a las sentencias emitidas por este Cuerpo Colegiado, sin embargo, como ya se ha señalado, dicha queja es improcedente atento a lo dispuesto por el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que con antelación la hoy actora había promovido escrito de queja, el cual fue resuelto en resolución de 16 de enero de 2002 por esta Juzgadora.

En consecuencia, si la actora ya agotó el derecho establecido en el precepto citado y ahora pretende volver a ejercerlo, es evidente que la queja de que se trata resulta improcedente.

Por lo expuesto y con fundamento en el primer párrafo del artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I. Es improcedente la queja promovida por el actor.

II. NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de mayo de 2004, por mayoría de 7 votos a favor de los CC. Magistrados Licenciados Luis Malpica de Lamadrid, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Silvia Eugenia Díaz Vega, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Luis Carballo Balvanera y María del Consuelo Villalobos Ortíz y 3 votos en contra de los CC. Magistrados Licenciados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Alma Peralta Di Gregorio y María Guadalupe Aguirre Soria quien se reserva su derecho para formular voto particular, estando ausente el C. Magistrado Licenciado Guillermo Domínguez Belloc.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 19 de mayo de 2004, y con fundamento en lo previsto por los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, ante la Secretaria General de Acuerdos: Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

V-P-SS-579

MULTAS IMPUESTAS EN MATERIA AMBIENTAL.- REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 3º, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se establece que el acto administrativo debe estar fundado y motivado, por lo que, si la autoridad en materia ambiental impone sanciones por violación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con los Reglamentos en materia de Residuos Peligrosos y en materia de Impacto Ambiental y en la Ley mencionada en primer término, se permite la aplicación de criterios y listados que clasifiquen los materiales y residuos peligros por su grado de peligrosidad, considerando sus características y volúmenes; la autoridad deberá fundar debidamente su acto, especificando qué debe entenderse por residuos peligrosos y actividades altamente riesgosas, a fin de estar en posibilidad de concluir que por dicha situación la presunta infractora se encontraba obligada a contar con la autorización en el manejo de residuos peligrosos y el estudio de riesgo ambiental para actividades altamente riesgosas, respecto de las actividades que desempeñe. (11)

Juicio No. 9316/02-17-09-4/144/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de mayo de 2004, por mayoría de 7 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de mayo de 2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

QUINTO.- (...)

Este Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, estima **FUNDADO** el concepto de impugnación resumido por las siguientes consideraciones.

A fin de ubicarnos en la materia del presente asunto es de señalar los siguientes antecedentes:

A N T E C E D E N T E S

1.- Que el 15 de junio de 1999, se emitió la orden de visita número E00-SVI-DGII-001535.

2.- Que el 15 de junio de 1999, se practicó la visita en cumplimiento de la orden mencionada en el punto anterior, levantando el acta de inspección número 15-104-0073/99EX, en la que se encontraron las supuestas irregularidades consistentes en:

- No contar con la autorización para el manejo, transporte y recepción para enjuague de galvanoplastía y aceite usado, considerados por la autoridad como residuos peligrosos.

- No contar con estudio de riesgo ambiental, tramitado ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

- No presentar ante el Instituto Nacional de Ecología, el estudio de riesgo ambiental para aquellas actividades consideradas altamente riesgosas.

3.- Que el 6 de agosto de 2001, se emitió la primera resolución sancionatoria contenida en el oficio 404/01-D, derivada de dicha visita, en la que se impusieron las sanciones económicas en cantidad de $8,070.00 y $16,140.00.

4.- Que el 31 de agosto de 2001, se emitió la segunda resolución sancionadora contenida en el oficio 1265/01, derivada de la misma visita de inspección, en la que se impuso la sanción económica en cantidad de $4,035.00.

5.- Que el 15 de octubre de 2001, se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución sancionadora de 6 de agosto de 2001, al cual recayó la resolución de 19 de marzo de 2002, emitida por el Procurador Federal de Protección al Ambiente, en la cual confirmó la sanción mencionada resolución que es la impugnada en el presente juicio.

6.- Que el 13 de diciembre de 2001, se interpuso un diverso recurso de revisión en contra de la resolución sancionadora de 31 de agosto de 2001, al cual recayó la diversa resolución de 19 de marzo de 2002, emitida por el Procurador Federal de Protección al Ambiente, en la cual confirmó la sanción mencionada, resolución que es la impugnada en el presente juicio.

Hechas las precisiones anteriores es de señalar que esta Juzgadora a continuación determinará lo resuelto por la autoridad sancionadora y con posterioridad entrará al estudio de las conductas infractoras atribuidas descritas en el inciso a) anterior, relativa a no contar con la autorización para el manejo, transporte y recepción de enjuague de galvanoplastía y aceite usado, y en el inciso b) anterior, relativa a no contar con el estudio de riesgo tramitado ante la autoridad competente.

I. Del análisis practicado a la primera resolución sancionadora recurrida contenida en el oficio número 404/01-D de 6 de agosto de 2001, emitida por el Delegado de la Zona Metropolitana del Valle de México de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se desprende que se impuso dos sanciones económicas en cantidad de $8,070.00 y $16,140.00, por la actualización de las conductas infractoras consistentes en:

a).- No contar con la autorización para el manejo, transporte y recepción para enjuague de galvanoplastía y aceite usado, conforme a lo dispuesto en los artículos 150, 151 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 10 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

b).- No contar con estudio de riesgo, tramitado ante la Secretaría, conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 6 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental.

Lo anterior, se constata del contenido de dicha resolución recurrida, a foja 107 del expediente, que en su parte conducente, indica lo siguiente:

RESOLUCIÓN RECURRIDA 404/01-D
DE 6 DE AGOSTO DE 2001

"R R 404/01-D folios 107-110

"PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
"DELEGACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.

"EXPEDIENTE No. 0687369070
"RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 404/01-D

"En Tecamachalco, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis del mes de agosto del año dos mil uno.----------
Visto para resolver el procedimiento administrativo instaurado por esta Procuraduría al establecimiento denominada DISEÑO EN PLATA, S.A. DE C.V., con domicilio en Mariano Escobedo número 157, Fraccionamiento Industrial Tlalnepantla, Municipio Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54030.-
---------- RESULTANDO----------
1.- Que esta Procuraduría emitió la orden de visita número E00-SVI-DGII.-001535 de fecha quince de junio de mil novecientos noventa y nueve, en cuyo cumplimiento se efectuó la visita de fecha dieciséis (SIC) de junio de mil novecientos noventa y nueve, al establecimiento citado al rubro, circunstanciándose el acta de inspección número 15-104-0073/99Ex. Asimismo, con fecha doce

de agosto de mil novecientos noventa y nueve, se emplazó al establecimiento para que manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que consideraran convenientes en relación a lo circunstanciado en el acta antes mencionada, haciendo uso de ese derecho el representante legal del establecimiento, mediante los escritos de fechas dieciocho de junio y veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en el que ofreció las pruebas que estimó pertinentes y que fueron desahogadas oportunamente, abriéndose el período respectivo para que el establecimiento formulara sus alegatos. ---------- Por lo que vencido el periodo de alegatos, sin que el interesado haya hecho uso de ese derecho, se envían los autos a resolución, y .-------

"(...)

"II.- Que de lo circunstanciado en la acta señalada en el resultando, se desprende que al momento de la visita realizada al establecimiento, y considerando el giro del mismo, se detectaron los hechos u omisiones en la siguiente materia:----------

RESIDUOS PELIGROSOS 1.- No cuenta con la autorización para el manejo, transporte y recepción para **enjuague de galvanoplastía y aceite usado**.-

---

RIESGO.- 2.- No contaba con estudio de riesgo, tramitado ante esta Secretaría.---------- Respecto de las mencionadas irregularidades es de señalar que con las pruebas aportadas por el establecimiento y con las constancias que obran en autos, desahogadas y valoradas conforme a lo dispuesto por los artículos 93 fracciones II y III, 129, 133, 197, 200, 202, 203, 207 y 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en este procedimiento, durante la prosecución del presente procedimiento, se acreditan las irregularidades 1 y 2 no fueron subsanadas ni desvirtuadas.---------- Por las irregularidades no desvirtuadas el establecimiento infringió las disposiciones ambientales en la siguiente materia:----------

---

RESIDUOS PELIGROSOS: Los artículos **150, 151** de la Ley General del

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 10, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos.----------

RIESGO.- Los artículos 30 y 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 6° del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de evaluación de Impacto Ambiental.----------

Riesgo.- Las anteriores infracciones por la realización de actividades altamente riesgosas se presentan porque la empresa no ha determinado la probabilidad de la gravedad o magnitud que pueda ocasionar en la flora, fauna, ecosistemas, el ambiente o la población, el manejo de materiales peligrosos, en cantidades superiores a la cantidad de reporte, en caso de producirse una liberación, sea por fuga o derrame o bien una explosión, por causas naturales o derivadas de la actividad humana. En cuanto a los trámites de carácter administrativo: Con las consistentes en que el establecimiento no gestionó su documentación ante la autoridad ambiental federal, omitió proporcionar la información necesaria que permitiera relacionar los contaminantes que genera en su proceso productivo y los posibles efectos ambientales que pusiesen (sic) provocar, de forma que se puedan prevenir y disminuir los daños al ambiente y a la salud pública.-

---

-------- Por lo que hace a la valoración de la situación económica, es de considerarse que según los datos que obran en este expediente, el establecimiento no proporcionó su capital social, cuenta con 212 trabajadores, su maquinaria y equipo que se relaciona en una foja que obran en el expediente en que se actúa con número de folio 039 por lo que se considera que sus condiciones económicas son suficientes para respaldar sus infracciones ambientales.----------

Por todo lo anterior y considerando además, el análisis de la reincidencia, de la intencionalidad y negligencia, del beneficio obtenido por el establecimiento al cometer las infracciones, así como de las causas de atenuantes y agravantes correspondientes, procede imponer al establecimiento las siguientes sanciones por materia: ----------

En materia de riesgo.- **$8,070.00 (ocho mil setenta pesos 00/100 M.N.)**

equivalente a **200 días** de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de imponer la sanción.---------- En materia de residuo peligroso.- **$16,140.00 (dieciséis mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.)** equivalente a **400 días** de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el momento de imponer la sanción.----------Por lo que se impone al establecimiento una multa por la cantidad de **$24,210.00 (veinticuatro mil doscientos diez pesos 00/100 M.N.)**, equivalentes a **600 días** de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de la sanción. ----------
-------III.- Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se requiere al establecimiento para que dentro de un plazo no mayor a **60** días hábiles realice las siguientes medidas correctivas:----------
------- 1.- Elaborar un estudio de riesgo ambiental para aquellas actividades consideradas altamente riesgosas y presentarlo ante esta Secretaría para su aprobación para Amoniaco Anhidro y Cianuro de Potasio.----------
------- 2.-Presentar a esta Procuraduría la autorización del Instituto Nacional de Ecología para: enjuague de galvanoplastía, aceite sucio, de residuos peligrosos, así como la firma y sellada por el Instituto Nacional de Ecología.----------
-------Por todo lo antes expuesto y fundado es de resolverse y se----------
----
----------**RESUELVE**----------
-------**PRIMERO.-** Por haber infringido las disposiciones ambientales en los términos del considerando II de esta Resolución, se sanciona al establecimiento denominada **DISEÑO EN PLATA, S.A. DE C.V.**, con una Multa por la cantidad de **$24,210.00 (veinticuatro mil doscientos diez pesos 00/100 M.N.)**, equivalentes a **600 días** de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de imponer la sanción.- ----------
------ **SEGUNDO.-** Se ordena al establecimiento que lleve a cabo las medidas correctivas ordenadas en el Considerando III de esta Resolución, en la forma y plazo que ahí se establecen, mismo que comenzará a correr a partir del día siguiente al de la notificación de esta Resolución y una vez vencido, dentro de los cinco días siguientes la empresa deberá informar a esta Procuraduría por

escrito y en forma detallada el cumplimiento dado a las mismas, se le apercibe que en caso de que en futuros procedimientos se detecte su incumplimiento, se impondrán al establecimiento las sanciones agravadas que procedan.----------**TERCERO.-** Remítase copia certificada de esta Resolución a la autoridad fiscal competente para que haga efectiva la multa impuesta y una vez ejecutada se sirva comunicarlo a esta Procuraduría.----------**CUARTO.-** Con fundamento en lo previsto por el último párrafo del artículo 176, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se le hace saber al interesado que el recurso que procede contra la presente resolución es el de revisión.----------**QUINTO.-** Se hace saber al establecimiento que el expediente abierto con motivo del presente procedimiento administrativo, se encuentra para su consulta en el archivo de esta Delegación de la Zona Metropolitana del Valle de México, sita en Boulevard El Pipila No. 1, Colonia Tecamachalco, Código Postal 53910, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

"(...)"

a) Respecto de la conducta infractora prevista en los artículos 150 y 151 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 10 del Reglamento de dicha Ley en materia de residuos peligrosos, consistente en no contar con la autorización para el manejo, transporte y recepción de enjuague de galvanoplastía y aceite usado, sustancias consideradas por la autoridad como **residuos peligrosos**, es de resolver por esta Juzgadora, lo siguiente:

El artículo 150 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en que se apoya la resolución recurrida, establece lo siguiente:

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

"Artículo 150.- Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Gobernación. La regulación del manejo de esos materiales y residuos incluirá según corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final.

"El Reglamento y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo anterior, contendrán los criterios y listados que clasifiquen los materiales y residuos peligros por su grado de peligrosidad, considerando sus características y volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de alta y baja peligrosidad. Corresponde a la Secretaría la Regulación y el control de los materiales y residuos peligrosos.

"Asimismo, la Secretaría en coordinación con las dependencias a que se refiere el presente artículo, expedirá las normas oficiales mexicanas en las que se establecerán los requisitos para el etiquetado y envasado de materiales y residuos peligrosos, así como para la evaluación de riesgo e información sobre contingencias y accidentes que pudieran generarse por su manejo, particularmente tratándose de sustancias químicas."

El artículo 151 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en que se apoya la resolución recurrida, establece lo siguiente:

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

"Artículo 151.- La responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos corresponde a quien los genera. En el caso de que se contrate los servicios de manejo y disposición final de los residuos peligrosos con

empresas autorizadas por la Secretaría y los residuos sean entregados a dichas empresas, la responsabilidad por las operaciones será de éstas independientemente de la responsabilidad que, en su caso, tenga quien los generó.

"**Quienes generen, reusen** (Sic) **o reciclen residuos peligrosos, deberán hacerlo del conocimiento de la Secretaría** en los términos previstos en el Reglamento de la presente Ley.

"En las autorizaciones para el establecimiento de confinamientos de residuos peligrosos, sólo se incluirán los residuos que no puedan ser técnica y económicamente sujetos de reuso, reciclamiento o destrucción térmica o físico química, y no se permitirá el confinamiento de residuos peligrosos en estado líquido."

El artículo 10 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos, en que se apoya la resolución recurrida, establece lo siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS

"Artículo 10.- Se requiere autorización de la Secretaría para instalar y operar sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos, así como para prestar servicios en dichas operaciones sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de salud y de seguridad e higiene en el trabajo."

Ahora bien, la autoridad sancionadora señaló como conducta infractora atribuida a la actora, que no contaba con la autorización para el manejo, transporte y recepción para el enjuague de galvanoplastía y aceite usado considerados por la autoridad como residuos peligrosos.

Sin embargo, la autoridad sancionadora no acreditó la actualización de dicha conducta infractora, aun cuando se encontraba obligada conforme a lo dispuesto en

los artículos 16 Constitucional y 3°, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, toda vez que como lo indica la actora, no se encontraba obligada a contar con la autorización mencionada, porque la actividad que desarrolla consistente en la fabricación de cadena de joyería y artículos similares como dijes y cruces en metales preciosos como son el oro y la plata, respecto de la cual no existe controversia, no encuadra en las señaladas en el artículo 10 del Reglamento aludido por la autoridad sancionadora, que sí requieren autorización.

En efecto, el artículo 10 del Reglamento mencionado, en que se apoyo la sanción, alude a las actividades relativas a la instalación y operación de sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos, y para prestar servicios de dichas operaciones; distintas actividades de la fabricación de cadena de joyería y artículos similares.

Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 10 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos, establece por voluntad del Ejecutivo Federal, que se requiere autorización de la Secretaría para instalar y operar sistemas de recolección, almacenamiento, transporte alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos, así como para prestar servicios en dichas operaciones, sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de salud y de seguridad e higiene en el trabajo.

Sin que el artículo 150 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sea suficiente para acreditar la actualización de la conducta infractora atribuida, en virtud de que dicho numeral se refiere a que en la regulación del manejo de los materiales y residuos peligrosos, se incluirá su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final y que en el reglamento y las normas oficiales mexicanas se contendrán los criterios y listados que clasifiquen los materiales y residuos peligrosos, sin que en el cuerpo de la resolución sancionadora se aludiera a dichos criterios y listados que clasifique al enjuague de galvanoplastía y aceite usado, como materiales y residuos peligrosos.

De igual forma, el artículo 151 de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, si bien establece que la responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos corresponde a quien los genera y que en el caso de que se contraten los servicios de manejo y disposición final de los residuos peligrosos con empresas autorizadas y los residuos sean entregados a dichas empresas, la responsabilidad por las operaciones será de éstas independientemente de la responsabilidad que, en su caso, tenga quien los generó; también lo es, que la generación de enjuague de galvanoplastía y aceite usado, perse no acredita que se hubiere cometido la conducta infractora atribuida porque en principio debe demostrarse que se trata de residuos peligrosos y en segundo término que derivado de ello la presunta infractora se encontrará obligada con motivo de su actividad a contar con la autorización en el manejo, transporte y recepción mencionado, lo cual no ocurrió en la especie.

En consecuencia, resulta evidente que la conducta infractora atribuida no se actualizó.

b).- Respecto de la conducta infractora prevista en los artículos 30 y 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 6 del Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, consistente en no contar con estudio de riesgo tramitado ante la Secretaría demandada; esta Juzgadora, resuelve lo siguiente:

El artículo 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en que se apoya la resolución sancionadora, establece lo siguiente:

> "Artículo 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

"Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente.

"Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de 10 días les notifique si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta Ley.

"Los contenidos del informe preventivo, así como las características y las modalidades de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán establecidos por el Reglamento de la presente Ley."

Por su parte, el artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en que se apoya la resolución sancionadora, establece lo siguiente:

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

"Artículo 147.- La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo anterior.

"Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud y del Trabajo y Previsión Social, los programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios ecológicos."

El artículo 6º del Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, en que se apoya la resolución sancionadora, establece lo siguiente:

REGLAMENTO EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

"Artículo 6°.- Las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones relacionado con las obra y actividades señaladas en el artículo anterior, así como con las que se encuentren en operación, no requerirán de la autorización en materia de impacto ambiental siempre y cuando cumplan con todos los requisitos siguientes:

"I.- Las obras y actividades cuenten previamente con la autorización respectiva o cuando no hubieren requerido de ésta;

"II.- Las acciones por realizar no tengan relación alguna con el proceso de producción que generó dicha autorización, y

"III.- Dichas acciones no impliquen incremento alguno en el nivel de impacto o riesgo ambiental, en virtud de su ubicación, dimensiones, características o alcances, tales como conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles; construcción, instalación y demolición de bienes inmuebles en áreas urbanas, o modificación de bienes inmuebles cuando se pretenda llevar a cabo en la superficie del terreno ocupado por la construcción o instalación de que se trate.

"En estos casos, los interesados deberán dar aviso a la Secretaría previamente a la realización de dichas acciones.

"Las ampliaciones, modificaciones, sustitución de infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones relacionadas con las obras y actividades señaladas en el artículo 5°., así como con las que se encuentren en operación y que sean distintas a las que se refiere el primer párrafo de este artículo, podrán se exentadas de la presentación de la manifestación de impacto ambiental cuando se demuestre que su ejecución no causará desequilibrios ecológicos ni rebasará los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente y a la preservación y restauración de los ecosistemas.

> "Para efectos del párrafo anterior, los promoventes deberán dar aviso a la Secretaría de las acciones que pretendan realizar para que ésta, dentro del plazo de diez días, determine si es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental, o si las acciones no requieren ser evaluadas y, por lo tanto, pueden realizarse sin contar con autorización."

Ahora bien, en la especie la autoridad sancionadora atribuyó como conducta infractora que la demandante no contó con el estudio de riesgo tramitado ante la Secretaría demandada.

Sin embargo, la autoridad sancionadora no acreditó la actualización de dicha conducta infractora, aun cuando se encontraba obligada conforme a lo dispuesto en los artículos 16 Constitucional y 3°, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, toda vez que como lo indica la actora, no se encontraba obligada a contar con dicho estudio de riesgo porque dicha obligación se actualiza cuando se trata de actividades altamente riesgosas, conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que no es el caso.

En efecto, el artículo 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en que se apoyó la resolución sancionadora, establece por voluntad del Legislativo Federal, que para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de la misma Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, y que cuando se trate de **actividades consideradas altamente riesgosas** en los términos de la Ley de la materia, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente.

El artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en que se apoyó la resolución sancionadora, establece que quienes realicen **actividades altamente riesgosas** en los términos del Reglamento correspondiente deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental.

El artículo 6° del Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, establece los casos en los que no se requiera la autorización en materia ambiental, tratándose de la ampliación, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones relacionadas con las obras y actividades señaladas en el artículo 5º de dicho Reglamento, así como las que se encuentren en operación, cuando cumplan los requisitos que marca el mismo numeral. Que también estarán exentas de la presentación de la manifestación de impacto ambiental, cuando se demuestre su ejecución, no causará desequilibrios ecológicos ni rebasará los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente, a la preservación y restauración de los ecosistemas.

En consecuencia, los artículos 30 y 146 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 6° del Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, no son suficientes para acreditar la actualización de la conducta infractora atribuida, porque en principio la autoridad debió acreditar que la actividad que realiza la actora es altamente riesgosa y en segundo término, que por esa situación se encontrará obligada a formular ante la Secretaría demandada, el estudio de impacto ambiental, conforme a los preceptos aludidos; sin que lo hiciera.

Lo anterior, en virtud de que resulta insuficiente para acreditar dicha actividad altamente riesgosa, la simple manifestación de la autoridad en el sentido de que de los hechos de la visita se encontró que no se contaba con el estudio de riesgo tramitado ante la Secretaría demandada.

Lo anterior además, se constata, conforme a lo dispuesto en los artículos 5º del Reglamento de la Ley en materia de evaluación de impacto ambiental, al primer y segundo listados de actividades altamente riesgosas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990, y 4 de mayo de 1992, en relación con el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de los que se desprende que la actividad que realiza la demandante no tiene el carácter de altamente riesgosa, lo anterior se constata con la cita de dichos artículos:

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

"**ARTÍCULO 28.-** La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría.

"I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;

"II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica;

"III.- Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear;

"IV.- Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos;

"V.- Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración;

"VI.- Plantaciones forestales;

"VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;

"VIII.- Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas;

"IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;

"X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales;

"XI.- Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación;

"XII.- Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y

"XIII.- Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

"El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se refiere este artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en este ordenamiento.

"Para los efectos a que se refiere la fracción XIII del presente artículo, la Secretaría notificará a los interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquéllos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a diez días. Una vez recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor a treinta días, les comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que la Secretaría emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental."

REGLAMENTO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL

"Artículo 5o.- Deberán contar con previa autorización de la Secretaría, en materia de impacto ambiental, las personas físicas o morales que pretendan

realizar obras o actividades, públicas o privadas, que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones señalados en los reglamentos y las normas técnicas ecológicas emitidas por la Federación para proteger al ambiente, así como cumplir los requisitos que se les impongan, tratándose de las materias atribuidas a la Federación por los artículos 5o. y 29 de la Ley, particularmente las siguientes:

"I. Obra pública federal, como la definen la Ley de Obras Públicas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, que se realice por administración directa o por contrato, con las siguientes excepciones:

"a) Construcción, instalación y demolición de bienes inmuebles en áreas urbanas;

"b) Conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles;

"c) Modificación de bienes inmuebles, cuando ésta pretenda llevarse a cabo en la superficie del terreno ocupada por la instalación o construcción de que se trate.

"Las excepciones previstas en los incisos anteriores sólo tendrán efecto cuando para la realización de tales actividades se cuente con el permiso, licencia o autorización necesaria que provenga de autoridad competente;

"II. Obras hidráulicas, con las siguientes excepciones:

"a) Presas para riego y control de avenidas con capacidad menor de quinientos mil metros cúbicos;

"b) Unidades hidroagrícolas menores de cien hectáreas;

"c) Pozos (aislados);

"d) Bordos;

"e) Captación a partir de cuerpos de agua naturales, con la que se pretenda extraer hasta el diez por ciento del volumen anual;

"f) Las que pretendan ocupar una superficie menor a cien hectáreas;

"g) Las de rehabilitación, y

"h) Cuando se trate de obras previstas en el artículo 56 fracción I de la Ley de Obras Públicas.

"III. Vías generales de comunicación, únicamente en los siguientes casos:

"a) Puentes, escolleras, puertos, viaductos marítimos y rellenos para ganar terrenos al mar, actividades de dragado y bocas de intercomunicación lagunar marítimas;
"b) Trazo y tendido de líneas ferroviarias, incluyendo puentes ferroviarios para atravesar cuerpos de agua;
"c) Carreteras y puentes federales; y
"d) Aeropuertos.
"IV. Oleoductos, gasoductos y carboductos;
"V. Industrias química, petroquímica, siderúrgica, papelera, azucarera, de bebidas, del cemento, automotriz y de generación y transmisión de electricidad;
"VI. Exploración, extracción, tratamiento y refinación de sustancias minerales y no minerales reservadas a la federación, con excepción de las actividades de prospección gravimétrica, geológica superficial, geoeléctrica, magnetotelúrica de susceptibilidad magnética y densidad;
"VII. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos;
"VIII. Desarrollos turísticos federales;
"IX. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos radiactivos, con la participación que corresponda a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal;
"X. Aprovechamientos forestales de bosques y selvas tropicales y especies de difícil regeneración, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, 29 fracción VII, y 30 de la Ley;
"XI. Obras o actividades que por su naturaleza y complejidad requieran de la participación de la Federación, a petición de las autoridades estatales o municipales correspondientes;
"XII. Actividades consideradas altamente riesgosas, en los términos del artículo 146 de la Ley;
"XIII. Cuando la obra o actividad que pretenda realizarse pueda afectar el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas o de otros países o zonas de jurisdicción internacional.

"Las excepciones enunciadas en este artículo no tendrán efecto, si la obra o actividad se pretende desarrollar en áreas naturales protegidas de interés de la Federación, de las que se relacionan en el artículo 46 de la Ley, o en zonas respecto de las cuales se hubieren expedido las declaratorias a que se refiere el artículo 105 de la Ley.
"En las materias de competencia local que prevén los artículos 6o., 9o. y 31 de la Ley, las autorizaciones en materia de impacto ambiental serán expedidas por las autoridades competentes de los estados, los municipios o del Distrito Federal, en los términos de la Ley, las leyes locales y los demás ordenamientos aplicables."

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
DE 28 DE MARZO DE 1990

"ACUERDO por el que las Secretarías de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 5o. Fracción X y 146 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 27 Fracción XXXII y 37 Fracciones XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expiden el primer listado de actividades altamente riesgosas.
"(...)

"**ACUERDO**

"ARTÍCULO 1o.- Se considerará como actividad altamente riesgosa, el manejo de sustancias peligrosas en un volumen igual o superior a la cantidad de reporte.

"ARTÍCULO 2o.- Para los efectos de este ordenamiento se considerarán las definiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las siguientes:

"Cantidad de reporte: Cantidad mínima de sustancia peligrosa en producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, uso o disposición final, o la suma de éstas, existentes en una instalación o medio de transporte dados, que al ser liberada, por causas naturales o derivadas de la actividad humana, ocasionaría una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes.
"Manejo: Alguna o el conjunto de las actividades siguientes: producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, uso o disposición final de sustancias peligrosas.
"Sustancia Peligrosa: Aquélla que por sus altos índices de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica pueden ocasionar una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes.
"Sustancias tóxica: Aquélla que puede producir en organismos vivos, lesiones, enfermedades, implicaciones genéticas o muerte.

"ARTÍCULO 3o.- Con base en lo previsto en el artículo primero, se expide el primer listado de actividades altamente riesgosas, que corresponde a aquéllas en que se manejen sustancias tóxicas. Estas actividades son la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento uso o disposición final de las sustancias que a continuación se indican, cuando se manejen volúmenes iguales o superiores a las cantidades de reporte siguientes:
"I. Cantidad de reporte: a partir de 1 kg.
"a) En el caso de las siguientes sustancias en estado gaseoso:

"ÁCIDO CIANHÍDRICO
"ÁCIDO FLUORHÍDRICO- (FLUORURO DE HIDRÓGENO)
"ARSINA
"CLORURO DE HIDRÓGENO
"CLORO (l)
"DIBORANO
"DIÓXIDO DE NITRÓGENO
"FLUOR
"FOSGENO
"HEXAFLUORURO DE TELURIO
"ÓXIDO NÍTRICO
"OZONO (2)
"SELENIURO DE HIDRÓGENO
"TETRAFLUORURO DE AZUFRE
"TRICLORURO DE BORO

"b) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:

"ACROLEINA
"ALIL AMINA
"BROMURO DE PROPARGILO
"BUTIL VINIL ETER
"CARBONILO DE NÍQUEL
"CICLOPENTANO

“CLOROMETIL METIL ETER
“CLORURO DE METACRILOILO
“DIOXOLANO
“DISULFURO DE METILO
“FLUORURO CIANÚRICO
“FURANO
“ISOCIANATO DE METILO
“METIL HIDRACINA
“METIL VINIL CETONA
“PENTABORANO
“SULFURO DE DIMETILO
“TRICLOROETIL SILANO

“c) En el caso de las siguientes sustancias en estado sólido:

“2 CLOROFENIL TIOUREA
“2,4 DITIOBIURET
“4,6 DINITRO -O- CRESOL
“ÁCIDO BENCEN ARSÉNICO
“ÁCIDO CLOROACÉTICO
“ÁCIDO FLUOROACÉTICO
“ÁCIDO METIL -O- CARBAMILO
“ÁCIDO TIOCIÁNICO 2-BENZOTIÁNICO
“ALDICARB
“ARSENIATO DE CALCIO
“BIS CLOROMETIL CETONA
“BROMODIOLONA
“CARBOFURANO (FURADAN)
“CARBONILOS DE COBALTO
“CIANURO DE POTASIO
“CIANURO DE SODIO
“CLOROPLATINATO DE AMONIO
“CLORURO CRÓMICO
“CLORURO DE DICLORO BENZALKONIO
“CLORURO PLATINOSO
“COBALTO
“COBALTO (2, 2-(1,2 -ETANO)
“COMPLEJO DE ORGANORODIO
“DECABORANO
“DICLORO XILENO
“DIFACIONONA
“DISOCIANATO DE ISOFORONA
“DIMETIL -P- FENILENDIAMINA
“DIXITOXIN
“ENDOSULFAN
“EPN
“ESTEREATO DE CADMINO
“ESTRICNINA
“FENAMIFOS
“FENIL TIOUREA
“FLUOROACETAMIDA
“FÓSFORO (ROJO, AMARILLO Y BLANCO)
“FÓSFORO DE ZINC
“FOSMET
“HEXACLORO NAFTALENO
“HIDRURO DE LITIO
“METIL ANZIFOS
“METIL PARATION
“MONOCROTOFOS (AZODRIN)
“ÓXIDO DE CADMIO
“PARAQUAT
“PARAQUAT-METASULFATO
“PENTADECILAMINA
“PENTÓXIDO DE ARSÉNICO
“PENTÓXIDO DE FÓSFORO
“PENTÓXIDO DE VANADIO
“PIRENO
“PIRIDINA, 2 METIL, 5 VINIL
“SELENIATO DE SODIO
“SULFATO DE ESTRICNINA
“SULFATO TALOSO
“SULFATO DE TALIO
“TETRACLORURO DE IRIDIO
“TETRACLORURO DE PLATINO
“TETRAÓXIDO DE OSMIO
“TIOSEMICARBAZIDA
“TRICLOROFON
“TRIÓXIDO DE AZUFRE

“II. Cantidad de reporte: a partir de 10 kg.

“a) En el caso de las siguientes sustancias en estado gaseoso:

“ÁCIDO SULFHÍDRICO
“AMONIACO ANHIDRO
“FOSFINA
“METIL MERCAPTANO
“TRIFLUORURO DE BORO

“b) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:

“1, 2, 3, 4 DIEPOXIBUTANO
“2, CLOROETANOL
“BROMO
“CLORURO DE ACRILOILO
“ISOFLUORFATO
“MESITILENO
“OXICLORURO FOSFOROSO
“PENTACARBONILO DE FIERRO
“PROPIONITRILO
“PSEUDOCUMENO
“TETRACLORURO DE TITANIO
“TRICLORO (CLOROMETIL) SILANO
“VINIL NORBORNENO

“c) En el caso de las siguientes sustancias en estado sólido:

“ACETATO DE METOXIETIL MERCÚRIO
“ACETATO FENIL MERCÚRICO
“ACETATO MERCÚRICO
“ARSENITO DE POTASIO
“ARSENITO DE SODIO
“AZIDA DE SODIO
“BROMURO CIANÓGENO
“CIANURO POTÁSICO DE PLATA
“CLORURO DE MERCURIO
“CLORURO DE TALIO
“FENOL
“FOSFATO ETILMERCÚRICO
“HIDROQUINONA
“ISOTIOSIANATO DE METILO
“LINDANO
“MALONATO TALOSO
“MALONONITRILO
“NÍQUEL METÁLICO
“ÓXIDO MERCÚRICO
“PENTACLOROFENOL
“PENTACLORURO DE FÓSFORO
“SALCOMINA
“SELENITO DE SODIO
“TELURIO
“TELURITO DE SODIO
“TIOSEMICARBACIDA ACETONA
“TRICLORURO DE GALIO
“WARFARIN

“III. Cantidad de reporte: a partir de 100 kg.

“a) En el caso de las siguientes sustancias en estado gaseoso:

“BROMURO DE METILO
“ETANO (3)
“ÓXIDO DE ETILENO

“b) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:

“2, 6 -DIISOCIANATO DE TOLUENO
“ACETALDEHIDO (3)
“ACETATO DE VINILO
“ÁCIDO NÍTRICO
“ACRILONITRILO
“ALCOHOL ALILICO
“BETA PROPIOLACTONA
“CLOROACETALDEHIDO
“CROTONALDEHIDO
“DISULFURO DE CARBONO
“ETER BIS - CLORO METÍLICO
“HIDRACINA
“METIL TRICLORO SILANO
“NITROSODIMETILAMINA
“ÓXIDO DE PROPILENO
“PENTACLOROETANO
“PENTAFLUORURO DE ANTIMONIO
“PERCLOROMETIL MERCAPTANO
“PIPERIDINA
“PROPILENIMINA
“TETRAMETILO DE PLOMO
“TETRANITROMETANO
“TRICLORO BENCENO
“TRICLORURO DE ARSÉNICO
“TRIETOXISILANO
“TRIFLUORURO DE BORO

“c) En el caso de las siguientes sustancias en estado sólido:

“ÁCIDO CRESÍLICO
“ÁCIDO SELENIOSO

“ACRILAMIDA
“CARBONATO DE TALIO
“METOMIL
“ÓXIDO TÁLICO
“YODURO CIANÓGENO

“IV. Cantidad de reporte: a partir de 1000 kg.

“a) En el caso de las siguientes sustancias en estado gaseoso:

“BUTADIENO

“b) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:

“ACETONITRILO
“BENCENO (3)
“CIANURO DE BENCILO
“CLOROFORMO
“CLORURO DE BENZAL
“CLORURO DE BENCILO
“2, 4-DIISOCIANATO DE TOLUENO
“EPICLOROHIDRINA
“ISOBUTIRONITRILO
“OXICLORURO DE SELENIO
“PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
“TETRACLORURO DE CARBONO (3)
“TETRAETILO DE PLOMO
“TRIMETILCLORO SILANO

“V. Cantidad de reporte: a partir de 10 000 kg.

“a) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido.

“2, 4, 6, TRIMETIL ANILINA
“ANILINA
“CICLOHEXILAMINA
“CLORURO DE BENCEN SULFONILO
“DICLOROMETIL FENIL SILANO
“ETILEN DIAMINA
“FORATO
“FORMALDEHIDO CIANOHIDRINA
“GAS MOSTAZA; SINÓNIMO (SULFATO DE BIS (2-CLOROETILO)
“HEXACLORO CICLO PENTADIENO
“LACTONITRILO
“MECLORETAMINA
“METANOL
“OLEUM
“PERCLOROETILENO (3)
“SULFATO DE DIMETILO
“TIOCIANATO DE ETILO
“TOLUENO (3)

“VI. Cantidad de reporte: a partir de 100 000 kg.

“a) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:

“1, 1 -DIMETIL HIDRACINA
“ANHIÍDRIDO METACRÍLICO
“CUMENO
“DICLORVOS
“ÉTER DICLOROETÍLICO
“ÉTER DIGLICIDÍLICO
“FENIL DICLORO ARSINA
“NEVINFOS (FOSFORIN)
“OCTAMETIL DIFOSFORAMIDA
“TRICLORO FENIL SILANO

“VII. Cantidad de reportes a partir de 1 000 000 kg.

“a) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:

“ADIPONITRILO
“CLORDANO
“DIBUTILFTALATO
“DICROTOFOS (BIDRIN)
“DIMETIL 4 ÁCIDO FOSFÓRICO
“DIMETILFTALATO
“DIOCTILFTALATO
“FOSFAMIDÓN
“METIL -5- DIMETRÓN
“NITROBENCENO
“TRICLORURO FOSFOROSO

"(1) Se aplica exclusivamente a actividades industriales y comerciales.
"(2) Se aplica exclusivamente a actividades donde se realicen procesos de ozonización.
"(3) En virtud de que esta sustancia presenta además propiedades explosivas o inflamables, también será considerada, en su caso, en el proceso para determinar los listados de actividades altamente riesgosas, correspondientes a aquéllas en que se manejen sustancias explosivas o inflamables.

"ARTÍCULO 4o.- Se exceptúa del listado de actividades altamente riesgosas, previsto en el artículo anterior, el uso o aplicación de plaguicidas con propiedades tóxicas.

"ARTÍCULO 5o.- Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá como sustancia en estado sólido, aquéllas que se encuentren en polvo menor de 10 micras.

"ARTÍCULO 6o.- En el caso de las sustancias señaladas en el artículo 3o. que correspondan a plaguicidas, la cantidad de reporte se entenderá referida a su ingrediente técnico llamado también activo.
"En los demás casos, las cantidades de reporte de las sustancias indicadas en este Acuerdo, deberán considerarse de conformidad con su más alto porcentaje de concentración. Cuando dichas sustancias se encuentran en solución o mezcla, deberá realizarse el cálculo correspondiente, a fin de determinar la cantidad de reporte para el caso de que se trate.

"ARTÍCULO 7o.- Las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Urbano y Ecología, previa opinión de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal; Comercio y Fomento Industrial; de Salud; Agricultura y Recursos Hidráulicos y del Trabajo y Previsión Social, podrán ampliar y modificar el listado objeto del presente Acuerdo, con base en el resultado de investigación que al efecto se lleven a cabo.

"TRANSITORIO

"ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"Ciudad de México a 26 de marzo de mil novecientos noventa.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Patricio Chirinos Calero.- Rúbrica."

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
DE 4 DE MAYO DE 1992

"ACUERDO por el que las Secretarías de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5o. fracción X y 146 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 27 fracción XXXII y 37 fracciones XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expiden el segundo listado de actividades altamente riesgosas.

"(...)

"ACUERDO

"ARTÍCULO 1o.- Se expide el segundo listado de actividades altamente riesgosas que corresponde a aquéllas en que se manejen sustancias inflamables y explosivas.

"ARTÍCULO 2o.- Se considerará como actividad altamente riesgosa, el manejo de sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a la cantidad de reporte.

"ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de este Acuerdo se considerarán las definiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las siguientes:

"CANTIDAD DE REPORTE: Cantidad mínima de sustancia peligrosa en producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, uso o disposición final, o la suma de éstas, existentes en una instalación o medio de transporte dados, que al ser liberada, por causas naturales o derivadas de la actividad humana, ocasionaría una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes.

"MANEJO: Alguna o el conjunto de las actividades siguientes: producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, uso o disposición final de sustancias peligrosas.

"SUSTANCIA PELIGROSA: Aquélla que por sus altos índices de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica puede ocasionar una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes.

"SUSTANCIA INFLAMABLE: Aquélla que es capaz de formar una mezcla con el aire en concentraciones tales para prenderse espontáneamente o por la acción de una chispa.

"SUSTANCIA EXPLOSIVA: Aquélla que en forma espontánea o por acción de alguna forma de energía, genera una gran cantidad de calor y energía de presión en forma casi instantánea.

"ARTÍCULO 4o.- Las actividades asociadas con el manejo de sustancias inflamables y explosivas que deben considerarse altamente riesgosas son la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, uso y disposición final de las sustancias que a continuación se indican, cuando se manejen cantidades iguales o superiores a cantidades de reporte siguientes:

"I. Cantidad de reporte: a partir de 500 Kg.

"a) En el caso de las siguientes sustancias en estado gaseoso:

"ACETILENO	"ANHÍDRIDO HIPOCLOROSO
"ÁCIDO SULFHÍDRICO	"BUTANO (N, ISO)

“BUTADIENO
“1-BUTENO
“2-BUTENO (CIS,TRANS)
“CIANÓGENO
“CICLOBUTANO
“CICLOPROPANO
“CLORURO DE METILO
“CLORURO DE VINILO
“DIFLUORO 1-CLOROETANO
“DIMETIL AMINA
“2,2-DIMETIL PROPANO
“ETANO
“ÉTER METÍLICO
“ETILENO
“FLUORURO DE ETILO
“FORMALDEHIDO
“HIDRÓGENO
“METANO
“METILAMINA
“2-METIL PROPENO
“PROPANO
“PROPILENO
“PROPINO
“SULFURO DE CARBONILO
“TETRAFLUOROETILENO
“TRIFLUOROCLOROETILENO
“TRIMETIL AMINA

“b) En el caso de las sustancias en estado gaseoso no previstas en el inciso anterior y que tengan las siguientes características:

“Temperatura de inflamación <37.8°C

“Temperatura de ebullición <21.1°C

“Presión de vapor >760 mm Hg

“c) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:

“2-BUTINO
“CLORURO DE ETILO
“ETILAMINA
“3-METIL-1-BUTENO
“METIL ETIL ETER
“NITRITO DE ETILO
“ÓXIDO DE ETILENO
“1-PENTANO

“II. Cantidad de reporte: a partir de 3,000 Kg.

“a) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:

“ACETALDEHIDO
“ÁCIDO CIANHÍDRICO
“AMILENO (CIS,TRANS)
“COLODIÓN
“DISULFURO DE CARBONO
“2-METIL-1-BUTENO
“2-METIL-2-BUTENO
“ÓXIDO DE PROPILENO
“PENTANO (N,ISO)
“1-PENTENO
“1-PENTENO
“SULFURO DE DIMETILO

“III. Cantidad de reporte: a partir de 10,000 Kg.

“a) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:

“ACROLEINA
“ALIL AMINA
“BROMURO DE ALILO
“CARBONILO DE NÍQUEL
“CICLOPENTANO
“CICLOPENTENO
“1-CLORO PROPILENO
“2-CLORO PROPILENO
“CLORURO DE ALILO
“CLORURO DE ACETILO
“CLORURO DE PROPILO (N. ISO)
“1.1-DICLOROETILENO
“DIETILAMINA
“DIHIDROPIRAN
“2.2-DIMETIL BUTANO
“2.3-DIMETIL BUTANO

“2.3-DIMETIL 1-BUTENO
“2.3-DIMETIL 2-BUTENO
“2-ETIL 1-BUTENO
“ÉTER DIETÍLICO
“ÉTER VINÍLICO
“ETÍLICO MERCAPTANO
“ETOXIACETILENO
“FORMIATO DE ETILO
“FORMIATO DE METILO
“FURANO
“ISOPRENO
“ISOPROPENIL ACETILENO
“2-METIL PENTANO
“3-METIL PENTANO
“2-METIL 1-PENTENO
“2-METIL 2-PENTENO
“4-METIL 1-PENTENO
“4-METIL 2-PENTENO
“2-METIL 2-PROPANOTIOL
“METIL PROPIL ACETILENO
“METIL TRICLOROSILANO
“PROPIL AMINA (N,ISO)
“PROPENIL ETIL ÉTER
“TETRAHIDROFURANO
“TRICLOROSILANO
“VINIL ETIL ÉTER
“VINIL ISOPROPIL ÉTER

“IV. Cantidad de reporte: a partir de 20,000 Kg.

“a) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:

“ACETATO DE ETILO
“ACETATO DE METILO
“ACETATO DE VINILO
“ACETONA
“ACRILATO DE METILO
“ACRILONITRILO
“ALCOHOL METÍLICO
“ALCOHOL ETÍLICO
“BENCENO
“1-BROMO-2-BUTENO
“BUTILAMINA (N, ISO, SEC, TER)
“CICLOHEXANO
“CICLOHEXENO
“CICLOHEPTANO
“2-CLORO-2-BUTENO
“CLORURO DE BUTILO (N, ISO, SEC, TER)
“CLORURO DE VINILIDENO
“DICLOROETANO
“DICLOROETILENO (CIS, TRANS)
“1,2 DICLOROETILENO
“DIMETIL DICLOROSILANO
“1,1 DIMETIL HIDRAZINA
“2,3 DIMETIL PENTANO
“2,4 DIMETIL PENTANO
“DIMETOXI METANO
“DIISOBUTILENO
“DIISOPROPILAMINA
“DIOXOLANO
“ÉTER ETIL PROPÍLICO
“ÉTER PROPÍLICO (N, ISO)
“ETIL BUTIL ÉTER
“ETIL CICLOBUTANO
“ETIL CICLOPENTANO
“ETIL DICLOROSILANO
“ETIL METIL CETONA
“ETILENIMINA
“FORMIATO DE PROPILO (N, ISO)
“FLUOROBENCENO
“1-HEXENO
“2-HEXENO (CIS, TRANS)
“HEPTANO (N, ISO Y MEZCLAS DE ISÓMEROS)
“HEPTENO
“HEPTILENO
“HEPTILENO 2-TRANS
“1,4 HEXADIENO
“HEXANO (N, ISO Y MEZCLAS DE ISÓMEROS)
“ISOBUTIRALDEHIDO
“2-METIL FURANO
“METIL CICLOHEXANO
“METIL CICLOPENTANO
“METIL DICLOROSILANO
“METIL ÉTER PROPÍLICO
“2-METIL HEXANO
“3-METIL HEXANO
“METIL HIDRAZINA
“2 METIL 1-3 PENTADIENO

“4-METIL 1-3-PENTADIENO
“METIL PIRROLIDINA
“2-METIL TETRAHIDROFURANO
“METIL VINIL CETONA
“MONÓXIDO DE BUTADIENO
“NITRATO DE ETILO
“2,5-NORBORNADIENO
“ÓXIDO DE BUTILENO
“ÓXIDO DE PENTAMETILENO
“1,2-ÓXIDO DE BUTILENO
“PIRROLIDINA
“PROPIONALDEHIDO
“PROPIONATO DE METILO
“PROPIONATO DE VINILO
“TRIETILAMINA
“2,2,3-TRIMETIL BUTANO
“2,3,3-TRIMETIL 1-BUTENO
“2,4,4-TRIMETIL 2-PENTENO
“3,4,4-TRIMETIL 2-PENTENO
“TRIMETILCLOROSILANO
“VINIL ISOBUTIL ÉTER

“V. Cantidad de reporte: a partir de 50,000kg.

“a) En el caso de las siguientes sustancias en estado gaseoso:

“GAS L. P. COMERCIAL (1)

“VI. Cantidad de reporte: a partir de 100,000 Kg.

“a) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:

“ACETATO DE PROPILO (N,ISO)
“ALCOHOL ALÍLICO
“ALCOHOL DESNATURALIZADO
“ALCOHOL PROPÍLICO (ISO)
“AMILAMINA (N,SEC)
“BROMURO DE N-BUTILO
“BUTIRATO DE METILO
“BUTIRONITRILO (N,ISO)
“1,2-DICLOROPROPANO
“2,3-DIMETIL HEXANO
“2,4-DIMETIL HEXANO
“P-DIOXANO
“ÉTER ALÍLICO
“FORMIATO DE ISOBUTILO
“2-METIL-2-BUTANOL
“2-METIL BUTIRALDEHIDO
“2-METIL-3-ETIL PENTANO
“3-METIL 2-BUTANOTIOL
“METIL METACRILATO
“PIPERIDINA
“PIRIDINA
“PROPIONATO DE ETILO
“PROPIONITRILO
“TETRAMETILO DE PLOMO
“2,2,3-TRIMETIL PENTANO
“2,2,4-TRIMETIL PENTANO
“2,3,3-TRIMETIL PENTANO
“TOLUENO

“VII. Cantidad de reporte: a partir de 200,000 Kg.

“a) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido:

“ACETAL
“ACETATO DE BUTILO (ISO.SEC)
“ACETATO DE ISOAMILO
“ACETATO DE ISOPROPENILO
“ACETONITRILO
“ACRILATO DE ISOBUTILO
“ALCOHOL AMÍLICO (N.SEC)
“ALCOHOL BUTÍLICO (ISO.SEC.TERT)
“AMIL MERCAPTAN
“BENZOTRIFLUORURO
“1.- BUTANOL
“BUTIL MERCAPTAN (N,SEC)
“BUTIRATO DE ETILO (N,ISO)
“CLOROBENCENO
“CLORURO DE AMILO
“CROTONALDEHIDO
“CUMENO
“DIETILCETONA
“DIETÍLICO CARBONATO
“1,3 DIMETIL BUTILAMINA
“1,3 DIMETIL CICLOHEXANO
“1,4 DIMETIL CICLOHEXANO (CIS,TRANS)

“ETIL BENCENO	“METIL PROPIL CETONA
“ETIL BUTILAMINA	“NITROETANO
“2-ETIL BUTIRALDEHIDO	“NITROMETANO
“ETIL CICLOHEXANO	“OCTANO (N,ISO)
“ETILENDIAMINA	“OCTENO (ISO)
“ETILENO-GLICOL DIETÍLICO ÉTER	“1-OCTENO
“FERROPENTACARBONILO	“2-OCTENO
“ISOBROMURO DE AMILO	“ÓXIDO DE MESITILO
“ISOFORMIATO DE AMILO	“2,2,5-TRIMETIL HEXANO
“METACRILATO DE ETILO	“VINIL TRICLOROSILANO
“METIL ISOBUTIL CETONA	“XILENO (M,O,P)

“VIII. Cantidad de reporte: a partir de 10,000 Kg

“a) En el caso de las sustancias en estado líquido, no previstas en las fracciones anteriores y que tengan las siguientes características:

“Temperatura de inflamación <37.8°C

“Temperatura de ebullición >21.1°C

“Presión de vapor <760 mm Hg

“IX. Cantidad de reporte: a partir de 10,000 Barriles.

“a) En el caso de las siguientes sustancias en estado líquido.

“GASOLINAS (1)

“KEROSENAS INCLUYE NAFTAS Y DIAFANO (1)

“(1) Se aplica exclusivamente a actividades industriales y comerciales.

“ARTÍCULO 5o.- Se exceptúa de este listado a las actividades relacionadas con el manejo de las sustancias a que se refiere el artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

“ARTÍCULO 6o.- Las cantidades de reporte de las sustancias indicadas en este Acuerdo, deberán considerarse referidas a su más alto porcentaje de concentración. Cuando dichas sustancias se encuentran en solución o mezcla, deberá realizarse el cálculo correspondiente, con el fin de determinar la cantidad de reporte para el caso de que se trate.

“ARTÍCULO 7o.- Las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Urbano y Ecología, previa opinión de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal; de Comercio y Fomento Industrial, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Salud y del Trabajo y Previsión Social podrán ampliar y modi-

ficar el listado objeto del presente Acuerdo, con base en el resultado de las investigaciones que sobre el particular se lleven a cabo.

"TRANSITORIO

"ÚNICO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"México, D. F., a 30 de abril de 1992.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Luis Donaldo Colosio Murrieta.- Rúbrica."

Además, lo anterior se confirma del contenido de la prueba exhibida por la propia actora y que no fue objetada por la autoridad, que se hace consistir en el oficio N.D.O.O.DGOEIA-003131 de 9 de julio de 2000, emitido por el Director General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, en el cual se indicó que la actividad de la demandante no es considerada como de alto riesgo; oficio que obra a fojas 104 y 105 del expediente, y que textualmente indica lo siguiente:

"**OFICIO N.D.O.O.DGOEIA-003131**
DE 9 DE JULIO DE 2000

"INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
E IMPACTO AMBIENTAL

"D.O.O.DGOEIA.- 003131

"Ciudad de México, a 09 de junio de 2000.

"SR. JORGE MARTÍNEZ GALINDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
DISEÑO EN PLATA, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO No. 157, COL. SAN LORENZO
C.P. 54030, TLALNEPANTLA, EDO DE MÉXICO
TELS: 53 90 61 99 Y 53 90 60 19

"El presente es emitido en referencia a la ficha sin número del 25 de mayo del 2000, ingresada en esta Dirección General el 30 del mismo mes y año, mediante la cual la Delegación Federal de esta Secretaría en el Estado de México, remitió la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad General del proyecto '**Planta 2000**', promovido por la empresa **Diseño en Plata, S.A. de C.V.**, consistente en la construcción y operación de una planta para la fabricación de cadena para joyería y artículos similares como dijes y cruces en diversos metales preciosos, con una capacidad de producción estimada de 840 Kg mensuales, con pretendida ubicación en la calle Mariano Escobedo S/N, colonia San Lorenzo, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

"Sobre el particular, comunico a usted que una vez que ha sido revisada la Manifestación del Impacto Ambiental, modalidad General presentada, se identificó que la actividad que se describe y que involucra al proyecto de referencia, no se encuentra considerada dentro del listado de obras o actividades que se establecen como de competencia federal en el Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ni en el 5º de su Reglamento en Materia del Impacto Ambiental; así como tampoco se considera como una actividad altamente riesgosas, considerando que ninguna de las sustancias que utiliza supera la cantidad de reporte establecida en el Primero y Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990 y el 4 de mayo de 1992 respectivamente, por lo que se determina que esta Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental no es la autoridad competente para evaluar y dictaminar el estudio presentado.

"No obstante lo anterior, el Estado de México cuenta con su propia legislación ambiental, por lo que la empresa Diseño en Plata, S.A. de C.V., deberá dirigirse a las instancias estatales competentes para obtener en su caso, la autorización en materia de impacto ambiental.

"La entrega de este oficio se acompaña de dos ejemplares de la Manifestación del Impacto Ambiental, modalidad General y del Resumen Ejecutivo presentados para el proyecto "Plata 2000", a través de la ficha S/N del 25 de mayo del 2000 de la Delegación Federal de esta Secretaría en el Estado de México.

"En espera de ver cumplidas en su totalidad las acciones dispuestas en beneficio del ambiente, reciba de mi parte un saludo cordial.

"A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL DIRECTOR GENERAL

"FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ."

Por lo anterior, resulta evidente que a la hoy actora no tenía obligación de contar con el estudio de riesgo.

En consecuencia, si la resolución impugnada emitida en el expediente administrativo número 2.6669 de 19 de marzo de 2002, que resolvió el recurso de revisión 6669/ZMVN/5596RS confirmando la resolución sancionadora número 404/01-D de 6 de agosto de 2001, resulta evidente su indebida fundamentación y motivación, en virtud de que la resolución recurrida es ilegal porque las supuestas conductas infractoras atribuidas, en que se sustentan las multas controvertidas, no se actualizaron, violando lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, en relación con el artículo 3°, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

II. Por otra parte, del análisis practicado a la segunda resolución sancionadora recurrida, contenida en el oficio número 1265/01-D de 31 de agosto de 2001, emitida por el Delegado de la Zona Metropolitana del Valle de México de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente, y Recursos Naturales, se desprende que se impuso una sanción económica en cantidad de $4,035.00, por la actualización de la conducta infractora consistente en:

- No presentar ante el Instituto Nacional de Ecología el estudio de riesgo ambiental para aquellas actividades consideradas **altamente riesgosas**, conforme a lo dispuesto en los artículos 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 17 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental.

Lo anterior, se constata del contenido de dicha resolución recurrida a foja 117 del expediente, que en su parte conducente, indica lo siguiente:

"RESOLUCIÓN RECURRIDA 1265/01-D DE 31 DE AGOSTO DE 2001

"1265/01-D folios 117-119

"**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE**
"DELEGACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA
"DEL VALLE DE MÉXICO.

"EXPEDIENTE: No. 0687369070
"RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 1265/01-D

"En Tecamachalco, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil uno.----------
Visto para resolver el procedimientos administrativo instaurado por esta Procuraduría a la empresa DISEÑO Y PLATA, S.A. DE C.V., con domicilio ubicado en Calle Mariano Escobedo, número 157, Fraccionamiento Industrial Tlalnepanta, municipio de Tlalnepantla, Estado de México, Código Postal 54030.----------
---------- RESULTANDO ----------
1.- Que esta Procuraduría emitió orden de visita número E00-SVI-DGII-001535 de fecha quince de junio de mil novecientos noventa y nueve, en cuyo cumplimiento se efectuó la visita de fecha quince de junio de mil novecientos noventa y nueve, a la empresa citada el rubro, circunstanciándose el acta de inspección número 15-1'4-0073/99-Ex. Asimismo, con fecha doce de agosto de mil novecientos noventa y nueve, se emplazó al establecimiento para que manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara convenientes en relación a lo circunstanciado en las actas antes mencionadas, haciendo uso de ese derecho el representante legal de la empresa mediante los escritos recibidos por esta autoridad los días veintitrés y veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en los que ofreció pruebas que estimó pertinentes y que fueron desahogadas oportunamente, abriéndose el periodo

respecto para que la empresa formulara sus alegatos escritos.----------
Por lo que al no haber alegato alguno, se envían los atuso (Sic) a resolución y
---------- C O N S I D E R A N D O----------

"(...)

"II.- Que de lo circunstanciado en el acta de inspección señalada anteriormente, se desprende que al momento de la visita realizada a la empresa y considerando el giro del mismo, se detectaron los hechos u omisiones en la siguiente materia:----------
RIESGO.- 1.- No presentó ante el Instituto Nacional de Ecología el Estudio de Riesgo Ambiental para aquéllas actividades consideradas altamente riesgosas.----------Respecto de la irregularidad mencionada es de señalar que con las pruebas aportadas por la empresa y con las constancias que obran en autos, desahogadas y valoradas conforme a lo dispuesto por los artículos 93 fracciones II y III, 129,133, 197, 200, 202, 103, 107 y 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en este procedimiento, durante la prosecución del presente procedimiento, se acredita que la irregularidad 1 no fue desvirtuada, sin embargo fue subsanada.----------
Por la irregularidad no desvirtuada, la empresa infringió la disposición ambiental en la siguiente materia: ---------- RIESGO.- Los artículos 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 17 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental: ----------
------- La gravedad de las infracciones antes precisadas consisten en:----**MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS:** La gravedad de la infracción anterior por la realización de actividades altamente riesgosas se presentan es porque la empresa no ha determinado la probabilidad de la gravedad o magnitud que pueda ocasionar en la flora, fauna, ecosistemas, el ambiente o la población, el manejo de materiales peligrosos, en cantidades superiores a la cantidad de reporte, en caso de producirse una liberación, sea por fuga o derrame o bien una explosión, por causas naturales o derivadas de la actividad huma-

na.----------
--------Por lo que hace a la valoración de la situación económica, es de considerarse que según los datos que obran en este expediente, que tiene como actividad la fabricación de joyas u orfebrería de oro y plata, que cuenta con 64 empleados y 148 obreros y cuenta con la maquinaria suficiente para realizar su actividad. ---------- Por todo lo anterior y considerando además, el análisis de la reincidencia, de la intencionalidad y negligencia, del beneficio obtenido por la empresa al cometer la infracción, así como de las causas de atenuantes y agravantes correspondientes, procede imponer a la empresa las siguientes sanciones: - **En materia de Riesgo:** Se le impone una multa de **$4,035.00 (CUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.),** equivalente a **100** días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Por lo que se impone a tal empresa una multa de **$4,035.00 (CUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.),** equivalente a **100** días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual es compatible con el desarrollo sustentable y con las posibilidades económicas de la empresa.----------
-------Por todo lo antes expuesto y fundado es de resolverse y ----------
---------- **R E S U E L V E**----------
PRIMERO.- Por haber infringido las disposiciones ambientales en los términos del Considerando II de esta Resolución, se sanciona a la empresa **DISEÑO EN PLATA, S.A. DE C.V.,** con una multa de **$4,035.00 (CUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.),** equivalentes a **100** días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de imponer la sanción. ---------- **SEGUNDO.-** Remítase copia certificada de esta Resolución a la autoridad fiscal competente para que haga efectiva la multa impuesta y una vez ejecutada se sirva comunicarlo a esta Procuraduría. ----------
TERCERO.- Se hace saber a la empresa que el expediente abierto con motivo del presente procedimiento administrativo, se encuentra para su consulta en el archivo de la Delegación de la Zona Metropolitana del Valle de México, sita en Boulevard El Pipila No. 1, Colonia Tecamachalco, Código Postal 53910, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. ----------

CUARTO.- Se le hace saber al interesado que el recurso que procede contra la presente resolución es el de revisión, previsto en el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. ----- **NOTIFÍQUESE.-** Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo al representante o apoderado legal de la empresa **DISEÑO EN PLATA, S.A. DE C.V**. ----------**Así lo resolvió y firma el C. Luis Femat Rodríguez Delegado de la Zona Metropolitana del Valle de México de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.** ----------"

De la transcripción anterior, se desprende que en la resolución sancionadora recurrida, se señaló como fundamento de la multa impuesta lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 17 del Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental y como motivación que no se presentó ante el Instituto Nacional de Ecología el estudio de riesgo ambiental para aquellas actividades consideradas altamente riesgosas.

En virtud de que en el punto I, inciso b) anterior de este fallo, se citó lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, nos remitimos a dicho texto y por lo que hace al artículo 17 del Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, en el cual también se apoya la resolución sancionadora, es de señalar que en el mismo se establece lo siguiente:

"Artículo 17.- El promovente deberá presentar a la Secretaría la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental anexando:
"I.- La manifestación de impacto ambiental;
"II.- Un resumen del contenido de la manifestación de impacto ambiental, presentado en disquete, y
"III.- Una copia sellada de la constancia del pago de derechos correspondientes.
"Cuando se trate de actividades altamente riesgosas en los términos de la Ley, deberá incluirse un estudio de riesgo."

Ahora bien, en la especie la autoridad sancionadora atribuyó como conducta infractora la no presentación ante el Instituto Nacional de Ecología el estudio de riesgo ambiental para aquellas actividades consideradas altamente riesgosas, tal y como sancionó en la diversa resolución recurrida mencionada en el punto II, inciso b) anterior, en el cual se resolvió que no se actualizó la conducta infractora atribuida, dado que la actora no se encontraba obligada a la presentación del estudio de riesgo, en virtud de que sólo se aplica dicha obligación tratándose de actividades altamente riesgosas y que en el caso la autoridad no demostró que la actividad de la actora sea altamente riesgosa, consideraciones que se tienen por reproducidas.

En efecto, con la cita de los artículos 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 17 del Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, no se demuestra que la actividad de la actora consistente en la fabricación de cadena de joyería y artículos similares, como dijes y cruces en metales preciosos como lo son el oro y la plata sea altamente riesgosa.

Lo anterior, además se constata porque el artículo 17 del Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, establece que el promovente presentará a la Secretaría demandada, la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental, anexando documentación mencionada y que cuando se trate de actividades altamente riesgosas en los términos de la Ley, deberá incluirse un estudio de riesgo, sin que con ello se acredite que la actividad de la presunta infractora tenga el carácter de altamente riesgosa.

Por tanto, la conducta infractora atribuida no se actualizó.

En consecuencia, si la resolución impugnada dictada en el expediente administrativo 2.6650 de 19 de marzo de 2002, resolvió el recurso de revisión 6060/ZMVN/5RS confirmando la resolución sancionadora contenida en la resolución número 1262/01-D de 31 de agosto de 2001, resulta evidente su indebida fundamentación y motivación, dado que la resolución recurrida es ilegal porque la supuesta conducta infractora atribuida, en que se sustenta la multa controvertida no se actualizó, violando lo dis-

puesto en el artículo 16 Constitucional, en relación con el artículo 3°, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

(...)

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 202 y 203 del Código Fiscal de la Federación aplicados a contrario sensu, 236, 237, 238, fracción IV y 239, fracción II y 239-A fracción I, inciso b) del Código en cita, se resuelve:

I.- Son infundadas las causales de improcedencia planteadas por el representante del titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; en consecuencia,

II.- No se sobresee el presente juicio.

III.- La actora sí acreditó los fundamentos de su pretensión; por tanto,

IV.- Se declara la nulidad de las resoluciones impugnadas y de las resoluciones recurridas precisadas en el resultando 1º de este fallo.

V.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada del presente fallo, devuélvanse los autos a la Novena Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto, y en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de mayo de 2004, por mayoría de 7 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Alma Peralta Di Gregorio, Alejandro Sánchez Hernández, María Guadalupe Aguirre Soria, Silvia Eugenia Díaz Vega, Manuel Luciano Hallivis Pelayo y María del Consuelo Villalobos Ortíz y 1 voto con los puntos resolutivos del Magistrado Luis Carballo Balvanera y 1 voto en contra del Magistrado Jorge Alberto García Cáceres quien se reserva su derecho

para formular voto particular. Encontrándose ausentes los Magistrados Guillermo Domínguez Belloc y Luis Malpica de Lamadrid.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia se aprobó.

Se elabora el presente engrose el 25 de mayo de 2004, con fundamento en lo previsto en los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, firma la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

V-P-SS-580

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY GENERAL DE SALUD.- En los artículos 1° y 2° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se establece, por una parte, que las disposiciones de esta Ley se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada, a excepción de las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, y por otra, que dicho Ordenamiento se aplicará supletoriamente a las diversas Leyes Administrativas. De una correcta interpretación a lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con el 1° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, debe concluirse que a todas las materias que no sean relativas a las de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, les es aplicable lo previsto en tales dispositivos, como lo es en el caso, la resolución impugnada, consistente en una multa por violaciones a la Ley General de Salud, emitida por una dependencia de la Secretaría de Salud, configurándose con ello el supuesto de aplicación que señala el artículo 2° del Ordenamiento referido. En tal virtud, debe concluirse que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo debe ser aplicada supletoriamente a la Ley General de Salud, tratándose de infracciones y sanciones, específicamente en el caso de publicidad de productos y cumplimientos de esa publicidad, ya que el artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, expresamente establece que se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas reguladas por la misma, a excepción de las materias de carácter fiscal, responsabilidad de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, que no es el caso de la materia de salud. (12)

Juicio No. 14086/01-17-10-8/511/02-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de

mayo de 2004, por unanimidad de 9 votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de mayo de 2004)

PRECEDENTE:

V-P-SS-283
Juicio No. 4725/01-17-03-1/666/01-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de febrero de 2002, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretario: Lic. Antonio Miranda Morales.
(Tesis aprobada en sesión privada de 27 de noviembre de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 30. Junio 2003. p. 89

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-SS-581

ACLARACIÓN DE SENTENCIA.- ES INFUNDADO EL INCIDENTE CUANDO SE PLANTEAN CUESTIONES RELATIVAS A LA SUPUESTA OMISIÓN DE ESTUDIO DE ARGUMENTOS PLANTEADOS EN LA DEMANDA.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 239-C del Código Fiscal de la Federación, el incidente de aclaración de sentencia podrá promoverse cuando alguna de las partes estime contradictoria, ambigua u oscura una sentencia definitiva del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por tanto, si una de las partes estima que en la sentencia definitiva, dictada en cumplimiento de una ejecutoria emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito, se omitió el pronunciamiento respecto de algún argumento contenido en el escrito de demanda, ello constituye un aspecto que no puede plantearse en el incidente de aclaración de sentencia, pues implica variar el sentido del fallo. (13)

Juicio No. 12222/99-11-05-7/678/01-PL-07-04-AD-AS.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 31 de mayo de 2004, por unanimidad de 8 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 31 de mayo de 2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- (...)

Este Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, considera **PARCIALMENTE FUNDADA** la aclaración de sentencia úni-

camente por lo que hace a lo que debe entenderse por “en términos de ley”, pero **INFUNDADA,** por lo que hace a la solicitud de reintegración de los conceptos de actualización e intereses a que se refieren los artículos 17-A y 22 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que la sentencia se dictó en estricto cumplimiento a la ejecutoria y en ésta no se resolvió la devolución de tales conceptos. Lo anterior, por las siguientes consideraciones.

En la sentencia de 19 de marzo de 2004, dictada por este Pleno, se resolvió en la parte conducente de las páginas 56, 57, 76, 77 y 59 lo siguiente:

“**SENTENCIA**

“**OCTAVO.-** Ahora bien, esta Juzgadora, en estricto cumplimiento a la ejecutoria que se trata y dado que se ordena dejar insubsistente la sentencia de 11 de noviembre de 2002, y que en su lugar se dicte otra en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria se resuelva con plenitud de jurisdicción la litis del juicio contencioso administrativo, se entra al estudio conjunto de los conceptos de impugnación que las actoras denominan como primero, segundo, tercero y cuarto y que consisten textualmente en lo siguiente:

“ ‘PRIMERO.-

“ ‘(...)

“‘Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, cualquier cantidad que se haya pagado a la Federación indebidamente, debe ser devuelta con la actualización e intereses que se establecen en el artículo 17-A del propio Ordenamiento, a partir del mes en que se realizó el pago, en los términos a los que se refiere el cuarto párrafo del propio numeral en cita.

“ ‘(...)’

"**RESOLUCIÓN DEL PLENO**

"(...)

"AGRAVIOS PRIMERO Y SEGUNDO
RELATIVOS A LA APLICACIÓN DEL 20% DE LA POSTURA
COMO SANCIÓN ADMINISTRATIVA NO PREVISTA EN LA LEY

"(...)

"e) Que es ilegal la afirmación de la autoridad al expresar que aun suponiendo que la sanción impuesta fuera de carácter administrativo, no se requeriría de una facultad expresa para imponerla, ya que no existe prohibición en este sentido.

"Que al resolver la Secretaría de Comunicaciones que el pago parcial realizado por sus representados consistente en el 20% de la contraprestación, por una concesión para el uso de frecuencias que nunca se otorgó, se aplique en favor de la Tesorería de la Federación con el carácter de pena convencional, sin dar argumentos legales suficientes para sustentar su decisión, incumple con la obligación de fundar y motivar la resolución impugnada, violando lo dispuesto en la fracción II, del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, y que por ello solicita se declare nula la resolución impugnada para el efecto de que se proceda a la devolución de dicho pago parcial, en los términos de lo dispuesto por el artículo 22 del propio Código Fiscal de la Federación, con la actualización correspondiente que ordena la ley.

"(...)

"Por otra parte, a juicio de esta Juzgadora, son **FUNDADOS** los argumentos de las actoras que quedaron resumidos en los incisos a), b), c), d), e), g) y h) resumidos al inicio de este considerando, que medularmente se refieren a la

ilegalidad de la imposición de la sanción pecuniaria consistente en la aplicación del 20% de la postura a favor de la Tesorería de la Federación por estimar que no se trata de una pena convencional de carácter contractual sino de una sanción administrativa que debe ser fundada y motivada y que a juicio de la actora sólo se sustenta en las bases de licitación emitidas por la propia autoridad pero que dicha sanción no se contempla en la Ley Federal de Telecomunicaciones; que la autoridad no está facultada para crear sus propias sanciones como lo hizo en el numeral 8.2 de las bases de licitación y que la sanción impuesta sí requiere una facultad expresa para imponerla, que el Gobierno Federal sólo puede contener una contraprestación por virtud del otorgamiento de una concesión pero en el caso al no haberse otorgado dicha concesión no es legal dicha sanción; que no existe consentimiento tácito de la sanción contenida en el numeral 8.2 de las bases porque esta última no tiene el carácter de autoaplicativa; que en el momento en que tuvo conocimiento de la posible aplicación en su contra de la sanción administrativa manifestó su oposición expresa en los términos de lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; que el hecho de participar en la licitación tampoco se deriva ningún perjuicio para el participante derivado del numeral 8.2 contra el cual deba inconformarse; que incluso en el caso de que un participante sea descalificado no necesariamente se actualiza la sanción mencionada que se le pretende imponer porque se requiere que el participante hubiere realizado algún pago para efectos de que éste pueda quedar en beneficio de la Tesorería y que por ello no existió el consentimiento ni de la sanción controvertida ni de las bases de licitación por las siguientes consideraciones:

"Lo anterior es así, en estricto cumplimiento a lo resuelto en la ejecutoria de 15 de enero de 2004, en la cual se ha resuelto por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que, como lo afirman las actoras no consintieron la sanción prevista en el numeral 8.2 de las bases de licitación por haber participado en la celebración del contrato respectivo y que con la exhibición de la garantía de seriedad los actores aceptaron los términos y condiciones establecidos en las bases pero que en ese momento no les causaba ningún

perjuicio la disposición mencionada y que por ello, no se encontraban obligadas a impugnarla y que no estuvieron en la posibilidad de recurrir las bases de licitación particularmente el numeral 8.2 con anterioridad al momento en que lo hacen y que los artículos 14 y 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, no establecen la facultad expresa de imposición de sanciones a los participantes en un procedimiento de licitación por el incumplimiento a las bases de licitación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones o a otra autoridad encargada de participar en las concesiones.

"Lo anterior, conforme a lo resuelto en la ejecutoria que se cumplimenta y que en su parte medular a continuación se transcribe:

" '(...)

" 'En la especie, los quejosos no estuvieron en la posibilidad de recurrir las bases de licitación, particularmente de su numeral 8.2 (que establece la sanción materia de la controversia), con anterioridad al momento en que lo hacen, razón por la cual no puede impedírseles que ahora planteen su reclamo, atendiendo a que al momento en que se sometieron al procedimiento de licitación y exhibieron la garantía de seriedad respectiva, carecían de cualquier interés para impugnar la sanción prevista en el dispositivo de mérito, en la medida en que en esa temporalidad no trascendía perjudicialmente a su esfera jurídica.

" '(...)

" 'Además, para corroborar la postura de que no por haber participado los quejosos en el procedimiento licitatorio de origen consintieron la sanción prevista en el numeral 8.2 de las bases de licitación, basta con ubicarse en el ámbito civil, en el que no obstante que los interesados celebran determinado contrato en el que establecen los términos y condiciones bajo las cuales debe llevarse a cabo, posteriormente pueden demandar la nulidad de alguna de sus cláusulas, e incluso de todo el contrato, si consideran que se actualiza algún

vicio del consentimiento, es decir, si éste fue obtenido por medio del dolo, error o violencia, y en tal supuesto no puede alegarse que se está en presencia de un acto consentido por haber participado en la celebración del contrato respectivo, pues la propia legislación civil, en la especie el Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Telecomunicaciones, regula las figuras jurídicas de inexistencia y de nulidad, la cual puede ser absoluta o relativa, y da la posibilidad al afectado de demandar la actualización de dichas figuras, tan es así que el artículo 2230 del ordenamiento legal citado en primer término, establece que la nulidad por causa de error, dolo, violencia, lesión o incapacidad sólo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios del consentimiento, se ha perjudicado por la lesión o es el incapaz.

" '(...)

" 'Sobre tales premisas, es fácil advertir que los artículos 14 y 16 de la Ley Federal de Telecomunicación no contiene disposición alguna que faculte expresamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones o a otra autoridad encargada de participar en las concesiones, a imponer sanciones a los participantes en un procedimiento de licitación, pues únicamente prevén los lineamientos que deben contener las bases de licitación para obtener concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro para usos determinados, dentro de los cuales no se encuentra expresamente la facultad de sancionar, por lo que resulta inexacta la afirmación de la Sala Responsable en el sentido de que la sanción materia de la litis encuentra sustento en los preceptos de mérito, sin que pueda considerase que la facultad de sancionar se encuentra implícita en tales dispositivos, pues las autoridades administrativas sólo pueden hacer lo que la ley les permite, habida cuenta que al causar perjuicios o molestias a los particulares, ya sea a través de una sanción o multa, deben actuar con facultades legales que les hayan sido otorgadas de manera expresa en la Constitución o en alguna ley.

" 'No representa obstáculo a la anterior determinación que existan casos en los que por la naturaleza de la facultad otorgada, resulta imposible que la norma describa todos los elementos y matices de la facultad otorgada, entendiéndose legalmente conferidas todas las facultades implícitas en las expresamente otorgadas, es decir, por implícitas aquellas facultades sin las cuales se vería sustancialmente mermada la facultad que expresamente se otorgó; pues tratándose de normas que imponen sanciones no puede hablarse de facultades implícitas, si no están claramente determinadas en una ley, sin que las autoridades administrativas puedan ampliar sus facultades al respecto por razones de interés público, o de conveniencia en el ejercicio de sus actividades, pues en el caso de las facultades para imponer sanciones o multas, y las hipótesis en que procede su aplicación, deben estar expresa y explícitamente enunciadas en la ley, por lo que si bien en la especie los artículos 14 y 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, facultan a establecer discrecionalmente la forma y términos en que la autoridad administrativa pretende se lleve a cabo la prestación del servicio licitado (bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios de televisión y radio restringido), las condiciones del contrato del trámite para la adjudicación; lo cierto es que tal facultad no puede comprender la imposición de sanciones por el incumplimiento a las bases de licitación respectivas, pues de esos artículos no se advierte que así lo establezcan expresamente; de ahí lo fundado de los conceptos de violación'.

"(...)

"**A**. Hechas las aclaraciones anteriores y dado que el Tribunal Colegiado en la ejecutoria que se cumplimenta ha resuelto que las actoras no consintieron las bases de licitación al haber participado en el procedimiento licitatorio respectivo, y que la autoridad demandada no se encuentra facultada para establecer la sanción prevista en las mencionadas bases de licitación, porque no se cumplen con los requisitos de debida fundamentación y motivación, esta Juzgadora estima es ilegal la resolución impugnada, que consideró lo contrario.

"Cabe señalar, que si el Tribunal Colegiado mencionado en la ejecutoria que se cumplimenta, ha resuelto que no existió un consentimiento de las bases de licitación que prevén la sanción pecuniaria controvertida de la aplicación a favor de la Tesorería de la Federación del 20% de la contraprestación que en su caso se hubiere cubierto y que además dicha sanción no se aplicó por una autoridad con facultades expresas para ello porque dicha sanción no se encuentra prevista en la ley de la materia sino únicamente en las bases de licitación emitidas por la propia autoridad, resulta evidente la ilegalidad de la resolución que resolvió el recurso de revisión, considerando por el contrario que sí hubo consentimiento de las bases y que la aplicación de la sanción se sustentó suficientemente en las bases y que no requería de estar prevista en ley alguna por tratarse de una pena convencional.

"**B**. A continuación en estricto cumplimiento a la ejecutoria, esta Juzgadora se ocupa del tópico relativo a la aplicación del artículo 84, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

"Es de precisar, cuál es dicho tópico expresado por la quejosa hoy actora, y resumido en la ejecutoria que se cumplimenta bajo el inciso f), y que consiste en lo siguiente:

" 'Que de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, manifestó su oposición al contenido del numeral 8.2 de las bases de licitación, así como las razones de dicha oposición, durante el trámite del procedimiento licitatorio, particularmente en el recurso de revisión presentado el siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, habida cuenta que en el diverso recurso de revisión que dio origen a la resolución impugnada en el juicio de nulidad, también formuló argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sanción contenida en el referido numeral, por no tener sustento legal en ordenamiento legal que la justifique.'

"Esta Juzgadora estima que efectivamente como lo argumentan las actoras respecto del procedimiento de licitación interpusieron dos recursos de revisión, el primero para controvertir un acuerdo que negó el otorgamiento de la prórroga para el pago del 80% restante de la contraprestación como postura ganadora que el participante ganador hoy actor, se encontraba obligado a cubrir y el segundo, para controvertir el acuerdo que descalificó el procedimiento de licitación al hacerse efectivo el apercibimiento por no haber cubierto dentro de los plazos pactados el pago del 80% restante de la totalidad de la postura ganadora que debió cubrirse a favor del Gobierno Federal y las bases de licitación respectivas.

"También es de precisar que es con motivo del acuerdo de descalificación del procedimiento de licitación cuando se aplica la sanción pecuniaria prevista en el número 8.2 de las bases de licitación, ello como consecuencia de la descalificación de las recurrentes hoy actoras, que por su parte se sustenta en el incumplimiento de la contraprestación completa con motivo de la postura ganadora que tenía que cubrirse a favor del Gobierno Federal a fin de otorgar las concesiones respectivas.

"Por ello, si en el segundo recurso de revisión las actoras controvirtieron el acuerdo de descalificación en la parte que aplicó la sanción pecuniaria de la aplicación del 20% de la postura ganadora a favor de la Tesorería de la Federación, prevista en el numeral 8.2 de las bases de licitación, como resolución que puso fin al procedimiento administrativo de licitación y también impugnó como acto de trámite de dicho procedimiento, las bases de licitación que contiene dicha sanción conforme al artículo 84 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ello es suficiente para constatar que no existió consentimiento alguno de la aplicación de la sanción mencionada, ni de las bases, pues es precisamente vía recurso administrativo que la recurrente controvierte no sólo la sanción sino las bases de licitación que la contienen.

"Máxime que como lo ha resuelto el propio Tribunal Colegiado en la ejecutoria que se cumplimenta, con la expedición de las bases de licitación y la aceptación de sujeción a las mismas por parte del participante grupo inversionista integrado por los hoy actores, no se consiente el contenido de las bases en cuanto a la imposición de la sanción pecuniaria mencionada, por no tratarse de una disposición autoaplicativa, sino que requería de un acto de autoridad que aplicara la sanción, en contra del cual el participante afectado interpusiera medio de defensa alguno para controvertir la sanción prevista en las bases de licitación mencionada, como lo hicieron las actoras.

"Cabe señalar, que el artículo 84, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aludido por las actoras, establece que la oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento para su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo. Que la oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva.

"De igual forma, es de mencionar que el artículo 83, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda intentar la vía jurisdiccional que corresponda.

"En la especie, el recurso de revisión origen de la resolución impugnada en el presente juicio, se interpuso por estimar que el acuerdo de descalificación puso fin al procedimiento administrativo de licitación y que conforme al artículo 84, también controvertía como acto de trámite las bases de licitación que contienen el numeral 8.2 relativo a la sanción pecuniaria controvertida y respecto de la impugnación de dichas bases expresaron las recurrentes como agravio el contenido en el punto segundo de su escrito de recurso presentado el 25 de febrero de 1999, lo siguiente:

"ESCRITO DE RECURSO DE REVISIÓN

" 'SEGUNDO.- LA PUBLICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN POR PARTE DE ESA COMISIÓN, EN LO QUE SE REFIERE A SU NUMERAL 8.2, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EL PARTICIPANTE QUE SEA DESCALIFICADO PERDERÁ A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN LOS PAGOS QUE EN SU CASO HUBIERE REALIZADO, COMO PENA DE SU INCUMPLIMIENTO, NOS AGRAVIA POR ESTAR VICIADA DE NULIDAD EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 5° DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, AL NO CUMPLIRSE EL REQUISITO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3 DEL PROPIO ORDENAMIENTO.

" '(...)'

"Cabe señalar que el artículo 3°, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece que son elementos y requisitos del acto administrativo, estar fundado y motivado.

"En consecuencia, si en la resolución impugnada por una parte se desechó por improcedente la impugnación relativa a la expedición de las bases de licitación, que a juicio de las recurrentes constituían actos de trámite impugnables en el recurso al emitirse la resolución definitiva que diera fin al procedimiento administrativo conforme al artículo 84, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por estimar la autoridad que existió el consentimiento de las bases y que quedaron consumadas de modo irreparable al no haberlas impugnado en su oportunidad; esta Juzgadora estima que resulta ilegal dicha determinación.

"Lo anterior, en virtud de que del contenido íntegro del segundo agravio del escrito de recurso al que recayó la resolución impugnada, se desprende que las recurrentes medularmente expresaron que las bases de licitación constituyen actos de trámite en el procedimiento administrativo de licitación y que

respecto de su punto 8.2 debe declararse su nulidad, porque la sanción que en él se consigna carece por completo de fundamentación y motivación y con ello se omite el requisito que establece la fracción V, del artículo 3° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

"En consecuencia, ante el 'desechamiento por improcedencia de la impugnación de la expedición de las bases de licitación,' esta Juzgadora estima ilegal dicha determinación porque si bien la resolución que puso fin al procedimiento administrativo de licitación lo fue el acuerdo de descalificación que aplicó la sanción pecuniaria consistente en la aplicación a favor de la Tesorería de la Federación del 20% de la contraprestación; también lo es, que el artículo 84, en relación con el artículo 83, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, permiten que en el escrito de recurso contra actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, también se formule la oposición a los actos de trámite dictados en dicho procedimiento administrativo, al controvertir la resolución que ponga fin a dicho procedimiento, ello es que tiene la posibilidad de expresar agravios a fin de oponerse a los actos de trámite aun cuando la resolución recurrida sea la que dio fin a dicho procedimiento.

"En efecto, si bien en el caso, la resolución que da origen a la interposición del recurso de revisión de que se trata, lo es, el acuerdo de descalificación del participante de la licitación, hoy actor; también lo es, que en el mismo recurso de revisión, la recurrente puede formular agravios en oposición a los actos de trámite del procedimiento administrativo de que se trate, como se hizo en la especie, al estimar que las bases de licitación constituyen actos de trámite en el procedimiento administrativo de licitación y que deben estar fundados y motivados, específicamente por lo que hace a su numeral 8.2 que contiene la sanción pecuniaria controvertida, como se resolvió en la ejecutoria que se cumplimenta.

"Cabe aclarar, que si bien en la resolución impugnada se resolvió tener por improcedente la impugnación relativa a las bases de licitación señaladas como actos de trámite en dicho procedimiento, también lo es que la autoridad sí se pronunció respecto del agravio medular planteado por la recurrente en dicho recurso al resolver que en las bases de licitación se contenía la sanción controvertida y que por ello era legal la aplicación de la sanción.

"Sin embargo, como se ha resuelto en la ejecutoria que se cumplimenta la autoridad demandada no puede crear sus propias sanciones en las bases de licitación sino que las mismas deben estar previstas en ley y no en dichas bases que constituyen actos administrativos emitidos por la propia autoridad sancionadora y por ello la resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada en los términos de lo resuelto en la ejecutoria que se cumplimenta.

"**C**. Por lo cual, si la autoridad al resolver el recurso de revisión por una parte desechó la impugnación de las bases de licitación, y por otra confirmó el acuerdo de descalificación, y atendiendo a las consideraciones contenidas en el punto B. anterior, es procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada por indebida fundamentación y motivación conforme a lo dispuesto en los artículos 238, fracción IV y 239, fracción II del Código Fiscal de la Federación, ello en virtud de que dichas bases sí son oponibles vía el recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 84, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en estricto cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria, en la cual se resolvió que las bases de licitación carecen de la fundamentación y motivación en la imposición de la sanción pecuniaria consistente en la aplicación a favor de la Tesorería de la Federación del 20% de la contraprestación que como postura ganadora hubiere cubierto el participante como grupo inversionista integrado por los hoy actores, al Gobierno Federal, porque dicha sanción no constituye una pena convencional de carácter contractual, sino un acto administrativo de imposición de una sanción pecuniaria a cargo del participante de la licitación que fue descalificado por no haber cubierto la totalidad

de la postura ganadora y a favor de la Tesorería de la Federación al ordenarse la aplicación de dicho 20% como pena ante el incumplimiento del pago total mencionado, que debe estar prevista en la ley y no en las bases de licitación emitidas por la autoridad y que los artículos 14 y 16, de la Ley de Telecomunicaciones, no prevén la imposición de la sanción pecuniaria en el sentido de que ante el incumplimiento del pago total de la contraprestación a favor del Gobierno Federal como postura ganadora deba sancionarse o penalizarse al ganador incumplido con la aplicación a favor de la Tesorería de la Federación del pago parcial que como contraprestación hubiere cubierto el ganador incumplido del pago total.

"**D**. Por otra parte, con fundamento en los artículos 197, último párrafo, y 237 penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, esta Juzgadora se pronuncia sobre la legalidad de la resolución recurrida en la fase administrativa consistente en el acuerdo de descalificación, por contar con elementos para ello y siguiendo los lineamientos expresados en la ejecutoria que se cumplimenta y por ello se declara la nulidad para efectos conforme a lo dispuesto en el artículo 238, fracción IV y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en los siguientes términos:

"Cabe señalar que las recurrentes controvirtieron el acuerdo de descalificación número P/030299/0040 de 3 de febrero de 1999, únicamente por lo que hace a la sanción consistente en la aplicación a favor de la Tesorería de la Federación, del 20% de la contraprestación por la concesión no otorgada (postura ganadora) no así respecto de la determinación del incumplimiento del 80% de la postura ganadora que se omitió cubrir por las hoy actoras en el plazo concedido y la consecuente descalificación del procedimiento de licitación por no haber cubierto el monto total de la postura ganadora, que dio lugar a la negativa de concesiones respectivas.

"Lo anterior, se desprende del contenido del escrito de recurso presentado el 25 de febrero de 1999, a fojas 37 a 71 del expediente y con la confesión

expresa de las actoras contenida en su escrito inicial de demanda, que únicamente se refiere a la impugnación de la sanción del 20% de la postura ganadora a favor de la Tesorería de la Federación pero no controvierte el incumplimiento que dio origen a la descalificación, la descalificación en sí misma, ni la orden de hacer efectivas la garantía de seriedad y la fianza otorgadas por la empresa hoy actora.

"Por lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 238, fracción IV y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, procede declarar la nulidad de la resolución recurrida en la fase administrativa consistente en el acuerdo de descalificación, para el efecto de que se emita otro, en el cual se considere que no ha lugar a la imposición de la sanción consistente en la aplicación a favor de la Tesorería de la Federación, de las cantidades que como contraprestación en su caso, hubieren sido cubiertas por los hoy actores, a la autoridad demandada; dejando intocada la parte del acuerdo de descalificación que determinó el incumplimiento en el pago completo de la postura ganadora, la descalificación del procedimiento de licitación y que ordenó hacer efectivas la garantía de seriedad y la fianza otorgadas, ya que estas cuestiones no fueron controvertidas por las actoras, ni en el recurso, ni en el juicio contencioso administrativo; así como la autoridad emisora de la resolución recurrida en la fase administrativa deberá tomar en consideración lo efectivamente pagado por los participantes, hoy actores, respecto de cada concurso licitado y proceder a su devolución, ello en cuanto al pago parcial de la contraprestación de la postura legal ganadora incumplida por el participante de la licitación, (*grupo inversionista integrado por los hoy demandantes*), y que se reconoció por la autoridad en la propia resolución de descalificación, al argumentar la omisión en el pago del 80% restante de dicha contraprestación, procediendo a la devolución correspondiente en los términos de ley, únicamente de las cantidades que en su caso, se hubieren cubierto a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ya que esta Juzgadora carece de elementos para pronunciarnos sobre el importe de las cantidades efectivamente pagadas, debiendo la autoridad demandada considerar el monto total que debió cubrirse

como postura ganadora de cada concurso licitado y lo efectivamente pagado, pues únicamente a lo largo de la resolución recurrida y de la impugnada en este juicio, se ha referido en forma general al 20% de una sanción, que constituyó un pago debido como primera aportación por concepto de la contraprestación total de la postura ganadora a fin de otorgar la concesión correspondiente, ello atendiendo a los recibos de depósito y recibos de pago respectivos.

"En consecuencia, es procedente la devolución únicamente de las cantidades que se hubieren cubierto como pago parcial de la contraprestación relativa a la primera exhibición del 20% de la postura ganadora, en la licitación de concesión de bandas de frecuencia de espectro radioeléctrico para servicios de t.v. y audio restringido, en cuanto a los concursos 1 TVR 1.1.1, 5 TVR 1.3, 3 TVR 1.2.1, 12 TVR 3.3, 13 TVR 3.4, 16 TVR 4.4, 17 TVR 4.5, 34 TVR 7.3, 45 TVR 9.3 que la autoridad deberá determinar conforme los recibos de depósitos ante el Banco Nacional de México, S.A. y sus respectivos recibos.

"Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracción IV, 239, fracciones II y III, 239-A, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

"I.- En acatamiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo D.A.135/2003 se deja sin efectos la sentencia de 11 de noviembre de 2002.

"II. Resultaron infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas.

"III. No se sobresee el presente juicio.

"IV. Las actoras acreditaron los fundamentos de su pretensión; en esta virtud;

"V. Se declara la nulidad de la resolución expresa impugnada consistente en la resolución contenida en el oficio 1.-273 de 8 de julio de 1999, a través de la

cual se resolvió el recurso de revisión interpuesto; así como, de la resolución recurrida consistente en el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en sesión de 3 de febrero de 1999, bajo el número P/030299/0040; precisadas en el resultando 1° inciso b), de este fallo, en los términos señalados en el último considerando de esta resolución.

"(...)"

En ese sentido en dicha sentencia se declaró la nulidad para efectos, tanto de la resolución impugnada, que resolvió el recurso de revisión, así como de la resolución recurrida, consistente en el acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en sesión de 3 de febrero de 1999, en los términos del último considerando de dicha sentencia, esto es, para el efecto de que:

1.- Se emita otra resolución, en la cual se considere que no ha lugar a la imposición de la sanción consistente en la aplicación a favor de la Tesorería de la Federación, de las cantidades que como contraprestación en su caso, hubieren sido cubiertas por los hoy actores, a la autoridad demandada; dejando intocada la parte del acuerdo de descalificación que determinó el incumplimiento en el pago completo de la postura ganadora, la descalificación del procedimiento de licitación y que ordenó hacer efectivas la garantía de seriedad y la fianza otorgadas, ya que estas cuestiones no fueron controvertidas por los actores, ni en el recurso, ni en el juicio contencioso administrativo.

2.- Así como, la autoridad emisora de la resolución recurrida en la fase administrativa debería tomar en consideración lo efectivamente pagado por los participantes, hoy actores, respecto de cada concurso licitado y proceder a su devolución, ello en cuanto al pago parcial de la contraprestación de la postura legal ganadora incumplida por el participante de la licitación, (*grupo inversionista integrado por los hoy demandantes*), y que se reconoció por la autoridad en la propia resolución de descalificación, al argumentar la omisión en el pago del 80% restante de dicha contraprestación, procediendo a la devolución correspondiente **en los términos de**

ley, únicamente de las cantidades que en su caso, se hubieren cubierto a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ya que esta Juzgadora carece de elementos para pronunciarnos sobre el importe de las cantidades efectivamente pagadas, debiendo la autoridad demandada considerar el monto total que debió cubrirse como postura ganadora de cada concurso licitado y lo efectivamente pagado, pues únicamente a lo largo de la resolución recurrida y de la impugnada en este juicio, se ha referido en forma general al 20% de una sanción, que constituyó un pago debido como primera aportación por concepto de la contraprestación total de la postura ganadora a fin de otorgar la concesión correspondiente, ello atendiendo a los recibos de depósito y recibos de pago respectivos.

3.- Reiterando en dicho último considerando de la sentencia que en consecuencia, era procedente la devolución únicamente de las cantidades que se hubieren cubierto como pago parcial de la contraprestación relativa a la primera exhibición del 20% de la postura ganadora, en la licitación de concesión de bandas de frecuencia de espectro radioeléctrico para servicios de t.v. y audio restringido, en cuanto a los concursos 1 TVR 1.1.1, 5 TVR 1.3, 3 TVR 1.2.1, 12 TVR 3.3, 13 TVR 3.4, 16 TVR 4.4, 17 TVR 4.5, 34 TVR 7.3, 45 TVR 9.3 que la autoridad deberá determinar conforme los recibos de depósitos ante el Banco Nacional de México, S.A. y sus respectivos recibos.

Por lo anterior, resulta **PARCIALMENTE FUNDADA** la aclaración de sentencia dado que en la misma, en el antepenúltimo párrafo del octavo considerando de dicho fallo, se resolvió que era procedente la devolución correspondiente "**en los términos de ley, únicamente de las cantidades que en su caso, se hubieren cubierto a la Comisión Federal de Telecomunicaciones**".

Lo cual, se aclara en la presente resolución, se refiere al estricto cumplimiento de la ejecutoria que se cumplimenta en dicha sentencia, esto es, de la ejecutoria de 15 de enero de 2004, en la cual el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió en el juicio de amparo directo D.A.- 135/2003, que la determinación de aplicar a favor de la Tesorería de la Federación, las cantidades que

en su caso hubieren sido cubiertas por los hoy actores, respecto del 20% del total de la postura para la adjudicación del contrato licitado, derivado del incumplimiento del 80% restante, no constituía una pena constitucional que estuviera válidamente impuesta conforme a las Bases de Licitación, sino que se trataba de una sanción pecuniaria dictada en un procedimiento administrativo de licitación y que como tal tenía que fundarse en la Ley Federal de Telecomunicaciones y no en dichas bases y que al carecer de dicho fundamento dicha sanción resultaba infundada y la sentencia dictada por este Pleno objeto del amparo ilegal.

Por lo anterior, cuando en la sentencia de la cual se solicita la aclaración se alude a la devolución en términos de ley del 20% únicamente de las cantidades que hubieren sido cubiertas por dicho 20%, se aclara que se alude a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que no prevé la sanción mencionada.

Por lo cual, en la parte de la sentencia que se dijo que:

"(...) **procediendo a la devolución correspondiente en los términos de ley, únicamente de las cantidades que en su caso, se hubieren cubierto a la Comisión Federal de Telecomunicaciones** (...)"

Debe decir lo siguiente:

"(...) **procediendo a la devolución únicamente de las cantidades que en su caso se hubieren cubierto a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en los términos de los fundamentos y motivos de la ejecutoria que se cumplimenta de 15 de enero de 2004, que resolvió que en la ley de la materia esto es, en la Ley Federal de Telecomunicaciones, no se prevé la imposición de la sanción controvertida y que era insuficiente la aplicación de las bases de licitación para justificar dicha imposición** (...)"

Por otra parte, resulta **INFUNDADA** la parte de la aclaración de sentencia en la cual las demandantes argumentan que en la sentencia, no se formuló pronunciamiento alguno respecto de la solicitud de devolución de los conceptos de actualización e intereses a que se refieren los artículos 17-A y 22 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que ello constituye un concepto de reclamación que controvierte el sentido del fallo, pero no se trata de una aclaración de la sentencia.

Máxime, que la sentencia de 19 de marzo de 2004, se dictó en estricto acatamiento a la ejecutoria de enero de 2004, en la cual el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, no resolvió sobre la devolución de la actualización e intereses que pretenden las demandantes.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 239-C del Código Fiscal de la Federación y con apoyo del artículo 16, fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I. Es procedente y fundada parcialmente la aclaración de sentencia promovida por las actoras, consecuentemente;

II. Se aclara la sentencia de 19 de marzo de 2004, en los términos precisados en el último considerando de este fallo, aclaración que forma parte integrante de dicha sentencia.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada del presente fallo, devuélvanse los autos a la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto, y en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 31 de mayo de 2004, por unanimidad de 8 votos de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Alma Peralta Di Gregorio, Jorge Alberto García Cáceres, María Guadalupe Aguirre Soria, Silvia Eugenia Díaz

Vega, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Luis Carballo Balvanera, María del Consuelo Villalobos Ortíz. Encontrándose ausentes los Magistrados Luis Malpica de Lamadrid, Alejandro Sánchez Hernández y Guillermo Domínguez Belloc.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia se aprobó.

Se elabora el presente engrose el 7 de junio de 2004, y con fundamento en lo previsto en los artículos 26, fracción VI, y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, firma la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

PRIMERA SECCIÓN

LEY DE COMERCIO EXTERIOR

V-P-1aS-231

CUOTAS COMPENSATORIAS.- CUANDO LA RESOLUCIÓN QUE LAS DETERMINA LO HACE DIFERENCIALMENTE PARA CADA EXPORTADOR, EL TÉRMINO DE VIGENCIA DE CINCO AÑOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR CORRE INDEPENDIENTE PARA CADA UNO.- Si en una resolución de determinación de cuotas compensatorias la autoridad competente mexicana aplica una cuota para cada uno de los exportadores involucrados, la vigencia de cada cuota, en los términos del artículo 70 de la Ley de Comercio Exterior, es independiente. De tal modo que si respecto de la cuota impuesta a las exportaciones efectuadas por uno de los exportadores no se realizó revisión alguna a petición de parte u oficiosamente por la autoridad en un plazo de cinco años, la cuota se extingue aun cuando respecto de los demás exportadores sí se hubiesen realizado revisiones que concluyeron que persisten las prácticas desleales, razón por la cual permanecen de las cuotas impuestas por otros cinco años. (14)

Juicio No. 16335/02-17-09-5/105/04-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de junio de 2004, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Martha Elizabeth Ibarra Navarrete.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de junio de 2004)

PRECEDENTE:

V-P-1aS-130
Juicio No. 3900/01-17-10-5/649/01-S1-04-01.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de enero de 2002, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Ricardo Arteaga Magallón.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de octubre de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 26. Febrero 2003. p. 72

LEY DE COMERCIO EXTERIOR

V-P-1aS-232

CUOTAS COMPENSATORIAS.- SU VIGENCIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR.- En los términos del artículo 70 de la Ley de Comercio Exterior, una cuota compensatoria tiene una vigencia de cinco años a partir de su determinación; sin embargo, cuando se realiza la revisión de la medida, ya sea a instancia de las partes que intervinieron en el procedimiento original u oficiosamente por la autoridad, los cinco años se cuentan a partir de concluida la revisión, es decir, no es suficiente que transcurran cinco años desde que la medida se impuso por primera vez para que se elimine, sino que es menester que no se hubiese revisado en el mismo lapso; pues de ser el caso y de subsistir la cuota después de la revisión, el nuevo cómputo iniciará a partir de que este nuevo procedimiento concluya. (15)

Juicio No. 16335/02-17-09-5/105/04-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de junio de 2004, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Martha Elizabeth Ibarra Navarrete.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de junio de 2004)

PRECEDENTE:

V-P-1aS-132
Juicio No. 3900/01-17-10-5/649/01-S1-04-01.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de enero de 2002, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Ricardo Arteaga Magallón.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de octubre de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 26. Febrero 2003. p. 74

SEGUNDA SECCIÓN

LEY DE COMERCIO EXTERIOR

V-P-2aS-353

CERTIFICADOS DE ORIGEN.- DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE REQUISITADOS Y CORRELACIONARSE CON CADA UNO DE LOS RENGLONES Y FRACCIONES ARANCELARIAS DE LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN CORRESPONDIENTES.- De una armónica interpretación a lo dispuesto en los artículos 66 de la Ley de Comercio Exterior y los diversos 501 y 503 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la regla 31 de las Reglas en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando la autoridad requiera al importador los certificados de origen de las mercancías amparadas en un pedimento de exportación, los mismos deberán estar requisitados conforme a las normas aplicables y correlacionarse con cada uno de los renglones y sus respectivas fracciones arancelarias para que la autoridad pueda considerarlos válidos. (16)

Juicio No. 1239/02-13-01-7/535/03-S2-09-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de mayo de 2004, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Juan Francisco Villarreal Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de mayo de 2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

QUINTO.- (...)

Para los Magistrados integrantes de esta Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el agravio en estudio es INFUNDADO en virtud de las siguientes consideraciones:

En primer lugar y como se desprende de autos, mediante oficio 324-SAT-4653, fechado el 17 de octubre de 2000 notificado legalmente el día siguiente, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Veracruz, con sede en Veracruz, en el Estado del mismo nombre, solicitó al representante legal de la hoy actora, diversa documentación a que se refiere el artículo 36 de la Ley Aduanera, entre la que se encuentran los certificados de origen de la mercancía importada durante el período comprendido entre el 1° de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 1999 y que el 8 de noviembre del año 2000 la empresa requerida pidió una ampliación de 10 días al plazo inicialmente conferido por la autoridad para presentar la documentación solicitada, petición que fue obsequiada y por cuyo incumplimiento se impusieron a la importadora dos multas.

No fue sino hasta el 18 de junio de 2001 en que la hoy actora entregó copia de los pedimentos de importación y la documentación que acompañó a los mismos, solicitándole la autoridad esta vez, con oficio de fecha 26 de julio del citado año, que **subsanara los errores del llenado de los certificados**, certificados que enteró de nueva cuenta la demandante el 6 de agosto siguiente.

Tras el estudio realizado por la requirente a estos últimos, se dieron a conocer a la hoy actora las observaciones a la documentación que proporcionó el citado 6 de agosto, entre las que destacan las relativas a deficiencias y omisiones en el llenado de los certificados de origen, en los campos correspondientes y fracciones arancelarias que no cuentan con certificado de origen, o que están sujetas a cuotas compensatorias. Transcurrido el plazo de 20 días que se confirió con base en lo dispuesto en el artículo 46, fracción VI del Código Fiscal de la Federación, la demandante no presentó prueba alguna que desvirtuara las observaciones formuladas por la autoridad.

Es en el contexto arriba descrito que la autoridad emite lo que la demandante denomina “liquidación impugnada”, es decir, el oficio 324-SAT-30-I-14379 de 28 de noviembre de 2001, mediante el cual se determinó a ésta un crédito fiscal por la cantidad de $ 4’281,172.00 por concepto de impuesto general de importación, cuota compensatoria, impuesto al valor agregado, multas y recargos.

En contra de la "liquidación impugnada", la actora presentó recurso de revocación manifestando como único agravio "(...) la falta de motivación del acto impugnado en virtud de que la autoridad, al señalar los defectos del llenado de los certificados de origen, en ningún momento ha detallado el nombre del importador, por lo tanto resulta imposible saber el exportador a que, se refiere". Así mismo *Ad cautelam* afirma que con el recurso exhibe los certificados de origen debidamente requisitados y que relaciona en el listado transcrito en el agravio "ÚNICO" del recurso de revocación, sin embargo, resulta notorio, como antes se advirtió, que dicho catálogo está referido a pedimentos de importación y no a certificados de origen, pero además en autos solamente obran dos de los pedimentos listados: el 3635-9000177 de fecha "03091999" (folios 154 a 157) y el 3635-9000245 de fecha "02111999" (folios 133 a 137), que amparan diversas mercancías.

Por lo que toca a las observaciones efectuadas por la autoridad a los certificados de origen presentados en su momento por la actora, a juicio de los integrantes de esta Sección los mismos fueron subsanados en los certificados de origen que aporta en el presente juicio, sin embargo, la regularización de los certificados mencionados es insuficiente para declarar la nulidad de la resolución que se impugna como se verá en los siguientes razonamientos.

En efecto, para el juicio en que se actúa, la demandada presentó como pruebas diversos certificados de origen con los campos apropiadamente requisitados conforme a las normas establecidas para el particular, sin embargo, algunos de ellos no coinciden en su clasificación arancelaria con la que aparece en la relación de pedimentos antes transcrita, resultando conveniente aclarar que las manifestaciones de la demandada con respecto a que dichas pruebas aportadas por la actora en el presente juicio son distintas a las exhibidas en la fase de fiscalización y en la etapa administrativa, no impiden el estudio de las mismas por parte de esta Juzgadora puesto que la presentación de los certificados de origen no se limita al momento de la formulación del pedimento o a la etapa administrativa, sino que por el contrario, pueden ser enteradas para su valoración en el juicio.

Apoya los razonamientos anteriores la Jurisprudencia de este Tribunal cuyos datos de localización y texto enseguida se transcriben:

"Cuarta Época.
"Instancia: Segunda Sección
"R.T.F.F.: Año II. No. 25. Agosto 2000.
"Tesis: IV-J-2aS-9
"Página: 7

"**CERTIFICADO DE ORIGEN.- NO ACOMPAÑARLO AL PEDIMENTO NO IMPLICA LA PRECLUSIÓN DEL DERECHO DE RENDIR LA PRUEBA**.- Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 36 de la Ley Aduanera, vigente hasta marzo de 1996, y con el 66 de la Ley de Comercio Exterior, el importador está obligado a acompañar, al pedimento de importación, el certificado de origen, cuando las mercancías sean idénticas o similares a aquéllas por las que deba pagarse una cuota compensatoria. También lo es, que la falta de presentación no puede tener como consecuencia la preclusión del derecho de rendir la prueba. Por lo tanto, si se exhibe el certificado de origen como prueba en el recurso administrativo o en el juicio, se le debe admitir y valorar, aun cuando no se haya presentado ante la aduana, pues su presentación extemporánea no puede tener como consecuencia privar al particular de su prueba. (1)
"(Tesis de Jurisprudencia aprobada en sesión de 29 de febrero de 2000)"

Puntualizado lo anterior, es de hacer notar que mientras que en el listado presentado por la entonces recurrente relaciona 27 números que corresponden a otros tantos pedimentos de importación con sus respectivas fechas, fracciones arancelarias y nombre de los proveedores, en el expediente en estudio se localizan solamente 2 de esos pedimentos de importación: el número 3635-9000245 ("DOCTO NO. 57" folios 133 a 137) de 2 de noviembre de 1999 y el número 3635-9000177 ("DOCTO NO. 63" folios 154 a 157) de 3 de septiembre de 1999.

En comparación con el listado presentado en el recurso administrativo por la actora, en el que incluye en los citados pedimentos 7 fracciones arancelarias, en el libelo únicamente se consignan 5 de ellas que son las siguientes:

PEDIMENTO 3635-9000245:
FRACCIÓN 40169301
FRACCIÓN 62033999
FRACCIÓN 62034999
FRACCIÓN 40151999

Se suma a lo anterior que el pedimento en análisis contiene no las 6 fracciones arancelarias relacionadas en el listado presentado en el recurso administrativo, sino 33, más un registro de 17 facturas de diversos proveedores, además de que no se encuentran agregados ni correlacionados al pedimento los certificados de origen a que se hace referencia en el campo correspondiente a "OBSERVACIONES" del propio pedimento.

PEDIMENTO 3635-9000177
FRACCIÓN 94037099

En este pedimento se consignan 18 mercancías más los datos correspondientes a 14 facturas e igualmente no se encuentran agregados ni correlacionados los certificados de origen a que se hace referencia en el campo correspondiente a "OBSERVACIONES" del citado pedimento.

En ambos casos los certificados de origen no se encuentran correlacionados con los pedimentos de importación, además de que el análisis realizado por esta Juzgadora arroja la existencia de fracciones arancelarias diferentes a las que se hizo referencia en el recurso administrativo, certificados de origen cuyas fracciones arancelarias corresponden a un año diverso al que se consigna en la relación presentada en el citado recurso por la actora y fracciones arancelarias que aparecen en el certificado pero que no fueron con las que se clasificó la mercancía en el pedimento de

importación, de acuerdo con el multimencionado listado aportado por la hoy accionante en el recurso intentado ante la autoridad en la instancia administrativa.

A lo anterior se suma el hecho de que los pedimentos que la accionante identifica en el recurso con los números 3635-8000414, 3635-8000424 y 3635-9001237, no fueron objeto de la liquidación que se contiene en el oficio 324-SAT-30-I-14379 de 28 de noviembre de 2001; en cambio los diversos que la autoridad señala bajo los números 3449-9072125, 3635-9000168, 3635-9000143, 3635-9000180, 3635-9003087 y 3635-8000444, no fueron combatidos por la actora.

De igual manera en el oficio 324-SAT-30-I-14379 de 28 de noviembre de 2001, mediante el cual se determinó a ésta un crédito fiscal por la cantidad de $ 4'281,172.00, a fojas 14 y 15 del mismo, la autoridad consignó el análisis de 29 certificados de origen presuntamente aportados por la hoy actora en aquella instancia, como se hace constar en la hoja 3 del oficio 325-SAT-30-I-1-0775 de fecha 11 de abril de 2002, a folios 12 y siguientes del expediente en estudio, que resuelve el recurso de revocación, en el que la autoridad señaló lo siguiente:

> "**Esta autoridad del estudio que realiza a las documentales consistentes en** copia simple, cotejada con su original, de la resolución contenida (sic) el oficio número 324-SAT-30-I-14379 de fecha 28 de noviembre de 2001, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Veracruz con sede en Veracruz, en el Estado de Veracruz; **copias simples de los certificados de origen** de fecha 1 de enero de 1998, **expedido** por Tim Swift; 16 de abril de 1999, expedido por Robert Martínez; 29 de septiembre de 1998, expedido por Patrick M.; 1 de enero de 1998, expedido por L.A. Wisniski; 7 de enero de 1999, expedido por Robert Lostal; 1 de enero de 1999, expedido por Marc Baroudi; 1 de enero de 1999, expedido por Clara M. Fontenot; 23 de marzo de 1999, expedido por Natalie Versinger; 1 de enero de 1999, expedido por Clara M. Fontenot; 1 de diciembre de 1998, expedido por Yostin Mcelroy; 1 de agosto de 1998, expedido por Elizabeth Swenson; 30 de septiembre de 1998, expedido por Alan Jackson; 1 de enero de 1999, expedido por David

Weinerman; 1 de enero de 1999, expedido por Marck Baroudi; 1 de enero de 1999, expedido por Ana Luisa Fox; 28 de abril de 1999, expedido por Ana Luisa Fox; 1 de enero de 1999, expedido por Ana Luisa Fox; 10 de agosto de 1999, expedido por Ed. Rodríguez; 1 de enero de 1998, expedido por Pam Houston; 1 de enero de 1999, expedido por Pam Houston; 1 de enero de 1999, expedido por Scott Galas; 1 de enero de 1999, expedido por Scott Galas; 1 de octubre de 1999, expedido por Gerri Lynn Smith; 1 de noviembre de 1998, expedido por Mike Richardson; 1 de septiembre de 1999, expedido por Wayne Sebasty, 1 de enero de 1998, expedido por Wayne Sebasty; 1 de enero de 1998, expedido por Andrea Van Osen; 1 de enero de 1999, expedido por R. Lostal y 1 de enero de 1999, expedido por R. Walter, mismas que son exhibidas como pruebas en el medio de defensa que se contesta, las cuales son valoradas en términos del artículo 130 del Código Fiscal de la Federación, determina que **no le asiste la razón a la recurrente en términos de la siguiente motivación** (...)".
(Las negrillas son nuestras)

De acuerdo a lo anterior tenemos que la autoridad habría analizado los siguientes 29 certificados de origen:

Nombre de la persona que expide el Certificado de Origen	Fecha de expedición del Certificado de Origen
Tim Swift	01-01-1998
Robert Martínez	16-04-1999
Patrick M.	29-09-1998
L.A. Wisniski	01-01-1998
Robert Lostal	07-01-1999
Marc Baroudi	01-01-1999
Clara M. Fontenot	01-01-1999
Natalie Versinger	23-03-1999

Clara M. Fontenot	01-01-1999
Yostin Mcelroy	01-12-1998
Elizabeth Swenson	01-08-1998
Alan Jackson	30-09-1998
David Weinerman	01-01-1999
Marc Baroudi	01-01-1999
Ana Luisa Fox	01-01-1999
Ana Luisa Fox	28-04-1999
Ana Luisa Fox	01-01-1999
Ed. Rodríguez	10-08-1999
Pam Houston	01-01-1998
Pam Houston	01-01-1999
Scott Galas	01-01-1999
Scott Galas	01-01-1999
Gerri Lynn Smith	01-10-1999
Mike Richardson	01-11-1998
Wayne Sebasty	01-09-1999
Wayne Sebasty	01-01-1998
Andrea Van Hoosen	01-01-1998
R. Lostal	01-01-1999
R. Walter	01-01-1999

Pero el análisis efectuado al expediente en estudio permitió comprobar que la actora aportó al presente juicio 29 certificados de origen actualizados que no fueron correlacionados con los que fueron objeto de estudio anteriormente por parte de la demandada y que son los siguientes:

Nombre de la persona que expide el Certificado de Origen	Fecha de expedición del Certificado de Origen
Robert Lostal	01-01-1999
David Winerman	01-10-1998
Ana Luisa Fox	01-01-1998
Mike Richardson	01-01-1999
Mark Kolmer	01-01-1998
Mark Kolmer	01-01-1999
Gerhard Hartleben	01-01-1998
Gerhard Hartleben	01-01-1999
Jo Ann Winsniski	01-10-1998
Jo Ann Winsniski	01-01-1999
Lisa Dowdy	01-01-1999
Shane Curley	01-01-1999
Tom Wagner	01-01-1999
Patrick Mayes	01-01-1999
Edgar Walther	01-01-1998
Edgar Walther	01-01-1999
Oscar Martínez	23-06-**2002**
Zulai Barrera	06-05-1999
Leonard Becker	01-01-1999
Elizabeth Swenson	01-01-1998
Elizabeth Swenson	01-01-1999
Jim Fitzmaurice	01-10-1999
Jim Fitzmaurice	01-10-1998
Glenna Antrim	01-01-1999

Lili	01-01-1999
Eva Skweres	01-01-1999
Federico Quintelo	01-08-1999

Con lo anterior se demuestra que los certificados de origen exhibidos en el presente juicio son, como afirma la autoridad, diversos a los que fueron objeto de análisis por parte de la misma, lo que se explica en función del tiempo transcurrido entre la emisión de las resoluciones recurrida e impugnada y el momento en que la actora obtiene los certificados de origen que aporta al presente juicio. Sin embargo, con su presentación la actora no acredita que dichos certificados son correspondientes a los que la autoridad analizó.

A las irregularidades descritas, se une el hecho de que los certificados de origen no se encuentran correlacionados con cada uno de los dos únicos pedimentos de importación lo que hace imposible que esta Juzgadora se pronuncie sobre la legalidad de los mismos, pues no es jurídicamente procedente que se presuma que la denominación que en los pedimentos describe la fracción arancelaria de la mercancía importada, denominación muchas veces diferente de la utilizada en la Tarifa de la Ley General de Importación, es la misma a la que se refiere la citada Ley y que se trata de la misma mercancía importada durante 1998 y 1999.

Argumenta también la actora que en los pedimentos ampara mercancía originaria cuyo valor no excede los $1000.00 dólares por lo que conforme al artículo 503 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la regla 31 de las Reglas en materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que disponen lo siguiente:

"Artículo 503.Excepciones
"Cada una de las Partes dispondrá que el certificado de origen no sea requerido en los siguientes casos:

"(a) en la importación comercial de un bien cuyo valor no exceda la cantidad de mil dólares estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte o una cantidad mayor que ésta establezca, pero podrá exigir que la factura que acompañe tal importación contenga una declaración que certifique que el bien califica como originario;
"(b) en la importación de un bien con fines no comerciales cuyo valor no exceda la cantidad de mil dólares estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte, o una cantidad mayor que ésta establezca; o
"(c) en la importación de un bien para el cual la Parte a cuyo territorio se importa haya dispensado el requisito de presentación de un certificado de origen, a condición de que la importación no forme parte de una serie de importaciones que se puedan considerar razonablemente como efectuadas o planeadas con el propósito de evadir los requisitos de certificación de los Artículos 501 y 502.
"Regla 31.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 del Tratado, la importación de bienes originarios cuyo valor no exceda del equivalente en moneda nacional a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras, no requerirá certificado de origen, siempre que dicha importación no forme parte de una serie de importaciones que se efectúen o se planeen con el propósito de evadir los requisitos de certificación del Tratado.
"Tampoco se requerirá del certificado de origen para la importación de muestras comerciales de valor insignificante, de conformidad con la definición contenida en el artículo 318 del Tratado.
"Tratándose de la importación de bienes originarios con fines comerciales, cuyo valor no exceda del importe a que se refiere el primer párrafo de esta regla, deberá contarse con una declaración bajo protesta de decir verdad que certifique que el bien califica como originario, firmada por el exportador o productor del bien o por el propio importador o sus representantes legales. Dicha declaración deberá asentarse en la factura que ampare el bien o anexarse a la misma, y estar escrita a mano, a máquina o impresa.

> "Tratándose de bienes que ostenten marcas, etiquetas o leyendas que los distingan como originarios de países no Parte del Tratado, se presumirá que no son originarios y no podrán importarse de conformidad con lo dispuesto en la presente Regla."

Al respecto los integrantes de esta Segunda Sección del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa consideran que el agravio en estudio resulta igualmente INFUNDADO en virtud de que por una parte los dos pedimentos de importación que obran en el expediente (365-9000177 y 365-9000245) contienen el nombre del proveedor extranjero y por otra faltan en algunos casos el domicilio del mismo o el número de factura, pero invariablemente se omitió consignar la cantidad o precio de los artículos importados, lo que impide a esta Juzgadora examinar si dichas importaciones se ajustan a la excepción prevista en los dispositivos transcritos.

No es óbice para lo anterior el que la actora haya aportado diversas facturas pues las mismas no fueron correlacionadas con los renglones correspondientes que aparecen en los pedimentos de importación, otras son ilegibles (ver a manera de ejemplo foja 133) y carecen de la declaración, bajo protesta de decir verdad, que certifique que el bien importado es originario, declaración que debe ser firmada por el exportador o por el productor de la mercancía o por el propio importador o sus representantes legales ya sea sobre la misma factura o anexa a ésta.

Tampoco se omite manifestar que este Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que si en un pedimento se amparan diversas mercancías que individualmente tienen un valor inferior a los $1000.00 dólares de los Estados Unidos de América, pero en conjunto sobrepasan dicha cantidad, la operación se encontrará fuera de la excepción del artículo 503 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la Regla 31 de la Resolución que establece las Reglas de Carácter General relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Al respecto, vale citar el Precedente de esta Segunda Sección, correspondiente a la Quinta Época, publicada en el Tomo II, página 487 de la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, No. 36, Año III, Diciembre de 2003, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben:

"**TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.- IMPORTACIONES AL AMPARO DE LA REGLA 31 DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.-** La regla 31 de la Resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte arriba transcrita ha de interpretarse en el sentido de que tratándose de bienes originarios de las Partes firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la operación de importación cuyo valor no exceda del equivalente en moneda nacional a $1000.00 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, no requerirá del certificado de origen, para lo cual se deberá contar con una declaración bajo protesta de decir verdad que certifique que el bien importado es originario, declaración que ha de estar firmada por el exportador o por el productor del bien o por el propio importador o sus representantes legales y que además la declaración se asiente en la factura que ampare el bien, o que se anexe a ésta, ya sea que se encuentre escrita a mano, a máquina o que esté impresa, por lo que si en un pedimento se amparan diversas mercancías originarias que individualmente tienen un valor inferior a los $1000.00 dólares de los Estados Unidos de América pero en conjunto sobrepasan dicha cantidad, es de concluir que se encontrará fuera de la hipótesis de la regla 31 pues el valor de la importación rebasa el límite establecido por la norma de referencia.

"EXP. 1963/002-07-02-6/674/03-S2-09-03.
"ACTOR: CLUTCH VIZCARRA, S. A. DE C. V.

"RESUELTO EN SESIÓN DE: 5 DE AGOSTO DE 2003.
"POR: UNANIMIDAD DE 5 VOTOS.
"MAGISTRADO PONENTE: LUIS CARBALLO BALVANERA.
"SECRETARIO: LIC. JUAN FRANCISCO VILLARREAL RODRÍGUEZ
"(Tesis aprobada en sesión de 5 de agosto de 2003)."

En virtud de lo anterior y considerando que el actor no acredita con los certificados de origen que aporta al presente juicio que los mismos amparen la mercancía a que los dos pedimentos que obran en el expediente se refieren y que las facturas exhibidas corresponden a la mercancía cuya importación fue materia de alguno de los pedimentos estudiados, únicos que obran en el expediente y que el valor de los bienes importados sin certificado de origen consignados en los pedimentos, en conjunto, haya sido menor de $1,000.00 dólares, lo procedente es reconocer la validez de las resoluciones recurrida e impugnada considerando además que en el caso es aplicable el principio de presunción de legalidad de los actos de la autoridad consagrado en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación que a la letra establece:

"Artículo 68.- Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho".

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 68, 236, 237 y 239, fracción I del Código Fiscal de la Federación; 20, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con el artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior y los diversos 501 y 503 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la regla 31 de las Reglas en materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es de resolverse y se resuelve:

I.- La actora no probó los extremos de su pretensión, en consecuencia

II.- Se reconoce la validez de las resoluciones recurrida e impugnada.

III.- NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada del presente fallo, devuélvanse los autos a la Sala Regional del Golfo de este Tribunal, una vez que haya quedado firme, y en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la H. Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de mayo de 2004, por unanimidad de cuatro votos a favor de los CC. Magistrados Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Luis Carballo Balvanera, Silvia Eugenia Díaz Vega y María del Consuelo Villalobos Ortíz, encontrándose ausentes los CC. Magistrados María Guadalupe Aguirre Soria y Guillermo Domínguez Belloc.

Fue Ponente en el presente asunto el C. Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia fue aprobada en sus términos.

Se elaboró el presente engrose el día 16 de junio de dos mil cuatro, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción III y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Firma el C. Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Lic. Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

TERCERA PARTE

CRITERIOS AISLADOS DE SALA SUPERIOR Y DE SALAS REGIONALES

SALA SUPERIOR

PLENO

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS QUE OSTENTAN MARCAS PARECIDAS EN GRADO DE CONFUSIÓN A OTRA REGISTRADA. NO SE ACTUALIZA LA INFRACCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- El artículo 213, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que son infracciones administrativas usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada. Por tanto, no se actualiza dicha conducta infractora que se refiere al término "usar una marca" y no "comercializar prendas". Lo anterior, porque para efectos de la comisión de una conducta infractora en los términos del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, se trata de aspectos diversos los términos indicados, toda vez que las infracciones relacionadas con la comercialización de productos se regulan en las fracciones III, XII, XIV y XX del artículo citado y no en la fracción IV mencionada. (1)

Juicio No. 5969/01-17-05-7/449/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de febrero de 2004, por mayoría de 5 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de febrero de 2004)

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

DESECHAMIENTO DE UN RECURSO DE REVISIÓN. ES PROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI SE CONTROVIERTE LA MISMA OPORTUNAMENTE.- Es procedente el juicio contencioso administrativo si la demanda interpuesta contra la resolución recurrida, se presenta oportunamente conforme a lo dispuesto en el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 13 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, por actualizarse la fracción XIII, del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por la situación particular consistente en que al intentarse la impugnación del acto administrativo vía recurso de revisión, el mismo se hubiere desechado y por ello, el administrado intente la vía del juicio contencioso administrativo ante este Tribunal, para controvertir el mismo acto recurrido, atendiendo a la transición relativa a la aplicación de las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que prevén la aplicación de la misma tratándose de organismos descentralizados como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Ley que regula el recurso de revisión como medio optativo para controvertir los actos administrativos en materia de propiedad industrial, y atendiendo a la nueva competencia de este Tribunal Administrativo, para conocer de dicha materia, toda vez que de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al gobernado, al impedírsele hacer efectiva su garantía de audiencia. (2)

Juicio No. 5969/01-17-05-7/449/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de febrero de 2004, por mayoría de 5 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de febrero de 2004)

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRAL

PRESUNTO INFRACTOR EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE INFRACCIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- SUS CONSECUENCIAS POR LA FALTA DE COMPARECENCIA.- Si en un procedimiento administrativo de declaración de infracción en materia de propiedad industrial el demandado en su carácter de presunto infractor no comparece, ello no es suficiente para considerar que se trata de una confesión ficta de la comisión de la conducta infractora atribuida, toda vez que corresponde al solicitante de la declaratoria de infracción en su carácter de actor y afectado por la supuesta conducta infractora, acreditar la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles. (3)

Juicio No. 5969/01-17-05-7/449/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de febrero de 2004, por mayoría de 5 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de febrero de 2004)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

PRIMERO.- (...)

A juicio del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, es **INFUNDADA** la causal de improcedencia y sobreseimiento que nos ocupa, de conformidad con el siguiente razonamiento.

En principio es de señalar que la resolución impugnada, emitida por la Subdirectora Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concluye un procedimiento administrativo, resolvien-

do en el sentido de negar la declaración de las infracciones administrativas previstas en el artículo 213, fracciones I y IV de la Ley de la Propiedad Industrial, solicitada por el titular del registro marcario 598747 THE ONE Y DISEÑO, hoy actor.

Ahora bien, el artículo 202, fracción II del Código Fiscal de la Federación, establece:

> "**Artículo 202.-** Es improcedente el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:
> "(...)
> "II. Cuya impugnación no corresponda conocer a dicho Tribunal.
> "(...)"

El artículo 11, fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente en 2001, año en el cual se interpuso la demanda de juicio de nulidad, establece lo siguiente:

> "**Artículo 11.-** El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:
> "(...)
> "**XIII.-** Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
> "**XIV.-** Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.
> "XV.- Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal."
> (El subrayado es de esta Juzgadora)

Del contenido del artículo citado en el párrafo anterior, se desprende que el Legislador Federal estableció que este Órgano Jurisdiccional tiene competencia para

conocer de las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por ello, en la especie se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio contencioso administrativo prevista en la fracción XIII, del artículo 11 de la Ley Orgánica de este Tribunal, que se refiere a la resolución que pone fin a un procedimiento administrativo al que le aplica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Esto es, la competencia de este Tribunal para conocer del presente asunto, deriva de la fracción XIII, del artículo 11, multicitado, toda vez que en los términos del artículo 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la materia de la Propiedad Industrial, no se encuentra excluida de la aplicación de esta última Ley, por no corresponder a los casos de excepción a que se refiere dicho artículo 1°, que a continuación se cita:

> "**Artículo 1°.-** Las disposiciones de esta ley son de orden e interés público, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.
> "El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo.
> "Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A.
> "Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas."
> (El subrayado es de esta Juzgadora)

En consecuencia, se desprende que la materia de Propiedad Industrial, y específicamente la relacionada a los procedimientos contenciosos regulados en dicha Ley, como el procedimiento de declaración administrativa de infracción, a que se refiere la resolución impugnada en el presente juicio, no queda excluida de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo anterior, si en el caso la resolución impugnada deriva de un procedimiento administrativo al cual le es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, resulta evidente que se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio contencioso administrativo a que se refiere la fracción XIII, del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Luego entonces, si a la resolución impugnada le es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aun cuando en el cuerpo de dicha resolución no se hubiere citado dicho Ordenamiento legal, se actualiza la hipótesis de procedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por tratarse de una resolución definitiva que puso fin a un procedimiento administrativo al cual le es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Además, que el artículo 11, fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se citó como fundamento de la admisión de la demanda que impugna dicha resolución.

Resulta aplicable la Jurisprudencia 115/2002, emitida en contradicción de tesis 60/2002-SS, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto fueron aprobados en sesión privada del día 4 de octubre de 2002, y que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 294, en la que resolvió que la ley posterior deroga a la anterior y que por ello debe estimarse que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuya expedición fue posterior, derogó tácitamente la disposición contenida en el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, y que en consecuencia

las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, son las que deben prevalecer como normas aplicables directamente a los procedimientos de declaración administrativa; jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"**PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 187 DE LA LEY RELATIVA FUE DEROGADO TÁCITAMENTE POR EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN CUANTO ÚNICAMENTE PREVÉ LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.-** Los artículos 187 de la Ley de la Propiedad Industrial y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo contiene disposiciones incompatibles en tanto que regulan de manera distinta una misma materia, pues mientras el artículo 187 considera que las lagunas de esa ley (de carácter administrativo) respecto de las disposiciones que rigen los procedimientos de declaración administrativa de nulidad a que se refiere el capítulo segundo, deberán suplirse en el Código Federal de Procedimientos Civiles, el artículo 2 de la ley procedimental, que es aplicable a los actos de autoridad de los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal, como los que realiza en Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en términos del artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que los vacíos de las leyes administrativas deberán llenarse con las disposiciones de la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y sólo a falta de disposición expresa en ella, deberá acudirse a las del Código aludido, además de que, ambos ordenamientos fueron expedidos por el Congreso de la Unión, por lo que tiene idéntica jerarquía en términos del artículo 133 constitucional y rigen en un mismo ámbito federal de validez. En tal virtud, atento al principio jurídico de que la ley posterior deroga a la anterior en las disposiciones que se opongan a ella, debe estimarse que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuya expedición fue posterior, derogó tácitamente la disposición contenida en la Ley de la Propiedad Industrial, en el aspecto señalado y por ende las disposiciones de aquélla son las que deben prevalecer, es decir, las normas aplicables supletoriamente a las procedimientos de declaración administrativa en mención son las de la Ley Federal de Procedi-

miento Administrativo y sólo a falta de disposición expresa en la misma lo serán las del Código Federal de Procedimientos Civiles, tal como lo dispone el artículo 2 de la referida ley procedimental.

"Contradicción de tesis 60/2002-SS.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 25 de septiembre de 2002.- Unanimidad de cuatro votos, Ausente: Guillermo L. Ortiz Mayagoitia, Ponente: Juan Díaz Romero.- Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer".

También es aplicable en su parte relativa, la Jurisprudencia 1.1o.A.J/11, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XV, abril del 2002, páginas 1119 y 1120, cuyo rubro y texto, se transcriben a continuación:

"**INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. A LOS ACTOS DE AUTORIDAD DE DICHO INSTITUTO ES APLICABLE EN FORMA DIRECTA Y NO SUPLETORIA LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.-** El texto original del artículo 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, no comprendía, dentro del ámbito de aplicación de dicho ordenamiento, a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal, sino que sólo era aplicable para la administración pública federal centralizada, salvo algunas materias ahí señaladas; sin embargo, dicho precepto fue modificado y adicionado por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de abril del año dos mil, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, en donde se incluyó en su aplicación a los organismos descentralizados de al administración pública federal paraestatal, excluyendo, entre otras, a las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, a las que únicamente les será aplicable el titulo tercero A. También se reformó el articulo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mediante decreto publicado en el citado órgano

de difusión el día treinta de mayo de dos mil, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, en el que se estableció la procedencia del recurso de revisión contra actos de autoridad de dichos organismos. Por tanto, es evidente que el artículo 83 del mencionado ordenamiento tiene aplicación directa a los procedimientos que son competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por ser un organismo descentralizado de la administración pública paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que actúa como autoridad administrativa en materia de propiedad industrial y tal aplicación, en modo alguno, puede interpretarse como una aplicación supletoria, porque no está llenando alguna laguna de la ley especial de la propiedad industrial, sino que está creando un medio de impugnación, con su propia reglamentación, contra los actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, por lo que resulta incuestionable que no se cumplen los requisitos para que opere la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial, como son: que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale la ley aplicable; que no obstante la existencia de la disposición a suplir, las normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto que se presenta, por falta total o parcial de la reglamentación necesaria; y que las disposiciones con las que se vaya a colmar la deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustitución de la institución suplida. Por tanto, es incontrovertible que a los actos y procedimientos administrativos emanados del referido instituto les son aplicables en forma directa y no supletoria las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en virtud de que la materia de propiedad industrial no está excluida del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que no es materia de competencia económica.

“PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
I.1o.A. J/11

"Amparo en revisión 781/2001.- Nike International, LTD.- 4 de mayo de 2001.- Unanimidad de votos.- Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca.- Secretario: Aurelio Damián Magaña.

"Amparo en revisión 601/2001.- The Keds Corporation.- 11 de mayo de 2001.- Unanimidad de votos, ente: Caños Ronzon Sevilla.- Secretario: Úrsula Hernández Maquívar.

"Amparo en revisión (improcedencia) 144112001.- Kimberly Clark Corporation.- 18 de mayo de 2001.- Unanimidad de votos.- Ponente: Caños Ronzon Sevilla.- Secretario: Arturo Hernández Albores.

"Amparo en revisión (improcedencia) 80112001.- José Ernesto Matsumoto y Matsuy, 23 de mayo de 2001.- Unanimidad de votos, Ponente: Luis Marla Aguilar Morales.- Secretario: Oscar Escobedo Navar.

"Amparo en revisión (improcedencia) 296212001.- Chicles Canel's, S.A. de C.V. y otro, 7 de septiembre de 2001.Unanimidad de votos.- Ponente: Caños Ronzon Sevilla. Secretario: Mario César Flores Muñoz".

Consecuentemente, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción II, del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, dado que la impugnación de la resolución mencionada sí corresponde conocer a este Tribunal, y por ello se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 203, fracción II del Código Fiscal de la Federación.

Es de precisar respecto a la procedencia el juicio, que no pasa inadvertido para esta Juzgadora, que la actora eligió en primer término agotar el recurso optativo de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para controvertir la resolución que negó la declaración de infracción, pero en virtud de que dicho recurso fue desechado por la autoridad administrativa, promovió el presente juicio para impugnar directamente tal acto recurrido, dentro del término de 45 días a

que se refiere el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 13 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Cabe mencionar que el Reglamento mencionado constituye la disposición de la materia que regula cuándo surte efectos la notificación de los actos administrativos emitidos conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, y que establece en su artículo 13, que dicha notificación surte sus efectos el día en que hubiere sido realizada la notificación.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"Artículo 13.- (...)
"Las notificaciones personales y las que se realicen por correo certificado con acuse de recibo surtirán efectos a partir del día en que sean entregados a los interesados.
"Los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación."

Ahora bien, la actora manifestó bajo protesta de decir verdad que, la resolución impugnada en el presente juicio le fue notificada personalmente el 7 de febrero de 2001, como se prueba a foja 1 del expediente principal.

De lo anterior se desprende, que si en la especie la notificación personal se practicó el 7 de febrero de 2001, dicha notificación surtió efectos en esa fecha conforme al artículo 13 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y el plazo de los 45 días a que se refiere el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, para la interposición de la demanda de juicio contencioso administrativo, empezó a correr a partir del día siguiente en que surtió efectos dicha notificación, esto es el 8 de febrero de 2001; y concluyó el 16 de abril de 2001.

Lo anterior, en virtud de que fueron días inhábiles los siguientes 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de febrero de 2001, 3, 4, 10, 11 17, 18, 24, 25 y 31 de marzo de 2001, 1°, 7, 8,

14 y 15 de abril de 2001, por corresponder a sábados y domingos; así como, 21 de marzo, 12 y 13 de abril de 2001 por ser días inhábiles conforme al Acuerdo G/1/ 2001, emitido por el Pleno de esta Sala Superior, en sesión de 3 de enero de 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2001.

En consecuencia, si el escrito inicial de demanda se presentó el 16 de abril de 2001, como se aprecia con el sello de recepción de la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas, visible en la página 1 del expediente principal, resulta evidente que dicha demanda interpuesta para controvertir la resolución que declaró la negativa de infracción administrativa contenida en el oficio con número de folio 001158 de 31 de enero de 2001, se presentó en tiempo conforme a lo dispuesto en el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación y por ello resulta procedente el juicio.

(...)

CUARTO.- (...)

A juicio del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es **INFUNDADO** el concepto de impugnación a estudio, por las siguientes consideraciones.

A fin de ubicarnos en la materia del presente asunto resulta conveniente precisar los antecedentes del caso, derivados de la resolución impugnada que hace prueba plena en términos de lo dispuesto en el artículo 234, fracción I del Código Fiscal de la Federación.

A N T E C E D E N T E S :

1. El 27 de octubre de 1998, GRUPO HECALI S.A. DE C.V., (ACTUALMENTE ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.), solicitó el registro de la marca THE ONE Y DISEÑO.

2. El 27 de enero de 1999, se concedió el registro marcario solicitado bajo el número 588745 THE ONE Y DISEÑO.

3. Dicha concesión se otorgó con vigencia hasta el 27 de octubre del año 2008.

4. Mediante escrito de fecha 13 de agosto de 1999, el representante legal de GRUPO HECALI S.A. DE C.V. , (actualmente ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.) solicitó la declaración administrativa de infracciones previstas en las fracciones I y IV, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, señalando como presunto infractor al propietario de la negociación ubicada en calle Tomasa Esteves número 110-A, en Salamanca, Guanajuato, por estimar que usaba una denominación parecida en grado de confusión a la marca mencionada, sin su consentimiento.

5. Que el 5 de octubre de 1999, se practicó la visita de inspección a la negociación mencionada.

6. Que transcurrido el término de ley para dar contestación a la demanda, se advirtió que no existía constancia alguna en el expediente administrativo de que la misma se hubiere formulado por el presunto infractor.

7. Que mediante escrito de 24 de noviembre de 1999, la denunciante del procedimiento de declaratoria administrativa de infracción, solicitó se tuviera por precluido el derecho de la presunta infractora para dar contestación en dicho procedimiento.

8. Que mediante oficio con número de folio 001158 de 31 de enero de 2001, el Subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal, resolvió en definitiva el procedimiento administrativo aludido, número P. C.492/99 (I-470) 07066 I, en el sentido de negar la declaración de infracción administrativa solicitada; resolución que ahora se impugna.

Hechas las precisiones anteriores y previamente al análisis del concepto de impugnación es de reiterar que como se ha resuelto en el considerando primero de

este fallo, conforme a lo resuelto mediante Jurisprudencia número 115/2002 de sesión de 4 de octubre de 2002, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 60/2000-SS, en la materia de la Propiedad Industrial que nos ocupa, específicamente por lo que hace al procedimiento administrativo de declaratoria de infracción, resulta aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y sólo a falta de disposición expresa en esta última Ley, serán aplicables supletoriamente las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ahora bien, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no se contienen disposiciones expresas relativas a la confesión tácita, a la valoración de las presuncionales, ni a la valoración de los hechos notorios, con motivo de un procedimiento contencioso administrativo, como lo es, el procedimiento administrativo de declaratoria de infracción en materia de Propiedad Industrial.

Por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en relación con la jurisprudencia dictada en contradicción de tesis 60/2002-SS, misma que fue transcrita con anterioridad, resultan aplicables supletoriamente las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles y por ello la presente litis se resolverá considerando dicha aplicación supletoria, en lo que no contravenga la naturaleza del procedimiento administrativo de declaratoria de infracción en materia de propiedad industrial, considerando que la supletoriedad se da en defecto.

Por ello, en la especie sí resulta aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, en defecto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin embargo, no se actualiza la confesión ficta regulada en dicho Código, al actualizarse la excepción del artículo 332 del Código mencionado por lo siguiente:

En efecto, a continuación se determinará si la resolución impugnada se encuentra o no debidamente fundada y motivada en relación con dicho artículo 332, y si se consideró o no el silencio procesal del presunto infractor, artículo que textualmente indica lo siguiente:

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
LIBRO SEGUNDO
Contención
TÍTULO PRIMERO
Juicio
CAPÍTULO I
Demanda
CAPÍTULO II
Emplazamiento
CAPÍTULO III
Contestación de la demanda

"**Artículo 332.-** Cuando haya transcurrido el término del emplazamiento, sin haber sido contestada la demanda, se tendrán por confesados los hechos, siempre que el emplazamiento se haya entendido personal y directamente con el demandado, su representante o apoderado; quedando a salvo sus derechos para probar en contra. En cualquier otro caso se tendrá por contestada en sentido negativo."
(El subrayado es de esta Juzgadora)

Del contenido de la transcripción anterior del artículo 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que el Legislador Federal estableció que en los procedimientos contenciosos, transcurrido el plazo correspondiente sin haber sido contestada la demanda, se tendrán por confesados los hechos pero que quedarán a salvo los derechos del demandado cuando se pruebe en contra.

En efecto del artículo 332 aludido, se deduce que la regla de tener por confesados los hechos ante la omisión en la contestación a la demanda, tiene una excepción consistente en que de autos se desprenda que los hechos atribuidos por el actor no se hubieren realizado.

En consecuencia, el artículo 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles, permite como excepción a la regla de tener por confesados los hechos en un "juicio", ante la falta de contestación del demandado, que dichos hechos queden desvirtuados, lo cual implica no sólo considerar las pruebas que llegare a exhibir el "demandado", sino las que obren en autos, esto es, considerando en su caso también las ofrecidas por la parte actora.

Lo anterior, constituye una regla procedimental aplicable en todos los "juicios contenciosos administrativos", a manera de ejemplo es de señalar que el artículo 212, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, establece que si no se produce la contestación en tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados.

También es de precisar, respecto del mismo artículo 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en el mismo se establecen las reglas procesales en un juicio en el que la relación se da de manera triangular por existir una parte actora, otra demandada y un Órgano Jurisdiccional que resolverá el conflicto, pero en el caso del procedimiento de declaratoria de infracción se trata de una relación lineal en la cual por la naturaleza de la misma interviene una autoridad administrativa que determinará si se ha infringido o no la Ley de la materia y en su caso impondrá al sujeto infractor la sanción administrativa correspondiente cuando se acredite fehacientemente la comisión de la conducta infractora.

Sin que sea óbice para lo anterior, que dicho procedimiento administrativo sólo seguido en forma de juicio, inicie con la denuncia de un sujeto que considere que debe declararse dicha infracción.

Por tanto, dicho artículo 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no puede aplicarse al procedimiento de declaratoria de infracción, en el sentido argumentado por la actora, atendiendo a la naturaleza de dicho procedimiento administrativo que tiene como finalidad determinar por una autoridad administrativa si se han come-

tido o no infracciones a la Ley de la Propiedad Industrial, cuya observancia es de orden público.

Sin que exista disposición alguna en la Ley de la materia, esto es, en la Ley de la Propiedad Industrial, que establezca que por la falta de contestación del presunto infractor deba presumirse que se cometieron las conductas infractoras atribuidas por un denunciante y que ello impida a la autoridad la valoración de las pruebas ofrecidas en el procedimiento administrativo, por el propio denunciante, para acreditar la comisión de dichas infracciones.

Ahora bien, en la especie del análisis integral a la resolución impugnada se desprende que la autoridad emisora de la misma, fundó y motivó debidamente la negativa de declaratoria de infracción prevista en el artículo 213, fracciones I y IV de la Ley de la Propiedad Industrial, porque la actora no probó la comisión de dichas infracciones, aun cuando le correspondía la carga de la prueba por afirmar la comisión de dichas infracciones y que además sí consideró que la demandada en el procedimiento de declaratoria de infracción no formuló su contestación. Lo anterior se constata de la resolución impugnada que a continuación se transcribe:

RESOLUCIÓN IMPUGNADA

"DIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROTECCIÓN
A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
"SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE PREVENCIÓN
DE LA COMPETENCIA DESLEAL.
"COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

"M 598745 THE ONE Y DISEÑO.
"P.C. 492/99(I-470)07066 I

"ASUNTO: Se niega la declaración de las infracciones administrativas previstas en el artículo 213 fracciones I y IV de la Ley de la Propiedad Industrial.

"México, D.F. a 31 de enero de 2001.

"LIC. VLADIMIR TORRES BUENO.
"REPRESENTANTE DE
GRUPO HECALI, S.A. DE C.V.
"INSURGENTES SUR No. 1677
"DESPACHO 1006
"COL. GUADALUPE INN
"DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
"MÉXICO, D.F.

"Con base en las atribuciones que le confieren a este Instituto los artículos 1°, 2° fracciones V y VI, 6° fracción V, 199, 213 fracciones I y IV, 214, 215 y 217 de la Ley de la Propiedad Industrial, se procede a emitir la resolución correspondiente en el presente asunto, teniendo como sustento los antecedentes y consideraciones de derecho siguientes:

"**A N T E C E D E N T E S**

"I. Mediante escrito de fecha 13 de agosto de 1999, con folio de entrada 07066, el Lic. Vladimir Torres Bueno en su carácter de Representante de GRUPO HECALI, S.A. DE C.V. (AHORA ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.) solicito (sic) la declaración administrativa de las infracciones previstas en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con la marca citada al rubro, por parte del propietario de la negociación ubicada en la calle Tomasa Esteves número 110-A, en Salamanca, Guanajuato, al estimar que dicha demandada incurre en las mismas por usar una denominación parecida en grado de confusión a la amparada por dicha marca en la misma clase de productos, sin que exista su consentimiento, iniciándose al efecto el procedimiento contencioso **P.C. 492/99 (I-470) 07066 1.**

(...)

"IV. Por oficio con folio de salida 8789 de fecha 1° de octubre de 2000, se ordenó la visita de inspección la cual de conformidad con las facultades de inspección y vigilancia previstas en los artículos 203 al 212 de la Ley de la Propiedad Industrial se practicó por el C. Inspector comisionado, el día 5 de octubre de 1999, en la negociación mercantil ubicada en calle Tomasa Esteves No. 110-A, Salamanca, Guanajuato, en donde se entendió la diligencia con la C. Beatriz Adriana Pérez Olguin quien manifestó ser, encargada del establecimiento y mostró al inspector comisionado, la nota de venta N° 3520 en que se encuentran asentados el nombre de la negociación 'ACCESORIOS Y REGALOS MONLIS' y el Registro Federal de Contribuyentes número CCCAGJ-590407-AB9 a nombre de Juan Ramón García Castro, con giro de venta de ropa, sombrerería, joyas de fantasía, y en general accesorios de vestuario, lugar en el que no hubo aseguramiento de mercancía, ya que no se encontró ningún artículo que ostentara la denominación THE ONE y el diseño indicado, emplazándose a la presunta infractora con copia simple de la solicitud de declaración administrativa de infracción mediante el oficio 8788 de 1° de octubre de 1999, dándosele un plazo de diez días hábiles contados a partir de la realización de la visita de inspección para que diera contestación y confirmara las observaciones hechas en ese momento a la práctica de la misma, y para que hiciera otras nuevas al acta levantada de conformidad con el artículo 209 fracción IX de la Ley de la Propiedad Industrial.

"V. Transcurrido el término señalado para dar contestación a la demanda y realizar observaciones al acta levantada durante la visita de inspección citada anteriormente, se advierte que no existe constancia alguna en el expediente en que se actúa, en el que la demandada haya realizado lo conducente.

"(...)

"VIII. Por escrito de fecha 24 de noviembre de 1999, con folio de entrada 11101, la parte actora solicitó a través de su apoderado el Lic. Vladimir Torres Bueno, se tuviera por precluido el derecho de la demandada para dar contesta-

ción a la demanda, y se acordó mediante oficio 2527 de fecha 22 de febrero de 2000.
"(...)

"C O N S I D E R A C I O N E S

"(...)

"SEGUNDA. En virtud de que en el expediente en que se actúa, no obra constancia alguna en que la demandada haya realizado contestación a la demanda instaurada en su contra, esta Autoridad en términos de los artículos 187 de la Ley de la Propiedad Industrial y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta materia, tiene por precluido su derecho para tales efectos.

"TERCERA. La actora en su escrito de solicitud de declaración administrativa de infracción funda su acción en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, al considerar que la demandada incurre en las mismas.

"(...)

"Como se puede observar, para que se actualicen las hipótesis previstas en los supuestos jurídicos invocados por la actora, es necesario que ésta demuestre con prueba fehacientes, (sic) que es titular o usuaria autorizada de por lo menos una marca registrada ante este Instituto y que la misma se encuentra vigente y surtiendo sus efectos legales, y demostrar que la demandada realiza una conducta que se adecua a dichos supuestos.

"Al respecto, como quedó demostrado anteriormente en los antecedentes de esta resolución, la actora es titular de la marca 598745 THE ONE Y DISEÑO, la cual ampara productos consistentes en vestido, calzado y sombrerería y que se

encuentra vigente y surtiendo sus efectos legales, documental pública que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta materia y del cual esta Autoridad se allega en términos del artículo 79 del citado Código Federal y considera que dichas probanzas hacen prueba plena a favor de la actora, de conformidad con el artículo 197 del multicitado Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuanto que con las mismas demuestra que es titular de dicha marca y tiene el derecho exclusivo a su uso y explotación, así como de impedir que les sea invadido tal derecho, por lo que se actualiza la primer hipótesis del supuesto previsto en la fracción IV del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial.

"En este orden de ideas, como se advierte del análisis realizado al expediente oficial de la marca 598745 THE ONE Y DISEÑO, ésta ampara productos de la Clasificación de Empresas y Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo 25 de la actual clasificación de marcas consistente en productos de vestuario calzado y sombrerería, por lo que la adecuación de la conducta de la demandada en la segunda hipótesis del supuesto jurídico previsto en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, deberá demostrarse por parte de la solicitante únicamente en relación con tales productos.

"En este entendido, para que se actualicen la fracción I y la segunda hipótesis del supuesto jurídico previsto en la fracción IV, ambos del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el caso concreto que nos ocupa, es menester que la actora demuestre con pruebas fehacientes que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión a la marca propiedad de la actora y en la misma clase de productos, obteniendo ventajas indebidas en perjuicio de la actora y del público consumidor.

"Para tal efecto, la actora ofreció bajo los numerales 2 y 3 del capítulo de pruebas de su escrito de solicitud copia certificada por este Instituto de la documental privada consistente en la nota de venta número 3404 de fecha 15 de

julio de 1999 en la que se señala que ampara la compra de una playera con la denominación THE ONE, y la prueba física consistente en dicha playera, manifestando que fueron adquiridas en la negociación demandada, de las cuales esta Autoridad considera de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta materia, tienen valor probatorio de indicios al no contener la certificación correspondiente del lugar tiempo y circunstancias en que fueron adquiridas y que realmente dicha playera se adquirió mediante la nota señalada, motivo por el cual al no existir otra probanza con la cual se constate que efectivamente la demandada usa las marcas de la actora, esta autoridad considera de conformidad con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que no hace prueba a favor de la actora para demostrar los hechos constitutivos de su acción, es decir, para demostrar que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión a la marca de la actora.

"Asimismo, la actora para demostrar que la conducta de la demandada se adecua a la hipótesis derivadas (sic) de los supuestos jurídicos previstos en las fracciones citadas anteriormente, ofreció como prueba en su escrito de solicitud de demanda la instrumental pública consistente en el acta que se levantara por personal de este Instituto en ejercicio de las funciones conferidas por los artículos 203 al 212 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial, misma que, tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles antes citado, al ser documental pública, levantada por personal de este Instituto en ejercicio de sus funciones, (...) la cual se ordenó mediante oficio 8789 de fecha 1° de octubre de 1999 y se practicó el día 5 del mismo mes y año, en la negociación ubicada en la calle Tomasa Esteves número 110-A, en Salamanca, Guanajuato, en donde se entendió la diligencia con la C. Beatriz Adriana Pérez Olguin quien manifestó ser, encargada del establecimiento y mostró al inspector comisionado, la nota de venta No. 3520 en que se encuentran asentados el nombre de la negociación 'ACCESORIOS Y REGALOS MONLIS' y el Registro Federal de Contribuyentes número CAGJ-590407-AB9 a nombre de Juan Ramón García Castro, con giro de venta de ropa, sombrerería, joyas de fantasía, y en general accesorios de ves-

tuario, lugar en el que no hubo aseguramiento de mercancía, ya que no se encontró ningún artículo que ostentara la denominación THE ONE y el diseño indicado.

"Ahora bien, en la probanza anterior se advierte lo siguiente:

"Que en el domicilio antes citado, se encuentra ubicada una negociación comercial, por lo que se desprende la legal existencia de dicha negociación, que tiene como giro el de compraventa de venta de ropa, sombrerería, joyas de fantasía, y en general accesorios de vestuario, asimismo, no se desprende que en ese lugar se comercializa vestuario con una denominación parecida en grado de confusión a la denominación THE ONE y Diseño amparados por la marca 598745, por lo que su conducta no se constituye como contraria a los buenos usos y costumbres en la industria y comercio ni contraviene las disposiciones de Ley de la Propiedad Industrial, por lo que no causa confusión o induce al público consumidor a error o engaño, ni obtiene ventaja indebida ni sustrae, invade y explota el derecho de la actora, motivo por el cual, esta Autoridad considera en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta materia, que con dicha probanza la actora no demuestra los hechos constitutivos de su acción, es decir, que la demandada realice una conducta que se adecue a los supuestos jurídicos previstos en las fracciones I y IV antes citados, por lo que al no cumplirse dichas hipótesis no se actualizan los mismos.

"De lo anterior podemos colegir que la conducta imputada a la presunta infractora, en relación con las hipótesis derivadas de los supuestos jurídicos previstos en la (sic) fracciones I y IV del artículo 213 que nos ocupa, no se actualizan, toda vez que de las probanzas aportadas por la actora y de la visita de inspección en las instalaciones de la demandada, no se desprende dicha conducta aunado a que la actora no ofreció alguna otra probanza con que se demostrara la citada conducta infractora.

"(...)

"I. Se niega la declaración de la infracción administrativa prevista en el artículo 213 fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte del Sr. Juan Ramón García Castro, propietario del establecimiento comercial denominado 'ACCESORIOS Y REGALOS MONLIS' ubicado en la calle Tomasa Esteves número 110-A, en Salamanca, Guanajuato, respecto de la marca 598745 THE ONE, propiedad de GRUPO HECALI S.A. DE C.V.

"(...)"

De la transcripción anterior de la resolución impugnada, se desprende que la autoridad demandada señaló como fundamento y motivo de la negativa de declaratoria de infracción que la solicitante del procedimiento de declaratoria de infracción no probó su pretensión en dicha instancia, por las siguientes consideraciones:

- Que la solicitante del procedimiento de origen no demostró los hechos constitutivos de su acción, esto es que no demostró que la presunta infractora realice las conductas previstas en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

- Que lo anterior es así porque la autoridad consideró que la nota de venta número 3404 de fecha 15 de julio de 1999, en la que la solicitante señala que ampara la compra de una playera con la denominación THE ONE, y la prueba física consistente en dicha playera, ofrecidas por dicha solicitante, de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, sólo tienen valor probatorio de indicios al no contener la certificación correspondiente del lugar, tiempo y circunstancias en que fueron adquiridas y que realmente dicha playera hubiere sido adquirida mediante la nota señalada.

- Que por lo que hace al acta de inspección, la autoridad resuelve que con la misma únicamente se desprende que en el lugar visitado no se comercializa vestuario con una denominación parecida en grado de confusión a la denominación THE ONE y Diseño amparados por la marca 598745, ya que no se encontró ningún artículo que ostentara la denominación y diseño indicado.

- Que por tanto, estima la autoridad demandada que dichas probanzas no acreditan la actualización de las conductas infractoras atribuidas porque le correspondía a la solicitante del procedimiento administrativo de declaratoria de infracción, probar su acción, esto es, probar que el demandado (presunto infractor) usa una marca parecida en grado de confusión a la marca propiedad de la actora y en la misma clase de productos, así como que obtiene ventajas indebidas en perjuicio de la actora y del público consumidor, esto es, que le correspondía a la actora probar la actualización de las conductas infractoras previstas en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que se trata de un procedimiento iniciado por la demandante para solicitar la declaratoria administrativa de infracción.

Ahora bien, esta Juzgadora estima que del análisis practicado a la resolución impugnada se desprende que además la autoridad emisora de dicho acto sí consideró el silencio procesal del demandado (presunto infractor), durante todo el procedimiento administrativo de origen, tan es así, que se precisó en la resolución impugnada que se otorgó a la demandada el plazo de diez días para que formulara su contestación y confirmara las observaciones asentadas en la visita de inspección, pero que no encontró constancia alguna de que se hubiere formulado dicha contestación y que por ello, el 22 de febrero de 2000, se acordó precluido el derecho de la demandada.

Por tanto, la falta de contestación del presunto infractor no es suficiente para estimar que las conductas infractoras previstas en las fracciones I y IV del artículo 213 de Ley de la Propiedad Industrial, se actualizan, toda vez que el solicitante de la declaratoria de infracción debe probar dicha actualización con independencia de que la presunta infractora se apersone o no en el procedimiento de declaratoria de infracción.

Lo anterior tiene sustento en la obligación del solicitante o denunciante del procedimiento de declaratoria de infracción, pruebe su pretensión conforme a lo dispuesto en los artículos 81y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, como lo resolvió acertadamente la autoridad demandada.

Máxime, que las infracciones atribuidas se refieren a actos positivos consistentes en la realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres que impliquen competencia desleal y al uso de una marca, parecidas en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada, situaciones que constituyen afirmaciones que al ser atribuidas al presunto infractor, deben probarse.

Por tanto, resulta evidente que en la resolución impugnada "no se le exime automáticamente (al presunto infractor), del hecho atribuido, en relación con su falta de contestación a la demanda, toda vez que como ha quedado demostrado con la resolución impugnada citada en párrafos anteriores y que hace prueba plena en los términos del artículo 234, fracción I del Código Fiscal de la Federación, la autoridad sí consideró el silencio del presunto infractor y la preclusión de su derecho para contestar en el procedimiento de origen.

Ello es así porque el motivo de la negativa de declaración de infracción, lo fue que con las probanzas ofrecidas por la demandante en dicho procedimiento, consistentes en la nota de venta número 3404, la playera y la visita de inspección ofrecidas por la actora, resultaron insuficientes para acreditar la comisión de las infracciones previstas en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, aspecto que no desvirtúa la hoy actora.

Por ello, la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, al no haberse violado el artículo 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia publicada en el Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1974, Tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Sección Primera, Tesis de Jurisprudencia, página 100, cuyo texto se cita a continuación:

"**PRUEBA, CARGA DE LA.-** A falta de normas expresas y categorías que regulen el caso, y con arreglo a los principios en que se inspiran los artículos 81, 82 y 84 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la carga de la prueba no recae sobre aquel de los litigantes para el cual resulta imposible demostrar las situaciones en que se apoya su pretensión porque no tiene en sus manos los documentos idóneos para justificarla, y le sería extremadamente difícil obtener esos documentos idóneos, sino que la mencionada carga grava a quien se encuentre en condiciones propicias para acreditar plenamente su acción o excepción, porque están a su disposición las probanzas relativas.

"Amparo directo 508/74. Cía. de Fianzas Interaméricas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de votos.

"Amparo directo 555/74. Cía. de Fianzas Interaméricas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de votos.

"Amparo directo 572/74. Cía. de Fianzas Interaméricas, S.A. Unanimidad de votos.

"Amparo directo 608/74. Afianzadora Cossío, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de votos.

"Amparo directo 612/74. Cía. De Fianzas Interaméricas, S.A. 14 de noviembre de 1974. Unanimidad de votos."

También son aplicables las tesis que a continuación se citan:

"**LA ACCIÓN NO PUEDE PROSPERAR, CUANDO EL ACTOR NO PRUEBA LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA MISMA.-** Dado que la Ley ordena que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, es indudable que, cuando no los prueba, su acción no puede prosperar,

independientemente que la parte demandada haya o no opuesto excepciones y defensas.

"Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tercera Sala, Tomo CXVI, pág. 22."

"**ACCIÓN NO PROBADA.-** No probados los extremos de la acción ejercitada, carece de relevancia que los demandados hubieran o no acreditado los extremos de las excepciones y defensas que opusieron.

"Visible en el Informe al Semanario Judicial de la Federación, segunda parte, 1976, tesis 6, página 10".

"**EXCEPCIÓN Y DEFENSAS, FALTA DE COMPROBACIÓN DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LAS.-** Aún suponiendo que la demandada no hubiera aportado prueba alguna para acreditar las excepciones y defensas que hizo valer, tal circunstancia no le causa agravio alguno al actor en el juicio natural, dado que la Ley ordena que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y es indudable que cuando no los prueba, su acción no puede prosperar, independientemente de que la parte demandada haya o no demostrado los hechos constitutivos de sus excepciones y defensas.

"Tercera Sala. Informe 1977. Segunda Parte, página 113."

Por otra parte, respecto de las tesis aludidas por la actora en su escrito de demanda a foja 7 del expediente y que se aprecian en las páginas 34 y 35 del presente fallo, es de señalar que toda vez que se refieren a la valoración de la prueba confesional desahogada mediante posiciones, ofrecida en materias civil y del trabajo, distintas de la materia de la propiedad industrial que tiene su propia naturaleza jurídica, atendiendo al procedimiento de declaratoria administrativa de que se trata y que en la especie se refiere a la declaratoria de infracción por violaciones a la ley de la materia.

Además, como en las tesis se precisa con claridad para que opere la "confesión ficta" debe entenderse en el sentido de establecer una presunción favorable, siempre y cuando no se advierta algún elemento de convicción que la desestime, esto último que constituye el caso de excepción.

Es decir, es indispensable que la confesión no esté contradicha con otras pruebas existentes en autos y que además los hechos reconocidos sean susceptibles de tenerse por confesados, lo cual en el caso no ocurrió porque de la nota de venta, de la playera y del acta de inspección, no se acredita la existencia de la infracción atribuida, como se indica en la resolución impugnada.

Por lo que hace a la tesis aludida por la actora a foja 10 de su demanda de nulidad, que indica en su texto lo siguiente: "CONFESIÓN FICTA DERIVADA DE LA FALTA DE CONTESTACIÓN A LA CONTRADEMANDA.- *El artículo 217, del Código de Procedimientos Civiles previene que transcurrido el plazo fijado en el emplazamiento sin haber sido contestada la demanda se hará la declaración en rebeldía, y la presunción de que se tengan por ciertos los hechos de la contrademanda que se dejó de contestar no es sino una consecuencia legal de tal declaración, motivo por el cual no es necesario que se aperciba al reconvenido en ese sentido ni de que se haga la declaración correspondiente.*", emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, la misma también se refiere a la materia civil, y no resulta aplicable a la materia de la propiedad industrial porque del contenido de la misma, se desprende, si bien, se refiere a la declaratoria en rebeldía y a la presunción de que se tengan por ciertos los hechos de la contrademandada que se dejó de contestar; también es de considerar, por esta Juzgadora, que dicha presunción admite prueba en contrario, como se ha indicado en párrafos anteriores, por ello si la autoridad analizó, las pruebas rendidas a fin de determinar si era cierto o no la infracción atribuida y, encontró que no se configuró, con ello resultaron desvirtuados los hechos atribuidos, conforme a los artículos 197 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo que se concluye que no existe violación a lo dispuesto en el artículo 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues si bien, dicho artículo se refiere a la aceptación tácita de los hechos cuando no se formula la contestación respectiva; también lo es, que dicha regla tiene excepciones como lo es cuando por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados los hechos atribuidos, excepción que se actualiza en la especie.

QUINTO.- (...)

Esta Juzgadora estima que no le asiste la razón a la actora, toda vez que no desvirtúa los fundamentos y motivos de la resolución impugnada, en la cual se consideró por la autoridad que por lo que hace a la visita de inspección, a la que le dio valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de la misma, se constató que al momento de la práctica de la visita de inspección en el establecimiento visitado no se encontró que se comercializara vestuario con una denominación parecida en grado de confusión a la denominación THE ONE Y DISEÑO amparados por la marca 598745.

Lo anterior es así, dado que la actora en su escrito de demanda se limita a manifestar para controvertir la valoración otorgada a la visita de inspección, que con la misma sólo se prueba lo acontecido en el momento de la inspección, pero no lo ocurrido en otro momento respecto de la comercialización de la mercancía, agregando que podría darse el caso de que librados de toda responsabilidad se continúe comercializando la mercancía.

Por tanto, las manifestaciones de la actora no desvirtúan el valor probatorio pleno otorgado por la autoridad a la visita de inspección, pues si bien, por la naturaleza de dicho medio de prueba con la misma se constató que en el momento del desahogo de la diligencia, la demandada no comercializó con la mercancía de que se trata; también lo es, que dicha probanza fue ofrecida por la propia actora en el procedimiento y que la autoridad le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Lo que se constata con el acta de visita de inspección aludida que obra a fojas 33 a 36 del expediente y que en su parte conducente se cita a continuación:

ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN DE 5 DE OCTUBRE DE 1999

"C. PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE Y/O ENCARGADO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL UBICADO EN CALLE TOMASA ESTEVES No. 110-A, SALAMANCA, GUANAJUATO.

"M- 598745 'THE ONE' (Y DISEÑO)

"P.C. 492/99(I470)07066I.

"ACTA CIRCUNSTANCIADA

"En la Ciudad de Salamanca, Guanajuato, México, siendo las 16:49 horas del día cinco de octubre de 1999, el (los) suscrito (s) inspector (es) C. Sergio Rangel Guerra me (nos) constituyo (ímos) en Tomasa Esteves No. 110-A, Salamanca, Guanajuato._____ a efecto de dar cumplimiento a la orden de inspección que me (nos) fue conferida por oficio número 8789 de fecha 1º de octubre de 1999, entendiendo el desarrollo de la presente diligencia con quien dice llamarse Beatriz Adriana Pérez Olguín, lo que acredita mediante Credencial IFE217468965015 quien manifiesta ser la encargada del local comercial, con domicilio en Av. Revolución 634, Zona Centro, 36700,Salamanca, Guanajuato.

"(...)

"Posteriormente y de conformidad al oficio de comisión 8789 procedo al desahogo de los siguientes puntos:

"1.- Tomar Nota, si en el domicilio visitado, se ubica una empresa, negociación mercantil, local y/o establecimiento comercial, tomando como base la documentación oficial que para tal efecto se exhiba, como puede ser la Licencia de Funcionamiento, el Registro Federal de Causantes, o cualquier otro documento que acredite su legal funcionamiento, el nombre del propietario, el objeto o giro al que se dedica, así como desde cuándo funciona el establecimiento visitado y cual es su Registro Federal de Contribuyentes.

"Se toma nota por medio de una Nota de Venta 3520, cuya copia se anexa al acta que el lugar se denominaba Accesorios y Regalos 'Molis', negociación que se dedica a la venta de ropa, sombrería, joyas de fantasía y en general accesorios para el vestido. El propietario es Juan Ramón García Castro con R.F.GAC3590407AB9. A través de original de Cedula RFC Folio D0157022 se presume que el local abrió el 11 de enero de 94 se dice 1994 y que el RFC es GACJ590407AB9.

"2.- Previo recorrido realizado por el establecimiento visitado, verificar si se produce, distribuye, comercializa y/o pone a la venta productos pertenecientes a la clase 25, concretamente prendas de vestir que ostenten la marca 598745 'THE ONE' (Y DISEÑO).

"No se encontró si se produce, distribuye o comercializa y lo pone a la venta productos pertenecientes a la clase 25 que ostenten la marca 598745, luego del recorrido que realicé por el local.

"3.- Preguntar a la persona con quien se entiende la diligencia, si sabe o le consta desde qué fecha vienen comercializando los productos que ostentan la marca mencionada al rubro.

"No se encontró producto con la marca mencionada al rubro.

"4.- De ser posible previo pago que se haga de la misma por parte del actor, anexos prueba física de los productos con los cuales presumiblemente se están cometiendo las infracciones administrativas.

"No se encontró producto con la marca mencionada al rubro.

"En el caso de que en el curso de la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de las infracciones previstas en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial se procederá al aseguramiento de manera precautoria de los productos que infrinjan los derechos por el uso no autorizado de la marca mencionada al rubro. Acto seguido se levantará inventario de los bienes asegurados, lo cuál se hará constar en el anexo que se acompañe al acta de inspección.

"No se procede al aseguramiento por no hallarse mercancía."

Además, la actora se limita a realizar una afirmación genérica e hipotética en el sentido de que la demandada "podría darse el caso de continuar comercializando la mercancía", sin embargo, en el procedimiento de declaratoria de infracción la actora no probó que la presunta infractora en algún momento hubiere realizado actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal ni que se hubiere usado la marca parecida en grado de confusión a una registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada a que se refieren las fracciones I y IV, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, al no probar su dicho.

En virtud, de que la nota de venta, la playera y la visita de inspección ofrecidas por la actora, resultaron insuficientes para ello, conforme a las consideraciones expresadas por la autoridad demandada que no fueron desvirtuadas por la actora en el presente juicio, aun cuando se encontraba obligada conforme a lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente.

Máxime, que la denunciante de la conducta infractora sustenta la comisión de las conductas infractoras mencionadas, en la afirmación, en el sentido de que la presunta infractora "comercializa" la mercancía de que se trata, pero dicha afirmación tampoco es probada por dicha denunciante aun cuando se encontraba obligada conforme a lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Además, que la denunciante parte de una premisa equivocada, toda vez que "el uso de una marca" a que se refiere la fracción IV, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, constituye una conducta diversa de la "comercialización de una marca", a que se refiere la denunciante, y por ello la actualización de dicha fracción IV, como conducta infractora no puede tener sustento en la comercialización de una marca, dado que dicho precepto legal en la fracción mencionada, se refiere únicamente al uso de la marca.

En efecto, "comercializar" y "usar" una marca son aspectos distintos por las siguientes consideraciones:

Es de reiterar el contenido del multicitado artículo 213, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece lo siguiente:

> "ARTÍCULO 213.- **Son infracciones administrativas:**
> "(...)
> "IV.- **Usar** una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.
> "(...)"
> (*Énfasis añadido)

Del anterior precepto legal y específicamente de su fracción IV, se desprende que comete una infracción administrativa, quien "**usa**" una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

Se observa entonces que la actuación que sanciona la norma en comento es el uso de una marca, por lo que es necesario entonces precisar qué se entiende por el término "**usar**", para efectos de la fracción IV, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo conveniente señalar en este punto, que ni la Ley citada, ni su Reglamento, precisan el significado que deberá dársele a dicho término para efectos del citado artículo 213 de la multicitada Ley.

Sin embargo, tenemos que el Diccionario Océano, define el término "usar" de la forma siguiente:

> "**USAR**.- Estilar, acostumbrar, soler, llevar, traer, aplicar, dedicar, practicar, emplear, manejar, gastar, utilizar, recurrir a, valerse, aprovechar, demediar, desplegar, destinar, dar destino, echar, ejercitar esgrimir, estilarse, gozar, interponer, poner en juego, echar mano de monopolizar, ocupar, tomar posesión, recurrir a, hacerse servir, traer, hacer uso de, hacer valer, valerse de, disfrutar, servirse, consumir. Ant. Invalidar"

Otra definición del término usar nos la da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el cual al respecto prevé:

> "**Usar** (lat. v. *usare) verbo intransitivo
> "**1.-** hacer servir (una cosa): ~ pluma estilográfica; ~ de enredos; ~ de mañas.
> "**2**.- disfrutar uno (alguna cosa), sea o no dueño de ella: uso la propiedad de mi hermano.
> "**3**.- practicar (alguna cosa habitualmente), tener por costumbre: uso salir de paseo.
> "**4**.- acompañado de una de las palabras empleo, oficio, etc., ejercer: uso el oficio de carpintero.
> "**5**.- estar de moda, seguir un estilo, gusto, etc."

Ahora bien, el mismo Diccionario citado con antelación, define el término comercializar como la acción de dar a un producto condiciones y organización adecua-

das para su venta; evidenciándose entonces que no es lo mismo, usar una marca, que comercializar un producto.

En razón de lo anterior, esta Juzgadora considera que la fracción IV, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, al señalar que es una infracción administrativa el usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada, se refiere, conforme a la definición que el diccionario hace del término "**USAR**", a las personas que empleen o utilicen, al elaborar un producto o prestar un servicio, una marca parecida a otra registrada, es decir, el término "**USAR**" debe ser interpretado y aplicado a quienes fabrican o elaboran un producto y al mismo le adhieren una marca parecida a otra que está registrada, sin que sean titulares de la misma y sin que dicho producto sea el mismo por el que se otorgó el registro de la marca.

Lo anterior se corrobora inclusive del texto integral del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el que se observa que se diferencian en forma expresa y en distintas fracciones, las diversas actuaciones que puede desarrollar una persona física o moral y que se consideran infracción administrativa, evidenciándose que el legislador consideró como una diferente infracción, las actuaciones consistentes en la comercialización (poner a la venta), uso, reproducción o imitación, importación, venta o distribución, fabricación, y utilización.

Efectivamente, el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 213.- Son infracciones administrativas:
> "I.- **Realizar actos** contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.
> "II.- **Hacer aparecer** como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción des-

pués de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

"III.- **Poner a la venta** o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

"IV.- **Usar** una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

"V.- **Usar**, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

"VI.- **Usar**, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

"VII.- **Usar** como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;

"VIII.- **Usar** una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

"IX.- **Efectuar**, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

"a).- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
"b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
"c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
"d).- Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
"X.- **Intentar o lograr** el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;
"XI.- **Fabricar o elaborar** productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
"XII.- **Ofrecer en venta** o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;
"XIII.- **Utilizar procesos** patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
"XIV.- **Ofrecer en venta** o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;
"XV.- **Reproducir** o **imitar** diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
"XVI.- **Usar** un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar

bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;
"XVII.- **Usar** un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
"XVIII.- **Usar** una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;
"XIX.- **Ofrecer en venta** o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;
"XX.- **Ofrecer en venta** o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;
"XXI.- **Ofrecer en venta** o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;
"XXII.- **Usar** sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;
"XXIII.- **Reproducir** un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;
"XXIV.- **Importar, vender o distribuir** en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:
"a) Un esquema de trazado protegido;
"b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o
"c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y
"XXV.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos."
"(*Las negritas son nuestras)"

Se evidencia entonces que los únicos casos en los que se considera que la comercialización de productos (ofrecer o poner a la venta un producto), es infracción administrativa para efectos de la Ley de la Propiedad Industrial, son los previstos en las fracciones III, XII, XIV y XX, del artículo 213, es decir:

1.- Cuando se pone a la venta o en circulación productos u ofrece servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén.

2- Cuando se ofrece en venta o se pone en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva.

3.- Cuando se ofrece en venta o pone en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

4.- Cuando se ofrece en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular; y ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados, sustituido o suprimido totalmente ésta.

Sin embargo, no se prevé como una hipótesis de infracción, en la fracción IV, del artículo 213 de Ley de la Propiedad Industrial, el hecho de ofrecer en venta (comercializar) productos con una marca parecida en grado de confusión a otra registrada.

Sin que pase inadvertido para esta Juzgadora lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, porque no resulta aplicable al caso concreto, ya que el mismo se refiere a la caducidad de un registro marcario a que alude el artículo 130 de la Ley mencionada y no a la comisión de una conducta

infractora a que alude el artículo 213, fracción IV de la Ley de la materia, artículo 62, que es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 62.- Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación."

Se observa entonces que si bien dicho numeral señala que se entiende que una marca se encuentra en uso, entre otros casos, cuando los productos y servicios que ostentan la misma han sido puestos en el comercio, es decir, cuando se comercializan, lo cierto es que dicho numeral es expreso al señalar que esa "conceptualización" o "definición" del uso de una marca, es aplicable únicamente para los efectos del artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, numeral este último que a la letra señala:

> "ARTÍCULO 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca."

En este sentido, se observa que el que los productos o servicios que distingue una marca hayan sido puestos en el comercio, se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, o se aplique dicha marca a productos destinados a la

exportación, entre otros casos, se entiende que es mantener en uso la marca, **ÚNICAMENTE** para efectos de evitar que caduque el registro de ésta, según lo previsto por el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, y no así para considerar que se ha cometido alguna de las infracciones previstas en el artículo 213 de la citada Ley.

Relacionado con lo anterior debe señalarse que en general, los derechos de propiedad industrial se ajustan al principio de que al tratarse de derechos exclusivos a favor de su titular, cuando no son explotados o utilizados constituyen un abuso injustificado, por lo que la propia Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 130, sanciona esa falta de explotación o utilización con la extinción o pérdida de esos derechos exclusivos.

Efectivamente, en el caso de las marcas, el artículo citado en el párrafo que antecede determina que si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario autorizado para ello, la hubiere usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otras disposiciones gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Al respecto de lo anterior, este Cuerpo Colegiado estima que si bien la presencia reiterada de la marca en un sector del mercado, ya sea por la existencia física del producto, o por su concurrencia por otras vías como la publicidad, de manera que no se rompa la interacción natural que se crea entre el signo distintivo y el consumidor, al mantenerse vigente, entre éstos, la idea de la disponibilidad del producto, es suficiente para considerar que la marca se encuentra en uso, **tal situación únicamente aplica para efectos de "impedir" que una marca caduque por falta de uso de la misma**; siendo éste el sentido en que se pronuncia el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que determina **que para los efectos del artículo 130 de la Ley**, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando

los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

De lo anterior, este Pleno concluye que, si bien, es cierto que para efectos de comprobación de uso de una marca, lo elemental, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, es quien lo comercializa o coloca en el mercado para hacerlo disponible al público consumidor; también resulta cierto que ello es así, única **y exclusivamente** dentro de un procedimiento de declaración administrativa de caducidad, y no en relación a la comisión de una conducta infractora por violación a la Ley de la Propiedad Industrial.

Aunado a lo anterior, cabe reiterar que ni la Ley de la Propiedad Industrial, ni su Reglamento, precisan el significado que deberá dársele al término "**USAR**" para efectos del artículo 213 de la Ley en comento.

Por todo lo anterior, es de reiterar que para efectos de la fracción IV, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que alude como conducta infractora al uso de una marca en las condiciones que la misma fracción señala, dicho término no debe confundirse con el de comercializar.

Lo anterior, además se reitera por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.7o.A.129.A, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, página 1179, aplicable en el sentido de que el uso de una marca, se distingue de la comercialización del producto y por ello, concluye que es innecesario analizar si se acredita la comercialización del producto cuando se trata de una infracción relacionada con el uso de una marca; tesis que a continuación se cita:

"**MARCAS. RESULTA INNECESARIO ANALIZAR SI SE ACREDITÓ LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO AMPARADO POR EL SIGNO DISTINTIVO, CUANDO SE DEMUESTRA QUE SE INCURRIÓ EN ALGUNA DE LAS INFRACCIONES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XVIII Y XIX DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-** En caso de que se pruebe en el procedimiento administrativo que se cometieron las infracciones señaladas en las fracciones de mérito, consistentes en usar una marca registrada sin el consentimiento del titular o sin la licencia respectiva en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique y ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó sin el consentimiento de su titular, resulta intrascendente que se estudie si se puso en evidencia que fue comercializado el producto de que se trate, pues es suficiente para concluir que se realizaron las conductas infractoras imputadas, que se haya puesto a la venta el producto amparado por el registro marcario en las condiciones descritas.

"SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 1817/2000. Digar, S.A. de C.V. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa".

Por todo lo anterior, es de señalar que en el caso como lo indicó la autoridad administrativa, no quedó acreditado la comisión de las conductas infractoras previstas en las fracciones I y IV, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que se refieren a la realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia y; usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada; e incluso tampoco se prueba la aludida comercialización argumentada por

la denunciante de la presunta conducta infractora, por las razones expresadas en este considerando, al haber resultado insuficientes las pruebas ofrecidas por dicha denunciante en el procedimiento de origen.

(...)

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 16, fracción V de la Ley Orgánica de este Tribunal, 202, 203 a contrario sensu, 239-A, inciso b), 236, 237, 239, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I. Es infundada la causal de improcedencia hecha valer; y en consecuencia,

II. No se sobresee el presente juicio.

III. La actora no probó su pretensión.

IV. Se reconoce la validez de la resolución impugnada, descrita en el resultando 1° de este fallo.

V. Notifíquese.- Con copia autorizada del presente fallo, devuélvanse los autos a la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelve en definitiva el presente asunto y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de febrero de 2004, por mayoría de 5 votos a favor de los Magistrados Luis Malpica de Lamadrid, Alma Peralta Di Gregorio, Alejandro Sánchez Hernández, Guillermo Domínguez Belloc y Manuel Luciano Hallivis Pelayo y 3 votos en contra de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Jorge Alberto García Cáceres, quien se reservó su derecho para formular voto particular y Silvia Eugenia Díaz Vega. Encontrándose ausentes los Magistrados María del Consuelo Villalobos Ortíz, María Guadalupe Aguirre Soria y Luis Carballo Balvanera.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia se aprobó.

Se elabora el presente engrose el 12 de marzo de 2004. Con fundamento en lo previsto por los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, firma la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES EN EL JUICIO No. 5969/01-17-05-7/449/02-PL-07-04

El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres se reservó su derecho para formular voto particular en el presente asunto, el cual se manifiesta en los siguientes términos:

En el considerando primero de la sentencia mayoritaria, de manera oficiosa se señala que no pasa inadvertido para esta Juzgadora que en contra de la misma resolución impugnada en este juicio (negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a declarar la comisión de infracción administrativa por parte del C. Juan Ramón García Castro, contenida en el oficio 1158 de fecha 31 de enero de 2001), se interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mismo que fue desechado por improcedente (mediante oficio 4115 de fecha 8 de marzo de 2001); pero toda vez que el juicio se interpuso en contra de la resolución primigenia dentro del plazo legal establecido para ello, el juicio es procedente.

En mi opinión, el juicio debió sobreseerse de oficio, ya que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en la fracción V del artículo 203 del Código Fiscal de la Federación en relación con lo dispuesto por los artículos 83 de la

Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 11, fracciones XIII y XIV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en la medida que la resolución que resolvió la solicitud de declaración administrativa de infracción, ya fue materia de impugnación mediante recurso administrativo de revisión, o sea que ya se había optado por combatir el acto a través del citado recurso (mismo que fue desechado), y por ello el particular estaba obligado a agotar las vías correspondientes en contra de tal desechamiento y no pretender cambiar su opción, ignorando el desechamiento e intentando el juicio directamente en contra del acto recurrido.

En efecto, de una correcta interpretación del artículo 203, fracción V del Código Fiscal de la Federación que establece que procede el sobreseimiento del juicio en los casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo, lleva a considerar que la sola interposición del recurso administrativo de revisión establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en relación con el artículo 11, fracciones XIII y XIV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, excluye el ejercicio sucesivo del juicio contencioso administrativo en contra de la misma resolución, aun cuando la autoridad hubiese desechado por improcedente el recurso de revisión intentado, ya que con ello se pone claramente de manifiesto la intención del recurrente de obtener una resolución que favorezca su interés procesal. De no entenderse así, se llegaría al extremo de considerar que el juicio contencioso administrativo sería procedente incluso en aquéllos casos en que el recurso administrativo hecho valer se estimara procedente, se hubiese admitido a trámite y se hubiera resuelto en forma negativa a los intereses del recurrente (es decir, una vez agotada la opción que le otorga la ley), por el sólo hecho de que el juicio contencioso administrativo se interpuso en contra de la resolución recurrida dentro del plazo legal establecido para ello, lo que haría nugatorio el mandato legal de tener que elegir una u otra vía de impugnación al permitir el ejercicio de ambas vías en forma sucesiva.

En efecto, un criterio en ese sentido, es contrario al propósito del legislador quien al estatuir la causal de sobreseimiento en comento y la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de las resoluciones que decidan los recursos

administrativos como el de revisión contenido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, quiso constreñir al particular que optó por el agotamiento de tal medio de defensa (recurso administrativo), a combatir la resolución definitiva que en su caso se dictare en el mismo, pero no a intentar ambas vías simultáneas o sucesivamente, pues podría darse el caso de resoluciones contradictorias entre la dictada en sede administrativa y la que pronuncie este Tribunal, pues no puede soslayarse que la consecuencia legal y de lógica jurídica del desechamiento de un recurso administrativo, es dejar subsistente la resolución recurrida y por ello resultaba necesario combatir el desechamiento del recurso previamente, para que una vez que en su caso se declarara su nulidad, entonces sí, se estuviera en la aptitud legal de pronunciarse sobre la resolución recurrida en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 237 del Código Fiscal de la Federación.

Resulta aplicable al caso por analogía la siguiente tesis:

"Octava Época
"Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XV-II, Febrero de 1995
"Tesis: VI.1o.95 A
"Página: 513

"**RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. UNA VEZ INTENTADO NO PROCEDE EL AMPARO SIMULTÁNEAMENTE CONTRA EL MISMO ACTO.-** Cuando pudiéndose optar, para combatir un acto que se estima lesivo, por agotar un recurso ordinario o intentar desde luego el amparo, porque con la interposición de aquél no se suspendan los efectos de la resolución impugnada, se interponga recurso ordinario mediante el cual se pueda obtener la modificación, revocación, o nulificación de esa resolución, no se está ya en aptitud legal de solicitar simultáneamente, con igual finalidad, el amparo, **sino que sólo se podrá ocurrir a éste, en su caso, contra la resolución definitiva que se dicte en el recurso,** evitándose así

que los medios de defensa (el ordinario y el constitucional), por vías separadas, culminen con resoluciones que podrán ser contradictorias.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

"Amparo en revisión 15/89. Miguel Ángel Segundo Cervantes. 20 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.

"Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Tercera Parte, primera tesis relacionada con la Jurisprudencia 400, página 698.

A mayor abundamiento, el ejercicio de la facultad de optar por una u otra vía de impugnación que otorga el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, agota la misma. De manera que si el ejercicio de la vía fue defectuosa a juicio de la autoridad a quien corresponde su resolución, contra el consecuente desechamiento, deberán ejercerse los medios de defensa subsecuentes reconocidos por la ley para pretender su reconsideración o anulación, pero en ningún caso, puede reconstituir el derecho que se tenía previamente al ejercicio de la elección de la vía de impugnación, pues es un principio general de derecho el que a nadie debe aprovechar el error de derecho, "iuris error nulli prodest", y menos cuando el error cometido ubique el asunto en un nuevo estadio procesal, de modo tal que si no se combate el desechamiento o habiéndose combatido el mismo es confirmado en etapas procesales posteriores, las resoluciones que se pretendieron combatir deberán considerarse firmes.

MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD SI EL SOLICITANTE DE LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD DE ESA MARCA ES UNA PERSONA FÍSICA.- El artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece los requisitos que debe contener la solicitud de declaración administrativa, sin que se advierta la obligación de acreditar la personalidad del solicitante a través de carta poder otorgada en escritura pública o testimonio y que además tenga que ser ratificada su firma y testigos ante notario público. El artículo 181, fracciones I y II de dicha Ley, establece que cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad, mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física, y mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales se trate de solicitudes de patentes, registros o la inscripción de licencias o sus transmisiones, en este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades. El artículo 16 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el acreditamiento de la personalidad de los apoderados y representantes se sujetará, entre otros, a la carta poder a que se refiere el artículo 181, fracciones I y II de la Ley, la cual deberá contener el nombre, firma y domicilio de dos testigos, además de que los otorgantes podrán ser nacionales o extranjeros. Por lo que, si quien solicita la declaración administrativa de caducidad es una persona física a través de un mandatario, es suficiente para acreditar su personalidad con la carta poder exhibida que contenga nombre, firma y domicilio de los testigos, tal y como lo establece el artículo 181, fracción I de la Ley en cita. (4)

Juicio No. 17024/01-17-10-8/1037/02-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de abril de 2004, por mayoría de 5 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretaria: Lic. Juana Griselda Dávila Ojeda.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de abril de 2004)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ARGUMENTOS EXPUESTOS EN UN RECURSO DE RECLAMACIÓN Y EN UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- CASO EN EL CUAL NO SE ESTÁ OBLIGADO AL ESTUDIO DE LA CAUSAL.- Si la autoridad demandada en su contestación de demanda pretende la improcedencia del juicio, atendiendo a argumentos que constituyen una reiteración de los que la propia autoridad planteó en un recurso de reclamación, es obvio que ya no puede existir un pronunciamiento adicional sobre este mismo tema, pues de haberlo, implicaría la posibilidad de que este Tribunal revocara por sí y ante sí sus propias resoluciones, lo cual no es jurídicamente posible, por lo tanto, tales argumentos resultan inatendibles. (5)

Juicio No. 17024/01-17-10-8/1037/02-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de abril de 2004, por mayoría de 5 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretaria: Lic. Juana Griselda Dávila Ojeda.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de abril de 2004)

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CADUCIDAD DE MARCAS.- SE ACTUALIZA SI NO SE ACREDITA EL USO PARA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PARA LOS QUE FUE REGISTRADA.- El artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo las excepciones ahí establecidas. El artículo 152, fracción II de dicha Ley, previene que el registro caducará, entre otros casos, cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto. Por su parte, el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial indica que se

entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distribuye han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el país, bajo esa marca en la cantidad y el modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. Ahora bien, si un titular o licenciatario ofrece diversas facturas para acreditar el uso de la marca, pero de ellas no se desprende el uso de la marca en los productos para los que fue registrada, es evidente que se actualiza la caducidad de dicho registro marcario. (6)

Juicio No. 17024/01-17-10-8/1037/02-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de abril de 2004, por mayoría de 5 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretaria: Lic. Juana Griselda Dávila Ojeda.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de abril de 2004)

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROMOCIONES DE SOLICITUD DE CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO.- EL PAGO DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE PUEDE ACREDITARSE CON EL QUE OBRE EN EL EXPEDIENTE DE LA MARCA EN TRÁMITE, SI SE LE CITÓ COMO ANTERIORIDAD OPONIBLE.- Si en un expediente a través del cual se encuentra en trámite la solicitud del registro de una marca, se encuentra el comprobante de pago de la tarifa correspondiente por el estudio de dicha solicitud y la autoridad en este expediente le cita como anterioridad oponible el registro de una marca; del que posteriormente se solicita la caducidad de dicho registro debe considerarse que con la cita de este expediente acredita el pago de la tarifa correspondiente, en esta solicitud de caducidad. (7)

Juicio No. 17024/01-17-10-8/1037/02-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de abril de 2004, por mayoría de 5 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretaria: Lic. Juana Griselda Dávila Ojeda.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de abril de 2004)

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

MULTAS IMPUESTAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER.- El artículo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece los elementos que deben tomarse en cuenta para la determinación de las multas, a saber: el carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción; las condiciones económicas del infractor y la gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos, o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados. Por su parte, el artículo 214, fracción I de dicha Ley establece que las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas, entre otras, con multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por lo que, si en una resolución derivada de la declaración de infracciones administrativas previstas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, la autoridad impone una sanción menor a lo establecido por el artículo 214, fracción I de la Ley aludida, tomando en cuenta los elementos antes citados, debe considerarse que el monto de la multa se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que la autoridad razonó su arbitrio para imponerla. (8)

Juicio No. 20544/01-17-09-7/ac2/518/03-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de mayo de 2004, por mayoría de 5 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de mayo de 2004)

SEGUNDA SECCIÓN

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

QUEJA QUE SE DEBA INSTRUIR COMO JUICIO POR EJECUTORIA DE TRIBUNAL COLEGIADO, COMPETE A LA SALA QUE DETERMINEN LAS NORMAS VIGENTES EN LA FECHA DE SU INTERPOSICIÓN.- Es un criterio reiterado por este Tribunal que la competencia de las Salas Regionales debe determinarse conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que se presente la demanda. Por tanto, cuando en una ejecutoria emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito se ordena instruir como un nuevo juicio la queja respecto de las nuevas violaciones por vicios propios del acto que provocó la queja, para fijar la competencia de la Sala Regional que conocerá de dicho juicio, debe estarse a las disposiciones vigentes en la fecha de presentación ante este Tribunal, del escrito de queja, que constituirá la demanda en el nuevo juicio. (9)

Juicio No. 7304/98-11-04-3/245/00-S2-07-04-QC.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de mayo de 2004, por mayoría de 2 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de mayo de 2004)

SALAS REGIONALES

SÉPTIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO ES LA DISPOSICIÓN LEGAL QUE OBLIGA A PATRÓN DISTINTO DE LA FEDERACIÓN Y ENTIDADES FEDERATIVAS, RETENGA Y ENTERE RESPECTO A LOS TRABAJADORES DE LA INICIATIVA PRIVADA IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE AGUINALDOS O CUALQUIER OTRA GRATIFICACIÓN ANUAL CON PERIODICIDAD DISTINTA A LA MENSUAL.- Las tesis jurisprudenciales 49/2002 y 50/2002, referentes a la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2002, mismo que otorga un trato distinto a los trabajadores al servicio del Estado y de las Entidades Federativas respecto de los trabajadores al servicio de la iniciativa privada, no le son aplicables a estos últimos, al no ser ellos los destinatarios de la norma jurídica de cita, es decir, dado su carácter de trabajadores al servicio de la iniciativa privada, en su caso se rigen por el citado artículo 109, fracción XI, primero y último párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2002, párrafos a los que no se refiere la declaratoria de inconstitucionalidad definida en las jurisprudencias de trato; razón por la cual no están exentos de pago del impuesto sobre la renta por las retenciones efectuadas por su patrón sobre aguinaldos o cualquier otra gratificación anual con periodicidad distinta a la mensual, tampoco es procedente la solicitud de devolución que los mismos efectuaren por el mencionado concepto, porque las tesis aludidas no traen aparejadas por sí mismas, el derecho a la devolución del impuesto, al no tener, la norma de mérito, frente a los trabajadores al servicio de la iniciativa privada, el carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa, es

decir, el actor pretende que las jurisprudencias apuntadas le beneficien a tal punto que deba ordenarse la devolución de las retenciones que le fueron efectuadas, sólo que pierde de vista, la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2002, de acuerdo a las jurisprudencias que invoca, se limitan a su penúltimo párrafo, norma que no le resulta aplicable al actor ni a su patrón, lo que pone de manifiesto que las retenciones se efectuaron con fundamento en un párrafo diferente del citado numeral, cuestión que debe ventilarse en juicio constitucional y no en la presente instancia. Lo que el actor pretende demostrar en realidad, es que dicha declaratoria afecta el sistema impositivo del tributo. (1)

Juicio No. 11003/03-17-07-5.- Resuelto por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de enero de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Isabel Gómez Muñoz.- Secretario: Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.

DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- LA OBLIGACIÓN INCUMPLIDA POR EL SERVIDOR, QUE DA ORIGEN A LA SANCIÓN, DEBE ESTAR PLENAMENTE ACREDITADA.- Cuando de las constancias que integran el expediente se desprende que la obligación respecto de la cual se sanciona al servidor público actor, se encuentra expresamente conferida a una persona diferente, por instrucciones de su superior jerárquico, en oficio de mérito, fechado con anterioridad al nombramiento del cargo conferido al funcionario sancionado, no es posible con apego a derecho, imponer multa por incumplir una conducta que no era su obligación. En tal virtud, es nula la resolución que así lo determine, al configurarse en la especie, la hipótesis prevista por el artículo 238, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, ya que los hechos que la motivaron se apreciaron en forma incorrecta, al no existir el incumplimiento atribuido al servidor público sancionado, pues no tenía conferida expresamente dicha obligación en ordenamiento ni documento alguno. (2)

Juicio No. 16095/03-17-10-1.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de mayo de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Roberto Bravo Pérez.- Secretaria: Lic. Graciela Monroy Santana.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

MULTA IMPUESTA POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL.- RESULTA ILEGAL, SI LA AUTORIDAD NO DEMUESTRA LA EXISTENCIA Y NOTIFICACIÓN DE LA CÉDULA DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.- Cuando de las

multas combatidas en el juicio de nulidad, se advierte que están motivadas en la falta de pago de cuotas obrero patronales que fueron determinadas y notificadas, si el contribuyente sancionado niega que se le haya notificado tal documentación, de conformidad con el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, a la autoridad le corresponde la carga de la prueba y si ésta no aporta el documento que el actor dijo desconocer, ni su constancia de notificación, es evidente que no acredita la existencia de la infracción y por ende, la multa deviene improcedente. En efecto, si la autoridad motivó la imposición de las multas en la determinación y notificación de cuotas obrero patronales, cuyo contenido dijo desconocer el actor, es evidente que la autoridad se encuentra obligada a exhibirla en el juicio, y si del capítulo de pruebas de la contestación a la demanda, no se desprende que las autoridades hayan ofrecido y mucho menos exhibido tal constancia, el agravio debe declararse fundado, ya que la resolución impugnada tiene su origen en actos viciados, por lo que debe declararse su nulidad al surtirse la hipótesis prevista en el artículo 238, fracción IV del Código Fiscal de la Federación. (3)

Juicio No. 23465/03-17-10-1.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de mayo de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Roberto Bravo Pérez.- Secretaria: Lic. Graciela Monroy Santana.

CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL

NOTIFICACIONES PERSONALES PRACTICADAS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 542 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN EL AÑO 2001. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA TIENE COMPETENCIA PARA ANALIZAR SU LEGALIDAD.- No obstante, que el juicio contencioso administrativo debe realizarse y analizarse al amparo de leyes federales, por tratarse precisamente de un proceso federal, en los casos en que la autoridad que practique la diligencia de notificación del crédito, verbigracia, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal por

conducto de la Administración Tributaria Tepeyac, cuando en su actuar aplique la legislación local correspondiente, esto es, el Código Financiero del Distrito Federal, vigente en el año 2001, por disposición expresa de la ley, misma que en su artículo 1º, señala que las disposiciones de ese Código son de orden público e interés general, y tiene por objeto regular la obtención, adquisición y aplicación de los ingresos del Distrito Federal, tal situación, no afecta la competencia material de este Tribunal para conocer del juicio ni de analizar la legalidad de la notificación respectiva, habida cuenta que lo que está en discusión es una multa de carácter administrativo federal no fiscal determinada por la Procuraduría Federal del Consumidor, cuya notificación se practicó bajo la ley local de la autoridad actuante, esto es, el Código Financiero del Distrito Federal. (4)

Juicio No. 8083/03-17-10-1.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de mayo de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Roberto Bravo Pérez.- Secretaria: Lic. Graciela Monroy Santana.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

NOTIFICACIONES PERSONALES PRACTICADAS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 542 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN EL AÑO 2001. REQUISITOS DE LEGALIDAD.- Para tener por legalmente notificado a un particular de un acto de autoridad de conformidad con el artículo 542 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en el año 2001, debemos atender literalmente al contenido del cuarto párrafo de dicho precepto, mismo que dispone la obligación para el notificador de que, cuando la notificación se efectúe personalmente, y si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se le hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia, de lo cual, por disposición expresa del último párrafo del artículo que nos ocupa, el referido notificador tomará razón por escrito, en la que asiente que se constituyó en el domicilio respectivo, que reque-

rida la presencia de la persona a notificar, y que por no estar presente se emitió citatorio, dejado en el domicilio del particular, una vez constituido nuevamente en el domicilio, el día y hora mencionados en el citatorio, requirió la presencia de la persona citada o su representante legal, y que como no lo esperaron en la hora y día fijados en el citatorio, la diligencia la practicó con quien se encontraba en el domicilio. De donde se deduce la obligación de asentar en actas circunstanciadas los hechos relativos que se derivan del mismo artículo 542, ya que es necesario que existan constancias que demuestren fehacientemente cómo se practicó todo el procedimiento de notificación, de otra manera se dejaría al particular en estado de indefensión. En esos términos de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 542 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en el 2001, cuando se lleva a cabo una notificación personal, tienen que cumplirse los siguientes requisitos, mismos que, por disposición expresa de la ley, deben hacerse constar necesariamente por el notificador en el acta que al efecto levante, concretamente: a) que la persona a quien se deba notificar no estuvo presente en el domicilio correspondiente cuando se iba a notificar la determinación relativa; b) que al no estar presente el notificado, se le dejó citatorio con alguna persona para que esperara al notificador a una hora fija el día hábil siguiente, y c) que el interesado no atendió al citatorio que se le dejó y por ello la notificación se realizó por conducto de diversa persona, so pena que de incumplir el notificador con los requisitos anotados, la diligencia que practique será nula. (5)

Juicio No. 8083/03-17-10-1.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de mayo de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Roberto Bravo Pérez.- Secretaria: Lic. Graciela Monroy Santana.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN FORMULADO POR LAS AUTORIDADES, DEBE CONTENER EXPRESAMENTE EL APERCIBIMIENTO Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS, EN CASO DE INCUMPLI-

MIENTO.- Para que la autoridad acate correctamente las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el artículo 16 Constitucional, es necesario que en sus actuaciones, particularmente entratándose de requerimiento de documentación, en los términos que refiere el artículo 38, fracción III del Código Fiscal de la Federación, precise con toda claridad que en caso de incumplimiento, la conducta omisiva del particular, puede dar lugar a la imposición de una sanción, teniendo incluso la obligación de indicar los preceptos legales aplicables a dicha conducta. En caso contrario, si la autoridad hacendaria al momento de requerir documentos a los particulares, con la finalidad de ejercer sus facultades de comprobación, no comunica al contribuyente requerido el apercibimiento de que en caso de no proporcionar lo solicitado será acreedor a la imposición de una sanción, la multa que determine con base en dicho incumplimiento resulta ilegal, ante la indebida fundamentación y motivación del oficio de requerimiento y la consecuente indebida apreciación de los hechos que generen la multa. (6)

Juicio No. 27331/03-17-10-1.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de mayo de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Roberto Bravo Pérez.- Secretaria: Lic. Graciela Monroy Santana.

SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO II

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

COMANDAS DE RESTAURANTES.- NO SON DOCUMENTOS INDISPENSABLES QUE INTEGREN LA CONTABILIDAD DE UN NEGOCIO.- Cuando se manifieste que causa agravio el hecho de que la autoridad fiscalizadora determine presuntivamente créditos fiscales por obstaculizar una visita domiciliaria, debido a que no se le proporcionaron las comandas de consumo que cada mesero realiza por cada cliente, sin percatarse que lo contenido en las comandas es vaciado en el sistema de cómputo con el que se realiza la cuenta final al consumidor, arguyendo la autoridad que debe de guardar la empresa dichos papeles conforme lo establece el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación en relación con el numeral 67 del mismo Ordenamiento legal, por el plazo de cinco años; es de concluirse como fundado el agravio hecho valer para declarar la nulidad de una determinación en este sentido, toda vez que el no proporcionar las comandas realizadas por cada mesero en una visita domiciliaria, no significa que la visitada esté obstaculizando la misma, aunado a que la empresa sólo está obligada a seguir las reglas contempladas por el artículo 28 del Código invocado, mismo que no contempla las comandas como documentos indispensables que integran la contabilidad de un restaurante, debiéndose considerar que se vierte su información en el sistema de cómputo del establecimiento al momento de realizarse la cuenta o nota final del consumo. (7)

Juicio No. 3505/02-05-02-9.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de mayo de 2003, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Mario Rodríguez Junco.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. SUS FORMALIDADES.- Cuando la autoridad realice la notificación de un acto por estrados, deberá de observar las forma-

lidades que para tal efecto se prevean en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente en el año en que la realice, como son, para el año 2003, fijar el documento a notificar durante cinco días en un sitio abierto al público, de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación, debiendo además dicha autoridad dejar constancia de ello en el expediente respectivo; por lo que de no existir la constancia relativa de que se cumplió con tales formalidades, dicha notificación por estrados resulta ilegal por no observarse lo dispuesto en el numeral mencionado y por consiguiente, según sea el caso, debe tenerse al demandante como sabedor del acto impugnado desde la fecha en que manifieste conocerlo, o bien, desde el momento en que el mismo le es dado a conocer en términos de la fracción II, del artículo 209-Bis del Código Tributario Federal. (8)

Juicio No. 426/03-05-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de septiembre de 2003, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Francisca Espinoza Jaramillo.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

SOBRESEIMIENTO POR CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECURRIDO. PROCEDE SI LA AUTORIDAD ACREDITA QUE ES FALSA LA MANIFESTACIÓN DEL ACTOR DE QUE LO CONOCIÓ RECIENTEMENTE.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, procede el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo cuando existe consentimiento respecto del acto que se pretende recurrir; es decir, cuando no se impugna dentro del término que al efecto establece el artículo 207 del Código citado; por ello, si la parte actora manifiesta que tuvo conocimiento reciente del acto que señala como impugnado, y la parte demandada acredita que tal afirmación es falsa, dado que ese mismo acto de autoridad lo controvirtió la accionante vía recurso de revocación; resulta improcedente el juicio por evidente consentimiento del acto aludido. (9)

Juicio No. 4396/03-05-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de enero de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Francisca Espinoza Jaramillo.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SU ACREDITAMIENTO.- Conforme lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 6º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2001, si en la declaración del ejercicio se tienen cantidades a favor respecto de dicho impuesto, el contribuyente puede acreditarlas en declaraciones de pago provisionales posteriores o solicitar su devolución total; por lo que si la parte actora acredita que tuvo un saldo a favor reflejado en la declaración del ejercicio 2000, y el mismo lo acredita en las declaraciones de pagos provisionales de dicho impuesto, de los meses de enero y subsecuentes del ejercicio 2001, tal acreditamiento resulta válido, por realizarse el mismo contra un pago provisional posterior al ejercicio en que se tuvo dicho saldo a favor; sin que para ello se deba de tomar en consideración la fecha de presentación de la declaración del ejercicio, toda vez que tal situación no se prevé en ningún dispositivo legal. (10)

Juicio No. 693/02-05-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de enero de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Francisca Espinoza Jaramillo.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

COPIAS PARA EL TRASLADO DE LOS ANEXOS DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA.- ES LEGAL SI SE EXHIBEN EN COPIAS SIMPLES.- Resulta legal el proceder de la autoridad, si las copias para traslado de los anexos a su contestación de demanda los exhibe en copias simples, no obstante que

los anexos sean en copias certificadas; ello es así, toda vez que acorde a lo dispuesto por el artículo 214 del Código Fiscal de la Federación, el demandado deberá adjuntar a su contestación copias de la misma y de los documentos que acompañe para el demandante y para el tercero señalado en la demanda; sin que exija se trate de copias certificadas. (11)

Juicio No. 2622/03-05-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de marzo de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Isabel Patricia Herrero Rodríguez.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

REPRESENTANTE LEGAL. DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PERSONAL.- Conforme al artículo 2561 del Código Civil Federal, cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el mandante; en este caso, el mandatario es el obligado directamente a favor de la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuere personal; sin embargo, el dispositivo legal en comento prevé como excepción, el caso en que se trate de cosas propias del mandante; de ahí, que si las diligencias relativas a la notificación de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo son un asunto (cosa) relativo a su mandante, resulta evidente que el mandatario o representante legal no puede estar actuando en nombre propio sino de aquél, porque el artículo referido no se lo permite, ya que el asunto, lo constituyen precisamente las diligencias, tanto de citación como de notificación de la resolución que se impugna en el juicio y que van dirigidas al mandante, en la cual se le determina un crédito fiscal y el representante legal es mandatario, como ha quedado precisado; por lo tanto, es evidente que no se trata de un asunto propio de dicha persona, sino que es relativo a la representación que se le ha otorgado; en estas condiciones, debe considerarse que la notificación referida se entendió con el representante legal o mandatario en esta calidad y no en su carácter personal. (12)

Juicio No. 2622/03-05-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de marzo de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Isabel Patricia Herrero Rodríguez.

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

RECURSO DE REVOCACIÓN. ES LEGAL DESECHARLO CUANDO LA FIRMA IMPUESTA EN EL ESCRITO QUE LO CONTIENE ES DIFERENTE A LA CONTENIDA EN OTRAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR LA MISMA RECURRENTE.- Es legal desechar un recurso de revocación interpuesto, cuando la firma contenida en el mismo, es notoriamente distinta a la impuesta por la misma persona en otras promociones presentadas ante la autoridad; pues ante lo evidente de que las firmas supuestamente impuestas por la misma persona son distintas, la autoridad no tiene la certeza de que efectivamente hubiera sido la voluntad de la recurrente promover el recurso de revocación; sin que para arribar a tal conclusión requiera la autoridad intervención de un perito en la materia, ya que la diferencia de las firmas comparadas, es perceptible a simple vista; ello máxime si la parte interesada incumple vía juicio contencioso administrativo, con lo dispuesto por los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia fiscal si en ningún momento ofrece o aporta medios de convicción pertinentes, para probar al Tribunal que, independientemente de la notoria diferencia de las firmas, las mismas fueron impuestas por una misma persona; luego entonces, resulta procedente reconocer la legalidad del desechamiento citado. (13)

Juicio No. 6328/03-05-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de abril de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Francisca Espinoza Jaramillo.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RECURSO DE REVOCACIÓN. SUPUESTO PARA SU ENVÍO POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, DEBE ACREDITARSE.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación, el escrito de interposición del recurso de revocación, deberá presentarse ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado; estableciendo dicho numeral, en su segundo párrafo, como excepción a la regla general, el que dicho escrito podrá enviarse a la autoridad competente en razón de territorio, o a la que emitió o ejecutó el acto, por correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe desde el lugar en que resida el recurrente. De la interpretación del precepto legal citado, se tiene que para que una persona física o moral pueda utilizar la vía de correo certificado con acuse de recibo para enviar su escrito de recurso de revocación a la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente, necesariamente debe acreditar en su instancia que su domicilio se ubica fuera del de la autoridad competente para resolver su medio de defensa, pues de no hacerlo; es decir, si se advierte que el domicilio del recurrente se encuentra en la misma ciudad en la que se ubica el domicilio de la autoridad competente para resolver el recurso administrativo, y que no obstante ello presentó su escrito de recurso vía correo certificado con acuse de recibo, debe tenerse para efectos del cómputo de la presentación de dicho medio de defensa, la fecha en que éste se recibe ante las oficinas de la autoridad y no la fecha en que se depositó en el Servicio Postal Mexicano. (14)

Juicio No. 5776/03-05-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de abril de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Francisca Espinoza Jaramillo.

SEGUNDA SALA REGIONAL HIDALGO MÉXICO

LEY ADUANERA

RECINTO FISCAL.- DEBE CONSIDERARSE COMO TAL, A LAS INSTALACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL.- Si en términos de lo establecido en el artículo 14 de la Ley Aduanera, por recintos fiscales, se entiende, entre otros lugares, el lugar donde las autoridades aduaneras realicen sus funciones de fiscalización de las mercancías de procedencia extranjera, y por virtud de lo establecido en los artículos 23, fracción VII y 25, fracción II del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente en el año de 2002, las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, tienen entre otras atribuciones, las de ordenar y practicar verificaciones que establezcan las disposiciones aduaneras, lo que da a tales Administraciones el carácter de autoridades aduaneras, que naturalmente ejercen sus funciones de fiscalización dentro de sus instalaciones, resulta inconcuso que dicho lugar tiene el carácter de recinto fiscal. Por lo que es válido que si éstas tienen tal carácter, las autoridades pueden llevar a cabo en sus instalaciones, la verificación de un vehículo de procedencia extranjera, actuación que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 14, primer y segundo párrafos de la Ley Aduanera. (15)

Juicio No. 6172/02-11-02-4.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de mayo de 2003, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Victorino Manuel Esquivel Camacho.- Secretario: Lic. Omar Javier Mora Osorio.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2001. SUJETOS QUE TRIBUTAN EN EL CAPÍTULO I DEL TÍTULO IV DE LA LEY DE LA MATE-

RIA Y PRESENTAN LA DECLARACIÓN ANUAL POR SU CUENTA, POR ESE SOLO HECHO NO TIENEN DERECHO A UN SUBSIDIO AL 100%.- El artículo 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2001, en la parte relativa a las personas que tributan en el régimen previsto en el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el 2001, contempla la figura del subsidio a los ingresos como un apoyo de carácter económico que rige en exclusiva para una categoría de contribuyentes del impuesto sobre la renta que reciben ingresos en las mismas circunstancias, por la prestación de un servicio personal subordinado, en consecuencia, la referida disposición se debe apegar al principio de equidad y proporcionalidad para su determinación, en tanto que debe tomarse en cuenta el monto de las prestaciones concedidas a las referidas personas, con la finalidad de que entre menos monto de prestaciones tengan, mayor será el porcentaje de subsidio que gocen, por ello, la proporción de subsidio referida, será calculada para todos los trabajadores del empleador, esto es, no se establece como lo pretende hacer ver la actora que tratándose de trabajadores que presentan la declaración anual del impuesto sobre la renta por su cuenta, tienen derecho a gozar de un subsidio del 100%, pretendiendo darle un trato desigual a los iguales, pues sería inequitativo que el resto de los trabajadores que prestan los mismos servicios sólo tengan derecho a una proporción, no obstante que ésta sea determinada por el empleador, para interpretar que el trabajador que presenta su declaración en forma individual, no deba considerar la proporción de subsidio, puesto que en tal caso, deben considerar el monto del subsidio acreditable y el no acreditable respecto de sus ingresos, calculados y comunicados por la persona a la que le hubiera prestado servicios personales subordinados o en su caso, exista la posibilidad de calcularlo por el propio trabajador pero ajustándose a lo dispuesto por el artículo 80-A de la citada Ley, pues no existe sustento legal que lo exima de aplicarlo. (16)

Juicio No. 891/04-11-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de mayo de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Victorino Manuel Esquivel Camacho.- Secretario: Lic. José Luis Méndez Zamudio.

TERCERA SALA REGIONAL HIDALGO MÉXICO

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ACTO ADMINISTRATIVO. ES VÁLIDO MIENTRAS NO HAYA SIDO DECLARADO NULO Y, POR LO TANTO, ES EFICAZ Y EXIGIBLE A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS SU NOTIFICACIÓN.- Es inexacto que la resolución impugnada sea ilegal por haberse dictado cuando aún la resolución que le dio origen no había adquirido firmeza, dado que, contrariamente a lo aducido por el actor, la firmeza del acto administrativo se adquiere a partir de que surte efectos su notificación, y no a partir de que transcurre el plazo para que sea impugnado. En efecto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8 y 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el acto administrativo es válido mientras no haya sido declarado nulo y, por lo tanto, el acto válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos su notificación. De tales dispositivos se desprende que la validez del acto administrativo es lo mismo que la presunción de legalidad o legitimidad, ya que dicho concepto implica que aquél se encuentra ajustado a derecho; es decir, que se presume que fue emitido de acuerdo con lo previsto en la ley que regula su emisión; en consecuencia, la validez del acto administrativo presupone su idoneidad para generar sus efectos jurídicos. Así las cosas, es válido el acto administrativo que ha sido elaborado de acuerdo con el ordenamiento jurídico en vigor; y es eficaz cuando, siendo válido, puede ser cumplido, característica que adquiere por la participación de conocimiento al interesado, a través de su notificación; por ello la eficacia del acto se vincula con su ejecutividad y ejecutoriedad. En estas consideraciones, es de concluirse que no le asiste razón a la actora, en tanto que la autoridad para la emisión de la resolución impugnada no era necesario que esperara a que transcurrieran cuarenta y cinco días, contados a partir de la notificación a la actora de la diversa resolución que ordenó a la demandada emitiera otra diversa, puesto que como se ha visto con anterioridad, la demandada estuvo en posibilidad de dar cumplimiento a esta última resolución, una vez que surtió sus efectos su notificación, puesto que a partir de esta fecha tal resolución es válida y, por lo tanto, eficaz y exigible, ejecutiva y ejecutoriable.

Es decir ha adquirido firmeza, ello con independencia del derecho del actor de impugnarla dentro del plazo que establece la ley respectiva. (17)

Juicio No. 2572/01-11-03-6 y 2119/01-12-02-5 acum.- Resuelto por la Tercera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de octubre de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Manuel Lucero Espinosa.- Secretaria: Lic. Florencia Victoria Martínez Morán.

GENERAL

COMPETENCIA TERRITORIAL.- NO LA TIENE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE NAUCALPAN, EN EL ESTADO DE MÉXICO, PARA SOLICITAR INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A TERCEROS QUE SE ENCUENTREN DOMICILIADOS FUERA DE SU CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL.- De acuerdo con lo previsto en el artículo Primero, fracción VIII, inciso 5) del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de diciembre de 1996, invocado por la autoridad demandada para fundar su competencia territorial, su circunscripción territorial comprende los municipios de Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza, Amecameca, Atlautla, Ayapango, Cocotitlán, Chalco, Ecatzingo, Ixtlahuaca, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Acolman, Axapusco, Coacalco, Ecatepec, Napaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temaxcalapa, Teotihuacán, Naucalpan, Huixquilucan, La Paz, Nezahualcóyotl, Isidro Fabela, Jilotzingo, Nicolás Romero, Villa del Carbón, Atenco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Papalotla, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Tezoyuca, Apaxco, Coyotepec, Huehuetoca, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, Teoloyucan, Tequisquiac, Zumpango, y Valle de Chalco Solidaridad, México.- De lo anteriormente expuesto, se desprende que la circunscripción territorial de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan en el Estado de México, no comprende el Estado de Yucatán ni

el Distrito Federal, entidades en donde se encuentran los domicilios de las empresas a las cuales, en su carácter de terceros vinculados con la actora, se les requirió información y documentación, con la que la demandada consideró que la demandante había omitido declarar ingresos, de lo que resulta que dicha autoridad no tenía facultad alguna para requerir información de terceros con domicilio ubicado fuera de esa demarcación, de lo que se concluye que la emisora de la resolución impugnada al haber ejercido sus facultades de fiscalización respecto de terceras personas, carece de competencia territorial para haber obrado de tal forma; toda vez que en el estado de derecho en que se encuentra inmerso nuestro país, rige un sistema de facultades expresas, y no debe perderse de vista que las autoridades administrativas sólo pueden hacer aquello que expresamente está permitido por las normas jurídicas aplicables, en este caso respecto a la competencia; de manera tal que sus facultades necesariamente deben estar previstas en una disposición jurídica, y no inferirse basándose en presunciones, dado el régimen de facultades expresas bajo el que se desenvuelve su actuación, de lo que resulta incuestionable que la demandada es incompetente en razón del territorio, para emitir el requerimiento de pago impugnado. (18)

Juicio No. 3112/02-11-03-6.- Resuelto por la Tercera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 21 de abril de 2003, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Manuel Lucero Espinosa.- Secretaria: Lic. Florencia Victoria Martínez Morán.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

COMPETENCIA TERRITORIAL.- RESULTA INEXACTO QUE LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD FISCAL PARA REQUERIR A TERCEROS RELACIONADOS CON LOS CONTRIBUYENTES NO ESTÁ SUJETA A LIMITACIÓN TERRITORIAL ALGUNA.- No le asiste razón a la autoridad demandada, cuando en su contestación manifiesta que el artículo 42, fracción II del Código Fiscal de la Federación, faculta a las autoridades para requerir a terceros relacionados con los contribuyentes, sin que se establezca ninguna limitante respecto

a la circunscripción territorial de tales autoridades, en tanto que pretende olvidar que en nuestro sistema jurídico el ejercicio de la competencia, por parte de las autoridades, está condicionada a que tanto material como territorialmente las autoridades tengan tales facultades, en cuanto que el principio de legalidad así lo establece, toda vez que conforme al mismo (las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permita). En esta medida, si bien es cierto que el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación no hace referencia a la competencia territorial, ello no implica que las autoridades fiscales en ejercicio de la competencia material prevista en tal precepto, no deban actuar dentro del marco de su competencia territorial, por las razones antes expuestas, y porque además la competencia territorial estaba prevista en la época de la emisión de los oficios que nos ocupa, en el Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de diciembre de 1996, en el cual en su artículo Primero, fracción VIII, inciso 5), prevé la circunscripción territorial conforme al cual la demandada podría ejercer su competencia material. De lo anteriormente tenemos que sí como ya queda establecido, la circunscripción territorial de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, se limita sólo a los municipios mencionados, pertenecientes al Estado de México, resulta dable concluir que dicha autoridad no tenía facultad alguna para requerir información de terceros con domicilio ubicado fuera de esa demarcación. (19)

Juicio No. 3112/02-11-03-6.- Resuelto por la Tercera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 21 de abril de 2003, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Manuel Lucero Espinosa.- Secretaria: Lic. Florencia Victoria Martínez Morán.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. ES INCOMPETENTE PARA IMPONER SANCIONES EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDE-

RAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.- De conformidad con los artículos 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 1o, último párrafo, 3o, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Procuraduría Federal del Consumidor es un Organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que forma parte de la Administración Pública Paraestatal, misma que carece de facultades para imponer sanciones por infracciones a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, toda vez que de conformidad con los artículos 1º y 112 de la Ley citada en último término, el incumplimiento a lo dispuesto por dicha Ley y demás disposiciones derivadas de ella, será sancionado administrativamente por las dependencias conforme a sus atribuciones y en base a las actas de verificación, por lo que si los artículos 2º y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, especifican claramente cuáles son las dependencias de la Administración Pública Federal, mismas a las que evidentemente se refieren los artículos 1º y 112 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, mismas que sólo pueden ser las Secretarías de Estado, y los Departamentos Administrativos. En consecuencia, la Procuraduría Federal del Consumidor no es una dependencia de tal Administración, luego entonces, es evidente que carece de facultades para imponer las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en virtud de que esta facultad corresponde a la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, tal y como lo prevé el artículo 23, fracciones XV y XVI de su Reglamento Interior. (20)

Juicio No. 197/03-11-03-9.- Resuelto por la Tercera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de julio de 2003, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Manuel Lucero Espinosa.- Secretaria: Lic. Cinthya Miranda Cruz.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE.- LA ENTIDAD O DEPENDENCIA PÚBLICA A LA QUE PERTENECIÓ EL TRABAJADOR QUE LA RE-

CLAMA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE NULIDAD.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctrina han señalado que la palabra "parte" como término jurídico, es la persona que teniendo intervención en un juicio, ejercita en él una acción, opone una excepción, o interpone un recurso, puesto que lo que caracteriza a las partes es el interés en obtener una sentencia favorable. Ahora bien, el artículo 198, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, señala que es parte en el juicio de nulidad el tercero que tiene un derecho incompatible con la pretensión del demandante; pues en efecto, el tercero interesado es quien resulta beneficiado con el acto que el actor impugna en el juicio de nulidad, y tiene por tanto, interés en que tal acto subsista y no sea destruido por la sentencia que en el juicio de nulidad se pronuncie. Por ello, debe ser llamado a juicio, a fin de tener la oportunidad de probar y alegar en su favor, haciendo causa común con la demandada. Luego entonces, la entidad o dependencia pública a la que perteneció la persona que reclama una pensión ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no debe ser considerado como tercero interesado en el juicio, ya que no tiene un derecho incompatible con la pretensión de la actora. Ello es así, ya que en términos de los artículos 4, 6, 16, 22, 49 y 53 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dicha entidad o dependencia únicamente tiene la calidad de retenedor de cuotas y aportaciones de seguridad social. Por consiguiente, la sentencia que se dicte en el presente juicio en nada beneficia o perjudica al mismo. En consecuencia, no puede llamarse como tercero interesado a la entidad o dependencia a la que perteneció el reclamante, puesto que el debido o indebido pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social, nada tienen que ver con la pretensión del actor, sobre la que debe resolver la sentencia definitiva dictada en el juicio. (21)

Juicio No. 261/03-11-03-5.- Resuelto por la Tercera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 5 de enero de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Rosa María Corripio Moreno.- Secretario: Lic. Miguel Ángel González Bárcenas.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES.- EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2001, LIMITA EL PAGO DE INTERESES A LAS CANTIDADES DEVUELTAS POR PAGO DE LO INDEBIDO Y NO POR SALDO A FAVOR.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha diferenciado el pago de lo indebido y el saldo a favor, señalando que las cantidades pagadas indebidamente "son aquellas que el sujeto pasivo o un tercero entera al fisco sin estar obligado a ello, y que generalmente se derivan por un error aritmético en el cálculo de la contribución o por una incorrecta interpretación y aplicación de la norma fiscal"; asimismo respecto a la devolución del saldo a favor ha señalado que "ésta se genera normalmente por los efectos que provoca el acreditamiento y la traslación de ciertas contribuciones, como el impuesto al valor agregado". En ese sentido el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2001, distingue claramente los conceptos de pago de lo indebido y saldo a favor, pues limita el pago de intereses que deben pagarse cuando la autoridad fiscal autoriza la solicitud de devolución fuera de los plazos previstos en el párrafo tercero del mismo, sólo a las solicitudes que se presenten de pago de lo indebido. Ahora bien, el séptimo párrafo, del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, dispone que respecto a las solicitudes de devolución de saldo a favor y pago de lo indebido las autoridades están obligadas a pagar la devolución que proceda actualizada conforme al artículo 17-A del mismo Ordenamiento legal, así también señala expresamente que se deberán pagar los intereses, pero sólo en caso de que proceda una devolución de pago de lo indebido y ésta sea autorizada fuera del plazo señalado para ese efecto. En ese sentido, del precepto de referencia no se advierte la obligación de la autoridad fiscal de pagar intereses en tratándose de devolución fuera de tiempo de saldo a favor; ya que si la voluntad del legislador federal hubiera sido que una vez transcurrido el término para resolver sobre la solicitud de devolución del saldo a favor procediera el pago de intereses a favor del contribuyente, así lo hubiera señalado claramente. Luego entonces, si el precepto de referencia no establece consecuencia legal alguna por la falta de emisión de resolución en el plazo previsto por la

ley, no es procedente establecer o presumir consecuencias no previstas como lo es el pago de intereses respecto a una solicitud de devolución de saldo a favor. (22)

Juicio No. 3020/03-11-03-5.- Resuelto por la Tercera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de mayo de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Rosa María Corripio Moreno.- Secretario: Lic. Miguel Ángel González Bárcenas.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO EN CONTRA DE LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE RELACIONES LABORALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. NO ES OBLIGATORIO SU AGOTAMIENTO POR ESTAR DEROGADO.- Realizando una interpretación armónica de los artículos 1°, 2°, 83, Primero y Segundo Transitorios del 2000 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, vigente a partir del 31 de mayo de 2000, se puede concluir que el recurso de inconformidad previsto en el artículo 31 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya no es obligatorio en su interposición, tal y como se establecía en dicho precepto. Lo anterior es así, en virtud de que, en términos del artículo 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esta Ley será aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones dictadas, tanto por la Administración Pública centralizada, como descentralizada, por lo que, al ser el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado un organismo descentralizado, de conformidad con el artículo 4° de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también le son aplicables dichas reglas, por ser esta Ley de aplicación supletoria a las diversas leyes administrativas, de cuya naturaleza participa la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acorde a lo preceptuado por el artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Es fundamental para lo anterior, precisar que el Artículo Segundo Transitorio del 2000, establece que se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el Decreto publicado el 30 de mayo del 2000, en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y que señala expresamente que los recursos administrativos en trámite ante organismos descentralizados a la entrada en vigor de dicho Decreto, se resolverán conforme a la ley de la materia; en este tenor, si se impugna alguna resolución emitida por la Subdirección Jurídica y de Relaciones Laborales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en fecha posterior al 30 de mayo del 2000, es inconcuso que la interposición del recurso de inconformidad previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es de naturaleza optativa, puesto que así lo previene el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mismo que dispone que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas, en la especie, Subdirección Jurídica y de Relaciones Laborales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que ponga fin a un procedimiento, a una instancia o resuelvan un expediente, pueden interponer el recurso de revisión o intentar la vía jurisdiccional correspondiente, ya que al redactarse en el texto de dicho precepto la conjunción disyuntiva “o”, da entonces la posibilidad a la parte afectada por dichas resoluciones y actos, para que a su elección, promuevan el recurso de revisión previsto en dicha Ley, o en su caso, la vía jurisdiccional que corresponda, superándose el criterio relativo a la obligatoriedad de la interposición del ejercicio del recurso de inconformidad, puesto que el Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no lo contempla de esta manera. (23)

Juicio No. 2157/02-11-03-9.- Resuelto por la Tercera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de mayo de 2004, por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Instructor: Manuel Lucero Espinosa.- Secretaria: Lic. Cinthya Miranda Cruz.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ESTUDIO DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. RESULTA PROCEDENTE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 208-BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AUN CUANDO LA PETICIONARIA LE DESIGNE CON OTRO NOMBRE, O BIEN, CITE UN PRECEP TO LEGAL DISTINTO.- Atendiendo al principio de informalidad a favor del administrado, el cual implica la ausencia de formalismos no esenciales que retardan la impartición de justicia, los escritos de los particulares no deben de sujetarse a tecnicismos rigoristas, sino que basta con que en ellos se exprese claramente la "causa de pedir" por lo que si resulta claro que lo que pretende la impetrante es la suspensión de la ejecución del acto impugnado, debe atenderse su solicitud en los términos del artículo 208 Bis del Código Fiscal de la Federación, aun cuando en su solicitud la denomine con otro nombre o bien no invoque dicho precepto legal. El mismo criterio ha sido recogido en diversas tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se sostiene que por lo que se refiere a formulismos y exigencias de expresión, han sido atenuados en la legislación y la jurisprudencia, y se ha procurado no sólo simplificarlos, sino lograr la mayor facilidad para que juicios y recursos se tramiten con eficacia y rapidez, así, se ha sentado jurisprudencia a través de la tesis I.8o.C. J/16, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Abril de 2003, página 881, en sentido de que la acción procede aunque no se exprese su nombre, por lo que en materia contenciosa administrativa, debe considerarse que con independencia de la denominación que el gobernado dé a la acción ejercitada, corresponde a la Sala del conocimiento establecer cuál es realmente la pretensión deducida, de manera que si del escrito inicial se advierte que se señalan con claridad la causa de pedir, es a la naturaleza de la pretensión a la que debe atenderse y no al nombre o a las disposiciones legales invocadas por la solicitante, lo cual es congruente con la disposición contenida en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, que faculta a las Salas para suplir la deficiencia de la queja en cuanto la mención del precepto legal aplicable, corrigiendo errores que se adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, por lo

tanto, el mismo principio debe aplicarse cuando se advierta que el particular solicita la suspensión de la ejecución del acto combatido, aunque la llame con otro nombre o cite un precepto legal equivocado, pues ello no cambia la naturaleza o esencia de la pretensión. (24)

Juicio No. 4618/04-11-03-3.- Resuelto por la Tercera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de junio de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Manuel Lucero Espinosa.- Secretaria: Lic. Rebeca Vélez Sahagún.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO REPITEN CONCEPTOS DE ANULACIÓN QUE SE HICIERON VALER EN DIVERSO JUICIO CUYO FALLO CONSTITUYE COSA JUZGADA.- Tratándose de resoluciones que cumplimentan una sentencia dictada por este Tribunal, en la que se declaró la nulidad de la resolución combatida para determinados efectos, considerando algunos agravios fundados y otros infundados, la parte demandante no podrá hacer valer de nueva cuenta los mismos conceptos de impugnación, en virtud de que éstos se configuran en cosa juzgada siempre y cuando haya causado ejecutoria la sentencia que se cumplimenta a través del acto combatido, en términos del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia contencioso administrativa, toda vez que de conformidad con el artículo 354 del citado Ordenamiento la cosa juzgada constituye la verdad legal contra la cual no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, por lo tanto, las partes deben estarse a lo determinado en el fallo que se cumplimenta sin que puedan someter a estudio de nueva cuenta los mismos conceptos de impugnación que ya han sido estudiados. (25)

Juicio No. 2781/03-11-03-6.- Resuelto por la Tercera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de junio de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Manuel Lucero Espinosa.- Secretaria: Lic. Rebeca Vélez Sahagún.

SALA REGIONAL DEL GOLFO

REGLAMENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- PARA DAR OPORTUNIDAD DE SU AMPLIACIÓN CUANDO SE CONTROVIERTE POR EL RECURRENTE LA LEGALIDAD DEL CRÉDITO FISCAL Y DE SU NOTIFICACIÓN, EN EL CASO EN QUE AFIRME DESCONOCERLOS, DICHOS ACTOS DEBEN NOTIFICARSE DEBIDAMENTE.- De conformidad con el artículo 12, fracción II del Reglamento del Recurso de Inconformidad, cuando se alegue que un acto definitivo no fue notificado o que se hizo la notificación en forma ilegal, en el caso de que el recurrente niegue conocer el acto, deberá manifestarlo así en su escrito de inconformidad; y en ese supuesto, la autoridad tramitadora del recurso dará a conocer al inconforme el acto junto con la notificación que del mismo se hubiere practicado, en el domicilio indicado en el escrito de inconformidad y a la persona autorizada para tal efecto. También se establece en el referido precepto que el recurrente gozará de un plazo de quince días, a partir del siguiente al que se le haya dado a conocer, para ampliar el recurso, impugnando el acto y su notificación o sólo la notificación. En ese sentido, la autoridad, para demostrar que dio cumplimiento al numeral en comento, debe acreditar de manera fehaciente que el acto que el recurrente afirmó desconocer así como sus constancias de notificación le fueron dados a conocer cumpliéndose para tal efecto con las formalidades previstas para las notificaciones personales, pues de lo contrario, se dejaría al recurrente en estado de indefensión, dado que no estaría en aptitud de ampliar su recurso, en contravención del artículo 12, fracción II del Reglamento del Recurso de Inconformidad, y con violación a la garantía de audiencia dispuesta por el artículo 14 Constitucional. Resulta importante señalar que la exigencia antes apuntada cobra relevancia si se considera que de no ampliarse el recurso administrativo de inconformidad, la autoridad declarará improcedente ese medio de defensa, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 13 del invocado Reglamento del Recurso de Inconformidad. (26)

Juicio No. 2105/03-13-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de mayo de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Teresa de Jesús Islas Acosta.- Secretario: Lic. Oscar Daniel Lara Balderas.

SALA REGIONAL DEL SURESTE

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

REVISIÓN DE DICTÁMENES FINANCIEROS.- LA AUTORIDAD FISCAL ESTÁ OBLIGADA A OBSERVAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA SU REVISIÓN.- Si bien es cierto que conforme al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación las autoridades fiscales podrán ejercer las facultades a que se refiere dicho precepto legal en forma conjunta, indistinta o sucesivamente, debe tomarse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del mismo Ordenamiento legal, los hechos afirmados en los dictámenes se presumen ciertos y la revisión de estos dictámenes y demás documentos relativos a los mismos se podrá efectuar en forma previa o simultánea al ejercicio de las otras facultades de comprobación; por lo tanto, si las autoridades fiscales pretenden revisar el dictamen presentado por un contribuyente, se encuentran obligadas a observar lo dispuesto en el segundo de los citados preceptos legales, pues es este último el que contempla en forma específica su revisión; es decir, las autoridades deben revisar en forma previa o simultánea los dictámenes financieros, con las restantes facultades que contempla el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues al ser el artículo 52 del mismo Ordenamiento legal el específico, debe predominar sobre el genérico. (27)

Juicio No. 2195/02-15-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de febrero de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Marina Zaragoza Reyes.- Secretario: Lic. Juan Alberto Canseco Pérez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.- PROCEDE CUANDO NO SE CONFIGURA LA NEGATIVA FICTA, POR ATRIBUIRSE A UNA AUTORIDAD

INCOMPETENTE PARA RESOLVER EL RECURSO ADMINISTRATIVO.- Cuando se promueva un recurso administrativo de revisión ante la autoridad que emitió el acto recurrido, no es válido atribuir a esta autoridad la negativa ficta recaída a dicho recurso, pues de conformidad con el artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el recurso de revisión, deberá ser resuelto por el superior jerárquico; luego entonces, resulta procedente decretar el sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 203, fracción II del Código Fiscal de la Federación, al surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 202 del citado Código Fiscal de la Federación. (28)

Juicio No. 1440/01-15-01-7.- Resuelto por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de febrero de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Marina Zaragoza Reyes.- Secretario: Lic. Gerardo Martín Cruz Morales.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN.- PROCEDE CONFIRMAR EL AUTO POR EL QUE SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE NULIDAD, CUANDO ÉSTA SE PROMUEVE EN LA VÍA DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.- Si con fundamento en los artículos 202, fracción II del Código Fiscal de la Federación y 36, fracción I de la Ley Orgánica de este Tribunal se desecha por notoriamente improcedente la demanda interpuesta, resulta procedente confirmar dicho auto, ya que la demanda se promueve en vía de jurisdicción voluntaria en la que se consigna un cheque con el que se pretende realizar el pago de impuestos federales, toda vez que la consignación no cuadra en ninguno de la supuestos establecidos en el artículo 11 de la Ley Orgánica de este H. Tribunal; además, de que dicha consignación resulta contraria al procedimiento que en tratándose de pago de impuestos federales establece el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 6°, 145, 151 y 152. (29)

Juicio No. 1546/03-15-01-4.- Resuelto por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de marzo de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Marina Zaragoza Reyes.- Secretaria: Lic. Sirenia Argüelles Marcial.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RECURSO DE REVOCACIÓN.- PROCEDE CONFIRMAR SU DESECHAMIENTO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO SE INTERPONE EN CONTRA DE UN CRÉDITO FISCAL, SI ÉSTE YA HA SIDO COMBATIDO EN UN JUICIO DE NULIDAD, AUN CUANDO SEA INTERPUESTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- En términos del artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, resulta notoriamente improcedente el recurso de revocación interpuesto en términos de la fracción II del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, si el crédito fiscal recurrido ya ha sido impugnado en un juicio de nulidad y el cual se resolvió y quedó firme al haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal demandada; de donde en el caso, estos motivos en que se basó la demandada para desechar por improcedente el recurso de revocación intentado, resultan correctos, pues el medio de defensa intentado resultaba notoriamente improcedente, por lo tanto, la resolución de que se trata se encuentra emitida conforme a derecho. (30)

Juicio No. 1422/02-15-01-4.- Resuelto por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de abril de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Marina Zaragoza Reyes.- Secretaria: Lic. Sirenia Argüelles Marcial.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

RECURSO DE REVOCACIÓN.- RESULTA LEGAL SU DESECHAMIENTO, CUANDO ÉSTE ES INTERPUESTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI EN EL CASO SE DIO CABAL CUMPLIMIENTO CON EL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN EL MISMO.- Si el recurso de revocación es interpuesto en contra de un acto en términos del artículo 129, fracción II del Código Fiscal de la Federación, y la autoridad administrativa, siguiendo con el procedimiento que al efecto señala tal artículo, le da a conocer el acto combatido junto con sus constancias de notificación, y como consecuencia, el recurrente amplía su escrito del recurso en cuestión, haciendo valer argumentos en contra de la notificación del acto recurrido y del análisis que de los mismos realiza la autoridad, resuelve que la notificación de dicho acto es legal y que por lo tanto el mismo es un acto consentido, pues no se promovió el recurso dentro del término legal que señala el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación; resulta legal que la autoridad lo deseche por improcedente en términos del artículo 124, fracción IV del Ordenamiento legal en cita; procediendo confirmar la validez, pues la legalidad de la notificación del acto recurrido es acreditada por la demandada al contestar la demanda de nulidad. (31)

Juicio No. 1021/03-15-01-4.- Resuelto por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de abril de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Marina Zaragoza Reyes.- Secretaria: Lic. Sirenia Argüelles Marcial.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES.- LA AUTORIDAD DEBE RESPETAR EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGEN-

TE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2001.- El artículo 50 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del 1 de enero de 2001, en sus párrafos primero y último establece que "las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente, dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de este Código. Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o revisión de que se trate"; luego entonces, si el precepto legal en cita establece expresamente la sanción que corresponde si la autoridad no observa el plazo previsto en el mismo, y en el juicio contencioso se demuestra la violación a lo dispuesto en dicho precepto legal, en virtud de que la resolución fue emitida fuera del plazo de seis meses a que se ha hecho referencia, procede declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al demostrarse que se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas, en los términos del artículo 238, fracción IV del Código Fiscal de la Federación. (32)

Juicio No. 1473/03-15-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de abril de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Marina Zaragoza Reyes.- Secretario: Lic. Juan Alberto Canseco Pérez.

SALA REGIONAL DEL CARIBE

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA QUE OTORGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 208-BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE ESTIMARSE FUNDADA SI LA AUTORIDAD REALIZA ACTOS EN VIOLACIÓN A AQUÉLLA, NO OBSTANTE QUE NO TENGA CONOCIMIENTO EN VÍA DE NOTIFICACIÓN DE LA INTERLOCUTORIA QUE CONCEDE DICHA SUSPENSIÓN.- Si en el juicio fiscal, el demandante promueve instancia de queja en términos del artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, por considerar que hubo incumplimiento a la sentencia interlocutoria que hubiera otorgado la suspensión definitiva conforme al artículo 208-Bis del citado Código; y por su parte, la autoridad a la que se le imputa dicho incumplimiento, al rendir el informe que le corresponde, manifiesta que no existe tal imputación, aduciendo que a la fecha en que se ejecutaron los actos en violación a la suspensión, no tenía conocimiento de la interlocutoria de que se trata, por falta de notificación; en tales circunstancias, debe estimarse fundada la queja promovida por el actor, no obstante el desconocimiento alegado por la autoridad, puesto que, acorde a lo establecido por el artículo 139 de la Ley de Amparo, aplicado analógicamente a la figura de la suspensión regulada por el Código Fiscal de la Federación, conforme al artículo 5o. segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, la suspensión surte sus efectos desde luego, es decir, de manera inmediata, y no con su notificación; sin embargo, debe destacarse el hecho de que, si bien, es cierto que en términos de lo dispuesto por los párrafos cuarto y quinto, de la fracción VII, del artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, si la Sala resuelve que hubo incumplimiento de la suspensión otorgada, lo procedente sería declarar la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión; notificar la resolución recaída a la queja al superior del funcionario responsable, para que proceda jerárquicamente; y, finalmente, imponer al funcionario responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de quince días

de su salario, sin exceder el equivalente al cuarenta y cinco días del mismo; empero, lo único procedente en estos casos es declarar la nulidad de las actuaciones posteriores en violación a la suspensión y, ordenar a la autoridad que haya incumplido la orden de suspensión, a mantener las cosas al estado que tenían cuando se concedió la suspensión definitiva; sin que resulte procedente notificar la resolución recaída a la instancia de queja, al superior de la autoridad de referencia y mucho menos imponerle multa, pues el desconocimiento de la medida cautelar, en estricta justicia, lo exime de responsabilidad por el incumplimiento de dicha medida. (33)

Juicio No. 1505/03-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de febrero de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Yolanda Molina Raygoza.- Secretario: Lic. Marco Aurelio Núñez Cué.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

SUSPENSIÓN DEFINITIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 208 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PARA DETERMINAR EL MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SURTE SUS EFECTOS, DEBE ACUDIRSE A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO.- Teniendo en cuenta que en el Código Fiscal de la Federación vigente, por lo que hace a la figura de la suspensión dentro del procedimiento contencioso administrativo, nada se prevé respecto al momento en que surte sus efectos dicha medida cautelar; por tanto, ante tal situación, es procedente, viable y oportuno, aplicar por analogía los preceptos que regulan la suspensión en materia de amparo, específicamente, el artículo 139 de dicha Ley, a fin de determinar el momento a partir del cual surte efectos la suspensión de que se trata; ello, siempre y cuando, tales dispositivos, no contravengan la naturaleza del contencioso administrativo; lo anterior, tomando como base, que la figura de la suspensión es de carácter procesal, y por ello al tratarse de normas adjetivas es posible su aplicación por analogía, conforme al artículo 5°, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación; tal aplicación debe ser así,

máxime, si tenemos presente que en la exposición de motivos de la Iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contenida en el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales para el año 2001, la intención del legislador al adicionar al Código Fiscal de la Federación, el artículo 208 bis, fue proponer un nuevo capítulo sobre medidas cautelares, buscando, por una parte, dotar a dicho Tribunal de facultades que permitan que las medidas propuestas llenen el requisito de la Ley de Amparo de ser por lo menos equivalentes a las previstas para el juicio de garantías y por la otra, inspirarse en la Ley citada para proteger adecuadamente a los demandantes. (34)

Juicio No. 1505/03-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de febrero de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Yolanda Molina Raygoza.- Secretario: Lic. Marco Aurelio Núñez Cué.

CUARTA PARTE

ACUERDOS GENERALES

NOTA: La jurisprudencia No. V-J-SS-44 será publicada posteriormente en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/9/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-35

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 261 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, y al resolverse la contradicción de sentencias No. 15157/01-17-04-1/y otros/663/02-PL-11-01, el 30 enero de 2004, por unanimidad, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, con un quórum de once magistrados fija la jurisprudencia No. V-J-SS-35, bajo el siguiente rubro y texto:

VISITAS DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE GAS L.P.- ES COMPETENTE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR TRATÁNDOSE DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS.- De una interpretación armónica de los artículos 91 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 2°, 12 Bis y 2° Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía adicionado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 1995, y 3°, 20 y 24, fracción XIV, de la Ley Federal de Protección al Consumidor se debe colegir que la Procuraduría Federal del Consumidor se encuentra facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de normas oficiales mexicanas y distribución de gas licuado de petróleo en actividades comerciales y de servicio, quedando reservadas las cuestiones técnicas y de seguridad a la Secretaría de Energía por conducto de la Dirección General de Gas, pues dicha reforma expresamente señala que corresponde a tal Secretaría la atribución de supervisar la correcta aplicación de las normas oficiales mexicanas en cuanto al almacenamiento, transporte y distribución de gas licuado de petróleo, incluso las que se conferían a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el

Reglamento de Distribución de Gas Licuado de Petróleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1993.

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aprobó el texto de la jurisprudencia en sesión del día dieciocho de junio de dos mil cuatro, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/10/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-36

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 261 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, y al resolverse la contradicción de sentencias No. 12381/01-17-04-4/y otros/662/02-PL-11-01, el 30 enero de 2004, por mayoría de 6 votos a favor y 5 en contra, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, con un quórum de once magistrados fija la jurisprudencia No. V-J-SS-36, bajo el siguiente rubro y texto:

> **REQUERIMIENTO DE PAGO Y ACTAS DE EMBARGO.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR.-** En atención a lo dispuesto por los artículos 16 constitucional y 38 del Código Fiscal de la Federación, los actos de autoridad deben ser emitidos por autoridad competente y estar debidamente fundados y motivados; por tanto los requerimientos de pago y actas de embargo deben observar tales características, por ser actos de autoridad y de molestia para el particular. Ahora bien, si en algunas de sus partes los documentos a diferencia del total del texto se llenaron con letra manuscrita, indicando a quién se dirige, la designación del ejecutor y el lugar en que ha de practicarse la diligencia, ese hecho constituye un indicio de que dichos actos no se elaboraron por la autoridad que los suscribe, por lo que tal indicio debe ser desvirtuado por la demandada ofreciendo las pruebas idóneas para ello.

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aprobó el texto de la jurisprudencia en sesión del día treinta de junio de dos mil cuatro, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/11/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-37

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 261 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, y al resolverse la contradicción de sentencias No. 613/02-15-01-6/y otro/463/03-PL-11-01, el 2 de febrero de 2004, por mayoría de 9 votos a favor y 2 en contra, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, con un quórum de once magistrados fija la jurisprudencia No. V-J-SS-37, bajo el siguiente rubro y texto:

CANCELACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES POR INCOSTEABLES.- NO PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CUANDO LO QUE SE IMPUGNA ES LA RESOLUCIÓN QUE RECAYÓ AL RECURSO RESPECTO DE DICHOS CRÉDITOS.- Si bien es cierto que el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2002, establece como una facultad discrecional de la autoridad fiscal cancelar los créditos cuyo importe al 31 de diciembre del 2001 sea inferior al equivalente en moneda nacional a dos mil quinientas unidades de inversión por resultar incosteable su cobro; también es verdad, que cuando la resolución impugnada la constituye la resolución de un recurso de revocación interpuesto en contra de esos créditos, aquella situación no puede servir de motivación para decretar el sobreseimiento del juicio en términos del artículo 202, fracción I del Código Fiscal de la Federación, pues la materia del juicio contencioso se constituye por la resolución dictada en el recurso administrativo y no el crédito recurrido cancelado, pues aun cuando de conformidad con el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, en la demanda se puede combatir el crédito recurrido en la parte que siga afectando al actor, para que tal ilegalidad pueda ser analizada por el juzgador, se requiere en primer término que se haga el pronunciamien-

to respectivo sobre la resolución recaída al recurso y si hay elementos para analizar la recurrida, continuar con su estudio, en atención a lo dispuesto por el artículo 237 penúltimo párrafo del citado Código Fiscal. Por ende, el juzgador debe declarar la nulidad por falta de fundamentación y motivación del acto combatido en el recurso y de la resolución impugnada en el juicio, ya que la citada cancelación del crédito no revoca la resolución materia del juicio contencioso.

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aprobó el texto de la jurisprudencia en sesión del día treinta de junio de dos mil cuatro, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/12/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-38

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 261 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, y al resolverse la contradicción de sentencias No. 2311/01-05-02-1/y otro/152/02-PL-11-01, el 10 de febrero de 2004, por mayoría de 8 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, con un quórum de once magistrados fija la jurisprudencia No. V-J-SS-38, bajo el siguiente rubro y texto:

JEFE DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN Y SERVICIOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PUEDE SUPLIR LAS AUSENCIAS DE LOS DELEGADOS REGIONALES O DE LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PROPIO INSTITUTO.- El artículo 9° del Reglamento Interior del INFONAVIT como organismo fiscal autónomo, faculta a los Delegados Regionales y a los representantes de la Dirección General del INFONAVIT a ejercer dentro de su ámbito territorial las facultades de dicho Instituto para determinar aportaciones omitidas, requerir su pago y ejercer facultades de revisión, entre otras; mientras que el artículo 12 de ese mismo ordenamiento legal permite a esas Delegaciones y representantes ser suplidos en sus ausencias por los Jefes de las Áreas de Fiscalización y de Servicios Jurídicos de cada Entidad Federativa. Por ende, de una interpretación armónica de los artículos 23, fracción I, y 30 de la Ley del INFONAVIT, con los preceptos legales citados de su Reglamento, se llega a la conclusión de que los Jefes del Área de Fiscalización y Servicios Jurídicos son existentes y competentes por lo que pueden actuar válidamente supliendo las ausencias

tanto de los Delegados como de los representantes de la Dirección General del INFONAVIT.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día diez de febrero de dos mil cuatro.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/13/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-39

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 261 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, y al resolverse la contradicción de sentencias No. 402/03-10-01-5/y otros 2/1130/03-PL-04-01, el 13 de febrero de 2004, por mayoría de 8 votos a favor, 2 con los puntos resolutivos y 1 en contra, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, con un quórum de once magistrados fija la jurisprudencia No. V-J-SS-39, bajo el siguiente rubro y texto:

> **RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PLAZO PARA INTERPONERLO, TRATÁNDOSE DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.-** El término de cuarenta y cinco días previsto por el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación para interponer el recurso de revocación establecido en el artículo 116 del propio ordenamiento, no rige en los casos en que dicho medio de impugnación se haga valer en contra de actos del procedimiento administrativo de ejecución (mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, acta de embargo, etc.) por no haberse ajustado a la ley y se trata de violaciones cometidas antes del remate; ya que en esa hipótesis debe aplicarse la diversa modalidad contenida en el numeral 127 del mismo cuerpo legal, consistente en que el afectado puede interponer el medio de defensa en cualquier tiempo, antes de la publicación de la convocatoria en primera almoneda, con la salvedad que el mismo dispositivo determina.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día trece de febrero de dos mil cuatro.- Firman

la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/14/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-40

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, al haberse resuelto en el mismo sentido y por votación de por lo menos siete votos a favor, los incidentes de incompetencia 490/01-16-01-7/5898/01-17-05-7/526/01-PL-02-02, 187/01-10-01-2/2864/01-17-05-1/464/01-PL-04-02, 18045/02-17-10-4/2964/02-16-01-5/367/03-PL-07-02 y 14323/02-17-01-5/3579/02-07-01-6/189/02-PL-06-02, se fija la jurisprudencia No. V-J-SS-40, del Pleno de la Sala Superior, con el siguiente rubro y texto:

> **COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES.- CUANDO LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SEA UNA NEGATIVA FICTA, DEBE ESTARSE A LA SEDE DE LA AUTORIDAD QUE ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA INSTANCIA.-** De una interpretación sistemática de los artículos 207 del Código Fiscal de la Federación y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se desprende que la competencia por razón del territorio para conocer de una demanda, se determina atendiendo al lugar en que tenga su sede la autoridad que emitió la resolución combatida. Ahora bien, frente a la ausencia de resolución expresa por impugnarse una negativa ficta, será competente para conocer del juicio, la Sala dentro de cuya circunscripción territorial radique la autoridad facultada para resolver la instancia correspondiente.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día dieciséis de febrero de dos mil cuatro.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/15/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-41

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, al haberse resuelto en el mismo sentido y por votación de por lo menos siete votos a favor, los incidentes de incompetencia 29/99-07-01-1/94/01-PL-04-02, 1381/96-12-01-1/1072/02-PL-06-02 y 18045/02-17-10-4/2964/02-16-01-5/367/03-PL-07-02**,** se fija la jurisprudencia No. V-J-SS-41, del Pleno de la Sala Superior, con el siguiente rubro y texto:

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL.- DEBE RESOLVERSE CON BASE EN LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- La competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de un juicio, debe ser analizada a la luz de las disposiciones legales vigentes en la fecha en que se presentó la demanda, toda vez que es en este momento cuando las Salas pueden declararse legalmente incompetentes para conocer del asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 218 del Código Fiscal de la Federación; motivo por el cual no es pertinente estimar fundado un incidente de incompetencia territorial, apoyado en que con posterioridad, es decir, durante la substanciación del juicio, cambie o se modifique la competencia territorial de una Sala Regional, en razón a que, se reitera, debe atenderse a la competencia que se tenga al momento de la presentación de la demanda, pues de aceptarse el criterio contrario, durante la tramitación del juicio se podrían presentar incidentes de incompetencia, tantas veces como se cambiara la circunscripción territorial de una Sala.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día dieciséis de febrero de dos mil cuatro.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/16/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-42

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 261 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, y al resolverse la contradicción de sentencias No. 1581/98-07-03-7/y otro/636/03-PL-05-01, el 18 de febrero de 2004, por mayoría de 9 votos a favor y 2 en contra, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, con un quórum de once magistrados fija la jurisprudencia No. V-J-SS-42, bajo el siguiente rubro y texto:

CONTRALORÍA INTERNA EN LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO QUE FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARAESTATAL.- SON COMPETENTES PARA CONOCER, TRAMITAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- De una debida correlación entre lo dispuesto por los artículos 108, 109, fracción III, y 113 constitucionales; artículos 1º y 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículos 14 y 62 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; artículos 1º, 2º, 3º, fracciones II y III, 48, 49, 53, 54, 56, fracción VI, 57, 58, 59, 60, 64, 65, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reformadas por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, en vigor a partir del 1º de enero de 1997, se advierte que los Contralores Internos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, son órganos de autoridad que gozan de competencia para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, determinar si existe o no responsabilidad de los servidores públicos por el incumplimiento de sus obli-

gaciones e imponer las sanciones previstas en la Ley de la materia, en el ámbito de las citadas dependencias o entidades. Lo anterior encuentra su razón de ser en atención a que el legislador a través de las reformas citadas, creó un mecanismo novedoso de organización administrativa en virtud del cual se efectúa el control interno de la aplicación de la ley en las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, en forma desconcentrada, pero manteniendo subordinados jerárquica y funcionalmente a los titulares de las referidas contralorías al órgano central, esto es, a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. En mérito de lo anterior, es de concluirse que por lo que se refiere específicamente a las Contralorías Internas en sociedades nacionales de crédito que forman parte de la Administración Pública Federal Paraestatal, cuentan con plena competencia para los efectos precisados, con particular apoyo en lo dispuesto por los artículos 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 62 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 57 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, antes citados. Sin que obste a lo anterior que de conformidad con el artículo 4°, fracción XXVII, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es facultad de esta Comisión, aplicar a los servidores públicos de las instituciones de banca de desarrollo, las disposiciones y las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que correspondan a las Contralorías Internas, pues en primer lugar la aplicación de la citada ley específica sólo queda sujeta en cuanto a la constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación de dichas entidades paraestatales, no así a las relaciones con el Ejecutivo Federal y sus dependencia, pues en este aspecto rigen las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, dentro de las cuales se encuentra en artículo 62, que en relación con las diversas disposiciones de la propia Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece la competencia de los órganos de control en cada entidad paraestatal; además, que el propio artículo 4º mencionado, expresamente señala que la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por parte de la Comisión y de las sanciones que impongan las contralorías internas, es sin perjuicio de

las que en términos de la propia Ley Federal de Responsabilidades competa aplicar a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública).

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día dieciocho de febrero de dos mil cuatro, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/17/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-43

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 261 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, y al resolverse la contradicción de sentencias No. 3077/01-07-02-6/y otros/660/02-PL-08-01, el 25 de febrero de 2004, por mayoría de 7 votos a favor y 4 en contra, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, con un quórum de once magistrados fija la jurisprudencia No. V-J-SS-43, bajo el siguiente rubro y texto:

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS POR UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE ELLOS.- De conformidad con el artículo 11, fracciones VII, XIII y XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a partir del 1° de enero de 2001, este Tribunal sólo es competente para resolver sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y no de las Entidades Federativas, ya que no se establece la competencia expresa a que se refiere la fracción XV del artículo 11 de la Ley Orgánica de este Tribunal y, por ello debe entenderse que este Tribunal no es competente para resolver sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública celebrados por un organismo descentralizado estatal, ya que los mismos al no formar parte de la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal, no son sujetos de la competencia material de este Tribunal.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día veinticinco de febrero de dos mil cuatro.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/21/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-45

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 261 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, y al resolverse la contradicción de sentencias No. 4725/01-17-03-1/666/01-PL-02-04/y otro/987/03-PL-07-01, el 12 de marzo de 2004, por mayoría de 7 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, con un quórum de diez magistrados fija la jurisprudencia V-J-SS-45, bajo el siguiente rubro y texto:

CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- ES APLICABLE A LAS LEYES ADMINISTRATIVAS QUE NO ESTÉN EXCLUIDAS CON LA LEY ANTES CITADA.- El artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece en la parte conducente que las disposiciones de esa Ley se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada, así como a los organismos descentralizados de dicha administración respecto de los actos ahí citados. Señala dicho dispositivo que este Ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. Por su parte, el artículo 2º de dicha Ley previene que esa Ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente a las demás leyes administrativas. De lo anterior se desprende que todas las materias que no sean relativas a las de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, le es aplicable lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que en los procedimientos administrativos realizados con base

en la Ley General de Salud, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente u otras leyes administrativas, se configura el supuesto de aplicación señalado en el artículo 2º aludido, de tal manera que aunque en las mencionadas leyes no se contemple el supuesto de caducidad de los procedimientos administrativos, es aplicable el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por disposición expresa de esta última Ley.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día doce de marzo de dos mil cuatro.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/23/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-46

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, al haberse resuelto en el mismo sentido y por votación de por lo menos siete votos a favor, los juicios contencioso administrativos 11487/01-17-09-6/264/02-PL-04-04, 12913/01-17-01-8/305/02-PL-03-04 y 12914/01-17-09-7/414/02-PL-05-04, se fija la jurisprudencia No. V-J-SS-46, bajo el siguiente rubro y texto:

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS QUE PROVIENEN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- DEBE PAGARSE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, DIRECTAMENTE ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS, Y NO ENTREGARSE A LA CONTROLADORA.- De la interpretación armónica de los artículos 10; 10-A, párrafos tercero y penúltimo párrafo; 57-A, penúltimo párrafo; 57-N, fracción I, y 57-O, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2000; se desprende con toda claridad que el impuesto sobre la renta diferido que debe pagar una sociedad controlada, como consecuencia de la distribución de dividendos realizada en la participación consolidable, debe pagarse ante las oficinas autorizadas y no entregarse a la sociedad controladora. Lo anterior es así por que el artículo 57-O, segundo párrafo, establece que cuando se distribuyan dividendos o utilidades en efectivo o en bienes entre las sociedades que consolidan, el impuesto que se derive de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 10-A (impuesto sobre los dividendos o utilidades que provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida), se pagará en la fecha en que se distribuyan dichos dividendos; y al no establecer ante quien se pagará el mismo, debemos remitirnos a las

reglas generales, por disposición expresa del artículo 57-A, el cual establece en su penúltimo párrafo que las sociedades controladoras y controladas que consoliden estarán a lo dispuesto en las demás disposiciones de la Ley, salvo que expresamente se señale un tratamiento distinto en el capítulo del régimen de consolidación fiscal; por lo que ante la falta de disposición expresa dentro del régimen de consolidación fiscal de donde debe pagarse el impuesto que deriva de la distribución de dividendos que provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, deben aplicarse las reglas generales, esto es el artículo 10-A, el cual en su penúltimo párrafo señala que el impuesto sobre los dividendos o utilidades que provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida tendrá el carácter de pago definitivo y se enterará ante las oficinas autorizadas. Resultando por ende inaplicable el artículo 57-N, fracción I, que establece la obligación de enterar el impuesto del ejercicio a la controladora, por tratarse de supuestos diferentes.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día catorce de abril de dos mil cuatro, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/24/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-47

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, al haberse resuelto en el mismo sentido y por votación de por lo menos siete votos a favor, los juicios contencioso administrativos 15833/01-17-10-5/744/02-PL-04-04, 688/01-09-01-2/795/02-PL-04-04, 2308/99-07-02-6/637/01-PL-06-04 y 1125/02-17-05-4/472/03-PL-04-04, se fija la jurisprudencia No. V-J-SS-47, bajo el siguiente rubro y texto:

> **OBJECIÓN DEL ALCANCE PROBATORIO DE LAS DOCUMENTALES OFRECIDAS EN EL JUICIO DE NULIDAD.- RESULTA IMPROCEDENTE.-** La objeción es un procedimiento a través del cual la contraparte de la oferente ataca la documental exhibida en el proceso alegando y, en su caso, probando que no es auténtica por ser inexacta o falsa, con el fin de lograr que no sea considerada por el Tribunal al momento de valorar las pruebas y dictar la sentencia respectiva; por lo que si la materia de objeción es el alcance probatorio, lo que implica la valoración de las pruebas, no se está ante una objeción propiamente dicha, motivo por el cual, la misma debe estimarse improcedente; máxime que las reglas para la valoración de las pruebas dentro del juicio contencioso administrativo están dadas por el artículo 234 del Código Fiscal de la Federación, dejándolas a la prudente apreciación del juzgador; además de que la objeción no es una figura contemplada en el Código Fiscal de la Federación.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día catorce de abril de dos mil cuatro, ordenán-

dose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/25/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-48

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, al haberse resuelto en el mismo sentido y por votación de por lo menos siete votos a favor, los juicios contencioso administrativos 992/02-17-03-7/294/03-PL-07-04, 1001/02-17-06-9/345/03-PL-07-04 y 994/02-17-05-3/478/03-PL-01-04, se fija la jurisprudencia No. V-J-SS-48, bajo el siguiente rubro y texto:

> **SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.- SE ACTUALIZA CUANDO LA AUTORIDAD DEJA SIN EFECTOS EL ACTO IMPUGNADO.-** El artículo 202, fracción I del Código Fiscal de la Federación, establece que es improcedente el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los casos, por las causales y contra los actos que ahí se indican, entre otros, que no se afecten los intereses jurídicos del demandante. Por su parte, el artículo 203, fracción IV del Código Fiscal de la Federación consigna que procede el sobreseimiento del juicio, si la autoridad demandada deja sin efectos el acto impugnado. Por tanto, si se demanda la nulidad de una multa que fue impuesta por incumplir un requerimiento hecho con base en la Ley Federal de Competencia Económica y la autoridad deja sin efectos dicha multa, lo procedente en el juicio es decretar su sobreseimiento, ya que la multa dejó de afectar los intereses jurídicos del demandante y se actualiza la hipótesis de la fracción IV del artículo 203 del Código aludido.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día catorce de abril de dos mil cuatro, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada

María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/26/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-49

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, al haberse resuelto en el mismo sentido y por votación de por lo menos siete votos a favor, los juicios contencioso administrativos 6114/00-11-11-5/231/02-PL-07-04, 8326/99-11-03-4/276/02-PL-01-04 y 1825/01-11-02-2/174/02-PL-10-04, se fija la jurisprudencia No. V-J-SS-49, bajo el siguiente rubro y texto:

> **SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.- SU TITULAR ES PARTE EN EL JUICIO AL SER ÉSTA SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.** Conforme al artículo 198, fracción III del Código Fiscal de la Federación, son partes en el juicio contencioso administrativo el Titular de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal, Procuraduría General de la República o Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la que dependa la autoridad que dictó la resolución impugnada; en esos términos, resulta evidente que es parte en el juicio el Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando en el juicio de nulidad la emisora del acto impugnado lo sea la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, órgano desconcentrado que depende jerárquicamente de dicha Secretaría.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día catorce de abril de dos mil cuatro, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fis-

cal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/27/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-50

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, al haberse resuelto en el mismo sentido y por votación de por lo menos siete votos a favor, los incidentes de incompetencia 906/01-11-03-1/4983/01-17-05-7/478/01-PL-01-02, 2416/01-12-01-5/671/02-PL-02-02 y 74/01-08-01-1/1134/01-11-03-6/328/01-PL-01-02, se fija la jurisprudencia No. V-J-SS-50, bajo el siguiente rubro y texto:

> **SEDE DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.- SE PRESUME QUE EN ELLA EMITE SUS RESOLUCIONES.-** De conformidad con el artículo 3°, fracción XIII de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que establece dentro de los elementos y requisitos del acto administrativo, el señalamiento del lugar y fecha de su emisión, resulta ajustado a Derecho presumir que la sede de una autoridad se localiza en el lugar en donde fue emitida la resolución que se combate en juicio ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que por regla general, las autoridades emiten sus resoluciones en su sede, motivo por el que si en el texto del acto controvertido aparece la mención del domicilio en donde fue emitida, puede presumirse que en dicho lugar se ubica la sede de la autoridad que la dictó, y con apoyo en tal conclusión determinarse la Sala Regional de este Órgano de impartición de justicia que sea competente por razón de territorio para conocer del juicio respectivo, al tenor del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día catorce de abril de dos mil cuatro, ordenán-

dose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/28/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-51

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, al haberse resuelto en el mismo sentido y por votación de por lo menos siete votos a favor, los juicios contencioso administrativos 10801/01-17-02-1/1080/02-PL-08-04, 19999/01-17-02-6/1101/02-PL-01-04 y 8565/02-17-08-1/269/03-PL-04-04, se fija la jurisprudencia No. V-J-SS-51, bajo el siguiente rubro y texto:

> **NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS EMITIDOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- SURTE SUS EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE REALIZA.-** El artículo 13 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en su penúltimo párrafo, dispone que las notificaciones personales y las que se realicen por correo certificado con acuse de recibo surtirán efectos a partir del día en que sean entregados a los interesados; consecuentemente, el plazo legal de 45 días a que se refiere el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación para la presentación de la demanda, corre a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la resolución impugnada.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día veintitrés de abril de dos mil cuatro, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/29/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-52

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, al haberse resuelto en el mismo sentido y por votación de por lo menos siete votos a favor, el juicio contencioso administrativo 2062/97-02-01-2/99-PL-02-04 y los incidentes de incompetencia 187/01-10-01-2/2864/01-17-05-1/464/01-PL-04-02 y 490/01-16-01-7/5898/01-17-05-7/526/01-PL-02-02, se fija la jurisprudencia No. V-J-SS-52, bajo el siguiente rubro y texto:

> **HECHO NOTORIO.- LO CONSTITUYE PARA LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA UNA SENTENCIA EMITIDA POR ELLA**. La emisión de una sentencia por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, constituye un hecho notorio para los Magistrados que lo integraron e intervinieron en la discusión y votación de la misma en la sesión relativa, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día dieciocho de junio de dos mil cuatro, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/30/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-53

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, al haberse resuelto en el mismo sentido y por votación de por lo menos siete votos a favor, los juicios contencioso administrativos 7791/01-17-01-2/773/02-PL-04-04, 10714/01-17-10-2/355/02-PL-08-04 y 2533/02-17-06-2/1079/02-PL-05-04, se fija la jurisprudencia No. V-J-SS-53, bajo el siguiente rubro y texto:

> **ARGUMENTOS EXPUESTOS EN UN RECURSO DE RECLAMACIÓN Y EN UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- CASO EN EL CUAL NO SE ESTÁ OBLIGADO AL ESTUDIO DE LA CAUSAL.-** Si la autoridad demandada en su contestación de demanda pretende la improcedencia del juicio, atendiendo a argumentos que constituyen una reiteración de los que la propia autoridad planteó en un recurso de reclamación, es obvio que ya no puede existir un pronunciamiento adicional sobre este mismo tema, pues de haberlo, implicaría la posibilidad de que este Tribunal revocara por sí y ante si sus propias resoluciones, lo cual no es jurídicamente posible, por lo tanto, tales argumentos resultan inatendibles.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día siete de julio de dos mil cuatro, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/31/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-54

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, al haberse resuelto en el mismo sentido y por votación de por lo menos siete votos a favor, los incidentes de incompetencia 289/01-03-01-8/453/01-PL-06-02, 854/03-09-01-3/1471/03-10-01-8/1000/03-PL-06-02 y 14959/02-17-11-7/1073/03-PL-06-02, se fija la jurisprudencia No. V-J-SS-54, bajo el siguiente rubro y texto:

COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SE DETERMINA POR LA SEDE DE LA AUTORIDAD SUPLIDA POR AUSENCIA.- De la lectura del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se desprende como norma general a efecto de determinar la competencia territorial de las Salas Regionales de dicho Órgano Jurisdiccional, la de atender al lugar donde se encuentre la sede de la autoridad demandada, disponiéndose al efecto que para el caso de que fueran varias las autoridades demandadas, se atenderá al lugar donde se encuentre la sede del Órgano de Autoridad que dictó la resolución impugnada. En las circunstancias relacionadas, tratándose de la suplencia del Titular de un Órgano de Autoridad en la emisión de la resolución controvertida, como consecuencia de su ausencia, toda vez que la autoridad suplente no actúa a nombre propio, sino en el de la autoridad suplida por ausencia, como lo prevé la Ley para evitar la paralización de la marcha normal de las funciones de la dependencia de que se trate; es lógico y jurídico concluir que quien debe conocer del asunto, es la Sala Regional que tenga competencia territorial en el lugar donde se encuentre la sede de la autoridad suplida, dado que fue ésta

quien emitió la resolución controvertida y no así aquella que tenga competencia territorial en el lugar donde se encuentre la sede de la autoridad suplente, quien no actúa por atribuciones propias.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día siete de julio de dos mil cuatro, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/32/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-55

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, al haberse resuelto en el mismo sentido y por votación de por lo menos siete votos a favor, los juicios contencioso administrativos 407/02-17-02-8/1148/02-PL-08-04, 406/02-17-05-5/1223/02-PL-04-04 y 405/02-17-08-8/280/03-PL-08-04, se fija la jurisprudencia No. V-J-SS-55, bajo el siguiente rubro y texto:

EXTRAÑAMIENTO EMITIDO CON BASE A LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.- LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL RECURSO DE REVISIÓN INTENTADO EN SU CONTRA ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- El artículo 11, fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece que este Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, entre ellas, las dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por lo que si un particular, que es concesionario de radio y televisión demanda ante este Tribunal, la resolución dictada en un recurso de revisión que fue sobreseído por que el acto impugnado en esa instancia constituye un extrañamiento a dicho concesionario, por haber incumplido obligaciones derivadas de la Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento, este Tribunal es competente para conocer de esa resolución que sobresee el recurso de revisión, pues fue dictada por una autoridad administrativa que puso fin a esa instancia.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día siete de julio de dos mil cuatro, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/33/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA No. V-J-SS-56

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como el artículo 13 del Reglamento Interior del mismo, al haberse resuelto en el mismo sentido y por votación de por lo menos siete votos a favor, los juicios contencioso administrativos 6878/01-17-03-8/429/02-PL-07-04, 3868/02-17-10-5/1176/02-PL-01-04, 564/02-17-08-4/20/02-PL-03-04 y 4085/02-17-05-7/26/02-PL-05-04, se fija la jurisprudencia No. V-J-SS-56, bajo el siguiente rubro y texto:

SUBDIRECTORA DIVISIONAL DE PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CARECE DE COMPETENCIA PARA DESECHAR EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- El artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial, establece las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y en su fracción VIII, se contempla aquélla de sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esa Ley que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su Reglamento y demás disposiciones en la materia. Por su parte, el artículo 7° del Acuerdo que delega facultades en los Directores Adjuntos, Coordinadores, Directores Divisionales, Titulares de las oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, establece que son facultades de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial, en el inciso r) llevar a cabo el trámite de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa en materia de propiedad industrial e infracción en materia de comercio, entre otros,

asimismo señala que las facultades referidas del inciso a) al inciso s) se delegan en los Subdirectores Divisionales de Procesos de Propiedad Industrial. En ese sentido, si bien la Ley de la Propiedad Industrial no establece el recurso de revisión, debe estarse a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el que en su artículo 86 dispone en su primer párrafo que el recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del Titular de la dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. Ahora bien, si la resolución impugnada en un juicio la constituye un oficio que desecha el recurso de revisión por improcedente y fue emitido por la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, misma autoridad que resolvió el acto primigenio al que recayó la solicitud administrativa de nulidad de un registro marcario, dicha autoridad ya no resultaba competente para dilucidar dicho acto, sino su superior jerárquico en términos del artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que se actualiza la fracción I, del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, ya que la resolución impugnada fue emitida por autoridad incompetente.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día siete de julio de dos mil cuatro, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA SUPERIOR.- PRIMERA SECCIÓN
ACUERDO G/S1-3/2004

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA V-J-1aS-7

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código Fiscal de la Federación y 20, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y toda vez que se han resuelto en el mismo sentido cinco juicios, se fija la jurisprudencia No. V-J-1aS-7 de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa bajo el siguiente rubro y texto:

IMPORTE BRUTO DE LOS DIVIDENDOS PARA EFECTOS DEL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CELEBRADO POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. NO LO ES LA CANTIDAD QUE SIRVE COMO BASE DEL IMPUESTO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001.- Si por cantidad bruta se entiende, gramatical y contablemente, aquélla que no ha sido afectada, modificada, corregida u objeto de deducción alguna, no puede considerarse jurídicamente que el término “importe bruto de los dividendos” para efecto de la aplicación del Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en materia del Impuesto sobre la Renta celebrado por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 3 de febrero de 1994, lo es la base del impuesto por los dividendos pagados por personas morales mexicanas que prevé el artículo 152, fracciones I y IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues tal base es el resultado de la aplicación de un factor de

1.5385 al monto del dividendo que la sociedad mercantil ordenó distribuir entre sus accionistas, lo que supone una alteración al aumentar en más de un 50%, la cantidad que se ordenó distribuir, y obviamente esta modificación es la que le quita precisamente el carácter de importe bruto de los dividendos. En este contexto, por tal término debe entenderse el monto que la asamblea de accionistas de la empresa de que se trata, ordenó repartir a sus accionistas.

PRECEDENTES:

Juicio No. 18246/02-17-10-4/667/03-S1-03-02.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de agosto de 2003, por unanimidad de 5 votos a favor.- Ponente: Magistrada Alma Peralta Di Gregorio.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia

Juicio No. 8632/02-17-01-8/398/03-S1-01-02.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de septiembre de 2003, por unanimidad de 5 votos a favor.- Ponente: Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Martha Elizabeth Ibarra Navarrete.

Juicio No. 20722/02-17-01-7/726/03-S1-04-02.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de septiembre de 2003, por unanimidad de 5 votos a favor.- Ponente: Magistrado Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Virginia Petriz Herrera

Juicio No. 15127/02-17-01-5/1190/03-SI-01-02.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de marzo de 2004, por unanimidad de 5 votos a favor.- Ponente: Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.

Juicio No. 14172/02-17-03-3/2/04-S1-05-02.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de marzo de 2004, por unanimidad de 5 votos a favor.- Ponente: Magistrado Alejandro Sánchez Hernández.- Secretario: Lic. Andrés E. Sánchez Drasdo y Albuerne.

Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el día veintinueve de junio de dos mil cuatro.- Firman el Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada María del Carmen Cano Palomera, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.

QUINTA PARTE

JURISPRUDENCIAS Y TESIS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

JURISPRUDENCIA

PLENO

NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA.

(P./J. 20/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. Pleno, mayo 2004, p. 5

PRIMERA SALA

PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.- De lo dispuesto en los artículos 6o., 187, 188, 192, 193, 198, 199 bis, 199 bis 5, 217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades, tiene la de sustanciar los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, así como la de formular resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley que cuando las partes interesadas no designen como árbitro al citado instituto para la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, tal como lo permite la fracción IX del artículo 6o. de la ley de la materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para demandar ese pago en los términos de la legislación común, que no es otra sino la legislación civil. Ahora bien, en virtud de que el aludido instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposición de aquella ley especial es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el

procedimiento de declaración respectivo, resulta inconcuso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaración de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello, el Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial deberá ponderar si aquéllos fueron producto directo de la infracción administrativa declarada por el mencionado instituto, pero no podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada infracción, pues ello ya habrá sido declarado en resolución firme por la autoridad administrativa; de ahí que al estar ligada estrechamente con la citada transgresión, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (1a./J. 13/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 1a. Sala, mayo 2004, p. 365

VALOR AGREGADO. PARA QUE PROCEDA LA RECLAMACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO, TRATÁNDOSE DE CRÉDITOS LITIGIOSOS, NO ES NECESARIO QUE LA PARTE ACTORA DEMUESTRE QUE PREVIAMENTE LO ENTERÓ A LA AUTORIDAD FISCAL PARA REPERCUTIRLO CONTRA LA DEMANDADA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o., 17 y 18-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, están obligadas al pago del tributo las personas físicas y morales que en territorio nacional, entre otras actividades, presten servicios independientes, encontrándose facultado el contribuyente para trasladar dicho impuesto a las personas que los reciban, debiéndose pagar el tributo en el momento en que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, salvo cuando se trata de los intereses, en cuyo caso deberá pagarse el impuesto conforme se devenguen éstos, pero cuando se incurra en mora durante un periodo de tres meses consecutivos, el acreedor podrá, a partir del cuarto mes, diferir el impuesto de los intereses devengados hasta el mes en que efectivamente reciba su pago. Por tanto, cuando en un juicio se demanda el pago del impuesto al valor agregado, derivado de la condena al pago de diversas prestaciones que se encuentran gravadas con ese tributo, el actor no tiene que demostrar que previamente lo enteró a las autoridades fiscales para poder repercutirlo contra el de-

mandado; en primer lugar, porque la obligación de enterar el impuesto a las autoridades fiscales surge hasta que recibe el pago de las contraprestaciones por los servicios prestados o de los intereses devengados y, en segundo término, porque el pago del impuesto reclamado en juicio es una prestación accesoria que depende de la procedencia de las prestaciones principales, y si éstas se encuentran controvertidas en juicio, todavía no están plenamente determinadas ni cuantificadas, ya que para ello habrá que esperar el resultado del juicio. (1a./J. 16/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 1a. Sala, mayo 2004, p. 488

SEGUNDA SALA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO, Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE EXPRESEN LOS CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN Y SU FUNDAMENTO LEGAL. (2a./J. 52/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 2a. Sala, mayo 2004, p. 557

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL CORRESPONDIENTE, AL GRAVAR CON LA TASA DEL 20% LA ENAJENACIÓN O IMPORTACIÓN DE LOS BIENES INDICADOS EN SU FRACCIÓN I, INCISOS G) Y H), QUE UTILICEN EDULCORANTES DISTINTOS DEL AZÚCAR DE CAÑA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002). (2a./J. 57/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 2a. Sala, mayo 2004, p. 570

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. ES LA ENAJENACIÓN DE BIENES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, Y NO SU EXPORTACIÓN DEFINITIVA A JURISDICCIONES CONSIDERADAS COMO DE BAJA IMPOSICIÓN FISCAL, LA QUE ESTÁ AFECTA A LA TASA DEL 25%. (2a./J. 63/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 2a. Sala, mayo 2004, p. 588

REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN MATERIA FISCAL. CONTRAVIENE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, CUANDO SE TRATE DE UN MACHOTE IMPRESO CON ESPACIOS EN BLANCO PARA RELLENAR CON LETRA MANUSCRITA, O CUANDO SE ADVIERTA DE MANERA NOTORIA QUE LA IMPRESIÓN DEL NOMBRE DEL PERSONAL ACTUANTE ES POSTERIOR A LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO. (2a./J. 48/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 2a. Sala, mayo 2004, p. 592

VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ES REQUISITO QUE EL CITATORIO PARA ENTREGAR LA ORDEN CORRESPONDIENTE E INICIAR LA DILIGENCIA SE DIRIJA A SU REPRESENTANTE LEGAL, SIN QUE SEA NECESARIO SEÑALAR SU NOMBRE POR CARECER LA AUTORIDAD DE ESE DATO. (2a./J. 54/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 2a. Sala, mayo 2004, p. 615

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

ALEGATOS. CUÁNDO DEBEN SER EXAMINADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.- En términos del artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, los alegatos forman parte de la litis en los procedimientos seguidos ante las Salas del

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, por ende, deben ser examinados en la sentencia definitiva. Sin embargo, a falta de alusión expresa, debe entenderse que el referido numeral se refiere a los alegatos de bien probado, que consisten en aquellos razonamientos que tienden a ponderar las pruebas ofrecidas frente a las de la contraparte, así como los argumentos de la negación de los hechos afirmados o derecho invocado por la contraparte y la impugnación de sus pruebas, que son los únicos aspectos cuya omisión de estudio puede transcender al resultado de la sentencia y dejar en estado de indefensión a la parte alegante. (I.7o.A. J/19)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 7o. T.C. del 1er. C., mayo 2004, p. 1473

TESIS

PLENO

JURISPRUDENCIA. ALCANCES DE LA FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA MODIFICARLA.
(P. XIII/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. Pleno, mayo 2004, p. 142

SENTENCIAS DE AMPARO. PARA EFECTOS DE SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO, EL VALOR COMERCIAL DE UN TERRENO EN LA ÉPOCA EN QUE DEBIÓ DECRETARSE SU DEVOLUCIÓN, DEBE INCLUIR EL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (P. XXIII/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. Pleno, mayo 2004, p. 151

PRIMERA SALA

ACCESO A LA JUSTICIA. SÓLO EL LEGISLADOR PUEDE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES. (1a. LV/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 1a. Sala, mayo 2004, p. 511

PROMOCIONES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 44, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE SU LEY ORGÁNICA, QUE ESTABLECE QUE SÓLO SE RECIBIRÁN DURANTE LAS HORAS HÁBILES QUE DETERMINE EL PLENO DE DICHO ÓRGANO, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- El citado precepto legal que establece que únicamente se recibirán promociones durante las horas hábiles que determine el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contraviene el artículo 17 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que la impartición de justicia debe ser expedita dentro de los plazos y términos que determinen las leyes secundarias. Lo anterior es así, porque al existir plazos fijados en la ley en días de veinticuatro horas cada uno, pero limitarse la presentación de las promociones a un horario laborable, que ni siquiera fija el legislador sino una autoridad distinta, como lo es el Pleno del citado tribunal, se restringe a los gobernados el plazo para presentar promociones y, por ende, la oportunidad de acceso a la impartición de justicia en los términos previstos en el referido precepto constitucional. (1a. LII/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 1a. Sala, mayo 2004, p. 515

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS NO SE INCLUIRÁN DÍAS, NI HORAS EN LOS QUE NO LABORE O HAYA SUSPENDIDO SUS ACTIVIDADES.- El artículo 258, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no establece plazo o término alguno, ni señala que las oficialías de partes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo pueden recibir promociones de término dentro del horario normal de labores. Lo que en realidad prevé es una garantía para quienes litigan ante esa instancia consistente en que en los plazos determinados en días de que disponen para ejercer sus derechos procesales, no se incluirán fechas en las que el propio tribunal no labore, ni se contarán horas en las que, a pesar de mantener abiertas sus oficinas, haya suspendido sus actividades. (1a. LIV/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 1a. Sala, mayo 2004, p. 517

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO QUE ESTABLECE LA MECÁNICA PARA SU TRASLADO Y ACREDITAMIENTO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). (1a. XLIX/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 1a. Sala, mayo 2004, p. 518

VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE AUTORIZA LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS PARA CONCLUIRLAS CUANDO NO SE LOCALICE AL CONTRIBUYENTE, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. (1a. L/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 1a. Sala, mayo 2004, p. 519

SEGUNDA SALA

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA POR NO PERMITIR EL ACREDITAMIENTO DEL TRIBUTO A QUIENES PRESTAN SERVICIOS DE RADIO LOCALIZACIÓN DE PERSONAS. (2a. XXX/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 2a. Sala, mayo 2004, p. 617

RENTA. EL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, PRIMER PÁRRAFO, 46, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, Y 47, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, MODIFICA EL PATRIMONIO DE LOS CONTRIBUYENTES AUNQUE NO TENGA LA NATURALEZA DE ENTRADA. (2a. XXV/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 2a. Sala, mayo 2004, p. 617

RENTA. EL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE OBTENIDO CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, CONSTITUYE UN INGRESO REAL. (2a. XXIII/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 2a. Sala, mayo 2004, p. 618

RENTA. EL ARTÍCULO 17, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA POR NO DEFINIR EL TÉRMINO "DISMINUCIÓN REAL DE SUS DEUDAS". (2a. XXVII/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 2a. Sala, mayo 2004, p. 619

RENTA. EL ARTÍCULO 48, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, AL UTILIZAR LA EXPRESIÓN "ENTRE OTRAS" PARA EJEMPLIFICAR LO QUE DEBE ENTENDERSE POR DEUDAS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. (2a. XXII/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 2a. Sala, mayo 2004, p. 620

RENTA. LOS ARTÍCULOS 17, PRIMER PÁRRAFO, 46, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, Y 47, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, AL ESTABLECER EL MECANISMO PARA CALCULAR EL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. (2a. XXIV/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 2a. Sala, mayo 2004, p. 621

RENTA. LOS ARTÍCULOS 17, PRIMER PÁRRAFO, 46, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, Y 47, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, QUE OBLIGAN ÚNICAMENTE A LAS PERSONAS MORALES A CALCULAR EL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. (2a. XXVI/2004)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 2a. Sala, mayo 2004, p. 622

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

FIANZAS. LA EXIGIBILIDAD DE LAS QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, NO ESTÁ SUJETA A QUE SE RESUELVAN LOS RECURSOS O JUICIOS INTERPUESTOS POR EL FIADO, A MENOS DE QUE ASÍ SE HAYA PACTADO. (I.2o.A.35 A)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 2o. T.C. del 1er. C., mayo 2004, p. 1779

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PLAZO PARA INTERPONER EL. (I.7o.A.122 A)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 7o. T.C. del 1er. C., mayo 2004, p. 1828

VISITA DOMICILIARIA. EL CITATORIO QUE PRECEDE A LA NOTIFICACIÓN DE SU AMPLIACIÓN, NO REQUIERE COMO UNA DE SUS FORMALIDADES QUE SE PRECISE QUE LA DILIGENCIA SE REALIZARÁ PARA TALES EFECTOS. (I.7o.A.291 A)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 7o. T.C. del 1er. C., mayo 2004, p. 1854

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 223, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ELEMENTO SUBJETIVO "DOLO" FORMA PARTE DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA RESPECTO DEL CUAL

EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO DEBE PRONUNCIARSE, PREVIO AL ESTUDIO DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD. (I.8o.P.14 P)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 8o. T.C. del 1er. C., mayo 2004, p. 1766

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEN MATERIA DEL TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO

INFONAVIT. EL ESTADO DE CUENTA DEL FONDO DE AHORRO DEL DERECHOHABIENTE, CERTIFICADO POR EL GERENTE DE SERVICIOS LEGALES DEL INSTITUTO, ES IDÓNEO PARA ACREDITAR LAS APORTACIONES PATRONALES A FAVOR DEL TRABAJADOR, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. (I.13o.T.82 L)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 13er. T.C. del 1er. C., mayo 2004, p. 1784

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO

RENTA. LOS ARTÍCULOS 80, 80-A, 81, 82, FRACCIONES I Y II, INCISO B), Y 83, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL UNO, NO RESTRINGEN LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA CALCULAR EL MONTO DE LOS INGRESOS POR LOS QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS LOS CONTRIBUYENTES, DETERMINAR EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE O, EN SU CASO, ORDENAR LA DEVOLUCIÓN QUE PROCEDA. (III.3o.A.31 A)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 3er. T.C. del 3er. C., mayo 2004, p. 1832

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO

RENTA. PRESUPUESTOS DEL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XXVIII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, RESPECTO DE CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE HECHO SIMILARES A LOS QUE SON BENEFICIADOS CON LA EXENCIÓN ESTABLECIDA EN DICHO ARTÍCULO. (IV.2o.A.72 A)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 2o. T.C. del 4o. C., mayo 2004, p. 1833

VISITA DOMICILIARIA. AL PRACTICARSE, LOS CONTRIBUYENTES NO ESTÁN OBLIGADOS A EXHIBIR PAPELES DE TRABAJO COMO DOCUMENTOS DE SU CONTABILIDAD, POR SER PROPIOS DE LOS AUDITORES. (IV.2o.A.76 A)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 2o. T.C. del 4o. C., mayo 2004, p. 1853

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO

AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ESTE CARÁCTER EL SECRETARIO DE UNA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE AUTORIZA CON SU FIRMA LAS ACTUACIONES DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR Y DE LA SALA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO.- De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, el secretario de una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que autoriza con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y de la Sala a la que está adscrito, conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no es autoridad para efectos del juicio de amparo, habida cuenta que sólo actúa como un fedatario público que autoriza y da fe de las resolu-

ciones que aquéllos emiten como integrantes de la Sala, por consiguiente, no actúa con imperio y facultad de decisión, ni realiza *motu proprio* actos de molestia que puedan ser reclamados en el juicio de garantías. En consecuencia, es improcedente el juicio de amparo que señala como autoridad responsable al referido funcionario, en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso artículo 11, ambos de la Ley de Amparo. (IV.3o.A.11 A)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 3er. T.C. del 4o. C., mayo 2004, p. 1744

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. LA INTERPOSICIÓN DE ALGÚN RECURSO O JUICIO LA SUSPENDE, AUNQUE NO SE HAGAN VALER EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO. (VI.3o.A.179 A)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 3er. T.C. del 6o. C., mayo 2004, p. 1750

CONSOLIDACIÓN FISCAL. LA SEPARACIÓN DE LA CONTROLADA NO LA LEGITIMA PARA INVOCAR A SU FAVOR LOS PAGOS PROVISIONALES QUE ENTERÓ A LA CONTROLADORA DURANTE EL TIEMPO EN QUE SUBSISTÍA ESE RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1993). (VI.3o.A.182 A)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 3er. T.C. del 6o. C., mayo 2004, p. 1755

VISITA DOMICILIARIA. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "CIERRE DEL ACTA FINAL" CONTENIDA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (VI.3o.A.183 A)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 3er. T.C. del 6o. C., mayo 2004, p. 1855

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL MAGISTRADO INSTRUCTOR ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA REQUERIR EL PERFECCIO-

NAMIENTO DE UN DOCUMENTO ILEGIBLE, UNA VEZ PRESENTADOS LOS ESCRITOS DE DEMANDA Y CONTESTACIÓN CON SUS ANEXOS.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 209, 212 y 230 del Código Fiscal de la Federación, una vez presentados los escritos de demanda y contestación, junto con sus respectivos anexos, el Magistrado instructor se encuentra imposibilitado para prevenir a una de las partes para que perfeccione un documento ilegible, porque dichos preceptos legales no lo facultan para actuar en esa forma, y de permitirse tal proceder, se supliría la actividad procesal de las partes contendientes, quienes se encuentran obligadas a aportar al juicio contencioso administrativo las pruebas idóneas que acrediten sus afirmaciones. (VIII.1o.62 A)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 1er. T.C. del 8o. C., mayo 2004, p. 1791

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO

RENTA. LA DEVOLUCIÓN DEL NUMERARIO RETENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE, NO ESTÁ SUJETA A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. (XV.1o.33 A)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 1er. T.C. del 15o. C., mayo 2004, p. 1831

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO

NEGATIVA FICTA. NO SE CONFIGURA CUANDO LA AUTORIDAD FISCAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NOTIFICA POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DENEGATORIAS DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PAGADOS.- El artículo 134, fracción I, del Código Fiscal de la

Federación establece: “Las notificaciones de los actos administrativos se harán: I. Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos.”. De acuerdo con dicho numeral es correcto que la autoridad fiscal notifique mediante correo certificado con acuse de recibo las resoluciones administrativas denegatorias de devolución de impuestos pagados, ya que aquéllas pueden ser recurridas al tenor de lo dispuesto por la fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que señala: “El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.”; por tanto, al haberse efectuado la notificación por correo certificado con acuse de recibo antes de la presentación de la demanda de nulidad de la negativa ficta por la actora, es claro que no se configuró esta consecuencia fiscal por haber sido practicada la notificación en términos del artículo 134, fracción I, del citado ordenamiento legal. (XV.3o.6 A)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 3er. T.C. del 15o. C., mayo 2004, p. 1797

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO

CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN. DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS INHÁBILES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ADEMÁS DE AQUELLOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE RIJAN A LA AUTORIDAD HACENDARIA ANTE LA CUAL SE TRAMITA. (XVI.3o.4 A)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 3er. T.C. del 16o. C., mayo 2004, p. 1752

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU SUSPENSIÓN ES IMPROCEDENTE SI PREVIAMENTE NO SE AGOTÓ EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN.- De la interpretación conjunta de los artículos 144, último párrafo, 227, primer párrafo y 228, párrafos primero y segundo, del Código Fiscal de la Federación, se obtiene que el incidente de suspensión de la ejecución procede, entre otros casos, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución; dicho incidente puede ser promovido ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o ante el superior de la autoridad ejecutora, y en el auto que admita el incidente la autoridad que conozca de él podrá otorgar la suspensión provisional del acto, mientras se dicta la resolución definitiva sobre la suspensión al procedimiento. De lo anterior se advierte que el artículo 228 del Código Fiscal de la Federación no señala otros requisitos para otorgar la suspensión provisional del acto que la sola petición que haga el interesado; por tanto, si el acto reclamado en el juicio de garantías lo constituye la resolución que niega la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, el medio de defensa en su contra, es el incidente de suspensión de que se viene dando noticia, en el que es posible que se otorgue la suspensión del acto sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo; por lo que resulta evidente que si no se agotó previamente ese medio de defensa prescrito en la ley de la materia, el juicio de amparo es improcedente, con fundamento en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo; sin que lo anterior contravenga la jurisprudencia 2a./J. 19/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA COBROS FISCALES SIN NECESIDAD DE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS O EL JUICIO DE NULIDAD, PORQUE EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EXIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE LA MATERIA, PARA SUSPENDERLOS.", en virtud de que dicha jurisprudencia no toca el tema de las resoluciones que niegan la suspensión del procedi-

miento de ejecución, la cual constituye el acto reclamado, y tampoco interpreta los artículos concernientes al incidente de suspensión aludido. (XIX.1o.20 A)
S.J.F. IX Época. T. XIX. 1er. T.C. del 19o. C., mayo 2004, p. 1814

SEXTA PARTE

ÍNDICES GENERALES

ÍNDICE ALFABÉTICO DE JURISPRUDENCIAS DE SALA SUPERIOR

ARGUMENTOS expuestos en un recurso de reclamación y en una causal de improcedencia y sobreseimiento.- Caso en el cual no se está obligado al estudio de la causal. V-J-SS-53 (18) 130

CADUCIDAD de los procedimientos administrativos previstos en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.- Es aplicable a las leyes administrativas que no están excluidas en ella. V-J-SS-45 (10) 106

CANCELACIÓN de créditos fiscales por incosteables.- No procede el sobreseimiento del juicio cuando lo que se impugna es la resolución que recayó al recurso respecto de dichos créditos. V-J-SS-37 (3) 39

COMPETENCIA territorial de las Salas Regionales.- Cuando la resolución impugnada sea una negativa ficta, debe estarse a la sede de la autoridad que está facultada para resolver la instancia. V-J-SS-40 (6) 62

COMPETENCIA territorial de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se determina por la sede de la autoridad suplida por ausencia. V-J-SS-54 (19) 132

CONTRALORÍA Interna en las Sociedades Nacionales de Crédito que forman parte de la Administración Pública Federal Paraestatal.- Son competentes para conocer, tramitar y resolver el procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. V-J-SS-42 (8) 66

CONTRATOS de obra pública celebrados por un organismo descentralizado de una entidad federativa. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no tiene competencia para conocer de ellos. V-J-SS-43 (9) 87

DISTRIBUCIÓN de dividendos que provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida.- Debe pagarse el impuesto sobre la renta por las sociedades controladas, directamente ante las oficinas autorizadas, y no entregarse a la controladora. V-J-SS-46 (11) 115

EXTRAÑAMIENTO emitido con base a la Ley Federal de Radio y Televisión.- La resolución recaída al recurso de revisión intentado en su contra es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. V-J-SS-55 (20) 134

HECHO notorio.- Lo constituye para la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa una sentencia emitida por ella. V-J-SS-52 (17) 128

IMPORTE bruto de los dividendos para efectos del Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia del Impuesto sobre la Renta, celebrado por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América. No lo es la cantidad que sirve como base del impuesto previsto por las fracciones I y IV del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2001. V-J-1aS-7 (22) 139

INCIDENTE de incompetencia territorial.- Debe resolverse con base en las disposiciones vigentes al momento de la presentación de la demanda. V-J-SS-41 (7) 64

JEFE del Área de Fiscalización y Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Puede suplir las ausencias de los delegados regionales o de los representantes de la Dirección General del propio Instituto. V-J-SS-38 (4) 45

NOTIFICACIÓN de los actos emitidos en materia de propiedad industrial.- Surte sus efectos el mismo día en que se realiza. V-J-SS-51 (16) 126

OBJECIÓN del alcance probatorio de las documentales ofrecidas en el juicio de nulidad.- Resulta improcedente. V-J-SS-47 (12) 118

RECURSO de revocación previsto por el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, plazo para interponerlo, tratándose de los actos del procedimiento administrativo de ejecución. V-J-SS-39 (5) 54

REQUERIMIENTO de pago y actas de embargo.- Requisitos que deben cumplir. V-J-SS-36 (2) 33

SECRETARÍA de Medio Ambiente y Recursos Naturales.- Su titular es parte en el juicio al ser ésta superior jerárquico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. V-J-SS-49 (14) 122

SEDE de la autoridad demandada.- Se presume que en ella emite sus resoluciones. V-J-SS-50 (15) 124

SOBRESEIMIENTO del juicio.- Se actualiza cuando la autoridad deja sin efectos el acto impugnado. V-J-SS-48 (13) 120

SUBDIRECTORA Divisional de procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, carece de competencia para desechar el recurso de revisión a que se refiere la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. V-J-SS-56 (21) 136

VISITAS de verificación en materia de gas L.P.- Es competente la Procuraduría Federal del Consumidor tratándose de actividades comerciales y de servicios. V-J-SS-35 (1) 7

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRECEDENTES DE SALA SUPERIOR

ACLARACIÓN de sentencia.- Es infundado el incidente cuando se plantean cuestiones relativas a la supuesta omisión de estudio de argumentos planteados en la demanda. V-P-SS-581 (13) 273

CARGA de la prueba.- La tiene el Titular del Registro Marcario para acreditar la fecha de primer uso asentada en la solicitud de registro. V-P-SS-576 (8) .. 202

CERTIFICADOS de origen.- Deben estar debidamente requisitados y correlacionarse con cada uno de los renglones y fracciones arancelarias de los pedimentos de importación correspondientes. V-P-2aS-353 (16) 297

COMISIÓN Nacional del Agua.- Solicitud de autorización para incremento en el volumen concesionado de agua. No es aplicable el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 11 de octubre de 1995 y su reforma publicada en el mismo Órgano Oficial el 11 de octubre de 1996. V-P-SS-568 (1) 145

CUOTAS compensatorias.- Cuando la resolución que las determina lo hace diferencialmente para cada exportador, el término de vigencia de cinco años a que se refiere el artículo 70 de la Ley de Comercio Exterior corre independiente para cada uno. V-P-1aS-231 (14) 294

CUOTAS compensatorias.- Su vigencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Comercio Exterior. V-P-1aS-232 (15) 295

INCIDENTE de incompetencia.- Resulta competente para conocer del asunto la Sala Regional en cuya jurisdicción se encuentre la sede de la autoridad que emite la resolución determinante de los créditos fiscales, si de las cons-

tancias de autos no se desprende que se esté controvirtiendo la notificación realizada por diferente autoridad, ni existen actos de ejecución. V-P-SS-569 (2) 172

LEY Federal de Procedimiento Administrativo.- Es aplicable supletoriamente a la Ley General de Salud. V-P-SS-580 (12) 271

LITIS abierta, excepción a su aplicación conforme a lo señalado por los artículos 197 y 237 del Código Fiscal de la Federación. V-P-SS-573 (5) 196

MARCAS. Es improcedente declarar administrativamente su nulidad en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, cuando los productos que amparan se encuentran en clases distintas. V-P-SS-570 (3) 179

MARCAS. Es procedente su registro cuando la misma es idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, cuando no se aplique a los mismos o similares productos o servicios. V-P-SS-572. (4) 180

MARCAS.- Es prueba del interés jurídico del presunto infractor para demandar la nulidad del registro de la misma, el inicio de un procedimiento de infracción administrativa por su indebida utilización. V-P-SS-577 (9)..... 203

MULTAS impuestas en materia ambiental.- Requisitos que deben contener. V-P-SS-579 (11)..... 229

QUEJA improcedente.- Cuando existiendo resolución a una instancia de queja por incumplimiento de sentencia, el actor promueve una segunda queja. V-P-SS-578 (10) 207

RESOLUCIÓN emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través del cual desecha por improcedente el recurso de revisión.- Es impugnable en juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. V-P-SS-574 (6) 197

SUBDIRECTORA Divisional de procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, carece de competencia para desechar el recurso de revisión a que se refiere la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. V-P-SS-575 (7) 199

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CRITERIOS AISLADOS DE SALA SUPERIOR

ACREDITAMIENTO de la personalidad si el solicitante de la declaración administrativa de caducidad de esa marca es una persona física. (4) 364

ARGUMENTOS expuestos en un recurso de reclamación y en una causal de improcedencia y sobreseimiento.- Caso en el cual no se está obligado al estudio de la causal. (5) 365

CADUCIDAD de marcas.- Se actualiza si no se acredita el uso para los productos o servicios para los que fue registrada. (6) 365

COMERCIALIZACIÓN de prendas que ostentan marcas parecidas en grado de confusión a otra registrada. No se actualiza la infracción prevista en la fracción IV, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial. (1) 315

DESECHAMIENTO de un recurso de revisión. Es procedente el juicio contencioso administrativo promovido contra la resolución recurrida en materia de propiedad industrial, si se controvierte la misma oportunamente. (2) 316

MULTAS impuestas en materia de Propiedad Industrial.- Requisitos que deben contener. (8) 367

PRESUNTO infractor en el procedimiento de declaración de infracción en materia de propiedad industrial.- Sus consecuencias por la falta de comparecencia. (3) 317

PROMOCIONES de solicitud de caducidad de un registro marcario.- El pago de la tarifa correspondiente puede acreditarse con el que obre en el expediente de la marca en trámite, si se le citó como anterioridad oponible. (7) 366

QUEJA que se deba instruir como juicio por ejecutoria de Tribunal Colegiado, compete a la Sala que determinen las normas vigentes en la fecha de su interposición. (9) 368

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES

ACTO administrativo. Es válido mientras no haya sido declarado nulo y, por lo tanto, es eficaz y exigible a partir de que surta efectos su notificación. (17) 384

AGRAVIOS inoperantes cuando repiten conceptos de anulación que se hicieron valer en diverso juicio cuyo fallo constituye cosa juzgada. (25) 394

COMANDAS de restaurantes.- No son documentos indispensables que integren la contabilidad de un negocio. (7) 376

COMPETENCIA territorial.- No la tiene la Administración Local de Auditoría Fiscal de Naucalpan, en el Estado de México, para solicitar información y documentación a terceros que se encuentren domiciliados fuera de su circunscripción territorial. (18) 385

COMPETENCIA territorial.- Resulta inexacto que la facultad de la autoridad fiscal para requerir a terceros relacionados con los contribuyentes no está sujeta a limitación territorial alguna. (19) 386

COPIAS para el traslado de los anexos de la contestación de demanda.- Es legal si se exhiben en copias simples. (11) 378

DETERMINACIÓN de impuestos derivados del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.- La autoridad debe respetar el plazo previsto en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1 de enero de 2001. (32)..... 400

DEVOLUCIÓN de cantidades.- El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2001, limita el pago de intereses a las cantidades devueltas por pago de lo indebido y no por saldo a favor. (22) 390

ESTUDIO de la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado. Resulta procedente en términos de lo dispuesto por el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación, aun cuando la peticionaria le designe con otro nombre, o bien, cite un precepto legal distinto. (24) 393

IMPUESTO al valor agregado. Su acreditamiento. (10) 378

IMPUESTO sobre la renta vigente en 2001. Sujetos que tributan en el Capítulo I del Título IV de la Ley de la Materia y presentan la declaración anual por su cuenta, por ese solo hecho no tienen derecho a un subsidio al 100%. (16) 382

MULTA impuesta por incumplimiento de pago de cuotas obrero patronales al Seguro Social.- Resulta ilegal, si la autoridad no demuestra la existencia y notificación de la cédula de liquidación correspondiente. (3)..... 371

NOTIFICACIÓN por estrados. Sus formalidades. (8) 376

NOTIFICACIONES personales practicadas al amparo del artículo 542 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en el año 2001. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene competencia para analizar su legalidad. (4) 372

NOTIFICACIONES personales practicadas al amparo del artículo 542 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en el año 2001. Requisitos de legalidad. (5) 373

PENSIÓN otorgada por el ISSSTE.- La entidad o dependencia pública a la que perteneció el trabajador que la reclama no tiene el carácter de tercero interesado en el juicio de nulidad. (21) 388

PROCURADURÍA Federal del Consumidor. Es incompetente para imponer sanciones en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. (20) 387

QUEJA por incumplimiento de sentencia interlocutoria que otorga la suspensión definitiva en términos del artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación. Debe estimarse fundada si la autoridad realiza actos en violación a aquélla, no obstante que no tenga conocimiento en vía de notificación de la interlocutoria que concede dicha suspensión. (33) 402

RECINTO fiscal.- Debe considerarse como tal, a las instalaciones de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal. (15) 382

RECURSO administrativo de inconformidad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.- Para dar oportunidad de su ampliación cuando se controvierte por el recurrente la legalidad del crédito fiscal y de su notificación, en el caso en que afirme desconocerlos, dichos actos deben notificarse debidamente. (26) 395

RECURSO de inconformidad interpuesto en contra de los actos y resoluciones de la Subdirección Jurídica y de Relaciones Laborales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. No es obligatorio su agotamiento por estar derogado. (23) 391

RECURSO de reclamación.- Procede confirmar el auto por el que se desecha por notoriamente improcedente la demanda de nulidad, cuando ésta se promueve en la vía de jurisdicción voluntaria. (29) 398

RECURSO de revocación. Es legal desecharlo cuando la firma impuesta en el escrito que lo contiene es diferente a la contenida en otras promociones presentadas por la misma recurrente. (13) 380

RECURSO de revocación.- Procede confirmar su desechamiento por notoriamente improcedente, cuando se interpone en contra de un crédito fiscal, si éste ya ha sido combatido en un juicio de nulidad, aun cuando sea interpuesto en términos de la fracción II del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación. (30) 399

RECURSO de revocación.- Resulta legal su desechamiento, cuando éste es interpuesto en términos de la fracción II del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, si en el caso se dio cabal cumplimiento con el procedimiento señalado en el mismo. (31) 400

RECURSO de revocación. Supuesto para su envío por correo certificado con acuse de recibo, debe acreditarse. (14) 381

RENTA. El artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No es la disposición legal que obliga a patrón distinto de la Federación y Entidades Federativas, retenga y entere respecto a los trabajadores de la iniciativa privada impuesto sobre la renta por concepto de

aguinaldos o cualquier otra gratificación anual con periodicidad distinta a la mensual. (1) 369

REPRESENTANTE legal. Diligencia de notificación en forma personal. (12) . 379

REQUERIMIENTO de documentación formulado por las autoridades, debe contener expresamente el apercibimiento y sus consecuencias jurídicas, en caso de incumplimiento. (6) 374

RESPONSABILIDADES de los servidores públicos.- La obligación incumplida por el servidor, que da origen a la sanción, debe estar plenamente acreditada. (2) 371

REVISIÓN de dictámenes financieros.- La autoridad fiscal está obligada a observar lo dispuesto en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación para su revisión. (27)..... 397

SOBRESEIMIENTO del juicio.- Procede cuando no se configura la negativa ficta, por atribuirse a una autoridad incompetente para resolver el recurso administrativo. (28) 397

SOBRESEIMIENTO por consentimiento del acto recurrido. Procede si la autoridad acredita que es falsa la manifestación del actor de que lo conoció recientemente. (9)..... 377

SUSPENSIÓN definitiva prevista en el artículo 208 Bis del Código Fiscal de la Federación. Para determinar el momento a partir del cual surte sus efectos, debe acudirse a lo previsto por el artículo 139 de la Ley de Amparo. (34) ... 403

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ACUERDOS GENERALES

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-35. G/9/2004 407

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-36. G/10/2004 409

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-37. G/11/2004 410

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-38. G/12/2004 412

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-39 G/13/2004 414

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-40. G/14/2004 416

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-41. G/15/2004 417

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-42. G/16/2004 419

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-43. G/17/2004 422

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-45. G/21/2004 424

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-46. G/23/2004 426

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-47. G/24/2004 428

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-48 G/25/2004 430

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-49. G/26/2004 432

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-50. G/27/2004 434

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-51. G/28/2004 436

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-52. G/29/2004 437

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-53. G/30/2004 438

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-54. G/31/2004 439

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-55. G/32/2004 441

SE FIJA la jurisprudencia No. V-J-SS-56. G/33/2004 443

SE FIJA la jurisprudencia V-J-1aS-7. G/S1-3/2004 445

ÍNDICE ALFABÉTICO DE JURISPRUDENCIAS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

ALEGATOS. Cuándo deben ser examinados en la sentencia definitiva. (I.7o.A. J/19) 454

PROPIEDAD industrial. Es necesaria una previa declaración por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sobre la existencia de infracciones en la materia para la procedencia de la acción de indemnización por daños y perjuicios. (1a./J. 13/2004) 451

VALOR agregado. Para que proceda la reclamación del pago del impuesto relativo, tratándose de créditos litigiosos, no es necesario que la parte actora demuestre que previamente lo enteró a la autoridad fiscal para repercutirlo contra la demandada. (1a./J. 16/2004) 452

ÍNDICE ALFABÉTICO DE TESIS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

AUTORIDAD responsable para efectos del juicio de amparo. Carece de este carácter el Secretario de una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que autoriza con su firma las actuaciones del Magistrado Instructor y de la Sala a la que está adscrito. (IV.3o.A.11 A) 462

JUICIO contencioso administrativo. El Magistrado Instructor está imposibilitado para requerir el perfeccionamiento de un documento ilegible, una vez presentados los escritos de demanda y contestación con sus anexos. (VIII.1o.62 A) 463

NEGATIVA ficta. No se configura cuando la autoridad fiscal, antes de la presentación de la demanda, notifica por correo certificado con acuse de recibo las resoluciones administrativas denegatorias de devolución de impuestos pagados. (XV.3o.6 A) 464

PROCEDIMIENTO administrativo de ejecución. El amparo promovido contra la resolución que niega su suspensión es improcedente si previamente no se agotó el incidente de suspensión de la ejecución. (XIX.1o.20 A) 466

PROMOCIONES ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El artículo 44, último párrafo, de su Ley Orgánica, que establece que sólo se recibirán durante las horas hábiles que determine el Pleno de dicho Órgano, contraviene el artículo 17 de la Constitución Federal. (1a. LII/2004) 456

TRIBUNAL Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En el cómputo de los plazos no se incluirán días, ni horas en los que no labore o haya suspendido sus actividades. (1a. LIV/2004) 457